91-92

Verano-Otoño 2004

consejo editorial Alfons Barceló, Lourdes Benería, Mª Rosa Borràs, Ernest Cañada, Juan Ramón Capella, José Antonio Estévez Araujo, Josep González Calvet, José Luis Gordillo,Elena Grau, Antonio Izquierdo, Julia López, Miguel Ángel Lorente, Antonio Madrid, Xavier Pedrol, Alejandro Pérez, Albert Recio, Víctor Ríos, Jordi Roca, Joaquim Sempere, Héctor C. Silveira Gorski, Verena Stolcke, Enric Tello, Josep Torrell

consejo de redacción de esta entrega Mª Rosa Borrás, Juan Ramón Capella, Xavier Domènech, Antonio Giménez, José Luis Gordillo, Antonio Madrid, Xavier Pedrol, Gerardo Pisarello, Albert Recio, Joaquim Sempere, Héctor C. Silveira

© Fundación Giulia Adinolfi - Manuel Sacristán

dirección redacción Apartado de Correos 30059, Barcelona

edita Icaria editorial
Ausiàs Marc, 16, 3.º 2.ª / 08010 Barcelona
www.icariaeditorial.com

dirección suscripciones Apartado de Correos 857, Barcelona

cubierta y grafismo Josep Maria Martí

imprime Romanyà/Valls, S.A.
Verdaguer 1, Capellades (Barcelona)

Fotocomposición Text-gràfic

Depósito legal B-35.842-79

ISSN 0210-8259

publicación trimestral de ciencias sociales

la revista admite colaboraciones en cualquiera de las lenguas peninsulares

ÍNDICE

NOTAS EDITORIALES
Ecosocialismo: vieja y nueva izquierda 5
Venezuela en el espejo 10
El polvorín palestino 15
¿Auge de la prostitución? 20

25 AÑOS DE MOVIMIENTOS SOCIALES

Presentación 27

Evolución, crisis y mutaciones de la izquierda transformadora y alternativa
por Jaime Pastor 29

Globalización, reformas laborales y conflictividad laboral
por Emili Cortavitarte Carral 45

Movimiento vecinal: Claroscuros de una lucha necesaria
por Albert Recio y Andrés Naya 63

El movimiento ecologista. La lucha antinuclear y contra el modelo energético en España
por Ladislao Martínez 83

Movimiento feminista: una trayectoria singular
por Justa Montero 107

Trayectoria y efectos del movimiento pacifista
por Enric Prat 123

Objeción de conciencia, insumisión, movimiento antimilitarista
por Rafael Ajangiz 139

El movimiento estudiantil universitario. De la Ley de Autonomía Universitaria (1979) a la Ley Orgánica de Universidades (2001)
por Carlos Vaquero 155

Los movimientos por la okupación. 20 años liberando espacios de la especulación del capital
por Robert González 177

De la peligrosidad social a las siglas LGBT
por Jordi Petit 195

Las ONGD y la solidaridad internacional en España hoy. Campañas y movimientos
por Marisa Revilla Blanco 209

CITA 229

Impreso en papel ecológico (libre de cloro).

mientrastanto.e

Mientras tanto está publicando un boletín electrónico de periodicidad mensual. Quienes deseen subscribirse gratuitamente a *mientrastanto.e* pueden solicitarlo a la dirección siguiente:

suscripciones@mientrastanto.org

NOTAS EDITORIALES

ECOSOCIALISMO: VIEJA Y NUEVA IZQUIERDA

I

En las tres últimas décadas la izquierda vive en una continúa redefinición de espacios y proyectos. Tras el optimismo social generado por el crecimiento sostenido del período keynesiano (y la paralela expansión del papel del sector público) y la oleada de movimientos alternativos de finales de los sesenta y principios de los setenta el desconcierto ha sido persistente. Sin duda han jugado muchos factores pero hay al menos dos que merecen ser destacados. En primer lugar, una fuerte e implacable reacción de los grandes grupos capitalistas que utilizó todos los medios y los espacios posibles de intervención, empezando por el uso de la fuerza militar (el golpe de estado de Chile en 1973 marca posiblemente el punto de inflexión, pues puso en evidencia que el imperio no estaba dispuesto a tolerar cambios radicales aunque estos se produjeran por la vía democrático-liberal), y siguiendo por una ofensiva ideológico-propagandística que incluye a la producción académica en áreas sensibles como la economía. El resultado más relevante y duradero de esta política ha sido el dejar fuera del espacio de lo discutible cualquier propuesta o proyecto de cambio institucional radical, sea global o parcial. El giro eurocomunista del Partido Comunista Italiano expresa posiblemente este cambio de situación y refleja el inicio de lo que después ha sido característico de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria y de buena parte

de los movimientos sociales: la adecuación de sus propuestas y discursos a lo que el sistema capitalista puede tolerar —algo que se refleja por ejemplo en el grado de aceptación de los eslóganes propagandísticos de las políticas neoliberales («competitividad», «flexibilidad», «capital humano», etc.). En segundo lugar, la constatación del fracaso absoluto del modo de gestión económica imperante en los países autoproclamados socialistas (regidos por partidos autodenominados comunistas). Un fracaso que no sólo se refleja en su creciente pérdida de dinamismo, sino que también se hizo patente en sus desastres ecológicos (Chernobil, el mar de Aral, etc.). Quizás el signo más evidente del fracaso social de ese modelo sea la facilidad con la que se ha implantado un capitalismo particularmente depredador y la incapacidad de las clases trabajadoras de defender los innegables avances sociales obtenidos en algunos campos. Es cierto que para una parte de la izquierda radical occidental estos regímenes estaban sujetos a una fuerte evaluación crítica (tanto académica como política), pero estas corrientes marxistas heterodoxas ni fueron hegemónicas ni lograron llegar a buena parte de las capas populares. El hundimiento de la URSS, y la ausencia de una sólida reflexión crítica en la izquierda occidental han reforzado en gran medida el miedo a generar alternativas y ha «quemado» el uso del adjetivo «comunista» como un referente válido para la política de masas. La izquierda alternativa se ha visto, así pues, atrapada entre el empuje de las clases dominantes y las insuficiencias de los modelos que alguna vez se pensaron alternativos. Ello ha dado como resultado la reducción de las propuestas al espacio de lo inmediato.

II

Pero no todo ha sido esterilidad y desconcierto en las tres últimas décadas. La incapacidad en repensar las alternativas no ha impedido continuar la larga tradición de análisis críticos sobre aspectos importantes de las sociedades capitalistas. Ello ha alentado la actuación de diversos movimientos sociales de los que damos cuenta en este número. Pero sin duda las aportaciones más novedosas e importantes para la reconstrucción de una cultura alternativa han provenido de movimientos relativamente externos a la izquierda tradicional: el ecologismo y el feminismo, por mas que en su historia existan (especialmente en el segundo caso) importantes puntos de conexión. Lo que aportan estos movimientos es, fundamentalmente, una profundización de las ideas sobre la igualdad que están en la base de todas las culturas socialistas Han servido para mostrar dos cuestiones básicas: a) que las desigualdades e injusticias sociales se producen también en ámbitos distintos de las meras relaciones capital-trabajo, y por tanto una sociedad justa debe plantearse ámbitos más complejos de transformación y b) que una sociedad igualitaria (y la sostenibilidad es de hecho una perspectiva igualitaria por cuanto pro-

pugna la garantía de acceso a condiciones de vida básicas para toda la población actual y las generaciones futuras) no puede alcanzarse por la mera emulación del crecimiento económico capitalista (como de hecho reflejaba la consigna leninista del socialismo como «electrificación y soviets») sino que exige replantear todas las bases de la organización social y cuestionar el crecimiento económico como el método para resolver los problemas de la humanidad.

Sin duda hay otros campos de avance, como es el del reforzamiento de los mecanismos de participación democrática (alentados en buena medida por las mejores experiencias del PT brasileño) o el del crecimiento de las corrientes pacifistas, generadas tanto por los diversos ciclos de lucha contra el militarismo impuesto desde los EEUU como por la propia autocrítica de lo que han significado las diversas experiencias de lucha armada que en algún momento alimentaron las izquierdas.

Tanto en el plano de la propuesta programático intelectual como en el de la representación simbólica, el paso de lo rojo al roji-verde-violeta no puede considerarse una pérdida, sino, al contrario, una nueva fase de madurez de la vieja lucha por una humanidad emancipada y organizada sobre bases racionales y democráticas. Cambiar de símbolos y de etiquetas no es una renuncia, cuando éstas se han «quemado» (para millones de personas la vieja palabra se asocia a regímenes socialmente ineficientes y políticamente opresivos, cuando no a la nueva modalidad de capitalismo agresivo que representa China) y sólo sirven para que nos encierren en el ghetto. El ecosocialismo puede representar la forma como se plantea hoy la lucha por un sistema social alternativo, igualitario, amable con la gente y la naturaleza.

III

La necesidad y la bondad de reformular la forma y el fondo de la política de la izquierda obliga, sin embargo a evaluar los riesgos que comporta, con objeto de sortearlos. Esos riesgos son muy variados.

En primer lugar, está la cuestión de la base social. La vieja izquierda partía de un análisis social relativamente simplista y apostaba por organizar a la clase trabajadora, a menudo erróneamente confundida con el empleo industrial. Sin duda este esquema resulta insuficiente a la luz de los cambios producidos en la estructura productiva, en la organización empresarial y en la propia composición social de las clases trabajadoras. Y algunos de los planteamientos de los nuevos movimientos sociales son más fácilmente comprendidos por los asalariados de elite y las capas medias que por el núcleo tradicional de la clase obrera (que en parte ve amenazada sus condiciones de vida

por las políticas de racionalización ecológica, lo que no ocurre en el caso de los empleos del terciario superior). El desplazamiento del voto de izquierdas, especialmente verde, desde las áreas de población obrera hacia las de capas medias es evidente en casi toda Europa. Y no es una cuestión baladí. Dejar huérfana de organización social a los sectores sociales empobrecidos, machacados por las políticas neoliberales (y que ha menudo mantienen pautas de consumo global más sostenibles que las capas medias, simplemente por las diferencias de renta) pone en duda la posibilidad de construcción de un proyecto igualitario y abre espacios al populismo reaccionario, visible ya en países como Francia. Las políticas de lucha contra la pobreza, sin duda bienintencionadas, no pueden suplir la necesaria política de autoorganización de la clase obrera y demás sectores desfavorecidos. Se trata de generar una nueva dinámica que permita tanto superar las líneas de ruptura internas a la propia clase (ocupacionales, nacionales, etc.) y orientadas a generar una demanda social para un proceso alternativo.

En segundo lugar, está la propia naturaleza del proyecto ecosocialista. El socialismo tradicional se apoyaba en cierta medida en el sentido común emanado de la propia lógica del capitalismo, planteando la intervención estatal como un medio para garantizar más empleo, más bienestar material, más disponibilidad de tiempo libre.... Lo que sabemos de los procesos ecológicos indican que esta vía es intransitable. Que una sociedad ecológicamente responsable no será una sociedad de la abundancia y el despilfarro. Que una sociedad que cuide a las personas exigirá realizar muchas tareas insoslayables. Y que, por lo tanto, se exige una nueva ética de la responsabilidad y la autocontención así como una fuerte reestructuración de actividades e instituciones. Es, en parte, un proyecto que va a la contra de este sentido común fomentado diariamente por un impresionante despliegue publicitario. Un proyecto ecosocialista serio sólo puede triunfar si la acción social combina un profundo trabajo pedagógico, una adecuada línea de reformas y unas bien pensadas propuestas de transición. Se trata de una ingente tarea que difícilmente puede descansar en una organización centrada en la lucha electoral, tan propicia ésta a fomentar las propuestas en colores brillantes y obviando las dificultades. Sólo un proceso organizativo que las reconozca como tales y se base en una diversidad de fórmulas organizativas puede tener algunas posibilidades de éxito. Y para construirlos se requiere una visión política más amplia que la meramente institucional.

En tercer lugar, hay que tener en cuenta los efectos inducidos por el propio marcaje institucional. Las presiones para reducir la política al espacio marcado por el neoliberalismo son potentes y diversas. Cualquier expresión, demanda o propuesta que sale del mismo es inmediatamente cuestionada por la enorme variedad de centros de creación de opinión: desde los principales

organismos internacionales hasta los principales medios de comunicación. Las tendencias a la autocensura, a la elaboración de propuestas en clave posibilista, o simplemente a la especialización selectiva en temas como el medio ambiente o la igualdad de género son hasta cierto punto una respuesta previsible a las mismas. Respuestas que pueden acentuarse si toda la acción política se centra en alcanzar cotas institucionales y en actuar cómodamente en las mismas. Sin duda se hace mucho y, a menudo, buen trabajo en Ayuntamientos, parlamentos etc., pero muchas veces este trabajo queda socialmente contrarrestada por los silencios y omisiones a los que conducen los necesarios modos de convivencia en las instituciones. Algo, por ejemplo, visible en la ausencia de una política realmente autónoma de los Verdes alemanes ante la incomprensible destrucción de la base social que está practicando el gobierno Schröeder o la limitación de gran parte de su acción ecológica a la introducción de medidas de mercado como medio principal de regulación ecológica. Sin duda, las buenas medidas reformistas son un elemento necesario de toda política alternativa, pero hay dudas más que razonables en las posibilidades del actual orden institucional para garantizar una vida decente y una economía sostenible. Y la reducción de intervención al ámbito de las reformas cotidianas puede limitar el alcance de la acción social.

Hay una cuestión que refuerza estos peligros, y que se advierte en algunas declaraciones de políticos ecosocialistas: la voluntad de presentarse como algo nuevo, moderno, da la impresión de ceder a la tentación de borrón y cuenta nueva. Sin duda, la lacra que para la lucha emancipadora supuso el estalinismo (y su versión degradada del sovietismo post-Stalin) y otras corrientes parecidas (como muchas de las formulaciones dogmáticas de la ultraizquierda y su peor versión, la de los grupos armados) no deben repetirse. Pero la historia del pasado es también una historia con luces, de gente humilde que luchó en defensa de principios, aspiraciones y derechos totalmente legítimos. De una notable producción de pensamiento crítico que siempre inquietó a las clases dominantes. No se trata, pues, de hacer tabla rasa, si no de renovar, con nuevos conocimientos y una valoración crítica de las experiencias anteriores, una larga tradición de lucha por una humanidad aceptable.

IV

La situación sociopolítica actual es realmente complicada. El descrédito difuso que existe sobre las instituciones democráticas conduce a bajas cotas de participación socio-política y facilitan el control de las mismas por grupos oligárquicos (la expresión atribuida a algún dirigente del Partido Popular de que perdieron las elecciones porque fue a votar la gente que no debía expresa bastante bien uno de los ejes de las políticas conservadoras). La izquierda

alternativa se ha visto particularmente reducida en su espacio electoral y, a menudo, ha amoldado su discurso al marco de lo posible dentro del capitalismo. Fuera existe un vistoso movimiento alternativo, con una cierta implantación juvenil, capaz de desarrollar movilizaciones imaginativas y con un discurso anticapitalista duro, pero a menudo con ausencia de propuestas irrealizables (como la sustitución del mercado convencional por el trueque) o igualmente reformistas (la tasa Tobin, el subsidio universal, etc.). Ni los activistas logran salir del ghetto ni la izquierda organizada animar procesos participativos y reflexivos de más alcance. Y son tan necesarias las acciones políticas a diversos niveles como la energía y el dinamismo de los núcleos más activos. Superar este desencuentro no es tarea de un día. Exige reconocer las dificultades objetivas y buscar las mediaciones que ayuden a salir de este *cul-de-sac* en el que parecemos permanentemente aislados. La creación de un amplio movimiento alternativo al orden actual presupone, como siempre ha ocurrido, mucha labor de integración, de convivencia, de buscar los campos de acción común y de tolerar las divergencias. Algunas veces lo hemos conseguido; sabemos que es posible, pero difícil. En todo caso, es lo que exige cualquier proyecto ecosocialista digno y por el que valga la pena trabajar.

La situación social y ecológica demanda de forma creciente estas respuestas alternativas que hoy sólo se producen a cuentagotas. Por esto sería importante que el proceso de reconversión de Izquierda Unida y sus socios (Iniciativa per Catalunya, Esker Batua) supusiera un paso adelante en este sentido. Aunque somos conscientes de que la transformación social que necesita la humanidad entera requiere del esfuerzo y la participación de muchos otros hombres y mujeres que sienten la necesidad de un cambio radical. **A.R.A.**, *agosto 2004*.

VENEZUELA EN EL ESPEJO

En las últimas elecciones europeas, más de la mitad de los ciudadanos optaron por quedarse en su casa. En algunos países la participación no alcanzó siquiera el 30%. La sensación de que los representantes poco representan, de que la propia opinión apenas cuenta frente a las férreas exigencias del mercado y de los grandes poderes mediáticos, se extiende cada vez más entre los potenciales electores. Sobre todo entre los jóvenes.

Venezuela tiene muchos problemas, pero no ese. Su nueva Constitución, aprobada en 1999 con más del 70% de los votos, le ha permitido pasar de una

simple democracia de representantes dominada por un bipartidismo decadente y por una dirigencia sindical corrupta, a una democracia participativa en la que millones de personas nunca antes escuchadas han podido hacer sentir su voz.

A partir de entonces, distintos aspectos del programa de gobierno han sido sometidos a consideración popular. Hasta la oposición, directamente involucrada en el frustrado golpe de Estado de abril de 2002, ha conseguido, gracias a la Constitución, impulsar un referéndum para revocar el mandato presidencial. Los resultados de esa consulta, única en su especie en las democracias contemporáneas, son por todos conocidos. Con la mayoría de los periódicos, radios y cadenas de televisión, nacionales e internacionales, en su contra, el presidente Hugo Chávez fue ratificado en su cargo con casi el 60% de los sufragios emitidos.

Desde que los derrotó por primera vez en 1998, los opositores a Chávez no han cesado de retratarlo como a un «tirano» y a su gobierno como una «dictadura». Paradójicamente, lo ha hecho en un contexto de amplia libertad política y con el grueso de los medios de comunicación en sus manos. Algunos de sus portavoces más destacados, como el magnate Gustavo Cisneros o el ex dirigente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Carlos Ortega, han desfilado en sus pantallas como si fueran ciudadanos honorables enfrentados a un régimen totalitario. Sin embargo, su papel como instigadores del golpe de 2002 y del salvaje *lock-out* patronal que mantuvo en jaque al conjunto de la economía nacional entre diciembre de ese mismo año y febrero de 2003, rara vez es recordado por los grandes medios dentro y fuera de Venezuela.

Tras la celebración del referéndum, esta estrategia de confrontación virulenta ha sufrido un contundente traspiés. No sólo porque casi 6 millones de venezolanos han apostado por la continuidad del gobierno. El propio Centro Carter y la Organización de Estados Americanos (OEA), claramente afines a la oposición durante la recogida de firmas previa a la consulta, se vieron obligados, en su calidad de «Observadores internacionales», a reconocer la limpieza del proceso y la rotundidad de sus resultados. Hasta el *New York Times,* especialmente sensibilizado ante el aumento del precio internacional del crudo, publicó a los pocos días de la consulta una editorial en la que reclamaba «estabilidad institucional» y condenaba el fanatismo desplegado por la opositora «Coordinadora Democrática».

Naturalmente, la ratificación del liderazgo de Chávez, tal como ha ocurrido en anteriores oportunidades, no va a suponer una normalización automática de la vida política del país. Es previsible que el fracaso electoral de la oposición ocasione fisuras en su seno; que algunas empresas multinacionales in-

tenten buscar acuerdos con el gobierno para una participación «razonable» en el reparto del petróleo; o que una eventual derrota de la Administración Bush en las elecciones estadounidenses traiga nuevos aires al panorama político latinoamericano. Sería ingenuo, no obstante, pensar que las hostilidades contra el gobierno vayan a cesar. Lo más probable es que tanto desde el antichavismo recalcitrante como desde Washington continúen movilizándose, como hasta ahora, todos los recursos disponibles, legales y extralegales, pacíficos y violentos, para impedir una profundización democrática del proceso bolivariano. Después de todo, ¿por qué se libraría Venezuela —rica en recursos estratégicos y peligroso «ejemplo» para otros países de la región— de la operación de asedio y derribo a la que, con suerte diversa, se sometió ya a Guatemala, Chile, Cuba o Nicaragua?

En Europa, las desconfianzas frente a Chávez y su gobierno siguen siendo recurrentes entre analistas vinculados, no sólo al previsible liberalismo conservador o a grupos mediáticos con intereses específicos en la zona, sino incluso a ciertos sectores de la izquierda. Según estas versiones, la situación de Venezuela sería un calco grotesco del varguismo o del peronismo de los años 50; un régimen populista asentado básicamente sobre la militarización de la sociedad, algunas políticas asistencialistas de escaso efecto redistributivo y una reedición del caudillismo vernáculo.

Limitarse, sin embargo, a agitar el fantasma del «populismo» y del «autoritarismo», sin concretar su alcance en un contexto que no es el de la guerra fría, impide entender lo que está ocurriendo en el país caribeño y lo que podría pasar en otros procesos semejantes que están teniendo lugar en América Latina.

El discurso chavista, es verdad, no puede interpretarse a partir de las clásicas apelaciones al «comunismo» o al «socialismo» propias de la cultura política europea. Sin embargo, como bien revela la composición ideológica de los partidos y movimientos de base que apoyan al gobierno, tampoco es posible detectar en él las típicas prevenciones anti-izquierdistas características de muchos populismos nacionalistas del siglo pasado.

Un ejemplo de ello es el papel desempeñado por las fuerzas armadas que apoyan al gobierno, sobre todo después del intento de golpe de 2002. Ante la ausencia de cuerpos técnicos capaces de conformar una nueva administración en sentido weberiano, su papel ha sido central no sólo para desbaratar los planes sediciosos de la oposición, sino también para poner en marcha políticas públicas y para garantizar, en general, el orden constitucional. Es inexacto, por tanto, utilizar la expresión «militarización de la sociedad» como si se estuviera en presencia de un despliegue represivo masivo, que amenaza las

libertades públicas y las conquistas populares. En realidad, por historia y por composición interna, la actuación de las fuerzas armadas venezolanas recuerda más, al menos hasta ahora, a los oficiales portugueses que protagonizaron la «revolución de los claveles rojos» que a ejércitos como el argentino, el brasileño o el chileno.

Por otro lado, si se atiende a las palabras del propio Chávez, lo que el proceso venezolano persigue es, a partir de una recuperación en clave «popular» del ideario de Simón Bolívar, la superación del neoliberalismo y la articulación de un «humanismo poscapitalista» y «revolucionario». La amplitud de la fórmula no permite extraer de ella demasiadas implicaciones concretas. En un terreno más práctico, lo que las políticas del gobierno han procurado hasta ahora es guardar un cuidadoso equilibrio entre la voluntad de evitar el vasallaje a los Estados Unidos y a la oligarquía rentista nacional, por un lado, y la necesidad de articular una coalición entre inversores extranjeros y nacionales y pobres urbanos y rurales defensores de una suerte de nuevo capitalismo del bienestar, por otro.

Así, al tiempo que se anuncia un acuerdo de inversión de 5.000 millones de dólares con Texaco-Mobil y Exxon para explotar los campos petrolíferos y de gas del Orinoco, se impulsan alternativas al Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), como la creación de un consorcio petrolero —«Petróleos del Sur»— de un Banco o de un canal de televisión conjuntos con gobiernos cercanos como los de Argentina o Brasil. Del mismo modo, mientras se mantiene una política cautelosa y de no confrontación directa en temas difíciles como los de la deuda externa, se fortalecen lazos —antes pragmáticos que estrictamente ideológicos, todo hay que decirlo— con el régimen cubano.

Lo que no puede negarse, en todo caso, es la originalidad de un régimen en el que el voto, aunque importante, no representa más que un primer paso. Las asambleas vecinales y los centros sociales se han multiplicado en los últimos años, especialmente en los barrios más pobres. Miles de trabajadores, de indígenas, de estudiantes, han aprendido a representarse a sí mismos, en lugar de esperar que otros, normalmente de piel más clara y mayor poder económico, los representen. Más allá de toda disyuntiva estratégica, el propio Chávez es consciente de que los cambios para los que fue elegido —muchos de ellos simples reformas conquistadas hace tiempo en los capitalismos sociales europeos— encontrarían una feroz resistencia en ciertos núcleos de privilegio locales e internacionales y sólo podrían acometerse con una activa y renovada participación popular.

El papel de las mujeres es una prueba acabada de la vitalidad alcanzada por la nueva democracia venezolana. Como recordaba hace poco en la activista

Selma James, gracias a su presión la Constitución bolivariana incorporó novedosas previsiones anti-racistas y anti-sexistas. En un país en el que el 65% de las unidades familiares se encuentra a cargo de mujeres, su presencia como usuarias, como educadoras y como cuidadoras ha sido determinante en los programas de salud y alfabetización puestos en marcha por el gobierno. También han sido mayoría en los comités de campesinos que discuten las mejores vías para acceder a la propiedad de la tierra, a mejores sistemas de riego y, en definitiva, a la soberanía alimentaria. No es de extrañar, precisamente por eso, que durante el golpe de 2002 fueran mujeres de ascendencia africana o indígena quienes lideraran a los cientos de miles de personas que descendieron de sus *ranchitos* a defender lo que perciben como «su» Constitución, «su» presidente, «su» revolución.

Aunque las rentas que produce el petróleo son considerables, el 75% de los venezolanos sigue siendo pobre. Los voraces intereses del gobierno de los Estados Unidos y de sus empresas multinacionales, sumados a la corrupción rampante de las élites políticas, económicas y sindicales tradicionales, explican en buena medida esa situación. Lo novedoso es que, por primera vez en décadas, una parte importante de esos ingresos se ha destinado a mejorar la alimentación, la salud y la educación de los sectores que menos tienen.

Naturalmente, muchos de esos programas podrían mejorarse. Para conjurar los riesgos de focalización, clientelismo y corrupción, haría falta impulsar fórmulas coordinadas de autogestión, construidas sobre las experiencias ya en curso. Igualmente, el gobierno tendrá, tarde o temprano, que dar una respuesta original al eterno debate en torno a la ausencia de una «burguesía nacional» capaz de relanzar la producción interna y de aceptar, al mismo tiempo, una cierta distribución de la riqueza. Los magros resultados de Lula en esta materia y los riesgos de una excesiva dependencia del petróleo seguramente obligarán, si de lo que se trata es de democratizar las estructuras económicas, a ensayar nuevas fórmulas descentralizadas y participativas de propiedad pública estatal y, sobre todo, social o cooperativa.

Los desafíos, como puede verse, son enormes. En tiempos de bonanza petrolera, el «humanismo poscapitalista» al que alude el presidente Chávez podría traducirse tal vez en una suerte de «New Deal» caribeño, capaz de incorporar a amplios sectores populares y de convivir incluso, de manera relativamente «amable», con algunos enclaves de privilegio heredados de la IV República. Tampoco puede descartarse una profundización democrática del proceso, inducida por un giro político favorable en el resto del continente. Más complicado, en cambio, resulta aventurar cómo se articularía ese modelo en un nuevo escenario de crisis económica, si la oligarquía rentista pretende mantener su poder mediático y dar una batalla a fondo para defender sus intereses.

Por ahora, el mayor haber con el que cuenta la «democracia protagónica» consagrada por la Constitución bolivariana es la auténtica refundación que se ha producido en la idea de ciudadanía. Lo que supone que, por primera vez en mucho tiempo, su ejercicio no venga determinado de forma exclusiva por los orígenes, la riqueza o el color.

Algunos, sobre todo los mejor situados, perciben el creciente compromiso político de la población más pobre como una amenaza para el *status quo*. Y seguramente tienen razón. Es por eso, entre otras razones, que en medio de tremendas presiones externas y de convulsiones internas que hubieran dado al traste con cualquier otro régimen, la democracia venezolana se ha convertido en un fascinante laboratorio no sólo para la región sino para el mundo. Por su resuelta voluntad de abrir el debate público más allá del ámbito estrictamente institucional y de no someterlo todo a los designios de los grandes poderes de mercado.

Contemplado desde la lánguida atalaya de las democracias capitalistas del norte, el espejo venezolano ofrece, con todos sus problemas, una imagen exigente y digna de respeto. También aquí, como en muchas otras cuestiones, aprender a mirar al sur sería una manera no sólo de reconocer los propios límites, sino también de renovar las propias prácticas políticas. **G.P.**, *Barcelona, 1 de septiembre de 2004.*

EL POLVORÍN PALESTINO

La repetición cotidiana de los enfrentamientos entre israelíes y palestinos, debido al efecto erosionador de la sensibilidad por la rutina mediática, puede hacernos perder la noción de la gravedad del asunto, tanto para los dos pueblos implicados como para el conjunto de la humanidad. En realidad, la cuestión palestina se ha convertido ya hace tiempo en un polvorín que amenaza la paz mundial.

La actuación del estado de Israel contra el pueblo palestino desde la primera *intifada*, iniciada en 1987, ha sido tan brutal que la imagen dominante en Europa acerca de los palestinos ha dado esde entonces un giro de 180 grados. Hoy los palestinos son vistos principalmente como víctimas de una política genocida. Después de décadas de enfrentamientos, desde el nacimiento mismo del estado de Israel en mayo de 1948, los gobiernos derechistas de Netanyahu en su momento y de Sharon en la actualidad parecen dispuestos a una «solución final», a conseguir mediante la violencia más descarnada la

expulsión del mayor número posible de palestinos y el sometimiento y la docilidad definitivos de los pocos que accedan a permanecer en los territorios de la Autoridad Nacional Palestina, convertidos en «bantustanes» desprovistos de soberanía real, de medios de autodefensa y espacialmente fragmentados, formando islotes discontinuos. Los hechos así parecen indicarlo. Para combatir los atentados suicidas, el ejército israelí replica con destrucción de viviendas, con asesinatos selectivos (llamados cínicamente «ejecuciones extrajudiciales»), con bombardeos indiscriminados cuyas víctimas son mayormente civiles.

En 1947 la ONU logró un acuerdo, con la resolución 181, en virtud del cual se procedería a la partición de Palestina en un estado hebreo, otro árabe y una zona internacionalizada en Jerusalén y Belén. El estado judío había de ocupar el 56% del territorio con una población de 499.000 habitantes judíos y 510.000 árabes palestinos, mientras que el estado árabe recibiría el 43% del territorio y una población de 747.000 palestinos y 10.000 judíos. Los árabes rechazaron este reparto y en 1948 estalló la guerra, en la cual Israel se apoderó del 78% del territorio de la Palestina histórica —contra la resolución 181—, expulsando a la mayoría de la población palestina (unas 800.000 personas). En la guerra de 1969 Israel ocupó el 22% restante, es decir, Gaza y Cisjordania. Los expulsados de 1948, a los que se impidió volver a sus tierras, se instalaron en campamentos de refugiados en Gaza, Cisjordania, Jordania, Siria, Líbano y otros países árabes. Los conflictos de 1967 y 1969 provocaron otras olas de refugiados. Ellos y sus descendientes alcanzan hoy la cifra de más de 5 millones. En la resolución 194 (III) de la ONU se reconoce el derecho de estos refugiados al retorno a sus tierras si lo desean, o a recibir una indemnización por las propiedades perdidas si no quieren regresar.

En 1988 la OLP reconoció el estado de Israel y condenó explícitamente toda forma de terrorismo. Esta doble toma de posición fue muy importante y podía haber inaugurado una coexistencia pacífica entre los dos pueblos. Hasta entonces, el hecho de que ni los palestinos y los otros pueblos árabes reconocieran el derecho de Israel a tener un estado propio era un obstáculo insalvable para una paz estable. También lo era que no existiera una renuncia expresa a formas de lucha catalogables como «terroristas» —que habían usado los palestinos pero también los israelíes ya desde 1947 (contra población civil para atemorizarla y hacerla huir de sus tierras).

Entre 1987 y 1993 tuvo lugar la primera *intifada* o rebelión popular, en la que hombres, mujeres y niños palestinos, armados de piedras y palos, se enfrentaron repetidamente al ejército israelí, el más tecnificado y más poderoso del mundo (en proporción al número de habitantes), reivindicando el fin de

la ocupación militar y la negociación con Israel. La opinión pública mundial quedó fuertemente impresionada por la represión del ejército de Israel, el Tsahal, contra una población civil indefensa, y la causa palestina empezó a concitar unas simpatías nuevas.

En 1993 se firmaron los Acuerdos de Oslo, por los que se permitía a la Organización por la Liberación de Palestina (OLP) instaurar una Autoridad Nacional Palestina que administra, desde entonces, algunas zonas de Gaza y Cisjordania de las que se retiró el ejército israelí, pero sin respetar la resolución 242 de la ONU, que exige la retirada de *todos* los territorios ocupados. Con los acuerdos de Oslo los palestinos lograron que, por vez primera, Israel y la comunidad internacional los aceptasen como interlocutores y que empezara a parecer viable la existencia de un estado palestino.

En julio de 2000 fracasaron las negociaciones de Camp David debido a las pretensiones leoninas del gobierno laborista israelí: el Tsahal seguiría controlando el 20% de Cisjordania; se mantendrían la mayoría de las colonias judías partiendo Cisjordania en tres zonas discontinuas; Jerusalén Este seguiría en manos de Israel; Palestina carecería de espacio aéreo y de ejército; Israel seguiría controlando los recursos hídricos; no se reconocería el derecho de los refugiados al retorno ni a la indemnización, etc.

La actual *intifada* estalló contra la inoperancia del proceso de paz. El motivo desencadenante fue la provocadora visita de Sharon a la explanada de las mezquitas de Jerusalén. En la nueva espiral de violencia, el Tsahal ha destruido el campamento de refugiados de Jenín y ha recurrido a los asesinatos selectivos, a la destrucción de viviendas y a los bombardeos que afectan muy duramente a toda la población palestina. El gobierno Sharon no ha detenido los programas de instalación de nuevos colonos, cuyo número asciende a unos 400.000 (que ocupan el 42% del territorio de Cisjordania). El goteo de más y más asentamientos nuevos complica y envenena una situación ya de por sí inmanejable.

La agravación de las tensiones en Israel no puede separarse de la conflictividad en la zona. El descaro de la política de los Estados Unidos en Iraq desde 1991 ha dado alas a los halcones más agresivos de Israel. Desde sus orígenes, el estado de Israel ha actuado como peón avanzado de las políticas occidentales en la zona. Primero de la Gran Bretaña, que tuvo el mandato colonial de Palestina. Luego, de los Estados Unidos, que, una vez definido el Próximo Oriente como zona de especial valor estratégico —sobre todo por su riqueza en petróleo—, tenían interés en colocar un pie en la región. La alianza de los *lobbies* judíos de los Estados Unidos (muy potentes) con los sucesivos gobiernos —tanto republicanos como demócratas— de este país han con-

solidado un bloque de intereses muy sólido, que permite describir el estado de Israel como caballo de Troya en territorio árabe, pertrechado, además, de armas nucleares (caso único en la región).

Este papel que objetivamente desempeña el estado de Israel debe deslindarse del derecho de los judíos a un estado propio. Es cierto que detrás de todo esto está el fracaso de Europa a la hora de aceptar en su seno a la comunidad hebrea. Una historia de muchos siglos de persecuciones étnico-religiosas, que culminó con el Holocausto nazi, desembocó en un clamor de los supervivientes para acceder a una tierra propia, en la que nadie pudiera ya nunca más considerarlos extraños y someterlos a vejaciones y persecuciones. ¿Qué otra tierra había de acogerles mejor sino su propia tierra de origen, la Tierra Santa, la tierra prometida? La solución parecía evidente, y había sido anticipada medio siglo antes por Theodor Herzl, el fundador del sionismo. El problema es que esa tierra estaba ocupada ya por otro pueblo. Pero era un pueblo «atrasado», un pueblo, por decirlo hegelianamente, «sin historia». Europa lo tuvo fácil y exportó su problema a esa región.

Pero hoy no sirve de nada lamentar esta historia. El asentamiento del pueblo judío en la tierra de Israel debe aceptarse como un hecho irreversible. Y por eso no cabe imaginar otra solución que la coexistencia pacífica de ambos pueblos, el israelí y el palestino, en el mismo territorio, para lo cual hace falta un sistema de reparto del espacio y los recursos con unas reglas claras y mutuamente aceptadas, y un compromiso internacional para facilitar esta salida. En suma, hace falta una auténtica proeza.

Pues, efectivamente, demasiados factores se conjuran contra una salida de este tipo. En primer lugar, el pueblo palestino, ayudado en otros períodos por prácticamente todo el mundo árabe, ha sido olvidado y abandonado a su suerte. Los Estados Unidos han logrado la complicidad de la mayoría de esos países, sobre todo mediante facilidades y beneficios económicos y políticos (pensemos en países como Marruecos, Túnez, Egipto, Arabia Saudita, los emiratos árabes y Pakistán). Los Estados Unidos, además, han ocupado militarmente Iraq y amenazan Siria e Irán. En este contexto regional, no hay contrapeso al poderío de Israel, de modo que resulta difícil obligar a este país a ceder y aceptar un auténtico plan de paz. Los estadounidenses tienen a sus propios hombres en el seno de la OLP y la autoridad palestina, como Mohamed Dahlan, que están jugando sus cartas frente a un Arafat muy desprestigiado y acusado de nepotismo y corrupción, pero que sigue simbolizando el vigor de la resistencia y de la dignidad nacional.

En segundo lugar, y ante una creciente crisis del petróleo, la carta que están jugando los Estados Unidos es la de una política de fuerza —combinada con

la presión económica— para controlar las reservas más abundantes del mundo de esta fuente de energía. Ante la perspectiva del agotamiento del petróleo, los estadounidenses parecen apostar por el control máximo de este recurso en la problemática fase de transición hacia una economía postpetrolera.

En tercer lugar, las pasiones religiosas resultan exacerbadas en una tierra que es Santa para los cristianos y, sobre todo, la Tierra Prometida, para los hebreos, pueblo —no se olvide— *elegido* entre todos los demás por Jehová. Para una parte importante de la población israelí no sólo cuenta la lógica sionista de la defensa de Israel como refugio frente a las persecuciones racistas, sino también la defensa de esa tierra *Santa* y *Prometida*, añadiéndose a sus motivaciones seculares la motivación religiosa, no precisamente propensa a la negociación racional en función de intereses materiales tangibles. Añádase a este fundamentalismo judío el fundamentalismo cristiano de sectores integristas norteamericanos que están financiando a ciertos grupos ultramontanos de Israel, y el fundamentalismo que inspira a Bush en sus alucinantes visiones milenaristas sobre el presente y el futuro de ese otro «pueblo elegido», el estadounidense. La guinda es el fundamentalismo islámico, que aporta su parte alícuota de irracionalidad y fanatismo, y que no cesa de crecer en una nación árabe que había tenido el mérito y el privilegio de haberse contado entre las más laicizadas del mundo árabe-islámico.

En la actual política de genocidio contra los palestinos hay un elemento inquietante e indignante: la desfachatez con que el gobierno israelí aplica medidas de *poder desnudo*, con desprecio por las formas que caracterizan el constitucionalismo occidental moderno del que dicen ser adalides en la región. Se practica un *terrorismo de Estado* sin paliativos: algunos líderes palestinos son asesinados sin disimulo por el ejército con la colaboración de los servicios secretos; las familias de los terroristas suicidas son castigadas con la destrucción de sus viviendas y a veces la muerte (en violación del principio jurídico moderno de la responsabilidad penal individual); se construye un muro que aislará a miles o millones de palestinos en auténticos guetos y traspasará a soberanía israelí partes de territorios sujetos a la ANP; se expropian sin indemnización ni explicación tierras a ciudadanos palestinos, etc. Este desprecio absoluto a la legalidad ha sido paralelo con el desprecio a las resoluciones de la ONU, sistemáticamente ignoradas y violadas por los sucesivos gobiernos, con el beneplácito de los Estados Unidos.

Esta prepotencia israelí frente al pueblo palestino —y en abierto desafío a la «comunidad internacional», si tiene sentido usar esta expresión— es como una imagen y figura de las relaciones que el gobierno de George W. Bush ha tratado de implantar con los países *atrasados* después del atentado de las Torres Gemelas en 2001. Por eso no se puede banalizar ni correr un velo

sobre la política prepotente de Sharon: aceptarla es como aceptar un tipo de relaciones internacionales absolutamente asimétricas, abusivas y contrarias a los principios más elementales de equidad en las relaciones entre estados. Las elecciones presidenciales de noviembre en los Estados Unidos serán un hito importante a este respecto, aunque no se puede predecir qué podría representar una victoria demócrata en este asunto. En todo caso, la Unión Europea tiene ante sí el dilema hamletiano que arrastra desde siempre: *ser o no ser* una auténtica comunidad de naciones, con una política exterior propia. Los contrastes de varios países importantes de la UE con la política de Bush —entre ellos España— parecería un buen augurio. La UE es el principal socio comercial de Israel y tiene con este país un acuerdo de asociación que se confiere un trato preferente; es decir, tiene instrumentos de presión importantes para influir en la política del estado de Israel. ¿Tendrá la valentía de usarlos? Todo hace presagiar el seguidismo (aunque hipócrita y a regañadientes) de la UE respecto de los Estados Unidos, aunque podrían cambiar unos u otros matices en caso de una victoria demócrata en las presidenciales y un cierto cambio de rumbo de la política estadounidense. En cualquier caso, la ciudadanía europea favorable a la paz y a unas relaciones equitativas entre estados tiene la responsabilidad de intentar hacer prevalecer en la escena internacional otro tipo de política, lo cual tiene como requisito previo ineludible presionar para resolver el contencioso palestino-israelí. Está en juego el destino de millones de personas de la región. Pero también las relaciones entre Occidente y el mundo árabe-musulmán, y por tanto la estabilidad política y la paz en el mundo. **J.S.**, *8 de agosto de 2004.*

¿AUGE DE LA PROSTITUCIÓN?

Los más viejos del lugar pudimos hacernos la ilusión, allá por los años 60, de que la *liberación de las costumbres*, y en particular las sexuales, iba a hacer retroceder la prostitución. Los cambios hacia un nuevo hedonismo —como subrayaba Daniel Bell para los Estados Unidos— y la rebelión juvenil contra las viejas costumbres en Norteamérica y en varios países europeos permitía pensar que las relaciones sexuales se librarían tanto del yugo de la costumbre y los estereotipos como de la dependencia mercantil. El acento en la libre elección sexual se veía vinculado a unos progresos previsibles en el ejercicio de la libertad personal que habían de suponer una elevación en la calidad de las relaciones personales. Suponíamos que el *amor* iba a ser irremisiblemente más *libre*. Y que se buscaría menos una satisfacción en el sexo por dinero.

De todas aquellas ilusiones, quedan cambios no desdeñables, sobre todo en España, donde se había vivido durante 40 años bajo una fuerte represión religiosa y el correspondiente control social. Tal vez el progreso más real y sólido haya sido la aceptación social de la homosexualidad y el retroceso de muchos de los estereotipos asociados a ella. Las relaciones prematrimoniales entre jóvenes son moneda corriente. Las separaciones y divorcios han perdido sus connotaciones dramáticas y son más aceptados socialmente. En cambio, es sorprendente la fuerte vitalidad que conserva la prostitución. Incluso parece que haya aumentado, aunque la verdad es que resulta problemático hacer un diagnóstico diacrónico convincente de un fenómeno del cual carecemos de datos fiables relativos a épocas anteriores. Se trata de algo parecido a la violencia doméstica: ¿ha aumentado o ha disminuido con el correr de los años?

Especulaciones aparte, y sin necesidad de entrar en imposibles comparaciones diacrónicas, resulta muy visible el fenómeno de la prostitución en la abundancia de noticias sobre bares de alterne, redes mafiosas de proxenetismo, explotación de mujeres de otros países (asiáticas, africanas, latinoamericanas o del Este de Europa) atraídas con engaños y sujetas a situaciones de ilegalidad, etc. Se pueden aventurar algunas hipótesis sobre el fenómeno.

El adulterio de la mujer está hoy menos reprobado socialmente que antes, aunque una franja nada desdeñable de varones reacciona con mucha violencia ante él. En las crónicas de la violencia doméstica contra las mujeres es frecuente la justificación del agresor por el adulterio —real o supuesto— de la mujer agredida, o los simples celos. Pero no es el adulterio de la mujer algo que lleve a la prostitución (la prostitución masculina sigue siendo excepcional), sino el del varón. Cuando los varones buscan una *aventura* fuera del matrimonio o pareja estable, tienen muchos estímulos para buscarla en el *sexo por dinero*. Éste no exige ningún compromiso, ninguna vinculación duradera, ninguna continuidad, y por tanto satisface más cómodamente la pulsión momentánea (sea espontánea o socialmente inducida —por ejemplo, en los grupos de hombres solos que se reúnen en congresos o convenciones, fuera de la ciudad de residencia, y entran en una competencia verbal sobre sus «aventuras», asociadas a un cierto estereotipo del «macho»). El sexo de pago se presta más a la variedad, a la *acumulación* de experiencias, que casa bien con ese estereotipo, del «gallo» que accede a muchas gallinas. El sexo de pago satisface sin complicaciones el *afán posesivo*: yo pago, yo mando, yo me ofrezco las hembras que quiero, convertidas, por cantidad y calidad, en testimonios de mi poder adquisitivo.

Los varones suelen recurrir a la prostitución en situaciones de *poder*. Para empresarios, ejecutivos o mandos intermedios de empresas, para funciona-

rios y políticos de todos los niveles, la aventura ocasional es también testimonio de su *status* social, en este caso más de poder que de riqueza. Se percibe como la guinda que confirma el éxito social. Tiene el carácter de «consumo ostentoso» que Thorstein Veblen describía hace un siglo (incluida la ostentación de la *hembra* dentro del matrimonio, asociada al lujo en el vestir, las joyas y la decoración doméstica). Se facilita con la movilidad obligada —y frecuente hoy— de muchos varones solos en la vida de negocios, en los viajes profesionales, en la asistencia a reuniones de trabajo y congresos —donde uno de los atractivos es justamente el sexual.

Por otra parte, vivimos en una época de *prisa*. Se vive con apresuramiento. Se cuenta el tiempo. Se calculan las experiencias acumuladas. Se valora la cantidad, a menudo más que la calidad. (El varón adúltero sólo valora la calidad de su relación con otra mujer si lo que busca o necesita es ya una ruptura con su pareja establecida para crear una nueva relación.) La frecuencia de la prostitución, pues, obedece a una desvalorización de la calidad de las relaciones humanas, a una genitalización de las relaciones entre las personas en detrimento del componente amoroso, de los sentimientos y afectos (fenómeno abrumadoramente más propio de los varones que de las mujeres). Para quien vive deprisa, es un engorro la *construcción*, paciente y a veces conflictiva, de una relación enriquecedora entre dos personas.

Una manifestación particularmente sórdida de la prostitución es el *turismo sexual*. En esta clase de turismo la prepotencia masculina se ejerce no sólo sobre la mujer despreciada como sexo inferior, como sexo *de servicio* al hombre, sino también sobre la población de países pobres, y, como tales, percibidos como inferiores. Una vez más, quien paga manda. La prepotencia del macho se refuerza con la prepotencia del rico. En sus formas más extremas —el abuso de menores de ambos sexos— el turismo sexual es, en cierto modo, un enigma. ¿Qué se persigue en este caso? ¿Tal vez hay que inferir que hay mucha más perversión potencial reprimida en los varones de nuestro entorno? ¿Acaso el abuso de menores en el tercer mundo es el resultado combinado de la banalización consumista del sexo, de la prepotencia del macho rico y de un plusvalor asociado a la transgresión —la transgresión cobarde del poderoso, en un país lejano, lejos de la mirada de los de casa?

¿Qué decir de los medios de comunicación, especialmente los audiovisuales? No es fácil un diagnóstico verosímil. Por una parte, la literatura y el cine aportan a la gente elementos educativos importantes: ayudan a reflexionar y profundizar en la riqueza posible de las relaciones eróticas y amorosas, y por tanto pueden constituir un factor de depuración y educación sentimental enriquecedora. Gran parte de la miseria sexual de nuestras sociedades tradicionales derivaba de que el sexo era un tabú. Hoy, gracias a la literatura y el

cine, tenemos oportunidades para oír hablar de sexo y erotismo, de afectos y pasiones amorosas con una variedad y libertad inéditas. Pero por otra parte, los medios audiovisuales nos transmiten una omnipresencia banalizadora de lo sexual, y tienden a reducir la sexualidad a un artículo más de consumo. Es más: debemos preguntarnos si las nuevas generaciones, acostumbradas desde su más tierna infancia al lenguaje de la imagen en pantalla, no están siendo condicionados a un modo de recepción de mensajes que los empobrece hasta el extremo, y sólo desarrolla una percepción de lo instantáneo y superficial y reprime la capacidades discursivas. Y una vez así condicionados, ¿no van a ser las víctimas ideales de programas televisivos como *Salsa rosa* y *Crónicas marcianas?*

No hay que idealizar abusivamente otras épocas y otros contextos sociales, en los que la sexualidad —en sociedades patriarcales y localistas, con escasos e infrecuentes intercambios humanos— estaba a menudo unida a la violencia física sobre la mujer, los hijos e hijas, los sirvientes o esclavos, o al bestialismo. Pero aunque la historia de la sexualidad humana sea, en muchos aspectos, una historia siniestra, no se puede olvidar que para nosotros, aquí y ahora, la prostitución es una lacra social repulsiva que debe minimizarse (si eliminarla del todo resulta irreal hoy por hoy). Nadie puede pretender tener claves inequívocas para avanzar en este camino. Pero parece que pueden establecerse con claridad algunas metas. Combatir la prepotencia del macho, el *machismo* predominante; favorecer la igualdad entre los sexos —que equivale a igualar la dignidad de ambos—; cultivar la calidad de las relaciones interpersonales (más allá de la cultura de lo inmediato, de la cultura de la comodidad y la banalización del sexo); combatir la cultura de la prisa y construir modos de relación más refinados, más elaborados, más respetuosos; superar los modos adquisitivos, posesivos y dominadores en las relaciones interpersonales; ridiculizar sistemáticamente el poder de unas personas sobre otras. Tal vez con estas prácticas no erradicaremos la prostitución, pero probablemente la haremos retroceder y lograremos vivir el sexo de manera más satisfactoria, aunque más exigente. **J.S.**, *8 de agosto de 2004.*

25 años de movimientos sociales

Han pasado 25 años desde la fundación de esta revista. Aunque a veces con irregularidades y retrasos, hemos estado presentes ininterrumpidamente durante un cuarto de siglo en la vida político-intelectual de este país. En esos años *mientras tanto* ha merecido el crédito de una franja de lectores y lectoras que se vincula a la revista por compartir preocupaciones y puntos de vista básicos, y que tiene una presencia más o menos activa en iniciativas, actividades y organizaciones de orientación emancipadora. Su fidelidad —y un cierto relevo generacional— nos dan ánimos y justificación para continuar. Además, quienes la venimos haciendo creemos que los objetivos fundacionales siguen en pie: «renovar la alianza ochocentista del movimiento obrero con la ciencia», «conseguir que los movimientos ecologistas [...] se doten de capacidad política revolucionaria», «que los movimientos feministas [...] decidan fundir su potencia emancipadora con la de las demás fuerzas de libertad»; o que «las organizaciones revolucionarias clásicas comprendan que su capacidad de trabajar por una humanidad justa y libre tiene que depurarse y confirmarse a través de la autocrítica del viejo conocimiento social que informó su nacimiento».

Han cambiado muchísimas cosas en esos años, a menudo en una dirección contraria a la que hemos deseado. Los objetivos fundacionales se

han cumplido parcialmente y en una medida muy insuficiente. Pero ya no son una rareza, sino algo que concita un consenso muy unánime en el ámbito de las izquierdas. Esto solo ya es el reconocimiento de que la línea inspiradora básica de la revista era substancialmente acertada, o por lo menos que respondía a una percepción que hoy es ampliamente compartida en la izquierda de este país.

Al final de la presentación del primer número se decía: «Quienes de verdad tienen la palabra son los movimientos potencialmente transformadores». Por esto, publicar hoy, 25 años después, un número monográfico sobre los movimientos sociales de este período es una buena manera de celebrar la continuidad de la revista. Reflexionar sobre estos movimientos es importante para calibrar en qué punto de nuestro trayecto estamos.

Aprovechamos esta ocasión para anunciar la próxima conmemoración de la existencia de esta revista durante los 25 últimos años.

La redacción

Presentación

En este monográfico se analiza la trayectoria (las principales ideas, actividades, debates, dificultades y propuestas) y los impactos conseguidos por la izquierda política transformadora y los movimientos sociales en los últimos veinticinco años, con el objetivo de transmitir a las nuevas generaciones de activistas las tradiciones emancipatorias que se han desarrollado en España durante este período histórico.

Con este conjunto de materiales se pretende, por una parte, recuperar la memoria histórica de los movimientos sociales y la izquierda alternativa, para ayudar a los activistas a que relacionen las ideas y experiencias de épocas anteriores con sus reflexiones actuales y propuestas de futuro. Y por otra, señalar y valorar los impactos de la acción social y política, para favorecer que los miembros de las organizaciones de los movimientos sociales y de la izquierda transformadora se convenzan de que su participación es necesaria y tiene unos efectos importantes.

El lector de estos textos apreciará una considerable diversidad de enfoques: todos los autores mantienen algún tipo de vinculación con los movimientos sociales y/o con las organizaciones de la izquierda alternativa, pero, mientras que unos parten de sus investigaciones realizadas en el ámbito académico (desde la historia, la ciencia política o la sociología), otros basan la reflexión en su experiencia como activistas de los grupos sociales y/o políticos. Esta diversidad es muy enriquecedora, ya que aporta enfoques complementarios, todos ellos necesarios para adquirir una visión amplia del tema que nos ocupa.

ENRIC PRAT (coordinador)

Evolución, crisis y mutaciones de la izquierda transformadora y alternativa

JAIME PASTOR

Un repaso de la trayectoria recorrida por la izquierda política transformadora a lo largo de los últimos veinticinco años exige una referencia previa, aunque sea general, a los antecedentes y al contexto político, social y cultural en el que ha ido emergiendo aquélla, con el fin de tener en cuenta sus posibles especificidades en relación con la que se ha ido configurando en países vecinos.

En nuestro caso esa tarea es imprescindible ya que no podemos obviar el trágico déficit histórico del que partíamos: la derrota de la izquierda y del movimiento obrero en la Revolución y la Guerra Civil de 1936-1939 significó no sólo su destrucción física sino también la instauración de una dictadura que a lo largo de varias décadas impidió que las nuevas generaciones pudieran forjarse en unas condiciones de continuidad político-cultural y organizativa que no fueran tan adversas. Cuando éstas entraron a la acción política, lo hicieron ya en un período en el que la reconstrucción de las redes «macrocomunitarias» que anarquistas y socialistas habían promovido en el primer tercio del siglo XX chocaba no sólo con la resistencia del franquismo sino con los nuevos canales de integración que, siguiendo el ejemplo de la «modernización» capitalista de postguerra, estaban empezando a darse en nuestro país a través de las nuevas pautas de consumo material y cultural y de «concertación social» dominantes ya en Europa Occidental.

Desde la joven clase obrera y las «nuevas capas medias» se fueron forjando fuerzas proactivas de una presión democratizadora que, hábilmente reconducida luego por reformistas del régimen y de la oposición, no llegó a consumarse en una ruptura política capaz de producir, ni de lejos, un «aconteci-

miento» fundacional similar al vivido en Portugal en abril del 74, por no hablar de la nueva situación creada en Europa tras la caída del fascismo y el nazismo. Pasábamos así de la dictadura a una «democracia de baja intensidad», con enormes hipotecas que muy pronto fomentaron una desmovilización social y una frustración política en las minorías que habían vivido más intensamente la lucha contra el franquismo y habían engrosado las principales organizaciones sociales y políticas; sobre esto se ha escrito ya mucho desde las páginas de esta revista y desde otras como *Viento Sur*, por lo que me remito a ellas.[1] Quizás nos faltó entonces interpretar ese desenlace dentro de lo que estaba significando ya el inicio a partir de 1971 de la «onda larga» neoliberal y autoritaria, ligada a la reconstrucción de la hegemonía global estadounidense tras la derrota de Vietnam y simbólicamente reflejada en la ofensiva desplegada contra la experiencia vivida con Allende en Chile, país que se convertiría luego en el primer «laboratorio» de las recomendaciones de los Milton Friedman y compañía.

Transición y «desencanto»

Con el lastre de la derrota de la guerra civil, la limitada experiencia fundadora de una nueva generación que significó aquí el «mayo del 68» —debido, fundamentalmente, a las condiciones dictatoriales en que nos encontrábamos entonces— y el fracaso de la ruptura política, el punto de partida para reconstruir una izquierda radicalmente crítica del capitalismo y transformadora no era, desde luego, el más favorable. A todo ello había que añadir la centralidad que en el nuevo sistema político se quiso dar a los partidos y a la búsqueda de «gobernabilidad», en detrimento de la pluralidad y de la apertura a formas de democracia participativa semi-directa. Se fue erigiendo así una «cultura del consenso» que, unida al «neocorporativismo» inaugurado con los Pactos de la Moncloa, silenciaba, cuando no lo perseguía, el disenso, y que contaba con la dirección del PCE como uno de sus promotores; una consecuencia de ese proceso fue la pronta autodisolución de fuerzas como el PT (Partido del Trabajo) y la ORT (Organización Revolucionaria de Trabajadores) poco después de una fusión que no les dio los frutos electorales esperados.[2] Únicamente la negativa a ofrecer una solución democrática a la cuestión nacional chocó con una amplia resistencia en Euskadi, en donde se

1. Por ejemplo, la «Carta de la redacción» del nº 13 de *mientras tanto*, de noviembre de 1982, o el «Plural» del nº 24 de *Viento Sur*, de noviembre-diciembre de 1995.
2. Para una crónica, discutible pero respetuosa, de la evolución de la izquierda radical bajo el franquismo y durante la transición me remito al trabajo de Consuelo Láiz, *La lucha final*, Los Libros de la catarata, Madrid, 1995.

comprobaría con el referéndum constitucional el déficit de legitimidad del nuevo sistema político en esa zona; el mismo será, sin embargo, canalizado principalmente por ETA, la cual tratará así de legitimar una estrategia de lucha armada cada vez más contraproducente y rechazable.

En esas circunstancias la aparición a finales de 1979 de una revista de título tan expresivo como *mientras tanto*, con su manifiesta voluntad de «renovar la alianza ochocentista del movimiento obrero con la ciencia», coincidió con una sensación interior de crisis generalizada de la izquierda, reflejada en distintas formas de cuestionarse su identidad y sus diferentes proyectos apenas caída la dictadura y conquistadas las libertades. Ocurría esto justamente cuando a escala internacional estábamos asistiendo, tras el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua, a los comienzos de la llamada «segunda guerra fría», impulsada por Reagan y Thatcher y secundada por Brejnev, y a la primera ofensiva en toda regla del neoliberalismo en el plano económico y social. En esas circunstancias, como recordaría diez años más tarde la «Carta de la redacción» de esta revista en su número 40, «la forma más sencilla de plasmar aquella intención renovadora y revisionista en el marco de la tradición marxista nos pareció entonces el emblema rojiverdelila que hemos seguido manteniendo hasta ahora como colores de la revista». Por eso, para muchas personas que seguíamos organizadas en los grupos de la izquierda radical supervivientes de la transición (MC —Movimiento Comunista— y LCR —Liga Comunista Revolucionaria), la nueva publicación fue vista como un llamamiento a la renovación teórica, hecha desde una firme apelación a no renunciar a principios y valores; pero también, por la procedencia de la mayoría de sus promotores, esa iniciativa aparecía como una oportunidad para emprender un diálogo con sectores críticos frente a la evolución que estaba conociendo el «eurocomunismo» entonces dominante dentro del PCE y del PSUC y que conduciría a la primera gran escisión que bajo el nuevo régimen se dio dentro de esas formaciones en 1981.

En efecto, en esos primeros años 80 se dieron procesos paralelos importantes en nuestro «país de países». Por un lado, el trauma del 23-F del 81 provocó la crisis del «partido de la transición» que había sido la UCD y favoreció la tendencia a la concentración del «voto del cambio» en un PSOE que aparecía como la única «alternancia» posible y que, además, prometía «de entrada, no a la OTAN». Por otro, la dirección del PCE se veía impotente ante esa ola, una vez fracasada su ilusión en ocupar el espacio socialdemócrata —frente a un PSOE convertido en partido «de aluvión» y «atrápalo-todo» en escasos años—, abriendo así el camino hacia su fraccionamiento en distintas alas: la «renovadora», con notable peso entre capas de profesionales y cargos públicos, que ponía el acento en la contradicción entre el discurso público de Carrillo y el mantenimiento de un centralismo burocrático interno; la «proso-

viética», crítica de la socialdemocratización en que estaba entrando el eurocomunismo pero, al mismo tiempo, acrítica de la intervención militar soviética en Afganistán; y la oficial, encarnada en Carrillo, empeñado en conciliar su eurocomunismo *à lo Berlinguer*, desde una débil correlación de fuerzas frente al PSOE, con el mantenimiento de un control estricto sobre el aparato del partido. Los resultados de las elecciones del 82 sentenciarían el fracaso de la esperanza en que pudieran convivir dos partidos compartiendo un espacio común, aunque pudieran diferir en aspectos secundarios y, sobre todo, en las culturas políticas de las que procedían.

La hipótesis «verde»

Pero los inicios de la década de los 80 son también los de la solidaridad internacionalista con los pueblos de Centroamérica y, sobre todo, los del auge de un poderoso movimiento eco-pacifista en Europa Occidental que va influyendo notablemente en el que se irá desarrollando en el Estado español en contra de la permanencia en la OTAN. El protagonismo que en aquél tienen el ecologismo radical alemán o una izquierda intelectual antiestalinista en Gran Bretaña contribuye a hacer que abran los ojos muchas personas activistas de la izquierda transformadora y radical, dispuestas ahora a «revisar» su ideario para ajustarlo a la búsqueda de una respuesta a la altura de los desafíos del nuevo escenario internacional y de las tendencias «exterministas» que parecían comunes a ambos bloques. Es entonces cuando en el marco del movimiento por la paz la influencia del ecologismo, del feminismo y del pacifismo radical empieza a hacerse visible y a apuntar nuevos caminos.

El hecho de que el Partido Verde alemán conozca un ascenso electoral significativo en esos años le convierte además en referente e incluso «modelo» para sectores de la izquierda no identificados con el PCE-PSUC y su reticencia a superar el eurocomunismo. Tenemos muy pronto ejemplos de esa atracción tanto en la autoproclamación de «partidos verdes» por parte de sectores minoritarios del movimiento ecologista, dispuestos ya a entrar en el terreno electoral, como en la «Carta de la redacción» que, con fecha de diciembre de 1984, la revista m*ientras tanto* publica en su número 22. Pero la impaciencia de algunos por formalizar esa opción «por arriba» —haciendo así una caricatura de la experiencia alemana— y el todavía débil arraigo social del ecologismo se convertirán en un obstáculo para las esperanzas en hacer viable una hipótesis que no tuvo siquiera el tiempo necesario para forjarse «desde abajo» y que finalmente no cuajaría como proyecto autónomo. Simultáneamente, experiencias como la del sandinismo se convierten en estímulos para buscar el «mestizaje» político también aquí y, más tarde, para repensar las estrategias revolucionarias y los problemas de la democracia en los proce-

sos de transición al socialismo. La complejidad de esta última cuestión se vería reforzada a la vista del desarrollo de un movimiento con características muy diferentes y con una evolución tan tortuosa como es el sindicato polaco *Solidarnosc*: su paso en pocos años de la apuesta antiburocrática a la mutación en elite en el poder revelaría los estragos que en la conciencia obrera fueron capaces de hacer la bancarrota del «socialismo real» y la «terapia de choque» neoliberal que se pondría en marcha en la década siguiente.

La fuerza que adquiere el movimiento por la paz y las expectativas de una victoria en el referéndum de marzo de 1986 sobre la OTAN parecen, no obstante, poder actuar a favor de que se abra la oportunidad para un proyecto nuevo de izquierda ecopacifista y alternativa. Sin embargo, la derrota sufrida supone un duro golpe no sólo para esas expectativas sino también, y sobre todo, para la posibilidad de iniciar una «segunda transición» en cuyo marco se podría haber dado la acumulación de fuerzas necesaria para esa renovación de la izquierda. Esta tarea se ve, además, impostergable cuando en abril de ese mismo año se produce la catástrofe nuclear de Chernóbil, que sacude nuestra conciencia de especie y nos apela a un urgente cambio de rumbo civilizatorio. Hay que decir, no obstante, que aun en el caso de que se hubiera producido el triunfo en el referéndum ni el peso que en las redes del movimiento tenían fuerzas como MC y LCR ni la relativa recuperación de peso político que va conquistando el PCE permitían que cuajara un proyecto «nuevo» sin, al menos, la participación de sectores procedentes de esas formaciones; pero, posiblemente, la presión unitaria que en esas condiciones se hubiera desarrollado habría sido capaz de implicar a aquéllos en una apuesta semejante.

Finalmente, en medio del nuevo «desencanto» (que condujo tanto al aumento del abstencionismo de izquierdas como al retorno de muchos y muchas anti-OTAN al «voto útil» al PSOE) los frutos de la intensa movilización anti-OTAN fueron muy parciales: por un lado, se constituye Izquierda Unida poco tiempo después del referéndum, a partir de un acuerdo del PCE con otros grupos políticos de menor entidad para formar una coalición electoral que obtiene un reducido porcentaje de votos en las elecciones generales de junio del mismo año; por otro, MC y LCR emprenden más tarde un proceso de convergencia que culminará en 1991. Ninguna de ambas opciones consigue, sin embargo, aparecer como un marco suficientemente abierto para muchas gentes activas del movimiento por la paz que buscan —o podrían verse animadas a ello— ser copartícipes en la construcción de una nueva formación política, superadora tanto del eurocomunismo *à la italiana* como de una izquierda radical instalada en el extraparlamentarismo. Quedan, eso sí, experiencias unitarias y asamblearias de ámbito local nada despreciables, como las que se viven en Zaragoza, Barcelona o Madrid, pero que terminan frustrándose o convergiendo en algún caso con IU.

La revalidación de la mayoría absoluta del PSOE en los comicios de 1986 y la acentuación de su adaptación al neoliberalismo conducen al desarrollo de un nuevo ciclo de movilizaciones desde 1987 hasta 1994, siendo su manifestación más visible y masiva la Huelga General del 14 de diciembre de 1988 contra la política laboral del gobierno, convocada por CCOO y UGT. Hay que recordar también que en esos años se produce un fuerte movimiento juvenil de insumisión al servicio militar —y al Ejército— que logra una amplia simpatía en la población, constituyendo un caso excepcional en Europa por su impacto mediático e institucional. En medio de ese intenso proceso de luchas somos espectadores de dos acontecimientos de alcance mundial: la caída del muro de Berlín y, luego, el colapso de la URSS. La repercusión que ambos tienen en las filas de la izquierda es enorme: mientras que en el PSOE supone un nuevo empujón hacia la integración en el capitalismo con el argumento de que «No Hay Alternativas» (recogido, a su vez, del discurso thatcheriano conocido como TINA, por sus siglas en inglés), en el PCE se abre un debate sobre la conveniencia o no de su autodisolución que, sin embargo, se entrecruza con el que va generando el relacionado con el Tratado de Maastricht y su consagración del neoliberalismo dentro de la UE, así como con la respuesta a dar a la primera guerra imperialista de la nueva época: la que emprende EEUU contra Iraq en 1991.

Oportunidades perdidas

Quizás podríamos situar en esos primeros años de la década de los 90 el momento más crítico y, al mismo tiempo, el punto de inflexión que ayuda a entender la evolución posterior de la mayoría de la izquierda transformadora en el Estado español. La paradójica coincidencia del hundimiento del mal llamado «socialismo real» y del triunfalismo neoliberal en el mundo y en la UE, por un lado, con un ciclo intenso de movilizaciones sindicales y sociales y con el relativo ascenso electoral de IU, por otro, obliga tanto a un «ajuste de cuentas» con el pasado —mayor o menor según la corriente de procedencia—, con el consiguiente reto de redefinir la idea de socialismo, como a un esfuerzo de reformulación de la «forma-partido» que permita superar el «modelo» convencional y confluir con los nuevos sectores que entran, o se reincorporan, a la acción política en un contexto histórico distinto. A estas reflexiones y búsquedas contribuyen iniciativas como el «Manifiesto ecosocialista», promovido por personas procedentes de distintas corrientes de la izquierda europea.[3]

3. Publicado en *mientras tanto*, nº 41, verano 1990.

Frente a esos desafíos se abre dentro de IU una nueva fase en la que una parte de su equipo dirigente trata de conciliar el mantenimiento de su referencia identitaria «comunista» con la voluntad de asumir un proyecto «rojiverde-violeta» y la apuesta por convertir esa formación en un «movimiento político-social» en el que los partidos fueran renunciando a su protagonismo para pasar a tener una posición subordinada. Se trata sin duda del «momento» preconstituyente de una mutación en positivo que, desde mi punto de vista al menos, vivió IU y que, por desgracia, sólo llegó a reflejarse por escrito en el documento conocido como «Manifiesto Convocatoria por la Alternativa», aprobado en 1993. Fue precisamente en ese tiempo cuando se formó también una «Coordinadora por una Izquierda Verde y Alternativa», en la que coincidimos gente procedente de diversos colectivos y tradiciones políticas, la cual consideraba que «a corto plazo las elecciones europeas de 1994 constituyen un reto a la iniciativa y el espíritu de colaboración de ese amplio sector de resistentes a la barbarie que se coordinó y luchó contra la OTAN, en la Huelga General del 14-D o contra la guerra del Golfo»; con este fin se dirige a IU-IC para proponerle incluir en puestos de salida de su lista para las elecciones europeas de junio de 1994 a Joaquim Sempere y a Carlos Taibo como muestra de su voluntad de apertura hacia sectores que, vinculados a los nuevos movimientos sociales, no forman parte de esa formación. El resultado de esa iniciativa será, finalmente, negativo, como se constatará en una nota editorial de *mientras tanto*, en su número 57, de abril-mayo 1994.

Sin pretender ahora magnificar esa propuesta, sí merece la pena recordar que apareció como una ocasión desaprovechada para demostrar, al menos simbólicamente, que desde IU había una disposición sincera a superar las viejas formas de hacer política y de elaboración de listas en función de los grupos de interés internos, con el fin de ir mejorando las relaciones con quienes desde hacía ya tiempo estaban apostando desde los movimientos sociales por un proyecto «rojiverdevioleta».

En cuanto a la izquierda radical extraparlamentaria, ésta no consigue salir airosa ante el «cambio de época» inaugurado en 1989. La fusión consumada en 1991 entre MC y LCR para dar nacimiento a Izquierda Alternativa se salda dos años después con la constatación común de un fracaso, derivado fundamentalmente tanto de las interpretaciones diversas sobre las características del nuevo período (¿derrota definitiva de la hipótesis revolucionaria y crisis irreversible de la política o derrota del «socialismo real» y necesidad de otra política?) como de la difícil convivencia dentro de una misma formación de culturas político-organizativas distintas (comunitarista con liderazgo carismático y con profunda crisis de identidad, una; pluralista con liderazgo más colegiado y mayor referencia ideológica, la otra). El resultado del divorcio —pactado aunque no muy amistoso— entre ambos grupos conducirá a su

práctica desaparición como fuerzas políticas autónomas a escala estatal, integrándose sólo una parte del sector exLCR en IU a finales de 1993. Sobreviven luego colectivos de una u otra formación, o de ambas (como *Zutik* en Euskadi), en algunas Comunidades Autónomas; éstos se centran ahora ya, definitivamente, en el trabajo en los movimientos sociales alternativos, en donde coexistirán o compartirán, según los casos, espacios con determinadas ONGs y un «área autónoma» que, más vinculada a movimientos como el «okupa» o al que empieza a tomar como referencia al «zapatismo», irá emergiendo en las grandes ciudades y entre la juventud.

A este panorama habría que añadir el desarrollo que conocen formaciones de izquierda nacionalista, principalmente Herri Batasuna (con la que abortó una experiencia de colaboración conjunta a escala estatal por parte de MC y LCR en torno a las elecciones europeas de 1987) en Euskadi, Bloque Nacionalista Galego en Galiza y, más tarde, Chunta Aragonesista y Esquerra Republicana de Catalunya. Pero no me es posible en este artículo hacer un análisis de las particularidades de cada una de ellas que tenga en cuenta la doble identidad y la consiguiente heterogeneidad de su militancia, sólo común en parte con la izquierda transformadora y alternativa que es objeto de este trabajo. Esto no significa subestimar su influencia ni, sobre todo, la importancia que la cuestión de la exigencia democrática del reconocimiento de la plurinacionalidad y del derecho de autodeterminación (por desgracia, asociado interesadamente desde el poder y desde una parte de la izquierda de ámbito estatal a la violencia de ETA) ha tenido en los debates y en las divisiones —transversales más de una vez a las diferentes corrientes y organizaciones— que se han ido manifestando dentro de la izquierda social y política, especialmente en Izquierda Unida tras la firma del Pacto de Lizarra por Ezker Batua en septiembre de 1998.

Retorno de la derecha, crisis de IU

El período de gobiernos «socialistas» se fue cerrando en un contexto distinto ya del que se había caracterizado por la recuperación de protagonismo «socio-político» por parte de los sindicatos: el desgaste sufrido por el «felipismo» a raíz de los escándalos de corrupción y del GAL fue redundando en beneficio de una «nueva derecha» que aparecía como portadora de una prometida «regeneración democrática», mientras que IU era demasiado débil para aparecer como relevo por la izquierda frente a un PSOE que mantenía un suelo electoral bastante firme. En esas condiciones de cambio de ciclo, y con unos sindicatos que emprenderán un giro hacia nuevos pactos sociales con los gobiernos del PP, IU quedó atrapada entre un sector proclive a la subalternidad respecto al PSOE (Nueva Izquierda) y otro (el liderado por Julio Anguita),

todavía empeñado en sostener un ilusorio «adelantamiento» electoral al PSOE y en no valorar los rasgos de discontinuidad con el ciclo anterior que suponía el ascenso del PP ante un sector importante de la izquierda social. La injerencia de grupos mediáticos en esa confrontación contribuyó a reforzar la tendencia a ser percibida en términos de «amigo-enemigo» por ambas partes e hizo muy difícil la visibilidad de otras posiciones que, aun estando en desacuerdo político con «Nueva Izquierda», no por ello estaban dispuestas a cerrar filas en torno a una dirección cuyos métodos de debate y de resolución de conflictos eran criticables y con la cual también mantenían discrepancias políticas en cuestiones nada secundarias (incluida la actitud a tomar ante los conflictos que desgarran a la exYugoslavia). El resultado fue que IU se convirtió en un terreno de enfrentamientos que terminó favoreciendo la búsqueda de la «homogeneidad» política y fue alejando las posibilidades de convertir en realidad las intenciones manifestadas en el ya citado «Manifiesto Convocatoria...». Esa dinámica repercutió en posteriores rupturas y salidas (unas inevitables a medio plazo, pero otras no), de las que nunca ha conseguido recuperarse IU y que se reflejarían electoralmente en un declive creciente.[4] Sólo quedará como un buen recuerdo, a pesar de sus limitaciones, la campaña por la Iniciativa Legislativa Popular de las 35 horas desarrollada por IU en el año 98 junto con diversas organizaciones sociales.

Justamente en esa transición entre la etapa «socialista» y la que presidirá Aznar, con la consiguiente crisis de orientación que se abre en IU, se sitúa la confluencia entre sectores minoritarios de esta formación que da lugar a Espacio Alternativo a finales de septiembre de 1996. Su proyecto se sitúa «dentro de una orientación superadora tanto del social-liberalismo como de la neo-socialdemocracia» y se identifica con «la metáfora de los colores, especialmente el rojo, el verde y el violeta, por tener que ver con tres de los grandes conflictos que atraviesan el planeta: el asociado a la cuestión social, el que afecta a las relaciones entre tecnosfera y biosfera y el viejísimo de la desigualdad de sexo-género; aunque no olvidemos que el reconocimiento de la realidad multiétnica y multicultural de nuestras sociedades y la posibilidad de convivir dentro de esa diversidad es uno de los mayores retos en ese fin de bilenio». En el comunicado de constitución de ese colectivo sus promotores «advierten del riesgo de que IU se consolide como coalición de partidos y reivindican su proyecto original como formación política de nuevo tipo en la que los partidos actuales, sin necesidad de disolverse, vayan renunciando a su peso preponderante y apuesten claramente por la confluencia natural de

4. En este proceso hay que recordar que hubo discrepancias también por parte de quienes formamos Espacio Alternativo con algunas de las personas vinculadas a *mientras tanto* respecto a la actitud a mantener ante esa crisis.

sensibilidades y corrientes dentro de IU en función de los debates que atraviesen al conjunto de la organización». En realidad, como se desprende de lo anterior, se pretendía que IU se tomara en serio lo que se había aprobado formalmente en la III y la IV Asamblea Federales de esa formación pero que no había sido asumido en la práctica por la mayoría.

La evolución de Espacio Alternativo, que pasa de ser coordinadora de colectivos a corriente formalizada tras su Primer Encuentro Confederal en junio de 1998 y, finalmente, a la doble condición de corriente y organización política tras su Segundo Encuentro en junio de 2000, le conduce de forma creciente a funcionar con un pie dentro y otro fuera de IU a medida que se comprueba cómo esta formación retorna al viejo «modelo» de partido convencional y la van abandonando o se distancian de ella sectores activos de los movimientos sociales.

Durante el período que se abre tras la victoria electoral del PP en 1996 y que se ha cerrado finalmente en marzo de 2004, nos encontramos con un proceso de consolidación de la hegemonía de la derecha y del neoliberalismo y el regreso a la «oposición» de un PSOE que inicia un camino tortuoso hacia la renovación de su elite dirigente. Dentro de ese recorrido el pacto programático al que llegan las direcciones del PSOE y de IU en vísperas de las elecciones de marzo de 2000 aparece como un intento de encontrar un atajo por ambas partes, ya sea para llegar al gobierno o, simplemente, para asegurarse la supervivencia institucional. Pero, si bien lo segundo se consigue a duras penas, el precio pagado por ello, debido al desconcierto creado en una parte del electorado y, sobre todo, de la militancia de IU, no hace más que profundizar su crisis. Esta se ve sólo parcialmente frenada en la VI Asamblea, celebrada a finales de ese mismo año, en donde, junto a los dos bloques mayoritarios, se configura una nueva plataforma de izquierdas que posteriormente da lugar a Corriente Roja.

Nuevo ciclo, viejos dilemas

La emergencia del «movimiento de movimientos» contra la globalización neoliberal que a partir de finales de 1999 se ha ido extendiendo al conjunto del planeta Tierra ha permitido ampliar el horizonte reducido de expectativas al que se resignaban las mayorías sociales del «Norte», obligadas además, tras el 11-S de 2001, a responder a la inseguridad creciente que genera la estrategia de «guerra global» desencadenada por Bush. En el caso español, la fuerza y el impacto de ese movimiento han ido *in crescendo* desde marzo de 2002, con los dos momentos álgidos del 20-J de 2002 y el 15-F de 2003, dando así un nuevo aliento a las esperanzas de cambio y favoreciendo la

emergencia de una nueva generación política, libre ya del «síndrome del muro de Berlín» y portadora de una percepción de la política y de las relaciones de los movimientos con los partidos muy diferente de las anteriores generaciones.

Así, si bien el desarrollo del ciclo de luchas más intenso vivido desde la transición política ha conducido finalmente a la derrota del PP y a la retirada de las tropas españolas de Iraq, no hemos visto en cambio que todo ello se haya reflejado (¿todavía?) en un refuerzo de la «izquierda de la izquierda». Al contrario, hemos comprobado una recuperación de su centralidad electoral por parte del PSOE (favorecida, paradójicamente, por la excepcional y ejemplar revuelta «contrainformativa» del 13-M y la repolitización ciudadana que ha expresado), sólo cuestionada por algunas izquierdas nacionalistas que han logrado resistir el «voto útil». IU, en cambio, queriendo trasladar, desde una relación de fuerzas más desfavorable, el ensayo del gobierno tripartito catalán a escala estatal, se ha dejado arrastrar hacia una deriva de moderación política que prioriza una imagen de «fuerza de gobierno» sin haber encontrado siquiera una compensación en votos y en peso institucional. Lo más preocupante, sin embargo, de la orientación de la dirección actual de IU es que está conduciendo a esta formación a una mutación interna hacia un partido electoral-mediático, escasamente interesado en respetar el disenso y en fomentar la participación en la deliberación y en la toma de decisiones del conjunto de la afiliación. El tiempo dirá si las resistencias que esa evolución está encontrando serán capaces de forzar un cambio de rumbo, más necesario si cabe a medida que se irán comprobando los límites y las contradicciones del nuevo gobierno de Zapatero; o si, por el contrario, la dinámica de «salida» se hará imposible de frenar, con el consiguiente riesgo de debilitamiento y fragmentación de las corrientes críticas que hoy se expresan dentro de IU.

Las elecciones europeas de este 13 de junio han cerrado una fase de convocatorias electorales en la que se ha ido aplazando el necesario debate sobre qué izquierda construir en estos comienzos del siglo XXI. Ahora, con mayor razón tras los resultados obtenidos y sin las urgencias que implican nuevas pruebas en las urnas a corto plazo, esa discusión es ya ineludible. Me limitaré a ofrecer algunos apuntes que pueden sonar, no obstante, a repeticiones de tantos escritos que en esta y otras revistas afines han ido apareciendo en las dos últimas décadas.

Una primera tarea es pararse a analizar, con el suficiente distanciamiento autocrítico, los cambios que se han ido produciendo en nuestras sociedades en muy distintas esferas con el fin de tratar de interpretar las distintas líneas de fractura que las atraviesan: en la producción y en la reproducción social, en las relaciones de género, en el metabolismo con la naturaleza, en el consumo, en la manifestación del lado nacional-cultural de cada persona, en la

tensión entre las distintas ideas de seguridad y la preservación de libertades y derechos. La pluralidad de desigualdades e injusticias que se revela a través de todas ellas es cada vez mayor y la dificultad para articular las luchas que se dan en cada uno de esos ámbitos para forjar bloques comunes contrahegemónicos también lo es. En todo caso, es a partir de una labor de reinterpretación de las raíces y las formas de expresión de la explotación, la dominación y la alienación (o la «infelicidad» de la que nos habla Franco Berardi, Bifo[5]) agravadas por el capitalismo realmente existente como deberemos refundar un proyecto común. Un proyecto que, más que nunca, tiene que saber ubicarse en un momento histórico de transición en el que la globalización *made in USA* está sufriendo un proceso de deslegitimación ética y política creciente en muy diversas partes del mundo, pese a que sus efectos no se hayan reflejado todavía en un retroceso significativo del fuerte consenso neoliberal que sigue imperando.

Quizás habría que remontarse a 1968 para encontrar una coyuntura histórica en la que la distancia entre el «Gran Rechazo» que expresan determinadas movilizaciones sociales y la adaptación al marco capitalista neoliberal por parte de la izquierda política haya sido tan grande como ahora. La diferencia está en que en aquel entonces la nueva generación buscó la alternativa en la construcción de nuevos partidos que, basados en una hipótesis revolucionaria a corto plazo, tuvieron una rápida e ilusionante fase de crecimiento antes de acabar fracasando; ahora, en cambio, la respuesta parece ir más por el camino de la desconfianza profunda hacia los partidos —considerados como terreno de conflicto entre grupos interesados únicamente en incentivos selectivos y, por tanto, muy vulnerables a la corrupción—[6] y por preservar la autonomía y la centralidad de una política directamente practicada desde los movimientos y desde la diversidad de redes que los animan.

Las corrientes y agrupamientos de izquierda radical pueden y deben ser parte de esos movimientos y, al mismo tiempo, han de aspirar a ofrecer proyectos de cambio, estrategias y programas en el ámbito de la política global y en las instituciones, es decir, a construir nuevos tipos de partido. Pero éstos no pueden autoconcebirse ya como el eje vertebrador que, junto a los sindicatos y las cooperativas, protagonizó la construcción del movimiento obrero a lo largo del casi siglo y medio pasado. Esto es algo que han sabido entender dirigentes comunistas como Fausto Bertinotti, pero, en mi opinión, condicionado como está por los tiempos electorales y por las presiones internas para seguir apare-

5 *La fábrica de la infelicidad*, Traficantes de sueños, Madrid, 2003.
6. Sobre esto y a propósito del caso Tamayo-Sáez aporté algunas reflexiones en el artículo «La política de los negocios y las urnas», *Viento Sur*, nº 70, octubre 2003.

ciendo como «fuerza de gobierno», sin haber extraído (¿todavía?) todas las consecuencias respecto a la nueva dialéctica que se está estableciendo entre movimientos, instituciones y procesos electorales. Crisis como las que actualmente se están produciendo en las relaciones entre los partidos laborista y socialdemócrata, por un lado, y amplios sectores de los sindicatos, por otro, en países como Gran Bretaña y Alemania, confirman el final de toda una época y la necesidad de repensar el proceso de reconstrucción de un bloque social, político y cultural alternativo que ahora está sólo en sus inicios.

Ese bloque no puede tener ya como «núcleo federador» o centrípeto a la clase obrera industrial, con su base en la gran fábrica; pero hay que reconocer que tampoco esa minoría social que en el «Norte» se mueve más por razones y valores que por intereses materiales —y que tiene su base social en trabajadores sociales y «precariado», su lugar de encuentro en los Foros Alternativos y su esfera «contrainformativa» principal en internet— es capaz de relevarla (¿todavía?), más allá de las movilizaciones e iniciativas fundamentalmente reactivas que, con carácter más o menos espasmódico, puede protagonizar. Es preciso, por tanto, seguir extendiendo esos espacios comunes que son los diversos Foros, Encuentros y Plataformas unitarias para ir construyendo sinergias y afinidades político-culturales en el ámbito territorial y local entre las gentes de viejas y nuevas generaciones, de viejos y nuevos movimientos sociales, de viejos y nuevos colectivos o partidos para que un amplio «consenso alternativo» y, con él, otra izquierda alternativa se vayan haciendo realidad aquí y a escala europea y global.

Junto a esa irrenunciable tarea de investigación y experimentación en «laboratorios» varios que tenemos por delante, sí conviene ponerse de acuerdo al menos en que hay caminos que ya no podemos volver a recorrer. Porque, una vez superada la referencia nostálgica al mal llamado «socialismo real», el transcurso de todos estos años también ha ido poniendo a prueba tanto la fuerza del neoliberalismo armado como las presuntas «terceras vías» que ante él se han presentado. El primero ha triunfado hasta ahora social e ideológicamente en el «Norte» pero no así económica —no ha sentado las bases para una nueva fase de crecimiento «sostenido» capitalista- ni políticamente, como estamos comprobando en Iraq; pero el déficit de legitimidad con el que está tropezando no proviene, desde luego, de lo que ha hecho o hace el «socialliberalismo» cuando llega a los gobiernos (incluso cuando lo ha hecho con sus aliados de la «izquierda plural») sino del movimiento «antiglobalización», de la resistencia iraquí y de las contradicciones internas que están generando ambos dentro de la «tríada» ante la inestabilidad creciente derivada de la «guerra global» desencadenada por Bush (con mayor razón, además, cuando ésta se concentra en una región geoestratégicamente clave para el «mundo occidental» y su «modelo» de producción y consumo como es Oriente Medio).

¿Quiere lo anterior decir que la izquierda transformadora no ha de aspirar a estar también en las instituciones o no ha de saber distinguir entre «social-liberales» y derecha conservadora? No, en absoluto. Pero habrá de hacer esto último no debido a las políticas que aplican, muy similares en aspectos fundamentales, sino porque persisten diferencias político-culturales importantes entre la mayoría de sus respectivos electorados y, por lo tanto, la pedagogía política y la táctica a poner en pie han de ser diferentes. Esa labor debería practicarse, además, descartando aquellas opciones y alianzas gubernamentales que, dada la correlación de fuerzas institucional frente al «social-liberalismo», llevarían a la izquierda alternativa a perder su autonomía y, con ella, su anclaje en esa minoría social activa sin la cual no llegará nunca a acumular «masa crítica» suficiente para volver a poner de actualidad la necesidad de romper —y no simplemente «re-regular»— con el capitalismo.

Sabemos que los tiempos electorales y la competencia interpartidaria que provocan se imponen muchas veces frente a los tiempos, mucho más lentos, de maduración de los cambios político-culturales que propugnamos y de su reflejo en crecimiento de una izquierda transformadora. A esto se añade la distancia que en el comportamiento de «los y las de abajo» se da entre su participación y/o simpatía hacia las acciones colectivas de protesta impulsadas por colectivos de izquierda radical (recordemos las grandes movilizaciones convocadas en torno al lema «Contra la Europa del Capital y la Guerra», por ejemplo) y la polarización en torno al «voto útil» a la que se dejan arrastrar en las elecciones consideradas «críticas». Esa tensión se ha podido comprobar en las jornadas del 11 al 14-M, pero su desenlace electoral no puede llevarnos a deducir que no ha quedado nada de la repolitización ciudadana y de las redes y complicidades que se han ido tejiendo a lo largo de todo este tiempo, una vez logrados los dos grandes objetivos de la derrota del PP y la retirada de las tropas españolas de Iraq. Corresponde hacer ahora la experiencia de las expectativas, ilusiones y frustraciones ante las que nos vamos a encontrar y saber desarrollar una orientación que sepa potenciar la desconfianza y la relativa autonomía que al menos una parte de esas redes sigue manteniendo para generar un nuevo ciclo de luchas.

«No engañarse, no desnaturalizarse»

Tenemos que aprender, además, a tener una visión global y una perspectiva histórica con el fin de reconocer que hoy, en nuestras sociedades, estamos sólo en los comienzos de un nuevo ciclo histórico de reconstrucción del «partido-movimiento» que pueda reanudar el camino que inició la Primera Internacional y concluyó en 1989, si no antes. Por eso, para armarnos de una «lenta impaciencia», sería bueno recordar hoy algunas de las enseñanzas ex-

traídas por Perry Anderson del recorrido que el «padre» del neoliberalismo, Friedrich von Hayek, hizo desde finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando se encontraba en absoluta minoría política e intelectual, hasta la hegemonía que sus ideas han alcanzado en la actualidad: «no tener ningún miedo de estar contra la corriente política de nuestro tiempo», «no transigir en las ideas, no aceptar ninguna dilución de los principios» y «no aceptar como inmutable ninguna institución establecida».[7] Esos criterios no fueron, en cambio, aplicados por la mayoría de las fuerzas de izquierda a medida que ese neoliberalismo fue penetrando no sólo entre «los y las de abajo» sino también en las filas de sus propias organizaciones. Algo parecido había venido a decirnos ya Manuel Sacristán en su crítica del eurocomunismo cuando recomendaba «no engañarse y no desnaturalizarse»[8] como principios de precaución de una izquierda que quiera ser transformadora y no caer en el «transformismo» y la adaptación constante a las «modas» electoralistas. La tendencia a resignarse ante el «´imperativo sistémico' impuesto por el mercado mundial»[9] ha sido, por el contrario, la característica dominante en la izquierda institucional hasta el punto de confundirse, como en el caso de Blair, con la «nueva derecha»; o, simplemente, de desnaturalizarse mediante involuciones como la vivida por Joschka Fischer, cuyo apoyo a la presencia de tropas alemanas en Afganistán o la defensa de una Constitución Europea respetuosa de la OTAN entran en contradicción con los orígenes mismos de los Verdes.

La izquierda alternativa y anticapitalista —adjetivo éste último que ha vuelto a ponerse de actualidad gracias a los movimientos de resistencia global— no puede tener ya como referente ni a una u otra variante procedente del «eurocomunismo» italiano —presa de una fórmula de «partido de lucha y de gobierno» que termina siempre priorizando lo segundo— ni un «paradigma verde» que relegue a un segundo plano la cuestión social —para acabar, como ha ocurrido con Cohn-Bendit, en un eco-liberalismo— o su pacifismo original; ni tampoco una opción basada en la autoafirmación en torno a una identidad-refugio «comunista», ya sea meramente nostálgica —como en el PC Portugués— o trotskista dogmática —como es el caso de *Lutte Ouvrière* en Francia. Todo ello no debería significar ni la renuncia a seguir articulando lo rojo, lo verde y lo violeta ni, en fin, dar por perdida la tarea de continuar reivindicando el sentido original y emancipatorio de la palabra «comunismo» frente a sus perversiones posteriores; al igual que tampoco las diferencias con las izquierdas nacionalistas deben llevar a debilitar el perfil

7. «Balance y perspectivas del neoliberalismo», *Viento Sur*, nº 26, mayo 1996.
8. «A propósito del eurocomunismo», *Materiales*, nº 6, noviembre-diciembre 1977.
9. Elmar Altvater y Birgit Mahnkopf, *Las limitaciones de la globalización*, México, Siglo XXI, 2002, pág. 353.

plurinacional y autodeterminista —y, a la vez, federalista y multicultural— que ha de tener la izquierda necesaria.

Pero todo esto no basta: se nos exige que lo que decimos lo hagamos y que los medios justifiquen los fines que propugnamos. Para ello hace falta ensayar nuevos experimentos que ayuden a «resistir, reflexionar, reorientar y reagruparse» (como se sugería ya en el Manifiesto eco-socialista de 1990) y mostrar coherencia entre los programas, los discursos y la práctica cotidiana en todos los ámbitos, con el fin de forjar una nueva identidad-proyecto común, a sabiendas de que por ahora nos puede unir fundamentalmente el rechazo a lo que no queremos. Todo esto habrá de hacerse dentro de IU —salvo que acabe en una implosión de consecuencias imprevisibles todavía— pero también fuera de ella, participando en diferentes agrupamientos existentes en nuestra diversidad realidad plurinacional y dialogando y trabajando junto con colectivos vinculados a las nuevas generaciones que busquen también construir otra izquierda diferente de las realmente existentes. Porque si alguna enseñanza se ha podido sacar de todo este tiempo es que no hay atajos electoralistas en la necesaria reconstrucción de un «capital social alternativo», en el despliegue de una estrategia contrahegemónica, más cultural que directamente política, y en la lucha por «reformas no reformistas» que, si queremos alcanzarlas y hacerlas irreversibles, no podrán eludir la confrontación con los poderes instituidos.

Esto último tiene especial actualidad a la luz del debate sobre la nueva Constitución Europea. La timidez con que la mayoría de la izquierda institucional está abordando ese debate contrasta con la gravedad de lo que está en juego: porque si se aprueba ese documento, se estará cerrando la puerta a toda posibilidad de una política de izquierdas desde cualquiera de los gobiernos de la UE. Es el momento, por tanto, de que el movimiento «altereuropeísta» —y, con y dentro de él, la izquierda anticapitalista— propugne un rechazo ciudadano de ese proyecto, provoque una crisis del actual «modelo» de UE y siente las bases para un nuevo poder constituyente a escala europea, dispuesto a pagar la deuda histórica contraída con el «Sur» y a hacer las paces con el planeta Tierra.

Globalización, reformas laborales y conflictividad laboral

Emili Cortavitarte Carral

Del llamado «Estado del bienestar» al neoliberalismo

Una de las características fundamentales de la globalización económica neoliberal es la ruptura en Europa con el modelo de acuerdo social, posterior a la II Guerra Mundial, conocido como «Estado del bienestar». Desde mediados de los setenta este modelo ha sido socavado por un nuevo liberalismo. El pensamiento único sitúa la supremacía de la economía sobre la política,[1] plantea que los mercados financieros orienten la economía, que el mercado es el estado natural de la sociedad,[2] que la competitividad dinamiza y moderniza las empresas y la sociedad, que la liberalización y la mundialización de la economía es positiva para el comercio pero también para el conjunto de la sociedad, que la división internacional del trabajo rebaja los costes salariales, los precios de los productos y las reivindicaciones sindicales, etc. Estos y otros argumentos semejantes se repiten hasta la saciedad, en la certeza de que en nuestras sociedades mediáticas *«repetición equivale a demostración»*.[3] En nuestro ámbito geopolítico más próximo todas estas transformaciones han venido acompañadas por una serie de objetivos macroeconómicos, dirigidos por los grandes grupos industriales y financieros y con el papel subsidiario y

1. *«El pensamiento único es la consagración del economicismo subyacente en la ideologia neocapitalista».* Manuel Vázquez Montalbán, *Geopolítica del caos.* Varios autores, Madrid, Temas de Debate, 1999.
2. *«La democracia no es el estado natural de la sociedad. El mercado sí»* .Alain Minc, *Cambio 16*, 16 de diciembre de 1994.
3. Ignacio Ramonet, *Pensamiento crítico vs. pensamiento único.* Varios autores, Madrid, Temas de Debate, 1998.

gestor de los gobiernos europeos (no importa cuál sea su color ideológico), a golpe de tratado: el de Roma (1957), el Acta Única (1986), el de Maastricht (1992) y el de Ámsterdam (1997). Además, han contribuido, la nueva estructuración del sistema productivo (el paso de la gran fábrica fordista a la fábrica difusa), la división internacional del trabajo y la primacía de los servicios y las finanzas.

En el estado español, el proceso neoliberal se ha ido conformando, entre otros elementos, con las sucesivas reformas del marco legal socio-laboral. Muchas veces estas reformas han sido impuestas mediante leyes o decretos. Pero, en no pocas ocasiones la fórmula ha sido el pacto social entre gobierno, patronales y sindicatos mayoritarios.

De las luchas obreras a los pactos sociales de los setenta

Desde mediados de los años sesenta se produce la progresión del movimiento obrero tanto desde el punto de vista organizativo (formación de Comisiones Obreras, Unión Sindical Obrera, Plataformas Anticapitalistas,...) como desde el reivindicativo (la media de jornadas de huelga fue de 250.000 en el período 1964-69, de 850.000 en el período 1970-72 y de 1.550.000 entre 1973 y 1975).[4]

Aunque es fundamentalmente entre 1976 y 1978 (muerte del *Caudillo*, ¿reforma o ruptura con el sistema franquista?, reconstrucción de los sindicatos históricos: UGT, CNT, ELA,...) cuando el movimiento obrero, junto al ciudadano, protagoniza una etapa de fuerte conflictividad social (13.200.000 jornadas de huelga, de media anual) que demanda un cambio de rumbo a favor de los trabajadores. En todo el mundo industrializado, sin embargo, el cambio tomará una rumbo distinto: a favor del capital.[5] Esta *anomalía* sería rápidamente corregida mediante un pacto social, una ley laboral y mucha represión.

Los Pactos de la Moncloa

Los Pactos de la Moncloa fueron firmados, en octubre del 1977, por todos los partidos con representación parlamentaria y contaron con el apoyo decidido

4. Agustín Morán, *Auge y crisis de los grandes acuerdos de los 80. De la Clase obrera al mercado de trabajo. Cuaderno de relaciones Laborales* nº 9. Madrid, 1996.
5. Pepe García Rey, *Informe sobre la precariedad laboral*, Confederación General del Trabajo, Madrid, 1998, págs. 10-11.

de las direcciones de UGT y CCOO[6] (y con la oposición frontal de la CNT y algunos sectores de CCOO). Desde el punto de vista laboral, los aspectos más relevantes fueron: las medidas de contención de los salarios (se sitúan las subidas salariales del 78 entre el 20 y el 22%) y de su vinculación al IPC previsto (el 22% en el caso del año 78, aunque en el año anterior fue del 26,4%), frente a la tradición obrera de recuperar poder adquisitivo con aumentos iguales o superiores al índice de precios del año anterior; la posibilidad de despido del 5% de la plantilla en caso de subidas salariales que superasen el 20,5%, la posibilidad de contrataciones eventuales y la necesidad de ajustes de plantillas en las empresas en crisis.[7]

Los pactos de la Moncloa abren paso a las reconversiones de sectores industriales, a los expedientes de crisis, al control de los salarios, a la reducción de la cobertura de desempleo y a las normas para fomentar los tipos de contratación eventuales.[8] Por contra, CCOO y UGT se aseguraban su protagonismo en las negociaciones colectivas (puesto en cuestión por la presión obrera y las prácticas asamblearias) y su participación en el INEM y en las empresas públicas.

El Estatuto de los Trabajadores

Esta ley publicada en marzo del ochenta se presentó también como un triunfo de la democracia sobre el corporativismo y el paternalismo, propio de las relaciones laborales en la etapa franquista, y como la introducción de una reglamentación democrática en el mercado de trabajo.

El Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET) introduce cambios fundamentales respecto de la legislación laboral anterior. Junto al reconocimiento de la negociación colectiva entre las contrapartes (empresarios y representantes de los trabajadores), se potencia la contratación eventual con carácter coyuntural (temporal, en prácticas, en formación) y la posibilidad de prórrogas. Además, se posibilita el despido con indemnización aunque haya sido declarado improcedente[9] y se abarata y facilita en las pequeñas empresas (que hacían frente a la globalización y la apertura de mercados con el cierre o una

6. En el Consejo Confederal de CCOO se valoró que hacían pagar la crisis a los poderosos, contribuían a consolidar la democracia y eran necesarios para sanear la economía.
7. Agustín Morán, *op. cit.*
8. Pepe García Rey, *op. cit.*
9. El artículo 35 de la Ley 17/76 de Relaciones Laborales establecía el derecho del trabajador/a a la readmisión obligada para el empresario, en los casos de despido improcedente y nulo. Desde la aprobación del E.T. este derecho quedó circunscrito únicamente a los despidos nulos.

profunda desregulación laboral y reestructuración productiva) al ser subvencionados por el Fondo de Garantía Salarial.

El Estatuto deja en las manos de los patronos la competencia para llevar a cabo expedientes de crisis, regulaciones y reconversiones. A pesar de la propaganda sobre la democratización del mundo del trabajo, la realidad de los últimos años setenta no fue otra que el poder exclusivo de la patronal en materia de organización del trabajo, el desmantelamiento de ciertos sectores industriales, el inicio de la desregulación laboral y la pérdida de rentas de las clases populares. A nivel sindical, el ET mantiene la ambigüedad del nuevo modelo sindical entre los comités de empresa (de los que son partidarios CCOO) y las secciones sindicales (UGT y CNT).

El cambio de actitud de ciertas direcciones sindicales (de la combatividad al pacto y a la justificación, en clave democrática, de medidas antisociales) tuvo una relación directa con la pérdida de afiliación y credibilidad de las organizaciones sindicales tras una primera etapa de eclosión y afiliación masiva.

Los acuerdos interconfederales de los ochenta

Entre 1980 y 1986 se producen cuatro acuerdos interconfederales entre organizaciones empresariales y sindicales, que algunos casos serán refrendados o desarrollados por los respectivos gobiernos mediante leyes o decretos.

El Acuerdo Marco Interconfederal (en adelante, AMI) se firmó el 3 de enero de 1980 entre la UGT y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE),[10] al que se adhirió con posterioridad la USO. El AMI es de los mejores ejemplos de uno de los objetivos de los primeros acuerdos consistente en dotar a determinados sindicatos, con escasa implantación de la capacidad para decidir en nombre del conjunto de los trabajadores y trabajadoras.[11] Las contrapartidas sindicales fueron: el derecho a formar secciones sindicales en empresas de más de 250 trabajadores/as con una representatividad superior al 15%, el cobro de las cuotas sindicales por nómina y el derecho a excedencia laboral para los cargos sindicales.

10. La CEOE y la UGT ya habían firmado, en el verano del 79, el Acuerdo Básico Interconfederal
11. *«Si no firmamos el acuerdo, nos cargamos a la UGT y perdemos un posible aliado en el bando sindical. UGT no resistirá la lucha convenio a convenio, porque tiene menos organización y virulencia que CCOO»*, declaraciones de Ferrer Salat, presidente de la CEOE, *Cinco Días*, el 18 de diciembre de 1979.

En el mismo año, al AMI y al ET se les añadió la Ley Básica de Empleo, promulgada por el gobierno de la Unión de Centro Democrático (UCD), que vinculaba las prestaciones por desempleo al período de cotización de los parados/as.[12]

El siguiente acuerdo, el Acuerdo Nacional de Empleo (ANE) fue firmado también por CCOO y el Gobierno central. Se le conoce como el *pacto del miedo* porque se produjo pocos meses después del golpe de Estado del 23-F. Nuevamente las direcciones sindicales de UGT y CCOO aparecían vinculadas a la *consolidación* de la democracia.

El ANE estableció un margen de incrementos salariales entre el 9 y el 11%. El IPC a finales de año fue del 14%: asalariados/as, pensionistas y parados/as volvieron a perder poder adquisitivo. Por contra, los sindicatos y patronales firmantes se incorporaron institucionalmente a la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Empleo, la Junta Superior de Precios, el INSERSO, el Instituto Nacional de Salud, etc.

A principios de 1983, las mismas organizaciones sindicales y patronales firmaron el Acuerdo Interconfederal (AI). Un año y medio más tarde, el gobierno socialista[13] modificó el artículo 15 del ET y desarrolló tal modificación con tres decretos sobre nuevas modalidades de contratación temporal, la ampliación de los contratos a tiempo parcial y variaciones en los contratos en formación y de prácticas. Se trataba de nuevos pasos en el camino inequívoco de la flexibilización de las relaciones labores y en especial en la ampliación de la oferta de contratos precarios.

No obstante, en el otoño de 1984, la UGT, la CEOE y la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa (CEPYME) firmaron el Acuerdo Económico y Social (AES), con vigencia para dos años. El AES constaba de dos partes: los Acuerdos Tripartitos que afectaban también al Gobierno central y los Acuerdos Interconfederales que competían únicamente a las patronales y a la UGT. Del primer apartado caben destacar: desgravaciones fiscales para las empresas por inversión y por creación de empleo, la adaptación de la legislación laboral española a la comunitaria europea, conciertos para la realización de obras y servicios públicos (aunque el INEM también

12. *«La cobertura de las prestaciones por desempleo pasó del 46,4% del total de parados/as en 1980 al 26,3% en 1984, a pesar de que en este período el número de parados casi se duplicó, pasando de 1.482.100 a 2.768.500»*, Agustín Morán , *op. cit.*

13. El Partido Socialista Obrero Español había ganado, con mayoría absoluta, las elecciones de 1982.

podía celebrar convenios de colaboración con empresas privadas, mediante un Acuerdo Marco con la CEOE), un Fondo de Solidaridad[14] destinado a la formación y orientación profesional, la creación de una Comisión de Seguimiento de la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo,[15] la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social para *«disminuir su participación en los costes laborales de las empresas»* y para *«favorecer el empleo»*, la creación del Consejo General de la Formación Profesional, la programación de los cursos y las actividades de formación ocupacional del INEM *«en contacto con las Organizaciones Empresariales y Sindicales afectadas»* o, en fin, la ampliación de la participación institucional las organizaciones firmantes (que llegan hasta el Consejo Asesor del Presidente del Gobierno).

En el primer año de vigencia del AES, el gobierno socialista promovió una nueva ley que recortaba los derechos sociales, en este caso mediante el endurecimiento de las condiciones para acceder a las pensiones de jubilación.[16] El 20 de junio de 1995, todos los sindicatos de clase, excepto la UGT, convocaron una huelga general contra la reforma de las pensiones que fue ampliamente secundada, pero incapaz de frenar la ley. La pérdida creciente de afiliación, la desconfianza frente a unos *sindicatos mayoritarios* (a los que se suponía más preocupados de su participación institucional y de sus economías que de los intereses generales de los trabajadores) y una situación general[17] nada positiva llevan a un cambio de posición de las direcciones de UGT y CCOO[18] que no llegan a acuerdo con el gobierno para firmar un nuevo pacto en el 87.

No obstante, el Gobierno de González presentó, en mayo de 1988, un Plan de Empleo Juvenil que planteaba un nuevo tipo de contrato con el salario mínimo interprofesional (SMI) para los mayores de 18 años y el 60% del SMI para los menores de esta edad, subvenciones y exenciones fiscales y de Seguridad Social para los empresarios contratantes y, además, no era necesario formalizar dichos contratos en el INEM. Todos los sindicatos de clase unie-

14. Este Fondo de Solidaridad se dotaba con 20.000 millones de los Presupuestos Generales del Estado y unos 40.000 provenientes de una nueva cotización por Formación Profesional, repartida de modo que el 0,28% era a cargo de la empresa y el 0,28% a cargo del trabajador/a.
15. El porcentaje era cercano al 29%, es decir sólo 29 de cada 100 parados y paradas recibía alguna prestación económica pública. Los objetivos se cifran en el 43% en 1985 y el 48% en 1986).
16. Ley 26/1985 de Reforma de las Pensiones.
17. Aumento del paro, de la eventualidad, de la contratación en precario, de los despidos individuales y colectivos y reducción de los gastos y prestaciones sociales y de las rentas del trabajo.
18. CCOO había aprobado en su III Congreso Confederal, de junio de 1984, que su estrategia general preferente serían los acuerdos generales.

ron sus fuerzas para convocar la huelga general del 14 de diciembre de 1988 que recibió un apoyo multitudinario, frenó la medida gubernamental y supuso una cierta recuperación del movimiento obrero organizado.

Los años noventa: aplicación de las directrices de Maastricht y de la Unión Económica y Monetaria

La UE recomendaba disminuir el gasto social y el gobierno socialista decidió reducir su nómina de parados/as por la vía de un decreto[19] que elevó el período mínimo de cotización con derecho a prestación (de 6 meses a un año) y rebajó la cuantía de la prestación. La reacción sindical se debatió entre la tibieza de la convocatoria de una huelga general de 4 horas, por parte de CCOO y UGT, y la firmeza de la convocatoria de 24 horas por parte dela CGT,[20] el 28 de mayo de 1992. En esta ocasión, el gobierno socialista mantuvo y puso en práctica su medida.

La contrarreforma laboral de 1994

Más tarde, la reforma laboral de 1994,[21] introdujo profundos cambios en la contratación, en las condiciones de trabajo, en la suspensión y extinción del contrato, en la negociación colectiva y en la protección por desempleo.[22] Para el profesor Alarcón, catedrático de Derecho del Trabajo, la llamada *Contrarreforma Laboral* consistía en la flexibilización de los tres momentos de la relación laboral: la contratación, la permanencia y el despido.[23]

En la contratación: se legalizaron las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) como agencias privadas de colocación *sin ánimo de lucro*, aunque por sus servicios pueden quedarse una parte del coste salarial de sus empleados/as, que cobrarán menos que los trabajadores/as del sector o empresa y se verán conminados a aceptar horas extras (en muchas ocasiones sin remuneración). Se potenciaron los contratos a tiempo parcial (especialmente dedicado a las

19. Real Decreto 1/1992, de 3 de abril, de Medidas Urgentes sobre Fomento del Empleo y Protección por Desempleo.
20. La Confederación General del Trabajo, nombre que recibe a partir de 1989 la CNT renovadora (uno de los sectores de la CNT, que sufrió una profunda crisis y división interna a finales de los 70).
21. Leyes 10/94 y 11/94.
22. *Desregulación del mercado de trabajo y pacto social* (julio 1993) y *Contrarreforma laboral* (febrero 1994), Centre d'Estudis Sòcio-Laborals, CGT de Catalunya.
23. Manuel Alarcón Caracuel, *Reforma del Esdatuto de los Trabajadores*, XXII Conferencia de Delegados y Delegadas de la CGT de Catalunya (junio de 1994), Barcelona.

mujeres) y de aprendizaje (para los jóvenes, sin garantía de formación ni de estabilidad y con un sueldo igual al 70% del Salario Mínimo Interprofesional) mientras se debilitaba la contratación indefinida.

En la permanencia: mediante la absoluta movilidad geográfica (la negativa a la orden empresarial se saldaba con una indemnización de 20 días por año trabajado) y funcional (en la negociación colectiva se establece la categoría, grupo profesional y remuneración o las polivalencias) y la supresión de la autorización administrativa para las modificaciones sustanciales de los contratos, que quedan también a discreción empresarial y posterior revisión judicial si se denuncia.

En la salida: con dos nuevas causas de despido (organizativas y productivas) que reforzaban el carácter unilateral de las decisiones empresariales, sólo se consideraban despidos colectivos aquellos que afectaban a un determinado número de trabajadores[24] en un período de 90 días, se modificaba la normativa del despido disciplinario (sin carta de despido) que pasa a ser considerado improcedente y, por tanto, sujeto únicamente a indemnización.

No obstante, la *Contrarreforma* contenía un guiño a las organizaciones sindicales más representativas y no era otro que la reforma de las elecciones sindicales. CCOO y UGT habían pactado un proyecto que intentaron tramitar al margen de la reforma laboral, pero el gobierno socialista lo incorporó.[25] Los objetivos eran dos: consolidar la forma de representatividad que tan bien les había funcionado y evitar los enfrentamientos entre ambas organizaciones de ámbito estatal. Para ello, se da prioridad a las promociones de elecciones sindicales de las organizaciones más representativas (control de la promoción de elecciones), se prorrogan los mandatos de los delegados/as si no hay nueva convocatoria, la administración no da a conocer resultados generales (pacto de silencio y de amistad), etc.

Las organizaciones sindicales de clase convocaron una nueva huelga general el 20 de junio de 1994 contra el gobierno socialista. A pesar del éxito de la convocatoria, UGT y CCOO no dieron continuidad a las movilizaciones y propusieron parar la reforma convenio a convenio, lo cual se mostró ineficaz.

---

24. 10 trabajadores/as en empresas de menos de 100, el 10% en empresas entre 100 y 300 y el 30% en empresas de 300 o más trabajadores/as; es decir, 89 despedidos en una empresa de 300 trabajadores/as no se considera despido colectivo sino objetivo (sic).
25. Jaume González i Calvet, *Sobre la reforma de las Elecciones Sindicales*, XXII Conferencia de Delegados y Delegadas de la CGT de Catalunya (junio de 1994), Barcelona.

El Pacto de Toledo y el sistema de Seguridad Social

El denominado Pacto de Toledo fue el resultado del consenso de todas las fuerzas políticas parlamentarias estatales y de CCOO y UGT, en 1994, respecto de la inviabilidad de la Seguridad Social y la necesidad de una serie de reformas estructurales en su sistema. En octubre de 1996, el nuevo gobierno central del Partido Popular firmó un acuerdo[26] con UGT y CCOO que fue la base de la Ley de Derechos de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, aprobada por el Parlamento en junio del 97. Los puntos más negativos de la Ley y de sus bases (pacto de Toledo) son el claro cuestionamiento de los principios en los que se basaba la Seguridad Social en España (la universalidad del sistema y la garantía de cobertura asistencial y de pensiones) y el nuevo trasvase de rentas que implica: mientras se aumentan los beneficios empresariales por la vía de la reducción de la cuota empresarial a la SS, disminuyen las rentas de los trabajadores y trabajadoras debido a la reducción efectiva de las pensiones.[27] Se amplía el período de cálculo de la base a los últimos 15 años, se reducen los porcentajes al aplicar la base reguladora en función de los años cotizados y se penalizan las jubilaciones anticipadas voluntarias.

Se realiza también una valoración positiva de los sistemas complementarios, es decir, de los sistemas privados de pensiones, mediante bonificaciones fiscales. Se facilita y amplifica así la estrategia del capital financiero (bancos y aseguradoras) para que los trabajadores/as depositen sus ahorros en fondos de pensiones que sirven para la especulación monetaria o los suculentos negocios con las deudas públicas.[28]

La nueva reforma laboral de 1997

En vísperas del Primero de mayo de 1997, CCOO, UGT, CEOE y CEPYME firmaron el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo, que fue beatificado por el gobierno del PP mediante Reales Decreto-Ley. Tres años después de la *Contrarreforma Laboral* y olvidados los cantos de sirena sobre la oposición frontal , las direcciones de los sindicatos más representativos coinciden con las patronales en la preocupación por los altos índices de paro (tres millones y medio de personas) y de eventualidad y rotatividad (otros

---

26. Acuerdo sobre Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social.
27. *La CGT ante la reforma de las pensiones*, CGT, Madrid, 1997.
28. *«La segunda circunstancia que justifica la avanzadilla neoliberal contra el sistema de pensiones públicas es que este comporta la gestión de eneormes massa de recursos financieros»*, Juan Torres López, *La estrategia de reforma dels sitema público de pensiones: el penúltimo botín* en Juan Torres López (coord.) *Pensiones públicas: ¿y mañana qué?*. Ariel. Barcelona, 1996.

tres millones de eventuales) y sin poner en solfa ninguno de los criterios de competitividad y flexibilidad que habían dado lugar a aquella situación social y laboral aberrante, aceptan el chantaje empresarial de que se pueden producir más contratos siempre y cuando el despido sea fácil y barato.

El contrato de fomento de la contratación indefinida daba satisfacción a las grandes empresas que necesitaban, por la complejidad de la producción, mayor continuidad que la renovación de contratos hasta el tercer o cuarto año, pero con unos trabajadores y trabajadoras fijos/as con una indemnización por despido improcedentes sustancialmente más barata (de 33 días por año en vez de 45). Sin embargo, se mantuvieron las ETTs y toda la retahíla de contratos precarios. También se abarató el despido libre para los trabajadores/as con contratos indefinidos anteriores a mayo del 97. Esta vez y para no perder la costumbre, también existieron compensaciones. Dos de las terceras partes del acuerdo están dedicadas a consolidar el poder contractual de las direcciones confederales y sectoriales de CCOO y UGT en la negociación colectiva. Se aseguraran la representatividad y lo que conlleva (políticas sectoriales, subvenciones, comisiones de seguimientos, consejos de administración,...).[29]

En ningún otro estado de la UE se llegó tan lejos en la aceptación y contribución a las políticas de ajuste para cumplir con los criterios de Maastricht y para secundar las posiciones neoliberales. En ningún otro estado se dieron en esa época acuerdos generales entre sindicatos y patronales ni entre sindicatos, patronales y gobiernos. El reparto de papeles fue tan obvio que el vicepresidente Rato felicitó a la patronal por la consecución de la mayoría de sus objetivos y a los sindicatos firmantes por la *responsabilidad* demostrada.

El siglo XXI: entre pactos, reformas impuestas y huelga general

Nueva reforma laboral

En marzo de 2001, el gobierno del PP, mediante Real Decreto-Ley, puso en marcha la consabida y socorrida reforma del mercado laboral de cada año. Los objetivos nuevamente tenían un *alto contenido social*: aumentar la contratación indefinida, el trabajo a tiempo parcial y la inserción de las mujeres y frenar el trabajo temporal y reducir el paro. Después de un año de negociaciones, los grandes sindicatos y las patronales no habían llegado a ningún acuerdo y la *responsabilidad* del gobierno central y de sus aliados de Convergencia i Unió y de Coalición Canaria, en el trámite parlamentario entre junio y julio, nos regalaron una nueva muestra de retroceso sociolaboral.

---

29. *Posición de la CGT ante la reforma laboral de 1997*, Madrid, 1997.

La reforma afectaba fundamentalmente a determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores, abaratando el despido (estableciendo su tope para los nuevos contratos estables en 33 días por año y un máximo de 24 mensualidades, que anteriormente era de 45 días y 42 mensualidades) y ampliando los sectores sociales a los que se pueden aplicar determinados contratos temporales y en formación (minusválidos, parados de más de 3 años e inmigrantes con un sueldo de 35.000 pesetas al mes) También, amplia las bonificaciones a los empresarios por la transformación de contratos eventuales en fijos e incrementa la cuota patronal en los contratos temporales, ¡de duración inferior a los 7 días!

Como la mayoría de las actuaciones en materia de reforma laboral, ya desde la época de gobiernos socialistas, ésta incide en la misma dirección: precarizar y desregular el trabajo remunerado.

Nuevo pacto de pensiones

Firmado por el gobierno, CCOO y CEOE, en su preámbulo establece como objetivo la *consolidación* del sistema de Seguridad Social en el marco establecido por el Pacto de Toledo. En realidad, y siguiendo las líneas directrices del citado pacto, lo que se acordó va en la dirección de desmontar el principio de solidaridad del sistema de reparto en el que se basaba el sistema público de pensiones para introducir un sistema de base financiera o un sistema mixto.

El acuerdo seguía dando largas para que el Estado se hiciera cargo de las pensiones no contributivas (700.000 millones de pesetas anuales, en la actualidad) y se aplazaba al 2004 la constitución del Fondo de reserva que asegure la viabilidad del sistema público. Otros aspectos negativos del pacto de pensiones eran: el compromiso de negociación, en el 2003, del período de cálculo de las pensiones, que tras el Pacto de Toledo se situó en los últimos 15 años, y que el gobierno y la patronal pretenden ampliar a toda la vida laboral con la consiguiente reducción de las pensiones; el vergonzoso compromiso sin fecha de aumentar las pensiones de viudedad del 45% al 52% de la base reguladora; la jubilación anticipada queda en manos de los empresarios y con amplias posibilidades de fraude; y no se aseguran los mecanismos para una pensión digna a los mayores de 52 años despedidos individualmente.

Nuevo Decretazo y Huelga General del 20-J de 2002

En abril de 2002, el gobierno presentó un *nuevo modelo* de prestaciones por desempleo. Las manifestaciones del 1 de mayo fueron las más numerosas de los últimos años y la convocatoria de huelga general un clamor unánime. La actitud de Aznar fue de absoluta prepotencia y el 25 de mayo, con amplia cobertura de los medios y publicitándose como el estadista europeo que defi-

nitivamente metía mano a los vagos disfrazados de parados y ponía coto al derroche de dinero público, procedió por la vía del decreto (Real decreto-Ley 5/2002 y Real decreto 459/2002) a la puesta en marcha de un nuevo retroceso en los derechos sociales de las clases populares.

En esencia, el *decretazo* suponía: la obligación de aceptar cualquier puesto de trabajo ofrecido bajo la amenaza de perder los ingresos de la prestación por desempleo, la imposibilidad de oponerse a ofertas de trabajo situadas a 30 Km. de distancia o 2 horas de viaje del domicilio, la supresión de la obligación del empresario de pagar los salarios de tramitación y consiguiente abaratamiento del despido en los casos de despido improcedente, la limitación de la protección por desempleo para los trabajadores fijos discontinuos y los emigrantes retornados, la posibilidad de ahorrar al empresario una parte del salario —que se cobraría del subsidio de desempleo— en determinados contratos a parados, la potenciación de las fórmulas más precarias de contratación y la eliminación a corto plazo del subsidio agrario (PER).

El 20 de junio, las confederaciones sindicales respondieron con la convocatoria de una huelga general (la primera después de seis años de gobierno popular) y con masivas manifestaciones en las principales ciudades del estado.

Tras unos primeros escarceos, amagando con mantenerse en sus trece, el gobierno procedió primero a una remodelación ministerial y después a un cambio substantivo en el lenguaje y los modos. El 5 de octubre, nuevas concentraciones de masas en Madrid (CCOO y UGT, y CGT) mantenían el pulso por la retirada del *decretazo*. Zaplana, nuevo ministro de Trabajo, ofreció diálogo social a Méndez y Fidalgo y dio algunas explicaciones a Cuevas respecto a la marcha atrás de la reforma.

El *Decretazo*, pues, fue modificado (Ley 45/2002 «de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad») pero casi ninguno de los aspectos ha vuelto a su situación anterior. Se trató más bien de una mini-reforma del decreto que de una retirada. Algunas de las evidencias en este sentido son:

– En cuanto al derecho a la prestación contributiva por desempleo: antes del decreto, encontrarse en situación legal de desempleo; con la Ley 45, no se modifica el decreto y además de la situación legal se exige *disponibilidad* para buscar activamente empleo y suscribir un *compromiso de actividad*.
– En cuanto al subsidio por desempleo y trabajo por cuenta ajena: antes del decreto, eran incompatibles; después de la Ley 45, son compatibles aunque debe tener carácter *voluntario*.

– En referencia a los trabajadores fijos discontinuos: antes del decreto, percibían la prestación por desempleo en los períodos de inactividad; con la Ley 45, son excluidos de la percepción en los períodos de inactividad.
– En referencia a las indemnizaciones por despido y solicitud de subsidio de paro: antes del decreto, las indemnizaciones no computaban; con la Ley 45, tampoco y esta es la única modificación substancial entre el *decretazo* y la reciente Ley.
– En lo referente a los salarios de tramitación: antes del decreto, el empresario debía pagar los salarios desde la fecha del despido hasta la de la sentencia si era declarado improcedente; con la Ley 45, el empresario sólo pagará los salarios de tramitación si no reconoce la improcedencia del despido y no consigna, en 2 días, en el juzgado la indemnización.
– Respecto a la colocación adecuada: antes del decreto, se tenían en cuenta condiciones personales y familiares y se vinculaba a la formación y el empleo anterior; después de la Ley 45, se reduce la posibilidad de desplazamiento del decreto (30 Km. o 2 horas) a que no supere el 25% de la jornada, se mantiene como adecuada cualquier ocupación aunque se tendrán en cuenta las condiciones personales y las del mercado laboral local (sic)

El principal escollo para llevar a buen puerto la paz social era el Plan de Empleo Rural (PER). Ante la negativa del gobierno a retirar los planteamientos del *decretazo,* se había convocado una huelga general en el campo en Andalucía y Extremadura para el 20 de febrero de 2003. El ministro Zaplana mantuvo conversaciones con los presidentes de las comunidades autónomas afectadas y con los secretarios generales de UGT y CCOO y todo parece indicar que como en el conjunto del *decretazo* se admitirá un nuevo redactado «menos bueno que la situación anterior pero menos malo que el decreto».

Los resultados: trasvase de rentas, desregulación laboral, paro, eventualidad, precariedad laboral, exclusión social

El principal resultado de este proceso de 20 años es la triple ruptura o fragmentación de las clases populares respecto de la riqueza, del trabajo y de generación y género.

Rentas del trabajo

Las clases populares no solamente han perdido riqueza por medio de los salarios directos (contención salarial), sino también por el continuo recorte de las prestaciones sociales, las sucesivas reformas del impuesto de socie-

dades (que reducen los ingresos del estado y aumentan los beneficios empresariales y financieros), y el aumento de los impuestos indirectos y al consumo.

El Salario Mínimo de Inserción (SMI) es de 451'2 euros mensuales. La Carta Social Europea plantea que el SMI no sea inferior al 60% de la media salarial. En el estado español el porcentaje es de 36'9%. El 54% de los jubilados cobra menos que el SMI. Los trabajadores en activo, menos cualificados o más precarios, tienen como base salarial el SMI.

Paro y precariedad

En 1977 el paro estaba situado en el 5,3%, en 1994 en el 24,3% y en 1998 en el 19,2%. En el año 2002 se aplicó una nueva fórmula para elaborar la Encuesta de Población Activa (EPA) que modificó sustancialmente las cifras del paro, dado que muchas personas paradas pasaron a considerarse «inactivas». Con todo, la tasa de paro española (12%) se situó por delante de la media europea (7'8%).

En el estado español se está dando un tipo de contratación eminentemente precaria y temporal. Las tasas de temporalidad laboral son las más altas de la Unión Europea, el 30'7% en el caso de los hombres y el 34'6% en el caso de las mujeres. Es decir, se duplica la media europea.[30] En el año 2002, de más de un millón de contratos registrados, sólo el 7'73% fueron fijos o indefinidos. El 60% de los contratos tenían una duración inferior a seis meses, el 35% se movían entre los seis meses y el año y el 5% entre un año y tres años. La fragmentación de la clase trabajadora respecto del empleo es evidente: con contrato indefinido antiguo, con nuevo contrato indefinido, con ocupación eventual directa, con ocupación eventual a través de una ETT (1 de cada 5), con trabajo remunerado a tiempo parcial (voluntario o involuntario), con una relación mercantil (autónomos, *free lance*), parados, etcétera.

Mujeres

El 75% del trabajo remunerado a tiempo parcial es femenino. También es femenino el trabajo reproductivo considerado en las estadísticas como *inactividad* (pensionistas por invalidez, jubilación, viudedad,...). Prácticamente 6 millones de mujeres se dedican a la labores del hogar, al cuidado de los mayores, de los enfermos, etc. Mujer, menor de 25 años, que trabaja en empresas de menos de 6 trabajadoras y cambia frecuentemente de trabajo es el

30. *Informe sobre la precariedad laboral en Europa*, Eurostat, oficina estadística de la UE.

retrato robot del tipo de trabajador/a de la economía sumergida, que supone el 20% del PIB.

Las mujeres se ven sometidas a una triple marginación: el no reconocimiento del trabajo reproductivo ni desde el punto de vista social, ni desde el punto de vista el económico, ni desde punto de vista retributivo. Su limitación se extiende a todos esos campos: limitada a empleos menos cualificados, con discriminación salarial, horaria y profesional; y considerándose su acceso al mundo del trabajo como temporal o de complementariedad familiar.

Jóvenes

En las estadísticas, en el único apartado en que hombres y mujeres están casi igualados es en el grupo de parados sin experiencia menores de 20 años. Los jóvenes, no importa el sexo, alcanzan cuotas de paro superiores al 40%, son la carne de cañón de las ETT, de los trabajos relacionados con los servicios personales. Como ya denunció James Petras, en su informe sociológico de 1995,[31] la mano de obra fija o con mayor estabilidad laboral son los *padres* que entraron a trabajar en los años 60 y principios de los 70, coincidiendo con la industrialización del final de franquismo y con la vigencia del modelo taylorista-fordista. Sus *hijos* e *hijas* se encuentran inmersos mayoritariamente en las filas de la eventualidad y se han incorporado el mundo del trabajo a finales de los ochenta y principios de los noventa coincidiendo con la aplicación en gran escala del modelo neoliberal.

El sindicalismo en el Estado español: entre la cogestión del sistema y las alternativas transformadoras

Desde diferentes ámbitos se ha fomentado las ideas no contrapuestas que las clases populares como tal no existen (vivimos en el mejor de los mundos, en el cual las diferencias vienen marcadas por la capacidad y voluntad de aprovechar las oportunidades) y, por consiguiente, el movimiento obrero organizado no tiene ningún sentido, los sindicatos son reliquias del pasado y únicamente sirven para plantear trabas a la modernización de los sistemas de trabajo y de las relaciones laborales. De este tipo de descalificaciones únicamente se salvan aquellas organizaciones sindicales que aceptan dar carta de naturaleza, mediante la utilización de su prestigio, a las medidas laborales y a las normas sociales y económicas implantadas por el neoliberalismo..

31. James Petras, *Informe*, revista *Ajoblanco*, Barcelona, 1995.

En el Estado español, las direcciones sindicales de CCOO y UGT han entrado en la dinámica de aceptación tácita del pensamiento único y de las estrategias neoliberales: nada se puede hacer en oposición al crecimiento económico, a la productividad y a la competitividad. A los pactos de los ochenta, les sucedió una etapa de mayor confrontación (fruto de la cuales fueron las 2 huelgas generales con mayor repercusión, la paralización de ciertas medidas antisociales, un fuerte crecimiento afiliativo general y el consiguiente descrédito para los gobernantes de turno), para volver de nuevo a la dinámica de la *cogestión virtual*, es decir, de la aceptación de las propuestas de los poderes económicos, políticos y mediáticos sin conseguir a cambio nada más (y, quizás, *nada menos*) que prerrogativas organizativas y personales (representatividad incuestionable e indiscutible, control de la formación y el reciclaje con el consiguiente sucursalismo sindical y beneficios económicos, participación en determinados organismos y consejos públicos y privados con sus consiguientes remuneraciones y *liberaciones* del trabajo).

Esta dinámica no se da únicamente en la gran escala o en los temas generales, ya de por sí suficientemente grave, sino que se extiende a las empresas y sectores. La negociación colectiva de los últimos años nos depara, en general y salvo encomiables excepciones, ejemplos significativos de dobles escalas salariales, pérdida de derechos laborales, sacrificios salariales mientras los incrementos de productividad se vuelven inhumanos, aumentos y absoluta flexibilidad en las jornadas de trabajo, aceptación de subcontratas y ETTs...Y todas estas cuestiones acostumbran a afectar de manera más directa a los nuevos trabajadores y trabajadoras, de manera que a la barrera generacional se va añadiendo otra en cuanto a las condiciones de trabajo y a las garantías laborales.

Otros sindicatos y sectores sindicales (CGT, ESK-CUIS, LAB, IAC, sectores críticos de CCOO,...) como en Europa o en el mundo, están situándose en el corazón de las profundas contradicciones del sistema para denunciarlas y luchar contra ellas (reparto de riqueza, reducción de la jornada, igualdad salarial y laboral, salario social, libertades individuales y colectivas,...). Es la confrontación entre el sindicalismo de gestión y el sindicalismo alternativo, entre el sindicalismo institucionalizado y el sindicalismo transformador. Esta dualidad se da entre organizaciones, pero también en su propio seno. De hecho, es transversal, como el ejemplo de CCOO muestra de forma evidente.

Esta misma dualidad se refleja en las relaciones con los movimientos antiglobalización y en las movilizaciones contra los organismos internacionales ligados al proceso antiglobalizador (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Unión Europea). Unos consideran el sindicalismo como una perte de un movimiento emancipador a nivel individual y colectivo más am-

plio y multiforme. Otros sitúan los márgenes del sindicalismo en el marco laboral y establecen una distancia de seguridad con los nuevos movimientos sociales. Una muestra gráfica fue la Marcha Europea sobre Niza (6 y 7 de noviembre de 2000): los sindicatos integrantes en la Confederación Europea de Sindicatos (CES) se manifestaron por la inclusión de ciertos temas sociales y laborales en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, mientras que el sindicalismo alternativo se movilizaba por una Carta de Derechos Sociales Fundamentales en la cual se contemplara el fomento del empleo, la reducción de la jornada laboral, la igualdad de género, la defensa de la inmigración y su acceso a los derechos básicos, etcétera.[32]

32. E. Cortapitarte: *El movimiento obrero en el estado español: entre el corporativismo y las alternativas transformadoras*, en E. Grau y P. Ibarra: *Anuario de Movimientos Sociales. Una mirada sobre la red*, Barcelona, Icaria, 2000, págs. 68-75.

Movimiento vecinal: Claroscuros de una lucha necesaria

Albert Recio y Andrés Naya[1]

El nacimiento del movimiento vecinal en el tardofranquismo

El movimiento vecinal fue, junto al movimiento obrero, uno de los principales movimientos sociales de base de la transición al postfranquismo. Había diversas razones para que ello fuera así.

En primer lugar, las condiciones materiales de la mayoría de barrios creaban una situación objetiva de conflicto social. El nulo desarrollo de políticas sociales del franquismo, unido a sus políticas de urbanismo salvaje generaba tan elevado nivel de carencias que constituían una fuente permanente de reivindicaciones de todo tipo. Ello era especialmente relevante en los barrios de clase obrera. En esos barrios, erigidos en las periferias de las grandes ciudades al calor de los procesos migratorios generados por el desarrollismo, había grandes necesidades de vivienda. El desarrollo urbano marcado por la especulación ampliamente permitida por las autoridades, se traducía en la pervivencia de barraquismo vertical y horizontal, barrios de autoconstrucción, zonas de vivienda pública pensadas como espacios de control social, ausencia de equipamientos y calidad urbanística (lo cual, dicho sea de paso, muestra que la especulación no es sólo un problema contemporáneo sino que forma parte de la esencia misma del capitalismo español). En este contexto de carencias de toda índole fue, pues, relativamente fácil el surgimiento de una

1. Aunque tratamos de presentar una visión general, nuestra perspectiva, en un movimiento tan descentralizado, tiene sin duda algo de local, centrada en nuestra experiencia de Barcelona. No tratamos de hacer un «mapa» del movimiento, sino de destacar los aspectos que consideramos más relevantes para entender su dinámica y para animar la reflexión sobre el futuro.

respuesta social con objetivos muy diversos: demanda de equipamientos de toda clase (ambulatorios, escuelas e institutos), zonas verdes, asfaltado de calles, lucha contra el barraquismo, oposición a nuevas agresiones urbanísticas, lucha contra la contaminación, etcétera.

En segundo lugar, el tardofranquismo al legalizar las Asociaciones de Vecinos había abierto un espacio que podía ser utilizado por los activistas políticos para llegar más directamente a la población. La propia organización de las demandas sociales y la represión que en muchos casos se producía cuando éstas se convertían en acciones de protesta (incluidas muertes de manifestantes[2]) ayudaba a politizar las luchas sociales y a conectarlas con las demandas más generales de reformas democráticas. No es por causalidad que, por ejemplo, la primera gran manifestación política de la transición (Barcelona, 6 de febrero de 1976) fuera convocada formalmente por la *Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona*, actuando como tapadera de la *Assemblea de Catalunya*. El trabajo en el movimiento vecinal no sólo constituía un medio legal de intervención, también era un espacio en el que podían participar activistas que por las condiciones de sus centros de trabajo o por su procedencia social de clase media tenían dificultades para integrarse en el movimiento obrero parasindical que constituía el núcleo social sobre el que la mayoría de la izquierda pilotaba su intervención. La aportación de personas de clase media, con niveles educativos más elevados, fue útil para ayudar a articular las demandas sociales y conectó en muchos casos al movimiento con técnicos y profesionales que aportaron ideas y asesoramiento.

De todo ello emergió un movimiento social extenso, de base local, que a lo largo de la década de los setenta protagonizó numerosas movilizaciones a lo largo y ancho del país, especialmente en los barrios de clase obrera y que ayudó a generar algunos de los aspectos más positivos de la transición. En particular hizo patente que la consolidación de un nuevo régimen político era imposible si no se garantizaban servicios sociales básicos y no se producía una intervención urbanística que hiciera de los barrios algo más que un continuo de edificios. Por más crítica que puede ser la valoración de la actual democracia hay algunas cuestiones en las que conviene reconocer avances. En primer lugar, un fuerte crecimiento del gasto público que se ha traducido en diversos servicios y prestaciones públicas. Es evidente que su nivel actual es insuficiente y en los últimos años se han producido recortes importantes, especialmente bajo los Gobiernos de Aznar, pero el resultado neto es sin duda positivo si la base de comparación se toma en 1975 o 1980. En segundo

2. Como en el caso de la lucha contra la contaminación en Erandio (1969), la lucha del ambulatorio de Santa Coloma de Gramanet (1971) o la del agua en Parla (1995).

lugar, la mejora urbanística de ciudades y pueblos constituye un elemento básico de la política de prácticamente todos los Ayuntamientos. Sin duda en esta política de reordenación urbanística hay elementos especulativos, de despilfarro público y constituyen una buena oportunidad de negocio para las poderosas empresas de obras públicas, pero resulta igualmente patente que en muchos casos son visibles las mejoras urbanísticas, mejoran las condiciones de vida de la gente y constituyen una de las conquistas colectivas de nuestro pasado reciente. Y a estos dos factores, a la necesidad de legitimar la política por medio de la intervención pública, constituyó esta amplia y diversa movilización de hombres y mujeres en mil y un barrio del país.

La importancia y oportunidad del movimiento vecinal de los setenta no supone que las diferentes corrientes de izquierda tuvieran una percepción clara de cual debería ser su papel en una estrategia de transformación. En muchos casos predominaba una visión instrumental del mismo, mero espacio de intervención con cobertura legal y de agitación para ampliar las contradicciones y conflictos que pudieran llevar a la ruptura democrática o a la revolución socialista (según el radicalismo de los diversos partidos), pero faltaba en muchos casos una reflexión profunda de su papel en un proceso de democratización real.

Para la izquierda reformista la democracia se planteaba a menudo como un punto final del movimiento. Una vez instaurado un régimen democrático desaparecerían las lacras del franquismo (especulación, ausencia de servicios) y dejaría de tener sentido un movimiento contrapuesto a la representación política. Tampoco la izquierda radical era mucho más perspicaz. El obrerismo que dominaba en muchos planteamientos conducía a considerar al movimiento vecinal como un espacio secundario de intervención. En gran medida la propia visión de los barrios obreros como «ciudades dormitorio» inducía a pensar éstos como espacios inertes respecto a un mundo laboral dominado por los espacios del trabajo mercantil. Todo ello impedía tomar en cuenta aspectos básicos de las sociedades capitalistas modernas, importantes a la hora de pensar cualquier proceso de transformación social. En primer lugar, la relación entre desarrollo capitalista y urbanismo en sus diversos aspectos de espacio de valorización, de impacto ambiental, de modelo de organización de la comunidad. En segundo lugar, el olvido sistemático de la base patriarcal sobre la que descansan las sociedades capitalistas reales y la importante contribución del trabajo doméstico realizado básicamente por las mujeres. Los barrios obreros podían ser ciertamente dormitorios desde el punto de vista de los asalariados, especialmente masculinos, pero no para las mujeres que realizaban su intensa actividad cotidiana en este espacio y que, en gran medida fueron las protagonistas de muchas movilizaciones al estar más próximas y conocer mejor las condiciones que daban lugar a los conflictos. Y, en tercer

lugar, existía una subvaloración de la democracia y de las transformaciones parciales, que para algunos constituían una forma de alejarse del objetivo final de la revolución socialista. Desde este punto de vista la lucha vecinal solo tenía sentido como una forma de radicalización social.

Transición democrática y crisis del movimiento vecinal: problemas estructurales

El movimiento vecinal que había sido una de las plataformas más importantes de movilización democrática, con sus demandas de mejora de las condiciones de vida en los barrios y de democratización del poder político entró en crisis a medida que se fue consolidando el nuevo marco político. Si tuviéramos que considerar un punto de inflexión este debería situarse en torno a las primeras elecciones democráticas municipales en 1979.

Se ha dicho muchas veces que se trató de una crisis generada por los partidos con representación institucional que ordenaron a sus militantes el abandono de las asociaciones. Sin negar que en muchos sitios estas consignas existieron las razones de la crisis son más complejas y merecen una lectura más atenta.

En muchos casos este vaciado de cuadros no sólo fue el producto de consignas más o menos maquiavélicas, sino el resultado de procesos relativamente automáticos. El nuevo marco político permitió el acceso a cargos políticos de muchas personas que antes lo tenían vetado. Ni los partidos de izquierdas ni las asociaciones contaban con un número muy grande de cuadros y en muchos pueblos y distritos se produjo un trasvase desde los movimientos a las instituciones que tuvo el doble efecto de burocratizar a los antiguos luchadores y dejar en mantillas a muchas entidades de barrio. Para muchas personas el ocupar plazas de responsabilidad en los Ayuntamientos era una forma natural de poner en práctica las ideas políticas por las que habían luchado desde abajo. Y es posible que los más egocéntricos pensaran que puesto que ellos ya se ocupaban del pueblo, éste no necesitaba una organización autónoma. Después, cuando la complejidad de la gestión municipal, las presiones de los lobbies de poder a escala local y general (promotores inmobiliarios, bancos, empresas de servicios), el acomodamiento ideológico y la corrupción moral que casi siempre provoca el detentar algún poder, evaporará gran parte de su radicalismo juvenil, los gestores municipales acabaron por considerar como un peligro un potente movimiento vecinal autónomo y ciertamente hicieron numerosas y variadas acciones para debilitarlo, subordinarlo o neutralizarlo.

Así pues, la sangría de activistas no sólo fue el producto de las consignas políticas y la cooptación, sino también el resultado del abandono voluntario

de muchas personas que abandonaron su participación pública. En parte desencantados al comprobar que no tenían lugar los cambios radicales que habían supuesto que iba a traer el cambio político y particularmente «quemados» al constatar la poca eficacia y falta de respuestas de los primeros ayuntamientos y sus intentos por utilizar las asociaciones como un «colchón» ante el barrio.

Pero con ser importante este proceso no lo explica todo. Otros factores merecen consideración. En primer lugar, la propia instauración de los ayuntamientos democráticos y la expansión progresiva del gasto publico cambiaron progresivamente el escenario del movimiento vecinal. Si bien en 25 años no se ha alterado el papel central del capital especulativo en la configuración del desarrollo urbanístico, la política de los ayuntamientos democráticos se ha preocupado de mejorar las infraestructuras y promover el embellecimiento del entorno urbano como un medio de legitimación social. La ciudadanía se ha habituado a un estado de obras permanente por parte de la Administración que en parte ha deslegitimado (o como mínimo devaluado) el papel de los movimientos reivindicativos. Aunque éstos renacen a menudo cuando alguna intervención es percibida como una agresión local.

En segundo lugar, cabe aludir a la falta de densidad democrática del país y sus efectos sobre un movimiento organizado. Aún en sus mejores tiempos las Asociaciones de Vecinos estaban formadas por un puñado relativamente corto de activistas (unos 50 en las de mayor base). Otra cosa es que estos núcleos fueran capaces de aglutinar tras de sí a importantes contingentes de personas ante un conflicto concreto. Pero la relación de la ciudadanía de base con los núcleos organizados siempre ha estado atravesada de aspectos contradictorios. La relación de los vecinos con los activistas tiene muchos matices, desde la mitificación (que presenta a los activistas como una especie de «superhombres» locales) hasta la suspicacia (de aquellos que piensan que se trata de funcionarios o de personas que persiguen intereses sospechosos), pasando por el clientelismo o la visión de servidores públicos a los que debe exigirse. Ciertamente, en muchos barrios hay núcleos de personas con mayor visión social, que reconocen el papel de los activistas y participan esporádicamente en tareas organizativas, pero éste suele ser, en muchos casos, un núcleo demasiado reducido y, a veces, no exento de caer en la exaltación papanatas de los líderes. La forma como se gestó la cultura política bajo el franquismo explica buena parte de estas actitudes, pero no cabe duda de que el proceso de consolidación de un marco político de baja intensidad democrática hizo el resto. De ello se deriva una relación bastante instrumental de la mayoría de la ciudadanía con su asociación (se acude a ella para resolver problemas puntuales). Con la consolidación de los Ayuntamientos democráticos este proceso se acelera, al pasarse en muchos casos del conflicto abierto a

formas de negociación que refuerzan el burocratismo de la acción vecinal y un cierto alejamiento de las bases. La falta de medios económicos, y a menudo de capacidades técnicas, ha impedido en muchos casos suplir estas limitaciones con una adecuada política informativa. El resultado de todo ello es que las Asociaciones quedan a menudo con una imagen a medio camino entre el Ayuntamiento y la ciudadanía sin llegar a consolidarse con una imagen plenamente autónoma.

En tercer lugar, en muchos barrios el movimiento vecinal ayudó a generar otros muchos movimientos y actividades que antes no tenían espacio donde desarrollarse. Esta eclosión asociativa tuvo lugar por vías muy diversas. En algunos casos fue el mero producto de la consecución de equipamientos lo que generó la formación de nuevas asociaciones dedicadas a organizar la participación en determinadas áreas (el caso más evidente es la creación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos en los centros escolares). En otros, se trató de nuevos movimientos gestados en muchas Asociaciones que acabaron por independizarse, como es el caso de los movimientos de mujeres de muchos barrios. En este caso, la separación se produjo tanto por la propia dinámica del movimiento como por el machismo de muchos militantes vecinales que generó una difícil convivencia. También destaca la paulatina dedicación de muchos activistas viejos y nuevos a actividades de tipo lúdico-cultural que el nuevo marco de libertades y las instalaciones que poco a poco se configuraban hacían posibles. La aparición de nuevos movimientos de base más juvenil, como el de objeción o el ecologista, simplemente tendió a organizarse fuera de las «viejas asociaciones». En definitiva, en muchos barrios se pasó de una sola entidad, a un tejido asociativo cada vez más complejo y, a menudo, con pocos vínculos. Ello no sólo condujo a hacer más compleja la actividad de los activistas vecinales, si no que a menudo los llevó a la especialización en unas pocas parcelas de actividad (urbanismo, demanda de equipamientos), lo que en muchos casos aceleró su aislamiento de otros sectores sociales, especialmente de las nuevas generaciones. Sólo allí donde existía un fuerte núcleo organizado con capacidad de captar la complejidad de los nuevos tiempos y de mediar en este tejido complejo, el movimiento superó su aislamiento y estuvo en condiciones de generar dinámicas de participación y de lucha a escala local.

En cuarto lugar, y en conexión con lo anterior, hay que destacar las limitaciones políticas de muchos de los activistas locales. Si bien en la transición las Asociaciones llegaron a tener una cierta presencia en todas partes, sin duda era en los barrios obreros donde ésta era mayor y respondía a un conflicto estructural. Por esto un gran número de cuadros del movimiento eran personas de clase obrera, sin un gran bagaje cultural y a menudo con visiones del mundo muy tradicionales. En los tiempos de mayor auge contaron

con un cierto apoyo de técnicos de izquierdas y en bastantes barrios de militantes izquierdistas de clase media atraídos al movimiento como una forma de «llegar a la clase obrera». Todo ello se evaporó con bastante rapidez. Si el sistema político cooptó a algún líder vecinal, en el caso de los técnicos «progres» la captación fue masiva y a menudo las Asociaciones se encontraron sin un asesoramiento solvente. Las pocas formaciones extraparlamentarias que quedaron en pie tendieron a considerar el movimiento vecinal un campo de trabajo poco prometedor para concentrar sus esfuerzos en nuevos movimientos sociales como el pacifismo, el feminismo, el antimilitarismo y, en menor grado, el ecologismo. La gente más politizada del movimiento vecinal fueron los activistas sin partido, con cultura izquierdista pero trabajando de forma independiente. Evidentemente, este proceso no fue ni lineal ni universal, pero en muchos casos dejó a las asociaciones en manos de dirigentes con una formación política limitada, poco propensos a la innovación y con pocos apoyos técnico-políticos a los que agarrarse.

En esta situación el movimiento quedó estructurado en gran medida como una constelación de pequeños núcleos de barrio dedicados a una labor de mediación con la Administración, de organización, a veces de movilizaciones por cuestiones locales y también a menudo como promotoras de actividades lúdico-recreativos como Fiestas Mayores, cursos de diversos tipos, etc. Las formas de intervención, las reivindicaciones, la relación con el resto del tejido social quedaron en gran medida determinadas por las características del núcleo local. Podemos encontrar desde Asociaciones controladas por un solo individuo, que juega en cierta forma de prohombre local (con formas personalistas de gestión y grados diversos de honestidad y clientelismo) hasta el núcleo activista que ha sabido desarrollar una buena relación con el tejido vivo del barrio y ha desarrollado una buena experiencia participativa. El que la situación derive hacia uno u otro modelo extremo ha dependido en gran medida de circunstancias particulares ligadas en parte a la estructura social de los barrios, a la propia historia, etc. Por esto resulta difícil hacer una evaluación global del movimiento vecinal cómo un todo, por cuanto si en algo se ha caracterizado ha sido por una actuación variopinta a escala local.

Una participación truncada

Con todas estas limitaciones, el papel del movimiento vecinal dependía en gran medida de las formas como se articulase la participación social en la elaboración de las políticas públicas, particularmente las políticas locales. Bien pronto estuvo claro que la democracia participativa no formaba parte de los proyectos de la mayoría de partidos parlamentarios. Aun con sus problemas y limitaciones para muchos políticos las Asociaciones eran vistas con

recelo. Durante los primeros años de la transición era habitual que frente a cualquier debate los concejales y sus adláteres nos pasarán por la cara que su poder venía del voto universal lo que parecía legitimarles para hacer cualquier política que se les antojara. La existencia de un movimiento autónomo, que formulara propuestas y organizara a la población de a pie no formaba parte del proyecto de democracia limitada diseñado en la transición. Las limitaciones a la participación no eran sólo el resultado de los pactos y transacciones que la izquierda tuvo que hacer para garantizar la consolidación del sistema parlamentario, obedecían también a sus propios impulsos autoritarios, a su negativa de ver recortado su poder y papel social para compartirlo con la población de a pie. Prueba de ello es que los intentos de control del movimiento vecinal no sólo fueron obra del PSOE, formaciones más a la izquierda también trataron de controlar, coartar y reducir el peso del movimiento vecinal, con experiencias tan patéticas como la de Madrid donde el Partido Comunista y el Partido del Trabajo llegaron a escindir la Federación de Asociaciones de Vecinos con el objetivo de controlar un aparato afín a sus propuestas.

Más allá de las anécdotas hay varios datos relevantes al respecto. En primer lugar, la negativa a conceder a las Asociaciones de Vecinos el carácter de entidades de interés social que, en cambio, sí se concedió a las mucho más fantasmagóricas Organizaciones de Consumidores.[3] Y, en segundo lugar, el retraso y las limitaciones impuestas en las normas de participación de los distintos Ayuntamientos. De hecho, la posibilidad que tienen aún hoy en día las asociaciones y ciudadanos de a pie de participar en las discusiones de Ayuntamientos y distritos está en relación directa con la correlación de fuerzas que establecen algunos movimientos que conservan una cierta potencia.

Las limitaciones a la participación no eran sólo el producto de la ausencia de cultura democrática de la casta política, era y es también el resultado del juego de presiones a que se ven sometidas las instituciones democráticas en el contexto de las sociedades capitalistas. Las ciudades son uno de los espacios en los que se realiza la acumulación de capital. La actividad urbanístico inmobiliaria, la gestión de servicios públicos o las obras públicas son una fuente de grandes negocios, particularmente en nuestro país, donde la clase capitalista local ha sido menos persevante en el enriquecimiento a través de la producción industrial y la innovación tecnológica. Los grupos de poder interesados en este tipo de negocios (no sólo los agentes directos

3. En la elaboración de la Constitución fue rechazada la enmienda del senador del Partido Comunista de España, Lorenzo Martín-Retortillo de incluir a las Asociaciones de Vecinos como entidades de «interés social».

del negocio urbano, también las empresas industriales con instalaciones en los núcleos urbanos ansiosas de obtener sustanciosas recalificaciones del suelo industrial) han desarrollado variadas estrategias de presión y persuasión para diseñar políticas urbanas favorables a sus intereses. Las referencias a la creación de empleo y riqueza urbana, la necesidad de renovación de espacios degradados y todo tipo de maniobras propagandísticas (incluyendo las de salvar la economía de los clubes deportivos locales), sin descuidar las diferentes formas de corrupción privada o institucional, o el mero chantaje han acabado por conformar las políticas locales. Y para que muchas de las grandes operaciones vieran la luz era necesario excluir en lo posible la participación democrática de la ciudadanía de las grandes decisiones,[4] empezando por silenciar las voces que de alguna forma trataban de articular las demandas sociales. Cabe también señalar que en muchos casos los técnicos que participan en la elaboración de proyectos (arquitectos que diseñan obras, consultores diversos) constituyen un factor adicional de bloqueo democrático, por cuanto su visión tecnocrática y, a menudo, la defensa ególatra de «sus» proyectos ve con malos ojos que personas no-expertas participen en la toma de decisiones.[5]

Lo cierto es que mientras que las autoridades democráticas suelen estar dispuestas a entrevistarse, negociar y consensuar proyectos con los «agentes económicos» (un eufemismo para evitar hablar de capitalistas), se han negado no pocas veces a considerar a las entidades vecinales como interlocutores necesarios para discutir los proyectos que afectan a la ciudadanía. Es habitual que, alegando intereses estratégicos o simplemente actuando en la sombra, las asociaciones no tengan acceso a la información sobre los grandes proyectos hasta que ya están maduros. Y este déficit de información y transparencia constituye el primer paso que niega la participación ciudadana. El urbanismo concertado con los grandes promotores se basa precisamente en un tratamiento asimétrico de la participación, abierta a los grupos de poder y limitada a los movimientos sociales de base.

---

4. Aunque debe tenerse en cuenta que una decisión es «grande o pequeña» según el ámbito espacial considerado: para un determinado barrio la forma que adopte la reconversión de una sola industria puede hipotecar todo su desarrollo posterior.

5. Dos anécdotas de nuestra experiencia activista resumen esta cuestión. Cuando los vecinos de Nou Barris exigíamos la cobertura del Segundo Cinturón al paso por nuestros barrios, José Miguel Abad (entonces teniente de alcalde por el PSUC) nos llamó iletrados y nos recomendó viajar para comprobar que en ningún lugar se hacían cinturones cubiertos (al final conseguimos nuestro empeño y el cinturón cubierto figura entre las obras emblemáticas de la Barcelona olímpica). En otro debate sobre urbanismo el arquitecto Oriol Bohigas nos recordó, en una discusión sobre el diseño de una calle central en nuestro barrio, «ustedes y yo somos de izquierdas, pero entiendan que yo he estudiado».

El trabajo de poner sordina al movimiento vecinal ha venido en parte facilitado por los condicionantes estructurales citados anteriormente. Y ha tenido lugar con fomas diversas. Casi nunca como un ataque frontal porque, a pesar de sus limitaciones, las Asociaciones de Vecinos, siguen teniendo una buena imagen social. Aún hay muchos vecinos y vecinas que guardan el recuerdo de luchas que han permitido mejorar el barrio, y en muchos lugares el movimiento vecinal sigue siendo un espacio desde el que articular la queja, vehicular demandas o simplemente participar de la vida social. En los casos en que hubo una ofensiva directa desde el poder político contra el movimiento vecinal estas se volvieron en contra de sus promotores. Por esto las vías de ataque han sido más indirectas, pero a veces igualmente demoledoras.

Ya hemos hecho referencia a las limitaciones impuestas en las normas de participación. Cuando ésta se ha dado a menudo ha sido burocrática y en general ha eludido la discusión previa de las grandes decisiones. Con frecuencia cuando se llega a discutir de proyectos concretos, ya están elaborados y queda poco margen para introducir cambios. Y cuando los barrios consiguen que se elabore un proyecto racional de actuación, los PERI (Planes Especiales de Reforma Interior), su implementación se demora en el tiempo, o es simplemente ignorada por actuaciones municipales no previstas, lo que genera un clima de frustración y cansancio que son los mejores aliados para el abandono de la militancia vecinal. La otra vía más transitada ha sido la de la cooptación de los líderes vecinales. Una táctica que ha tenido éxito en muchos pueblos y ciudades y que se ha desarrollado por vías diversas. Desde las más inocuas de favorecer la vanidad y explotar la buena fe de muchas personas hasta las más perversas de la «compra» de conciencias con prebendas diversas (incluido a veces la oferta de un puesto de trabajo). En muchos casos, se ha tratado de una transformación paulatina, usando las relaciones públicas y una política de subvenciones selectiva (invitaciones a fiestas y festejos, concesión de ayudas a determinadas actividades lúdico-recreativas) para obtener el apaciguamiento del movimiento. Y en otros, se ha basado en el creciente control de las entidades por militantes del partido en el poder (o atrayendo al partido a algún líder vecinal) con objeto de controlar su dinámica. Y una tercera estrategia que a veces ha resultado exitosa ha constituido simplemente en obviar al movimiento organizado mediante una apelación populista al electorado (por ejemplo montando actos informativo-propagandísticos donde se margina a los activistas) o creando redes de relación con otro tipo de entidades más dóciles a los intereses de los grupos de poder.

Si el movimiento vecinal hubiera contado con una fuerte estructura de apoyo técnico, de reflexión colectiva es posible que estos peligros se hubieran obviado. Pero nunca hubo ni recursos ni capacidad ni voluntad suficiente para llevar a cabo la construcción de un movimiento suficientemente po-

tente a escala nacional y autonómica para llevarlo a cabo. Es evidente que faltaban recursos financieros y humanos (la mayor parte de asesores técnicos que en la transición política se había mostrado muy activa acabó integrándose en su mayoría en la vida profesional mercantil o dedicando sus energías a actividades menos colectivas). Y el movimiento vecinal nunca ha contado con los recursos públicos que ha tenido por ejemplo el movimiento sindical o las organizaciones de consumidores. Pero sí se han generado organismos de coordinación a todas las escalas: federaciones locales, coordinadoras autonómicas y, a nivel estatal, la CAVE (Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de España). Pero estos intentos cupulares tenían otros peligros que posiblemente expliquen por que nunca se llegaron a constituir en una verdadera coordinación del movimiento. Y no está claro que esta ausencia haya sido a la postre tan negativa.

La debilidad de la organización en cada barrio y las demás características indicadas no permitía crear un tipo de organización basada en una fuerte participación y un elevado nivel de elaboración estratégica. En estas condiciones, como de hecho ha ocurrido en muchos casos, las organizaciones supraterritoriales han tendido a estar controladas por militantes de partidos políticos que han tendido a utilizarlas en beneficio de su estrategia. Inicialmente la CAVE estuvo bajo el control del Partido Comunista de España que trató de utilizarla como correa de transmisión de su política. A medida que este partido perdió presencia institucional, su control pasó a gente próxima al Partido Socialista Obrero Español que practicó una política orientada a descafeinar el movimiento. Cuanto mayor ha sido el intento de construir una estructura pesada, con cuadros y auxiliares profesionales, mayores han sido las tendencias acomodaticias por cuanto mayor dependencia se ha generado de las subvenciones públicas, muchas veces a cambio de pleitesías varias. Otras veces, se ha optado por recabar fondos a través de una política de servicios diversos, un espacio propicio a las corruptelas, la ineficacia, y en definitiva, generadora de nuevos problemas financieros. El triste final de la CAVE en una situación de bancarrota total es una buena muestra de adonde llevó una política de «huida hacia delante» para consolidar una estructura burocrática que no cumplía con su función principal, esto es, promover un discurso social progresista y servir de paraguas de las organizaciones de base. Problemas financieros al margen, la construcción de una organización centralizada chocaba a menudo con la oposición de las asociaciones de base, no siempre por una defensa interesada de su autonomía, sino también porque no resultaba funcional a una lucha apegada al terreno, donde la actividad básica se traba en la relación de proximidad. Por esto el hundimiento de la CAVE no ha supuesto el hundimiento del movimiento asociativo. Las redes confederales tienen sin duda debilidades, pero constituyen un buen sistema para seguir apegadas a su propio terreno.

Las coordinadoras locales y regionales han padecido problemas similares: cooptación, instrumentación, burocratismo (por ejemplo, en algunas localidades, el Partido Popular o Convergencia i Unió han promovido sus propias coordinadoras en Ayuntamientos controlados por ellos). Con todo, han representado a menudo mayores posibilidades de intervención al tratarse de organizaciones más próximas y controlables por las asociaciones de base. Cuando ello ha ocurrido el movimiento ha ganado en presencia social al aparecer como un representante autónomo de los intereses ciudadanos.

Y a pesar de los malos tiempos, ha habido movidas

Hasta aquí nuestro análisis ha tratado de explicar la pérdida paulatina de dinamismo que ha tenido el movimiento vecinal desde los «gloriosos setenta» hasta la actualidad. Un cúmulo de dificultades que en muchos casos ha reducido el movimiento a pequeños núcleos de activistas en los barrios. Núcleos con prácticas e ideologías muy diversas que lejos de formar un movimiento homogéneo han dado lugar a experiencias, demandas y movimientos contradictorios. Pero esto no puede llevarnos a perder de vista la importancia social que este modesto movimiento ha tenido a lo largo de los últimos veinticinco años de régimen democrático formal.

Ya hemos señalado su papel crucial en el tardo-franquismo. No tanto porque jugara una función relevante en las maniobras políticas de la transición sino porque puso la mejora urbanística y de los servicios sociales básicos en la agenda de las demandas ineludibles de la democratización del régimen.

Con sus altos y bajos el movimiento ha constituido una fuerza permanente que ha presionado para conseguir mejoras en los barrios. En unos casos apelando a la movilización y a la democratización de las instituciones públicas. En otros, utilizando el camino más tortuoso de un cierto clientelismo y compadreo. Pero, en todos los casos, generando, cuando menos, una presión en forma de mejora urbanística y de implantación de nuevos equipamientos que no está claro que se hubieran llevado a cabo sin esta labor tenaz, entre el «pepito grillo», el «demandante de favores» o el «agitador de masas», que han realizado cientos de hombres y mujeres en muchas partes del territorio.

Las demandas vecinales han sido muy variadas. En ellas ha influido el grado de organización de cada barrio, la ideología y la cultura política de los líderes vecinales y la respuesta de las autoridades. Es difícil resumir brevemente en lo que han consistido estas demandas y luchas con un contenido contradictorio. No se han dado con igual lógica e intensidad en todas partes pero podemos destacar algunas de las líneas de lucha más reiteradas o sobresalientes.

– **Mejoras urbanísticas y equipamientos**. Este es quizás el factor más común y en el que más éxitos se han conseguido (aunque podríamos decir que cualquier reivindicación tarda cuando menos 10 años en conseguirse) y en más de una ocasión pueden tener aspectos ambiguos, al favorecer determinadas operaciones de imagen. Pero en otros muchos casos se han conseguido mejoras sustantivas o se han reducido los impactos negativos de determinados proyectos (por ejemplo la cobertura de las Rondas).

– **Bloqueo de proyectos especulativos.** Mucho menos habituales porque a menudo la magnitud de algunos proyectos y las alianzas entre especuladores, Administración pública y los medios de comunicación es tan fuerte que la movilización no puede ganar. Con todo se han conseguido imponer modificaciones sustanciales que aminoran el impacto (por ejemplo el bloqueo del proyecto Barça 2000 promovido por el Fútbol Club Barcelona sin el éxito que obtuvo el Real Madrid en una operación similar).

– **La lucha por una vivienda digna**. Si bien no se ha podido conseguir que la vivienda sea un bien de promoción pública ni detener las sucesivas escaladas especulativas, hay muchas luchas urbanas en torno a la vivienda: especialmente, en el caso de la rehabilitación de viviendas con problemas (como la larga lucha de los barrios construidos por la franquista Obra Sindical del Hogar o la rehabilitación de los afectados por el problema de la aluminosis), la garantía de viviendas en el mismo barrio para los afectados por obras de remodelación, la oposición al *mobbing* inmobiliario, el planeamiento urbanístico e incluso la promoción de pequeñas cooperativas de vivienda sin ánimo especulativo. Sin duda son campañas modestas ante la magnitud del problema, pero no insignificantes.

– **Lucha por la mejora de servicios públicos y contra las privatizaciones**. Aunque se trata de un terreno en el que a menudo el movimiento vecinal no tiene un espacio reconocido, en muchos barrios se han producido alianzas y acciones de control y mejora de los servicios públicos. La mejora de los transportes públicos ha sido quizás el terreno donde más movilizaciones se han producido, pero no ha sido el único. En algunos barrios hay experiencias interesantes de control de los servicios sanitarios y se han producido movilizaciones contra su privatización. Las asociaciones están también a la cabeza de las demandas de nuevos servicios y equipamientos, en especial los que afectan a la tercera edad.

– **Resistencia a instalaciones indeseadas.** A menudo el tipo de demandas que ha generado más movimiento y pasión. Se trata de una de las cuestiones más complejas. En muchos casos se puede hablar de falta de visión y

egoísmo. De negativa a aceptar que en el barrio se instalen equipamientos de indudable utilidad social pero que son vistos como fuentes de problemas de convivencia (por ejemplo, la instalación de centros de atención a drogodependencias, cárceles, centros de tratamiento de residuos). No pocas veces simplemente se trata de colocarlo en el terreno del vecino (las conocidas respuestas de «no en mi patio trasero»). Pero tampoco puede olvidarse que a menudo las autoridades tratan de colocar determinadas instalaciones en los barrios más pobres y casi nunca se plantean en los barrios de clase media o alta. A veces, incluso, estas instalaciones ocupan el lugar donde se había previsto instalar un equipamiento de barrio. Por esto conviene hilar fino en cada caso a la hora de juzgar estas respuestas

– **Demandas de seguridad.** Ciertamente es otro de los campos donde se han producido experiencias más discutibles y en algunos casos movimientos directamente fascistoides del tipo patrullas vecinales. Pero debe también considerarse que en diversas ocasiones algunos barrios de clase obrera han experimentado situaciones terribles, como el período de expansión del consumo de heroína (con sus secuelas de muerte, desmoralización juvenil, pequeños robos...). La llegada de cientos de inmigrantes pobres a barrios obreros puede generar una nueva oleada de tensiones ligada al aumento de demandas sobre los servicios públicos (escuelas, sanidad, etc.) que en un contexto de congelación del gasto público pueden generar una competencia entre pobres por unos mismos servicios. De aquí que las demandas de más equipamientos y recursos sean cruciales. Pero tampoco en este campo hay respuestas homogéneas. En muchos barrios las respuestas vecinales han ido en la dirección de demandar más servicios y fomento de la convivencia social, aunque en otros casos han prevalecido las demandas represivas.

– **Fomento de actividades lúdicas colectivas**. Desde la organización de Fiestas mayores hasta la realización de cursillos de todo tipo. Son iniciativas con un contenido cultural variable pero que tienen un impacto considerable en la generación de convivencia y sentimiento de comunidad. En muchos casos realizadas con pocos medios y con la competencia de iniciativas del poder político (Centros cívicos municipales, fiestas organizadas desde los Ayuntamientos) que ha encontrado un espacio de legitimación y de relación con el ciudadano de a pie pasando por encima de organizaciones intermedias. En muchos casos, los Ayuntamientos han tenido éxito y han conseguido suplantar al movimiento vecinal o simplemente convertirlo en un apéndice de sus proyectos (un «slogan» típico del PSOE es la busca de complicidad, o sea convertir al movimiento en un brazo cívico a su servicio, en un voluntariado para abaratar costes). Pero también aquí las experiencias son diversas y hay diversos ejemplos de

movimientos vecinales que han sabido crear una buena red de grupos locales que organizan actividades colectivas e incluso que han tomado la gestión de equipamientos públicos con una orientación participativa y alternativa.

– **Demandas de profundización democrática**. Allí donde el poder no ha tenido la capacidad de cooptar al movimiento vecinal, éste ha incluido en sus demandas la profundización de la participación democrática, básicamente a nivel municipal. Esta ha sido de hecho una larga batalla del movimiento, desde la demanda de voz en los plenos municipales hasta exigencias como la elección directa de concejales de distrito en las grandes ciudades o la inclusión preceptiva de una memoria participativa en la elaboración de grandes proyectos. Son, sin duda, exigencias modestas de un movimiento, a pesar de todo, minoritario, pero que han permitido experiencias de profundización democrática allí donde ha habido fuerza y capacidad para actuar. En otro plano, las Asociaciones de Vecinos más avanzadas han constituido a menudo un paraguas de otros movimientos alternativos, desde la lucha pacifista al movimiento okupa o el de los inmigrantes, no sólo prestándoles infraestructura y apoyo sino también evitando su criminalización.

Con enormes desigualdades entre barrios, localidades y comunidades autónomas, se ha mantenido un desigual movimiento que, en unos casos, ha acabado siendo un mero apéndice del poder pero, en otros, ha seguido representando —aunque con menos fuerza que la deseable— una cierta capacidad de alternativa social. Y aun en sus versiones más pobres ha servido, cuando menos, para organizar una voz popular frente al discurso unilateral del poder.

¿Una nueva era para el movimiento vecinal?

En los últimos años se están produciendo cambios que tienen que ver tanto con la emergencia de nuevos movimientos sociales como con nuevas orientaciones en las políticas públicas. El punto de encuentro entre ambas tendencias es el debate sobre la democracia participativa. En gran medida se trata de un mérito de los movimientos altermundistas —en especial del Foro de Porto Alegre— el que la cuestión haya pasado a formar parte del debate político, especialmente a escala municipal. Sin la continuada movilización de parte de la ciudadanía en demanda de más democracia, el tema posiblemente nunca se hubiera planteado. Pero tampoco hay que desdeñar que una parte de la izquierda institucional de este país ha tomado cuenta de la experiencia y, al menos formalmente, está tratando de introducir el tema en sus planteamientos. Lo que unos y otros persiguen es, sin duda, diferente. Para

los movimientos alternativos se trata de conseguir que el control efectivo de las decisiones colectivas pase a la ciudadanía. Lo que pretenden los políticos en ejercicio es más complejo, posiblemente una combinación de nuevas fórmulas para neutralizar a los movimientos sociales, una respuesta a una creciente demanda ciudadana, la búsqueda de nuevos modelos para movilizar a la sociedad en apoyo de los proyectos que ellos elaboran y algunas dosis de buena conciencia y afán de modernidad.

El movimiento vecinal tiene en este proceso una situación particular. En parte ha sido durante años un tenaz defensor de la participación a escala municipal. Allí donde ha sido fuerte ha exigido, y a veces lo ha conseguido, imponer la voz en los plenos municipales (o de distrito). En ciudades como Barcelona ha llegado a introducir sus propias reivindicaciones en los Planes de Actuación Municipal. Pero casi siempre se ha limitado a la definición de los pequeños proyectos, siendo excluido, de forma más o menos abierta, del debate en el diseño de la gran política. Con todo, el movimiento ha conseguido una experiencia no desdeñable, y que es sin duda útil compartir con otros movimientos. La respuesta de los poderes políticos no deja de tener inconvenientes: mientras en algunos casos las nuevas propuestas introducen algunos elementos participativos, en otros más bien parece que se trata de «descafeinar» la participación, especialmente cuando se apelan a formas de participación individual (por ejemplo ciudadanos inscritos a título individual en órganos de participación o determinadas formas de organizar la consulta telemática) confrontada a la participación organizada. Como nos dijo una vez un concejal de nuestro distrito «prefiero discutir con vecinos sin proyecto que con vosotros que tenéis opinión».

En segundo lugar, a muchas Asociaciones de Vecinos se les han planteado nuevos dilemas que apuntan a nuevas formas de organización y participación. En algunos casos, ello ha venido dado por la búsqueda de una nueva participación del vecindario en barrios donde la participación y la movilización estaban bajo mínimos. En muchos otros, las cosas vienen por la parte contraria: por la profusión de nuevas iniciativas en un mismo territorio y la necesidad de articular formas unitarias y de diálogo entre los diferentes agentes.

La respuesta una vez más ha sido diversa en función de cada situación concreta, las características personales y político-culturales de los líderes vecinales, el problema planteado, etc. Una de las respuestas más institucionalizadas ha sido la elaboración de Planes Comunitarios. Su primera experiencia tuvo lugar en el barrio barcelonés de Trinitat Nova y después ha sido extendido a otros muchos lugares. La idea fundamental es la de organizar al conjunto de fuerzas vivas del barrio en la elaboración de planes locales orientados a obje-

tivos específicos (la remodelación urbanística, la revitalización de la vida social, la acogida a los nuevos vecinos...). La novedad que introduce el esquema formalizado es que cuenta con la participación de los gestores públicos de equipamientos de barrio y con «funcionarios profesionales» que trabajan en el día a día del plan. La experiencia es ambigua y merece analizarse. La incorporación de gente con conocimientos técnicos y la profesionalización de algunos activistas contribuye a realizar un trabajo más sostenido que el basado en la habitual militancia vecinal, pero a la vez abre varios peligros no desdeñables: la suplantación de la participación efectiva por el dirigismo de los profesionales (pagados además con fondos públicos y por tanto con posibles servidumbres al poder político), la burocratización del modelo y la sustitución de la movilización reivindicativa por el mero debate. No estamos en condiciones de realizar un balance completo, pero intuimos que de la capacidad de superar estos desafíos dependerá que los planes comunitarios se conviertan en nuevas fórmulas de participación y movilización social o en meros instrumentos de control sobre la ciudadanía.

Lo que resulta más evidente es que hoy la mayoría de situaciones a las que se enfrentan los barrios son de una enorme complejidad y exigen trabajar en múltiples direcciones e integrando formas de ver complementarias, no se puede hacer una política urbanística y de transporte sin conciencia ecologista. Y muchos de los problemas de convivencia, desde los planteados por la nueva inmigración hasta la violencia de género exigen ser tratados desde una base territorial de forma integrada. Por esto es hoy más necesaria que nunca la formación de coaliciones de movimientos que colaboren y dialoguen entre sí, y de procesos de activación y participación social que los hagan posibles, sean planes comunitarios u otras formas de actuación social. Por esto el movimiento vecinal tiene la oportunidad de abrir nuevas líneas de intervención y articulación social, y algunas experiencias positivas al respecto. Pero tiene, sin duda, que partir de la conciencia de las trampas y dificultades que debe superar por el camino

De hecho, en muchos sitios ya se han dado algunos pasos en esta dirección. Es bastante habitual la formación de «plataformas unitarias» que agrupan a buena parte de las entidades locales en torno a reivindicaciones concretas, en las que se conjugan demandas de distintos sectores sociales. Es también habitual la presencia de Asociaciones de Vecinos y Vecinas en campañas organizadas por otros movimientos (por ejemplo en plataformas de apoyo a la huelga general de 2002, la campaña contra la guerra o la oposición al Plan Hidrológico). O, al menos en Barcelona, se ha llegado a confluir en plataformas de ciudad con alternativas globales en algunos ámbitos como las pioneras Barcelona Estalvia Energia o la Plataforma del Transporte Público. Una actividad que en muchos casos no sólo significa un reagrupamiento de fuer-

zas sino también una vía para interrelacionar tradiciones culturales en la búsqueda de una nueva síntesis.

En definitiva, en la fase actual cada vez resulta más evidente que el futuro del movimiento vecinal reside en una apuesta por la profundización de los mecanismos de participación y en la búsqueda de formas flexibles de relación con el tejido asociativo y cultural de cada barrio para desarrollar un verdadero proceso de intervención y elaboración social. Los mayores retos del futuro (el medio ambiente, la superación del patriarcado, la inmigración, etc.) exigen de una capacidad de mediación y síntesis que posiblemente no era necesaria en el pasado.

Comentario final para activistas vecinales y sociales

Con toda sus contradicciones y diferencias, el movimiento vecinal ha representado una de las formas más persistentes de participación social, particularmente implantada en los barrios de clase obrera, donde la gente tiene menos capacidad financiera para satisfacer sus necesidades a través del mercado y los mecanismos de «voz» colectiva son más necesarios. Desde este punto de vista, la continuidad de un movimiento social basado en el activismo voluntario es sin duda impagable y necesaria. El problema principal estriba en la falta de efectivos militantes, el envejecimiento de muchos cuadros y, a menudo, la autolimitación en las cuestiones planteadas. El movimiento requiere sin duda una revitalización y ésta sólo puede venir de buscar nuevas formas de articulación de las redes sociales que en parte están presentes en los barrios, distritos o ciudades. Y para hacerlo posible es necesario reforzar su autonomía, su carácter reivindicativo, la búsqueda de formulas de participación democrática y el hábito del diálogo, la paciencia y la crítica. El futuro del movimiento vecinal se juega posiblemente ahí y con ello las posibilidades de seguir contando con redes de intervención social a escala de barrio.

Pero esta transición tampoco será posible si no existen contrapartes en el resto de movimientos y núcleos activistas. La pérdida de vitalidad a partir de los años ochenta no sólo se produjo por los intentos de control por parte de las Administraciones o por los errores cometidos por el propio movimiento vecinal. También porque una parte de los activistas de izquierdas optaron por trabajar desde plataformas alternativas, con menor implantación territorial (al menos en el mundo urbano). Ciertamente, el conservadurismo de muchas Asociaciones y sus dependencias con los poderes municipales explican este desapego. Pero con ello se perdieron cosas importantes. Especialmente la posibilidad de intervención a escala local, el contacto y diálogo permanente con la población no politizada (una relación a menudo frustrante y siempre

laboriosa, pero absolutamente básica si lo que se pretende es conseguir cambios sociales profundos y una verdadera participación social). El repliegue espacial de muchos movimientos sociales hacia espacios específicos ciertamente hace más confortable su trabajo, pero genera el peligro del «ghetto», la autocomplacencia y el aislamiento social. Allí donde se han mantenido núcleos organizados de otros movimientos ha sido mucho más fácil generar dinámicas más complejas e integrales. Dinámicas que en muchos casos sólo pueden hacerse desde una base territorial y desde la generación de una conciencia colectiva que la misma facilita. Por esto todos los sectores implicados en un cambio social tenemos mucho que ganar si conseguimos generar potentes redes locales con participación del movimiento vecinal.

Prosperitat, Nou Barris, Barcelona, junio 2004

El movimiento ecologista. La lucha antinuclear y contra el modelo energético en España

LADISLAO MARTÍNEZ[1]

Las notas que siguen no son otra cosa que una breve historia comentada del movimiento ecologista en relación sólo con los problemas energéticos.[2] No haré, por lo tanto, referencias a las importantes luchas por la conservación de las especies, ni del territorio (ya sea para preservar en buen estado espacios naturales relativamente inalterados o para no deshumanizar en extremo los espacios fuertemente humanizados) pese a su importancia en el entorno de las grandes urbes, en zonas del litoral o en los espacios insulares;[3] ni siquiera a las decisivas luchas por un uso racional del agua, que han marcado los últimos años y que han tenido un respaldo popular inusitado y un debate de ideas que ha hecho saltar por los aires paradigmas que se han mantenido durante siglos.

Esta delimitación responde a dos razones. La primera y decisiva es que el tema elegido es de los pocos temas en que el autor de las notas se siente autorizado a opinar. La segunda es que el movimiento antinuclear fue uno de

1. Es obligatorio agradecer a Francisco Castejón sus aportaciones para este texto y reconocer la deuda con el periodista Joaquín Fernández que después se cita extensamente.

2. La descripción de las luchas de los primeros años es más detallada. Se pretende dar a conocer mejor lo que con alta probabilidad desconocen la mayoría de los activistas actuales. Es también un reconocimiento a la importancia de aquel periodo —en mi opinión, importancia mayor que otros más recientes.

3. Las luchas en defensa del territorio en Baleares o Canarias han sido por el nivel de respuesta social y por la originalidad de sus planteamientos, luchas punteras del ecologismo.

los pilares esenciales del entonces incipiente movimiento ecologista y, más en concreto, de las corrientes más «radicales» o «sociales» del mismo, y que los problemas energéticos se han mantenido sin demasiados cambios esenciales como un objeto de preocupación dentro del ecologismo.

Hay dos hipótesis que desearía formular anticipadamente:

Primera. Los condicionantes económicos son decisivos en la aparición de los problemas ecológicos. En mi opinión, no cabe interpretar los problemas como una mera pugna entre razón tecnológica/razón ecológica, o en otros términos como meras expresiones del conflicto entre tecnosfera y biosfera,[4] porque, aunque estos enfoques suministran claves de interpretación útiles, omiten referencias a las causas que son bien visibles cuando se analizan los intereses económicos. Valga el siguiente ejemplo para ilustrarlo: el estado español no se nuclearizó porque un buen número de técnicos se sintieran fascinados por el reto que implica «dominar» la energía nuclear, sino principalmente porque un grupo de oligarcas pensaron que la energía nuclear era un lugar excelente para la realización de beneficios. Volveré sobre ello más adelante.

Segunda. Nadie discute que el despliegue de un discurso bien articulado, basado en el paradigma de la ecología como ciencia y capaz de descender hasta la explicación coherente de múltiples problemas sociales y económicos prácticos, ha sido un elemento determinante de los distintos éxitos del ecologismo. A pesar de ello, los «saltos cualitativos» del ecologismo sólo se han producido cuando el movimiento ecologista ha sido capaz de ir mucho más allá de sus formas organizativas estables y se ha convertido en germen de un movimiento social amplio. Sirva de nuevo un ejemplo para ilustrar esto: la crítica ecologista al desarrollo del urbanismo y las infraestructuras de transporte no ha sido menos vigorosa y fecunda que la realizada contra la energía nuclear o los modelos de utilización del agua. Sin embargo, mientras la primera se ha saldado con un rotundo fracaso, visible en el crecimiento hasta ahora ilimitado de la edificación y de las carreteras, las otras dos no: no se construyen centrales nucleares en casi ningún lugar del mundo industrializado, y en nuestro país se acaba de abandonar el último gran trasvase. Ello es así porque en estos dos últimos casos junto a la crítica se ha desarrollado un amplio movimiento social capaz de contribuir al cambio político. Algo que no se ha producido en el primero.

---

4. Estos términos se emplean en el sentido en que les da Barry Commoner en su libro *En paz con el Planeta*, Barcelona, Crítica, 1992.

Repasando la historia

Comenta Joaquín Fernández en su excelente obra *El ecologismo español*[5] que «la decisión de construir las primeras centrales nucleares se tomó en una reunión celebrada en Olaveaga (Bilbao, 1956) a la que asistieron tres personas: el banquero José Mª Oriol y Urquijo, como representante del sector eléctrico; Leandro José Torrontegui por la industria y José Mª Otero Navascúes por la administración». El llamado «Pacto de Olaveaga» supuso el impulso definitivo a lo que venían siendo propuestas más o menos formales de científicos y técnicos (sobre todo militares) interesados en reconvertir a usos civiles lo que había nacido para aplicación militar. «Tras la aprobación por las Cortes franquistas de la Ley de Energía Nuclear (1964), elaborada a medida por técnicos de la Junta de Energía Nuclear (JEN), entran en funcionamiento las centrales nucleares de la llamada primera generación: Zorita (Guadalajara), Santa María de Garoña (Burgos) y Vandellós I (Tarragona) en 1968, 1971 y 1973 respectivamente». Se trata de centrales de tres tipos de tecnologías diferentes: norteamericana de tecnología Westinghouse la primera (agua a presión), también norteamericana de General Electric la segunda (agua en ebullición) y francesa la tercera (de grafito-gas). Las tres se construyen sin ningún tipo de oposición –por razones obvias cabría decir– con el sistema de llave en mano y muestran la indisimulada voluntad del Gobierno de explorar las ventajas de todo tipo de tecnología.[6]

Pero esta misma elección de reactores prueba que no anduvo muy fino el grueso del movimiento ecologista del estado español cuando insistió en que la clave de la nuclearización del país era el deseo del gobierno de disponer de la bomba atómica. De los tres reactores señalados (y de los que vendrían después) sólo el de Vandellós I era capaz de fabricar en determinadas condiciones Plutonio de grado militar.[7] Algo que sí podía conseguirse en alguno

---

5. *El ecologismo español*, Madrid, Alianza Editorial, 1999, págs. 115 y 116. Muchas de las referencias históricas citadas están tomadas de este texto.

6. Para recrear el surgimiento del movimiento antinuclear, un libro imprescindible es el de Pedro Costa Morata *Nuclearizar España*, Barcelona, Los Libros de la Frontera, 1976. Como merecidamente aparece en su portada esta obra es «un riguroso estudio crítico sobre las centrales nucleares». Máxime si se tiene en cuenta la fecha de publicación.

7. La explicación reside en que el plutonio existe sobre todo en forma de 4 isótopos de masa atómica consecutiva, prácticamente imposibles de separar por métodos químicos. De ellos, sólo los impares (Pu-239 y Pu-241) son fisionables. Plutonio de grado militar es el que no contiene más del 5% de isótopos pares, ya que estos dificultan reacción en cadena «incontrolada» característica de una bomba atómica. Ninguna de las centrales españolas podía fácilmente producir plutonio de uso militar.

de los reactores experimentales de los que disponía la Junta de Energía Nuclear (JEN) en sus instalaciones de Madrid desde 1958, en que alcanzó la criticidad el reactor JEN-I.[8] En resumen, las condiciones técnicas ya existían desde antes de poner en marcha las centrales y además las tecnologías elegidas (que fueron diversas) no eran adecuadas para dicho fin.

La verdadera razón por la que se nuclearizó el país fue, sirva la paradoja, para obtener beneficios en la construcción de las centrales nucleares. Familias de oligarcas provenientes de sector bancario, controlaban simultáneamente los consejos de administración de las eléctricas, las constructoras y de ingeniería y las compañías de bienes de equipo. La construcción de centrales nucleares, por los riesgos implícitos de la materia prima que se emplea, son extremadamente intensivas en capital, que se tomaba prestado de «sus» bancos. Requiere de complejos proyectos de ingeniería, que recaían en «sus» compañías aportando grandes beneficios. Requiere también de laboriosos procesos de construcción y adquisición de complejos equipos, que por supuesto se contrataban a las empresas participadas aumentando los beneficios de los oligarcas. En los orígenes se tenía previsiones de que pese a todo, la energía nuclear resultaría muy barata con lo que a los beneficios de las compañías ya citadas habría que añadir los de las propias eléctricas. En resumen, la energía nuclear era para sus promotores un lugar seguro de obtener beneficios a través de distintas empresas en las que participaban.

Apellidos como Oriol, Ibarra, Urquijo, Botín... se repiten en los consejos de administración de las compañías de todo tipo que están detrás de la nuclearización.[9]

Pero el negocio de producir energía nuclear no iba a resultar tan próspero como se prometía. El inicio de una gran oposición internacional (a la muerte

8. Cosa distinta es que efectivamente durante la última etapa del franquismo, con el impulso de Carrero Blanco, y los gobiernos de UCD, sobre todo con Rodríguez Sahún como Ministro de Defensa, se realizaran diversos intentos de fabricar la bomba atómica. Pero nunca a partir de combustibles usados de centrales nucleares.

9. Dos textos permiten entender con claridad quienes y como fueron responsables de la nuclearización. El de S. Roldan, J. Muñoz y A. Serrano *¿Qué es el capitalismo español?*. Ed. Al Gaya. 1977. y «La configuración del sector eléctrico y el negocio de la construcción de centrales nucleares». A. Serrano y J. Muñoz, *Cuadernos de Ruedo Ibérico*, nº 63/66- 1979. Recuérdese que tras las ya citadas centrales de la primera generación se acometieron con gran decisión la lluvia de proyectos de 2ª y 3ª generación que era en la que se esperaba obtener grandes beneficios. El comportamiento de los «nuclearizadores» en el inicio de los 80, cuando la crisis ya era inocultable, se encuentra en «Planificar si energía nuclear» texto mecanografiado de AEDENAT del año 1987.

de Franco también en este país) desencadenó una mayor exigencia de seguridad para las plantas y una demora en los ritmos de construcción. Las centrales pasaron, de construirse en cinco años a necesitar más de diez, por lo que se realizaban grandes inversiones que cada vez tardaban más en empezar a amortizarse. En nuestro país esto originó una espiral fatal para esta energía. Fueron años de alta inflación, lo que aumentó sobremanera el coste del capital. Como además la apuesta fue tan desmesurada fue necesario salir al mercado internacional a la búsqueda de más capitales. Los capitales tomados en préstamo se vieron además afectados por la bajada de la peseta que supuso un encarecimiento adicional. Muchas plantas compraron dólares a unas 60 pesetas y debieron devolverlos a 180 pesetas. La gallina de los huevos de oro devino en un negocio ruinoso. La respuesta del sector oligárquico impulsor se ajustó a las pautas del capitalismo moderno. Se deshicieron de sus participaciones bursátiles en las compañías eléctricas, manteniendo en todo caso el control de los consejos de administración para seguir orientando las inversiones hacia otras compañías en que su participación accionarial era mayor. En resumen se pretendía controlar el máximo de capital ajeno con el mínimo de capital propio al tiempo que se maximizaban los beneficios a nivel de grupo. Cuando el sector eléctrico se estrelló en bolsa, los responsables sólo tenían ya participaciones simbólicas. Los pequeños accionistas mal informados y los usuarios eléctricos fuimos los paganos de estos errores.

Pero volvamos de nuevo a hablar de los proyectos nucleares. En el Plan Energético Nacional de 1975[10] no sólo se contemplaban la construcción de siete centrales de la llamada segunda generación (Almaraz I y II, Ascó I y II, Lemóniz I y II y Cofrentes, todas ellas de una potencia entonces ligeramente menor de 1000 MW eléctricos), sino una marejada de proyectos de la llamada tercera generación hasta completar un total de ¡37 grupos nucleares! Ni el crecimiento económico más optimista hubiera podido justificar tamaño despliegue energético.

En respuesta surgen un buen número de colectivos que desde una adscripción al entonces naciente Movimiento Ecologista (es el caso de AEORMA que después originaría AEPDEN), desde la respuesta local contra un proyecto de central que se rechazaba (como la Comunidad de Regantes de Badajoz que resultó decisiva en la lucha contra Valdecaballeros), desde la proximidad política indisimulada a las pocas formaciones políticas que rechazaron desde

10. Este PEN se presentó impúdicamente en las Cortes con papel con membrete de UNESA (la patronal eléctrica) en un alarde para demostrar quién mandaba aquí realmente.

siempre el uso de la energía nuclear,[11] o desde posiciones profesionales (como el Comité Antinuclear de Cataluña –CANC– que editaba el inolvidable BIEN –Boletín de Información sobre la Energía Nuclear– o sectores de la Comisión de Defensa de una Costa Vasca No Nuclear) fueron confluyendo hasta dar origen a la Coordinadora Estatal Antinuclear (CEAN), que impulsó, dinamizó y coordinó las luchas. Su constitución formal se produjo tras una reunión celebrada en Soria en mayo de 1977, «abierta a todas las fuerzas populares que luchan contra la agresión que suponen las instalaciones nucleares....Es el primer paso para la constitución en un futuro inmediato de la Coordinadora Estatal de Defensa del medio Ambiente».[12]

En el texto es bien visible el tono militante y profundamente de izquierdas de la proclama que critica la dependencia de EEUU que se genera, que alude a la corrupción municipal o al nefasto papel de la JEN en la promoción de esta energía entre otras cosas. Hay que resaltar que la reunión de Soria se produjo contra la pretensión de ampliar las instalaciones de la JEN con el fin, en este caso sí, de disponer de tecnología nuclear pensada para desarrollar el arma atómica. El proyecto, tras varios frenazos provocados por la falta de fondos y la oposición creciente, se paró definitivamente con la llegada del PSOE al poder en 1982. Hay que señalar también que, en la pretensión de crear una coordinadora estatal para todos los problemas ambientales, se refleja el papel de germen que el movimiento antinuclear tuvo en la creación del movimiento ecologista. Cosa distinta es que la propuesta concreta que se indicaba nunca llegó a materializarse.

En una prueba de lo que eran las formas organizativas del ecologismo, la CEAN nunca tuvo una estructura estable. En cada reunión un colectivo designado previamente se hacía cargo de resolver el alojamiento y el lugar de

11. Los grupos políticos que apoyaron desde el principio la protesta antinuclear fueron fundamentalmente el mundo libertario, los de izquierda extraparlamentaria de la época (PTE, MC, LCR,...) además de algunas formaciones de izquierda nacionalista (singularmente el BNPG de Galicia, la izquierda abertzale vasca en sus distintas opciones de la que hablaremos al comentar la lucha de Lemóniz, y los diversos colectivos de izquierda nacionalista catalana). Sin embargo el PCE mantuvo una línea mucho más equívoca apoyando ciertas movilizaciones antinucleares, pero manteniendo una posición favorable a este tipo de energía. Todavía en 1979 Santiago Carrillo señalaba que «un país que renuncia a la energía nuclear es un país que renuncia al progreso». Del PCE se fueron desgajando grupos de ingenieros, que influyeron mucho en la definición de su línea política y que desempeñaron cargos importantes en los gobiernos del PSOE. Fueron paradójicamente su sector pronuclear. Un ejemplo es Eduardo González, que trabaja en la construcción de Lemóniz, pasa después al CSN donde ejerce de Director técnico, de Consejero y de Vicepresidente y que en la actualidad es presidente del Foro Nuclear. Posteriormente, ya con IU se apoyaron claramente posiciones antinucleares.
12. Del texto original mecanografiado, 1977.

encuentro, que giraba continuamente por todo el estado. No se solían levantar actas,[13] era continúa la entrada y salida de grupos en cada reunión (abundaban, eso sí, los que recién llegados explicaban a los demás porque había que oponerse a la energía nuclear o «descubrían» formulas de intervención novedosísimas que todos los demás ya habían ensayado y rechazado...), la impuntualidad tras las interminables noches de fiesta era absoluta, los documentos acordados se extraviaban con cierta frecuencia... Pero, tan caótica organización era capaz de coordinar acciones con una eficacia que no puede dejar de sorprender, aseguraba un flujo eficacísimo de información y conocimientos, sabía hacer crecer luchas sociales en sitios tradicionalmente considerados como baldíos por la izquierda sindical y política y pervivió durante más de 20 años celebrando reuniones con periodicidad tri/cuatrimestral, manteniendo siempre «la memoria de las luchas».

Repasar puntualmente como se desarrolló cada lucha concreta alargaría innecesariamente estas notas. Pero no sobra comentar que sólo llegaron a funcionar diez reactores en siete plantas distintas (Zorita, Garoña, Vandellós I, Almaraz I y II, Ascó I y II, Cofrentes, Vandellós II y Trillo). Las restantes no pasaron de ser un proyecto sobre un papel o su construcción se vio interrumpida por la moratoria decretada en 1984. Pero esto es avanzar acontecimientos.

El movimiento antinuclear se desarrolla en un momento histórico con el que evidentemente tiene muchas similitudes. Es uno más de las decenas de movimientos sociales que hicieron eclosión en la transición democrática. Esta eclosión se produjo en medio de circunstancias paradójicas, ya que, de un lado, se producían intentos de represión por parte del poder que hoy resultan inconcebibles, mientras que, por otro, se daban trasgresiones de normas inimaginables ahora y manifestaciones prácticas de conciencia alternativa y de doble poder por parte de amplios sectores sociales, igualmente sorprendentes contempladas hoy.

Algunos ejemplos pueden ayudar a recrear la situación. La movilización contra la central nuclear de Valencia de Don Juan (León), no fue de las más vigorosas, aunque culminó con el abandono del proyecto. El 14 de marzo de 1975 se intentó convocar una mesa redonda en el Hostal San Marcos de León a la que se había invitado a 44 alcaldes de la comarca. El acto se prohibió y

13. Aunque los cuadernos multicolores y superorganizados de Nicolás M. Sosa (ya fallecido) resolvían todas las polémicas sobre acuerdos anteriores. Su infrecuente ausencia de una reunión podía ser entonces un verdadero problema.

el secretario general de AEORMA pasó dos días en prisión. Las manifestaciones para exigir su puesta en libertad y la dimisión del Gobernador acabaron con más detenciones.[14]

En septiembre de 1976 es procesado el periodista Antonio Espadas por publicar en la revista *Personas* un artículo de denuncia sobre los problemas del emplazamiento elegido para la central nuclear de Ascó II. Quedó en libertad bajo fianza con una multa de 2 millones de pesetas. La polémica sirvió de argumento a Pilar Miró para su película «Hablamos esta noche» (1982).[15] Efectivamente el grupo II de Ascó está ubicado sobre arcillas expansivas, que por efecto de la lluvia, se hinchan, produciendo elevaciones diferenciales. La central siempre ha estado sometida a un programa de vigilancia para asegurar que los equipos y sistemas funcionen correctamente ya que los desplazamientos diferenciales pueden tener incidencia en ellos.

El entonces secretario de Energía y recursos Mineros, Luis Magaña, que luego presidiría FECSA tras su quiebra, señaló en el periódico *Las Provincias* (2/12/79) que «las manifestaciones antinucleares son 500 pesetas y un bocadillo», algo que no se sabe si pagaba el oro de Moscú o era una evocación nostálgica de las manifestaciones de adhesión inquebrantable a Franco.

Pero también se produjeron formas de resistencia que no pueden dejar de sorprender. Por ejemplo, el intento de construir una central en L´Ametlla del Mar (Tarragona) enfrentó una durísima oposición con un protagonismo destacado de la Cofradía de Pescadores. Enrique Rebull, el patrón de la cofradía ejerció un liderazgo indiscutible. Cuando los trabajadores de FECSA fueron a adquirir los terrenos, tropezaron con la oposición activa de los habitantes de la zona, llegando a ser agredidos. Rebull acabó en la cárcel de la que salió para pacificar la zona y evitar «males mayores». La población rodeaba continuamente el lugar de detención en actitud poco amistosa con las fuerzas del orden. La planta no se construyó.

Igualmente épica fue la lucha contra la planta de Ascó que se terminó poniendo en marcha. En el pueblo del mismo nombre la polarización fue extrema entre los trabajadores de la planta y las personas que desarrollaban otro tipo de actividades. El párroco Miguel Redorat asumió un protagonismo indiscutible utilizando el púlpito para lanzar soflamas incendiarias contra la planta y llegando a prohibir a las autoridades su presencia en las procesiones. Tras algunas dudas, el obispo de Tarragona terminó llamándolo al or-

14. Joaquín Fernández, *op. cit.* pág. 121.
15. *Ibídem*, pág. 122.

den. Las elecciones municipales fueron momentos de tensión extrema. Joan Carranza, que dirigía una candidatura antinuclear, ganó en 1979 y durante 4 años usó el ayuntamiento como ariete contra la planta que se seguía construyendo a gran ritmo. En 1983, todos los trabajadores que construían la planta fueron obligados a censarse y esto provocó un vuelco en el resultado electoral. El ayuntamiento se convirtió en un feudo pronuclear y la resistencia declinó.

Valdecaballeros y Lemóniz

Valdecaballeros y Lemóniz son los dos éxitos más notables de la lucha antinuclear. Ambas centrales interrumpieron muy avanzado su proceso de construcción y nunca llegaron a ponerse en marcha. La oposición a una y otra tuvieron características bien distintas y merece ser comentada.

El rechazo al proyecto de Valdecaballeros no puede dejar de sorprender, sobre todo teniendo en cuenta que en Extremadura había otros dos grupos nucleares más avanzados (en Almaraz) que apenas si suscitaron oposición. A destacar el papel de ADENEX, histórico grupo ecologista con fuerte implantación regional que hizo de la lucha contra las centrales uno de sus signos de identidad. Pero junto a ellos amplios sectores populares que incluían las comunidades de regantes de las vegas bajas de Badajoz entendieron que la planta significaba un riesgo para su producción y una merma del agua disponible para sus cultivos. Las Comisiones de afectados, nombre que se dieron los sectores opositores, mantuvieron activa la llama de la movilización desde la segunda mitad de los 70 hasta su paralización. Se produjeron cientos de pequeños actos de rechazo en muchas localidades de la zona que culminaron con el encierro de 130 alcaldes en agosto de 1979 en Villanueva de la Serena. Las movilizaciones continuaron a gran nivel posteriormente.

No se haría justicia si no se reconociera el papel decisivo de un destacado miembro del Partido Socialista proveniente de grupos cristianos libertarios, Juan Serna, que llegó a ser Consejero con Rodríguez-Ibarra y que fue un factor decisivo en toda la lucha antinuclear. Él fue uno de los dinamizadores primero de la oposición social y responsable después de la implicación del PSOE extremeño en la oposición antinuclear, lo que fue un factor singular en todo el territorio español y decisivo en su éxito. Si en el momento de la moratoria se paralizó Valdecaballeros y continuaron los proyectos de Vandellós II y Trillo (no más avanzados en su proceso de construcción) una de las claves fue el rechazo social, y sin lugar a dudas otra, el rechazo casi en bloque del PSOE extremeño que además mantenía fuertes relaciones con el entonces omnipotente Alfonso Guerra.

Pero es sin lugar a dudas la lucha contra la central de Lemóniz la que alcanza la cota más alta de movilización, respuesta social y dramatismo. En ella se mezclan acciones de protesta convencional, como manifestaciones, presentaciones de informes o actos de divulgación, con sabotajes contra instalaciones de todo tipo de la compañía promotora y atentados contra personas. Un relato sucinto de los acontecimientos merece con justicia las páginas de un libro. Lo que sigue es, por lo tanto, solamente la exposición de los hechos a mi juicio más importantes.

Aunque los colectivos en la lucha contra Lemóniz fueron muchos y de diversa índole, es justo reconocer el protagonismo de la Comisión de Defensa de una Costa Vasca no Nuclear creada en los primeros 70 a partir de diversos colectivos vecinales, culturales, ecologistas y sociales. Cuenta con el respaldo implícito de las distintas formaciones de la izquierda nacionalista en su compleja singladura.[16] Creo que es de justicia reconocer, que salvo algunas excepciones personales en la etapa inicial, el grueso de lucha contra Lemóniz descansa sobre las espaldas de la izquierda nacionalista, aunque un número no despreciable de los que participaron en ella, haya renunciado después a dicha adscripción política.

Quizá la primer gran movilización en la calle contra Lemóniz tuvo lugar el 29 de agosto de 1976, cuando más de 50.000 personas piden una costa vasca no nuclear, rechazando además de Lemóniz otros proyectos que entonces estaban en discusión (Deva o Ea-Ispaster). A la cabeza de la misma una nutrida representación del mundo de la cultura y destacados intelectuales. Entre ellos se encuentra Chillida, una de cuyas esculturas fue durante muchos años el icono más representativo del rechazo a la energía nuclear.

El momento álgido de movilización social se produce en 1977. El 31 de marzo la Diputación de Vizcaya modifica el Plan General de Ordenación Urbana de la comarca de Plencia-Munguía donde se situaba la central pasando de rústicos a industriales. En junio, los ayuntamientos de Murguía y

16. La Comisión fue un órgano amplio que a lo largo de su vida, de al menos 10 años, varió considerablemente su composición. Creo que no es muy inexacto señalar que en su última etapa derivó hacia formas más explícitamente ecologistas como los Comités Ecologistas y Antinucleares que a su vez con el paso del tiempo derivaron en otros grupos más específicos como Eguzki o Eki. Por otro lado, la Izquierda Abertzale tuvo también una singladura complicada. En la primera legislatura bajo el nombre de Euzkadiko Ezkerra colocó un Diputado en las cortes. Posteriormente siguiendo la evolución de los grupos armados se desgajó en una formación que mantuvo el nombre y otra con características de frente popular llamada Herri Batasuna. Tanto en la Comisión, como posteriormente en los Comités era importante la presencia de miembros de otros colectivos de izquierda como EMK o LKI.

Lemóniz recurren la recalificación de terrenos decretada por la Diputación. Es evidente que el rechazo social contaba ya con un cierto respaldo de las instituciones más próximas. La Comisión de Defensa de una Costa Vasca no Nuclear solicita una nueva manifestación en Bilbao esperando superar el éxito de la del año anterior. El Gobierno la deniega. La Comisión se dirige en tono dramático a las fuerzas políticas y sindicales indicando que se están acabado las acciones jurídico-administrativas y les pide respaldo firme ante el nuevo atropello del Gobierno Civil. Obtiene el respaldo de muchas organizaciones y el Gobierno Civil decida autorizar la marcha el 14 de julio, en pleno verano. El ambiente de tensión radicaliza las posiciones y más de 200.000 personas salen a la calle en la que casi con seguridad ha sido la mayor manifestación antinuclear mundial de todos los tiempos.

Desde unos meses antes de la gran manifestación ETA decide intervenir en el conflicto. Aunque ETA(m) se muestra mucho más activa, ETA(p-m) interviene esporádicamente. El 3 de enero estallan dos bombas en el comedor de la central. En diciembre ETA (m) ataca el cuartel de la guardia civil que custodiaba la central y resulta herido un miembro del comando que muere días después. Joaquín Fernández[17] cita fuentes de Iberduero señalando que en 1977 se produjeron 80 ataques contra sus instalaciones y oficinas. En marzo de 1978 dos trabajadores de la central mueren en un atentado. En junio de 1978 muere otro trabajador en atentado.

El 28 de marzo de 1979 tiene lugar el accidente de Harrisburg (EE.UU) que provoca un durísimo varapalo a la credibilidad de la industria nuclear. Su reflejo en la suerte de Lemóniz fue muy grande. El Consejo General Vasco acordó nombrar una comisión de expertos que se desplazara a EEUU en abril de 1979. Su informe presentado en junio, además de describir el incidente incluía las valoraciones de los expertos. Ulises Ruíz (propuesto por el PSE-PSOE) y Javier Olaverri (propuesto por Euzkadiko Ezkerra) presentaron las suyas, muy críticas conjuntamente. Las últimas de ellas se refieren a Lemóniz y en la 28 y última se dice que «consideramos conveniente y recomendamos al Consejo [General Vasco] el paralizar la central nuclear de Lemóniz». Las conclusiones de los miembros propuestos por PNV y UCD fueron bien distintas. El Consejero de Industria y Energía del Consejo General Vasco, José Luis Robles, calificó las consideraciones sobre Lemóniz de los críticos como innecesarias, ya que nadie se las pedía.

En medio de una tensión creciente en agosto de 1979 la Comisión convoca una marcha de doce días que recorriendo el País Vasco concluirá en Lemóniz.

17. *Op. cit.* pág. 130.

La represión es atroz y los enfrentamientos con la policía son diarios. No obstante más de 15.000 personas acuden al acto final en un ambiente de euforia. El nuevo Plan Energético que desde 1978 tramita el Gobierno de la UCD, abandona todos los proyectos de centrales nucleares en la Comunidad Vasca y Navarra... salvo Lemóniz. Pero las voces que piden el abandono del proyecto no dejan de crecer.

El 27 de diciembre de 1979 el ayuntamiento de Lemóniz ordena ejecutivamente paralizar los usos del suelo y los actos de edificación de la central. Pero la capacidad de presión de Iberduero se hace notar consiguiendo que el Consejo de Ministros recalifique, usando facultades excepcionales, los usos del suelo y legalizando a posteriori una situación anómala que se arrastraba desde 1972.[18]

El 13 de junio de 1980 el Parlamento autónomo vasco aprueba la celebración de un referéndum que nunca se celebrará. En los últimos años de los 70 empieza a aparecer un grave problema de disciplina dentro de los trabajadores que construyen la planta. Son frecuentes los gritos y gestos antinucleares, los enfrentamientos incluso físicos con los capataces e ingenieros y los actos de sabotaje. Muchos ingenieros no se recatan en afirmar que no pueden descartarse fallos futuros de funcionamiento de la planta por estos sabotajes.

A finales del año la situación era de máxima tensión. Las movilizaciones sociales seguían siendo fuertes aunque no se repetían los hitos más altos, proseguían las actuaciones de sabotaje a instalaciones y oficinas de Iberduero, pero esta compañía mantenía una firme decisión de seguir adelante con el proyecto y contaba para ello con fuerte respaldo político del gobierno central de la UCD y del grueso del PNV. ETA(m) dio un salto cualitativo en su enfrentamiento secuestrando al ingeniero-jefe José Mª Ryan, hombre próximo al PNV y que había adquirido cierta notoriedad a raíz del accidente de Harrisburg (EEUU) de 1979, cuando fue enviado allí por Iberduero junto a otras dos personas y emitió un informe nada crítico y bastante exculpatorio de lo ocurrido.[19] Aparece asesinado el 29 de enero de 1981. El proyecto se desmorona. Son pocos los ingenieros que se atrevan a entrar a trabajar en la planta, la tensión es máxima.

Iberduero entiende que ya no puede seguir con el proyecto y se plantea la constitución de una sociedad pública para continuar con la obra. El 5 de

18. Santiago Vilanova. *El Síndrome Nuclear.* Barcelona, Editorial Bruguera, 1980, pág. 208.
19. *Ibidem*, págs. 204 y sig. Es de resaltar el fuerte contraste entre dicho informe y el que emitió el enviado por la Generalitat, el físico Lloret, mucho más crítico con lo ocurrido y su alcance. Algunos comentarios sobre este informe se encuentran en el anexo VII de esta obra. Comentarios sobre el informe al Consejo Genaro Vasco aparecen en el anexo II.

mayo de 1982, coincidiendo con la constitución de dicha compañía, ETA (m) acaba con la vida del nuevo ingeniero-jefe de la central, Ángel Pascual. Es el fin. Todo el mundo entiende ya que Lemóniz no se va acabar. Hay que esperar sin embargo hasta 1984 para que el PSOE en el gobierno decrete la moratoria nuclear que afecta a Lemóniz (I y II), Valdecaballeros (I y II) y Trillo II. La construcción de esta última apenas se había iniciado.

Creo que en su muy citada obra *El ecologismo español*, no acierta Joaquín Fernández[20] al establecer la posición del momento del ecologismo español en relación con la irrupción violenta de ETA, aunque los ejemplos que cita son exactos. No recuerdo la existencia de fuertes debates en el seno del ecologismo, no me parece exacto «que una parte importante de los antinucleares vascos mantuviera cierta ambigüedad en la condena de estos hechos» (referido a los asesinatos). Mi impresión de lo que entonces ocurría en el movimiento antinuclear, es que, con contadas excepciones, casi todo el mundo disculpaba o incluso aplaudía las acciones que entonces se realizaban. En el movimiento antinuclear vasco la proximidad a la acción de ETA era aún mayor. Todo ello con independencia de que estas posiciones hayan podido ser después corregidas o matizadas o que pueda parecer contradictorio este apoyo y los fuertes lazos existentes entre ecologismo y pacifismo.

Para entender esto no debe olvidarse la dureza del momento. En casi todos los textos editados en ese momento hay referencias al asesinato a manos de la policía de Gladys del Estal el 3 de junio de 1979 en una manifestación contra el polígono de las Bardenas que también tenía referencia al proyecto de central nuclear previsto en Tudela.[21]

La moratoria

Ya ha quedado dicho que tras su victoria electoral por mayoría absoluta, el PSOE aprobó el plan energético de 1984 decretando la moratoria de 5 plantas que tenían «autorización de construcción». En ellas, se pararon las obras afectando a un total de casi 4.500 MW. Antes de la paralización y varios años después, la prensa rivalizó por pronosticar apagones, que sin embargo nunca se produjeron. Era evidente que además de la oposición social había un exceso de potencia de generación en construcción.

---

20. *Ibid*., págs. 122 y 123.

21. En un apretado repaso de textos a mano el libro «Modelo energético de tránsito» de la Comisión de energía de AEPDEN. Miarahuano. Madrid. 1979, o el ya citado «El síndrome nuclear» de Santiago Vilanova están dedicados a Gladys. Mi propia tesina ¡sobre cinética química! tenía la misma dedicatoria.

Por semejante «error» en las previsiones se invirtieron 460.000 millones de pesetas en unos activos absolutamente improductivos (ver tabla adjunta). Más sorprendente resulta aún que, pese a ello, se reconocieran a los propietarios derechos a cobrar por dichas inversiones y que los activos se revalorizaran a una tasa media anual del 12% hasta mitad de los 90. Pagamos los usuarios eléctricos a través de la factura eléctrica y desde 1984 se vino destinando algo más del 3,5% de lo recaudado. Como las cantidades destinadas no alcanzaban a pagar los intereses la «deuda» no paró de crecer en términos nominales, entre 1984 y el 2000.

CENTRAL	**Fecha de inicio de construcción**	**Empresas titulares**	**Inversión reconocida a 31/12/ 84 (M. pta)**
Lemóniz (I y II)	Marzo 1974	100% Iberduero	262.855
Valdecaballeros (I y II)	Agosto 1979	50% Hidrola y Sevillana	185.428
Trillo (II)	Noviembre 1980	60% Unión-Fenosa 40% Endesa	8.958

En la Ley eléctrica de 1994 se declaró la paralización definitiva de dichas plantas. Además, se reconoció el derecho de los titulares a percibir compensaciones con cargo a las tarifas eléctricas por las inversiones realizadas y los costes de financiación asociados. Dos años después los «derechos de la moratoria se convirtieron en títulos o valores negociables a colocar entre los ahorradores finales a través de los llamados 'Fondos de titulación de Activos' resultantes de la moratoria nuclear».

La moratoria ha significado que unos activos que siempre se supo que serían improductivos pasaran de valer 460.000 millones en 1984 a 458.000 a finales de 2001. Y que además en este período se haya pagado a través de las tarifas eléctricas casi 1,1 ¡billones! de pesetas. La bajada del precio del dinero, el incremento del consumo eléctrico y el sistema de titulación está permitiendo que se termine de pagar este compromiso y se estima que en el 2007 los usuarios habremos terminado de pagar aquel error de los años 70. Desde el año 2000 venimos pagando anualmente más de 80.000 millones de pesetas al año.

La moratoria ha resultado un gran negocio precisamente para quienes fueron responsables de construir unas centrales que obviamente resultaban innecesarias. La sociedad ganó su batalla por detener el crecimiento del uso de la tecnología nuclear, pero los promotores hicieron un buen negocio.

Residuos Radiactivos y cierre anticipado

Tras la paralización del programa nuclear las luchas de oposición declinaron. La gestión de los residuos radiactivos se convirtió en un elemento crucial. La primera lucha en este campo fue la oposición al vertido de residuos radiactivos en la Fosa Atlántica, a 700 km. de Galicia. Los vertidos se produjeron entre 1967 y 1983.

La oposición adquirió importancia a partir de 1981 debido sobre todo a las espectaculares acciones de Greenpeace que llegó a colocar barcos neumáticos bajo los bidones, con evidente riesgo físico para los y las activistas. A partir de entonces se produce un salto cualitativo en la oposición y ecologistas, cofradías de pescadores, sindicatos, partidos y ayuntamientos unirían sus fuerzas para detener el vertido. El momento álgido de la respuesta se produce en 1983 con motivo de la 7ª reunión del Convenio de Londres de vertido de residuos al mar. Entre finales de junio y principios de julio se producen importantes movilizaciones en Galicia que cuentan con importante eco en el resto del país. El 11 de julio los sindicatos de estibadores ingleses escriben una de las más hermosas páginas del sindicalismo con ribetes ecologistas e impiden la carga del Atlantic Fisher con 4000 toneladas de residuos radiactivos. La Convención aprueba en 1983 una moratoria de vertidos que no acepta Margaret Thatcher, que se queda sola ante la comunidad internacional. En la reunió de 1985, la Convención aprueba la propuesta del Gobierno Español de moratoria indefinida que se convierte en definitiva en 1993.

Otras movilizaciones importantes se produjeron contra la construcción de un laboratorio experimental subterráneo en 1987 en los Arribes del Duero. Los vecinos retienen a un diputado socialista, hay movilizaciones reiteradas (llegando a salir 20.000 personas a la calle el 26 de abril) y en septiembre se produce la voladura de una torreta eléctrica y encierros en más de 20 ayuntamientos. En octubre, el gobierno del PSOE paralizó el proyecto «por falta de fondos». El fenómeno se repite en Nombela (Toledo) cuando se pretende realizar un proyecto de investigación subterránea con residuos radiactivos entre 1990 y 1994. En ambos casos, Enresa (empresa encargada de gestionar los residuos radiactivos), negó reiteradamente que su intención fuera hacer un cementerio nuclear.

A raíz de que AEDENAT hiciera público las zonas que se estudiaban para ubicar el almacén definitivo de residuos de alta actividad –uno de los secretos mejor guardados de Enresa– se produjeron, en la segunda mitad de los 90, importantes movilizaciones en muchas de esas zonas. Destacable es quizá la de la zona de Los Pedroches (Córdoba).

El objetivo del ecologismo de impedir la gestión definitiva de los residuos radiactivos de alta actividad hasta conseguir el compromiso de cierre de las centrales, hasta ahora se ha cumplido de forma precisa. No cabe decir lo mismo de su proyecto de impedir la construcción de almacenes de residuos de media y baja actividad ya que funciona uno en El Cabril (Córdoba).[22] Igual ocurrió con los intentos de intentar forzar el cierre de la central de Trillo impidiendo la construcción de un almacén temporal de residuos de alta. Las movilizaciones en uno y otro caso, en cualquier caso, fueron importantes.

El 19 de octubre de 1989 se produjo un incendio en la sala de turbinas de la central de Vandellós I que se extiende por otros elementos de la central. Dos de los cuatro «turbosoplantes», elementos para refrigerar la planta se ven afectados y fallan, mientras las partes bajas de la instalación se inundan con agua. El accidente ocasiona severos daños a la planta. Se descubre además que el incendio se había provocado porque los propietarios de la planta habían hecho caso omiso de las obligaciones impuestas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de implantar una serie de mejoras en la seguridad. Se produce una fuerte movilización en toda Cataluña dinamizada por la oposición de la zona en la que reaparece el Comité antinuclear de L´Atmella. El 26 de noviembre se produce una gran manifestación en Barcelona (unas 70.000 personas) que exigen el cierre de la planta. Casi todas las fuerzas políticas catalanas optan por el cierre. Hifrensa, la empresa propietaria se manifiesta dispuesta a reparar la planta, pero el CSN, presidido entonces por el médico socialista Donato Fuejo (vinculado políticamente al *guerrismo*) se desmarca por primera vez en su historia del sector nuclear y determina unas normas de seguridad para la planta que suponen costes inasumibles. La planta se cierra y los directivos de la misma y los responsables técnicos del CSN se sientan en el banquillo de los acusados, del que se levantarán absueltos más de 10 años después. Como siempre en este país los grandes delitos contra el medio ambiente quedan impunes,[23] a pesar de la determinación de los abogados de la acusación particular y del fiscal que mantuvo la acusación hasta el final.

---

22. Es digno de mencionar la bajísima eficacia de las acciones legales. En 1988 AEDENAT (después integrado en Ecologistas en Acción) presentó un recurso contra el almacenamiento de residuos de centrales en El Cabril. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 1996 y después el Tribunal Supremo en el 2003, le dan la razón. De existir una justicia rápida nunca los residuos de este tipo de habrían almacenado en dicho emplazamiento. El resultado práctico es que los residuos se desplazaron 500 m. hacia una nueva instalación , construida legalmente junto a la anterior, en 1992.

23. Impunes han quedado también el vertido de Aznalcollar que afectó a Doñana, el vertido radiactivo de Acerinox, las irregularidades en la construcción de la presa de Itoiz y miles de delitos urbanísticos tipificados en el último código penal.

En septiembre de 1990 los grupos vinculados a la CEAN (a los que se suma Greenpeace) deciden lanzar una Iniciativa Legislativa Popular para conseguir el cierre de las centrales nucleares. Se necesita recoger 500.000 firmas en seis meses para someter un texto de ley a las Cortes, que se verían obligadas a discutirlo. El texto contiene un minucioso articulado que impide el uso de la energía nuclear en todo el estado. La Junta Electoral central, que debe verificar todo el proceso, fija unas condiciones draconianas para el mismo que lo hacen mucho más dificultoso. A los 6 meses, cuando se han recogido 460.000 firmas,[24] la Junta deniega la ampliación de plazo por tres meses prevista en la ley y la Iniciativa no llega a buen puerto. Se aprecian con claridad los logros y límites del movimiento en ese período: menor capacidad de arrastre que en épocas anteriores en las que una Iniciativa como ésta habría prosperado, pero mayor claridad de objetivos estratégicos, mayor comprensión del papel del movimiento como factor de profundización democrática , y mayor madurez y coordinación de las propuestas. Pese al indudable sabor a derrota de la Iniciativa, fue un factor de avance en el proceso de unificación de la diáspora de colectivos que nutrían el ecologismo social. Buena parte de ellos se unifican al concluir el proceso en AEDENAT y se sientan las bases para la unificación que se produciría de la casi totalidad de este sector ecologista y de otros provenientes del «conservacionismo»[25] entre 1998 y 1999 en Ecologistas en Acción.

También merece siquiera una breve reseña el anuncio de cierre de la central nuclear de Zorita... para el año 2006. Contra esta y contra las demás plantas en funcionamiento, venían desarrollándose de forma ininterrumpida campañas de protesta para anticipar su cierre. Éstas se activaron en los primeros 90, en que aparecieron severos problemas de corrosión en la tapa de la vasija, que habían desarrollado un claro sentimiento antinuclear en toda Castilla-La Mancha. Al acercarse el momento de renovar el permiso de explotación en el año 2002 tuvo lugar la espectacular y muy publicitada acción de activistas de Greenpeace que treparon hasta la cúpula del reactor dejando claramente en entredicho la seguridad de la planta. Esto animó los procesos de movilización social y decantó al Presidente Regional (José Bono) a publicitar su oposición a la continuidad de la planta. El resultado fue una negociación

24. Las firmas que debían ser presentadas por los promotores de la Iniciativa en las Juntas electorales provinciales venían, hasta ese momento, arrastrando una tasa de errores del 10% (sobre todo personas que firmaban en una provincia y estaban censadas en otra). La ampliación de plazo había sido concedida en el único caso anterior en que se había promovido una ILP.

25. Se emplea este término para describir a los sectores del ecologismo que principalmente trabajan en la protección de especies y de espacios de valor natural. La línea de separación entre ecologismo «radical» o «social» y «conservacionismo» siempre fue difusa y virtualmente desapareció a finales de los 90.

entre los miembros designados en el Consejo de Seguridad Nuclear por el PP, CiU y PSOE que concluyó con un permiso para algo más de tres años.[26] Después se cerraría. El voto en contra del acuerdo de la Presidenta del organismo, Mª Teresa Esteban Bolea, destacada miembro del PP, fue toda una muestra de su fanatismo pronuclear.[27]

Prestige

Pero sin lugar a dudas el gran evento ambiental en relación con la energía del nuevo siglo (finales del 2002) fue la catátrofe del *Prestige*. Este barco era propiedad de una sociedad con sede en Liberia, *Mare Internacional*, que, con el fin de limitar su responsabilidad, poseía un solo barco. Esta actuación es habitual en los buques controlados por las navieras europeas, que crean sociedades fantasma con este fin. Las leyes de Liberia no permiten conocer con seguridad la identidad de los dueños de *Mare* pero los armadores eran griegos. El *Prestige* se encontraba registrado en la Autoridad Marítima de las Bahamas. Este Estado, al igual que muchos otros, ofrece pabellones de conveniencia a los armadores de todos los países, proporcionándoles ventajas fiscales y administrativas y un menor control sobre seguridad. El petróleo que transportaba pertenecía a una sociedad comercial llamada *Crown Resources*, registrada en Gibraltar en 1996. *Crown Resources* es propiedad del grupo *Alfa Group Consortium*, cuyos intereses van desde el petróleo al comercio, la agroindustria, las telecomunicaciones y los medios de comunicación. El cofundador del grupo es el multimillonario ruso Mikhail Fridman, que hizo su fortuna en la privatización del patrimonio del Estado ruso. El otro cofundador es Pyotr Aven, ex ministro de asuntos exteriores. Como es habitual en el negocio del petróleo en la antigua URSS, existen relaciones mafiosas dentro de alguna empresa del grupo Alfa, como *Tyumen Oil*. El grueso de la tripulación eran filipinos con escasísima preparación y casi nulos derechos sindicales. El barco había sido revisado en el 2001 en Guandong (China) en una laboriosa reparación que obligó a soldar partes importantes en su chapa. En el 2002 había sido revisado en Abu Dabi, en ambas ocasiones por la empresa *Americam Bureau of Shipping*. ¿Puede imaginarse una clase práctica más completa de lo que es la globalización salvaje? La consecuencia de esta irracionalidad es el vertido, beneficios privados, daños colectivos.

---

26. Pocos años antes la central de Garoña, casi de la misma edad que Zorita y también aquejada de muchos problemas de seguridad había obtenido un permiso de funcionamiento de 9 años, todavía en vigor lo que le permite alcanzar los 40 años de funcionamiento.

27. No se citan, por falta de espacio otras luchas de interés en el campo de la energía. Nos referimos a las luchas contra las centrales térmicas o sus minas a cielo abierto en Meirama, Cercs, Andorra o el norte de León. También reconozco la falta de la pugna contra el cable eléctrico de Tarifa.

El producto que transportaba el *Prestige* era fuelóleo, un residuo pesado de la destilación del petróleo crudo. El hecho de ser un residuo pesado hace que el vertido sea más dañino en comparación con los de crudo, ya que del orden de un 50% de estos últimos son compuestos ligeros (tipo gasolinas o gasóleos), que se evaporan en cuestión de horas tras el vertido. Este fuelóleo se usa como combustible en centrales térmicas —para producir electricidad— o en calderas industriales, y para alimentar motores diesel de gran potencia, como los de los buques.

Los efectos del vertido se traducen en una reducción de la biodiversidad en las aguas y costas afectadas por vertidos.[28] Hay también un cambio en la flora y fauna, con una sustitución de especies sensibles por otras más resistentes y/o oportunistas. Se produce, así, una regresión del ecosistema afectado a etapas menos maduras. Por ello el vertido afectará directamente a todos los seres vivos que colonizan las aguas afectadas (Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, costa francesa).

Si tremenda fue la catástrofe, impresionante fue la respuesta de la sociedad, muy especialmente de pescadores, mariscadores y voluntarios que se volcaron en las tareas de limpieza... frente a unas administraciones central y autonómica al principio desaparecidas e insistiendo en minimizar la catástrofe, y descoordinadas y faltas de reflejos para resolver el problema después. En pocas ocasiones el poder y sus intentos de ocultar la realidad se han visto tan claramente superados por los hechos. El surgimiento de la plataforma *Nunca Mais* fue la expresión de la autoorganización y la protesta llegando a realizarse movilizaciones impresionantes como la manifestación de Santiago (pero también en Vigo, La Coruña, Ferrol...). Todas ellas en los últimos días del año 2002. Durante muchos meses del 2003 año continuaron las actividades de protesta que quizá tuvieron su punto culminante en la manifestación celebrada en Madrid el 23 de febrero, justo una semana después de la manifesta-

28. El vertido reduce la producción primaria neta del fitoplancton, ya que, por una parte disminuye la intensidad de la luz que llega a éste, reduciendo la fotosíntesis y, por otro lado, su carácter tóxico afecta a los organismos. El zooplancton se ve perjudicado por la menor cantidad de fitoplancton disponible como alimento y, además, al ingerir el fuelóleo sufre los efectos tóxicos. El plancton, ingerido por otras especies marinas, contamina a éstas y la contaminación se extiende por todas las cadenas tróficas presentes (moluscos, peces, aves marinas...). En los moluscos filtrantes, como los mejillones, se produce una acumulación de hidrocarburos que alcanza rápidamente niveles tóxicos. El fuelóleo y su emulsión colmatan las branquias de los peces, provocando su asfixia. El fuel se adhiere también a las plumas de las aves marinas, pegándolas entre sí —con lo que se dificulta o impide el vuelo—, y obstruyendo a la vez la salida de las glándulas que excretan los productos impermeabilizantes que permiten a las aves flotar y resistir el frío del agua. El agua entra en contacto con la piel de las aves, y muchas mueren de frío. Al intentar limpiar su plumaje manchado, las aves ingieren fuelóleo, y se intoxican, sufriendo daños renales, hepáticos, pulmonares e irritación intestinal.

ción contra la guerra. Más de trescientas mil personas, según casi todos los medios de comunicación desfilaron desde Atocha hasta la Puerta del Sol exigiendo responsabilidades por la catástrofe. En esta, como en otras manifestaciones la presencia del mundo del espectáculo resultó descollante. Con motivo del aniversario del suceso, de nuevo las calles de Santiago de Compostela fueron escenario de importantes movilizaciones. Las banderas de *Nunca Mais* seguían presentes, muchos meses después, en miles de viviendas gallegas. En las tareas de reparación la presencia de voluntarios fue todavía visible e importante durante varios meses. La presencia del ejército y de cuadrillas remuneradas, así como el avance de la propia limpieza fue haciendo menos necesaria su participación. A resaltar los paulatinos intentos de los Gobiernos central y Gallego de reducir en la etapa final el número de voluntarios, que mostraban a las claras su incompetencia y actuaban como incómodos testigos de cargo contra la pretensión de que todo estaba ya arreglado.

En definitiva, y a modo de conclusión, las catástrofes son la manifestación paradigmática del conflicto de los gobiernos de derechas (fue en el último periodo de los 8 interminables años de gobierno del PP) y el medio ambiente: son problemas que les gustaría que no existieran, pero que no pueden ignorar. Que aparecen por sorpresa como límites claros a sus valores e ideas más queridos, como la responsabilidad y el sentido de la actuación de los empresarios como verdaderos conductores del desarrollo social. Puesto que no los pueden negar, simulan una preocupación que no sienten ni por supuesto saben expresar. Aspiran a que los hechos, ya que son desagradables y repugnan a las conciencias bienpensantes de las sociedades satisfechas, sean sustituidos por la propaganda que despliegan sin rubor. Y, para terminar, dan por cerradas las crisis con su mágica intervención hasta ser despertados en su angelical sueño por la brusca aparición de la siguiente manifestación de su pesadilla: la contradicción entre el crecimiento económico ilimitado e incontrolado y ese «estúpido medio ambiente». El Prestige ha sido, sin lugar a dudas (junto con la apuesta por la guerra de Iraq y las mentiras del atentado del 11-M) una de las causas de la derrota electoral del PP.

Nuevos tiempos, nuevos retos.

Si a finales de 2002 el Gobierno del PP aprobó el Plan de Infraestructuras de Electricidad y Gas,[29] al acabar 2003 le tocó el turno al Plan de Ahorro y

29. Desde que el PP en su primer gobierno modificó todo el marco legal energético sólo se planifican las redes de transporte de electricidad y gas y las plantas de regasificación y almacenes subterráneos. La decisión sobre todas las restantes instalaciones quedó en manos de las compañías energéticas.

Eficiencia Energética. Un plan que llegó muy tarde porque en los últimos años (especialmente a partir de la segunda mitad de los 90) la demanda de energía había crecido descontroladamente. La afirmación vale tanto para el consumo de energía primaria como de energía final o de electricidad. Como el propio plan señala, en nuestro país se ha producido el hecho anómalo de que la intensidad energética[30] haya ido creciendo en los últimos años. Las señales de alarma estaban sonando desde hacía bastante tiempo como es el caso, ciertamente singular, de que las puntas de demanda de potencia eléctrica crecían a tasas mayores que la demanda total, lo que es una prueba manifiesta de ineficiencia creciente ya que obliga a mantener un porcentaje creciente de centrales de generación ociosas durante buena parte del año. O que el consumo de electricidad *per cápita* en nuestro país sea ahora superior al de Italia, país con climatología similar, y con niveles de PIB también *per cápita* mayores que el nuestro.

Pero el plan, aún en el caso de que se cumpla, perfila un escenario en el que casi todos los problemas ambientales empeoran. El resultado es un aumento del consumo de energía primaria del 39,6% desde el año 2000 hasta el 2012 y si se considera el incremento total en el periodo 1990-2.012 sería de 101%. A consecuencia de ello las emisiones de gases de efecto invernadero de origen energético se incrementarán en el período 1990-2012 en un 58%, lo que hace casi imposible cumplir con los acuerdos a que se comprometió el gobierno en Kioto**.** Las reiteradas declaraciones de la CEOE o de empresarios energéticos y de otros sectores pidiendo una reevaluación la posibilidad de cumplir Kioto, son la consecuencia lógica de años de actuación totalmente al margen de cualquier criterio de sostenibilidad. En su contra aparecen las tozudas manifestaciones del cambio climático, que por ejemplo durante el verano del 2003, ha producido en buena parte de Europa (también en la península) unas olas de calor sin precedentes conocidos. La secuencia de muertos por la ola de calor fue un duro aldabonazo sobre las consecuencias sociales de un cambio climático que muchos expertos alertan de que se está produciendo con mucha más rapidez y virulencia de lo esperado. En este contexto el movimiento ecologista ha venido peleando, con escaso éxito contra el maremagnum de grandes infraestructuras de transporte (AVE, Autovías, Aeropuertos) y con algo más de apoyo social contra la vorágine de centrales de gas en ciclo combinado y de extensión de las redes eléctricas. Debe de

30. Es el cociente entre el consumo de energía y el PIB. En las economías desarrolladas esta magnitud viene disminuyendo desde la primera crisis del petróleo. En el nuestro también decreció desde la segunda crisis petrolera hasta que el Gobierno del PP decidió aplicar una política de precios energéticos tan bajos como fuera posible para contener la inflación y favorecer el crecimiento económico.

tenerse en cuenta que desde el año 2002 hasta finales del 2004 se habrán conectado a la red eléctrica centrales de gas por 7.000 MW y que se están tramitando otros 70 proyectos con una potencia total de más de 40.000 MW. Si se ve que la punta máxima de demanda de potencia eléctrica ocurrió en febrero de 2003 y alcanzó los 37.600 MW se entiende la desmesura de lo proyectado.

Parece claro que puede repetirse la historia de la energía eléctrica de los años 70-80 en los que se proyectaron megalómanos planes de construcción de centrales nucleares que después no pudieron concluirse. Muchas de las centrales de gas de las que ahora se habla no se terminarán. Las luchas más intensas se están librando contra proyectos que se iniciaron hace algunos años. Es el caso de Amorebieta, Arcos de la Frontera, Catadau o Morata de Tajuña. El nivel de movilización ha sido importante en todos ellos y como es frecuente, los ayuntamientos han sido escenario preferente de los cambios en la opinión pública que se operaban. Así por ejemplo en Arcos el gobierno del PP que apoyaba sin fisuras el proyecto de central[31] perdió estrepitosamente las elecciones ante una coalición PSOE-IU que se opone al proyecto. Cuando se redactan estas notas sigue esperándose que el gobierno municipal se decida a paralizar las obras que están ya en torno al 50/60% del proyecto total. Mejor parece la perspectiva de Morata, en la que tras un giro de 180 grados en la posición del ayuntamiento (de apoyar el proyecto a oponerse), el proyecto no avanza y está empantanado en un proceso judicial.

La paradoja del ecologismo es que está viendo dramáticamente cumplidas sus profecías. Hoy se emplean tecnologías mucho más eficientes que hace algunos años (gas en ciclo combinado y eólica fundamentalmente para generar electricidad, motores más eficientes en transporte), pero el crecimiento desmesurado de la demanda hacen que sus efectos de mejora ambiental no resulten tan perceptibles. Además su implantación se produce en un modelo social que razonablemente el ecologismo rechaza. Sometido a la doble tensión de prevenir las catástrofes que se anuncian cercanas (ejemplo, cambio climático creciente) y de intentar transformar de raíz una sociedad que estructuralmente camina hacia el abismo en su prometeica aspiración de hacer crecer infinitamente la producción material en un mundo finito, el ecologismo debe resolver continuamente graves problemas. ¿Cómo conseguir ganar mayorías para cambios sociales profundos que con seguridad implican reducir ciertas formas de consumo que muchos consideran «derechos» en sociedades satisfechas? ¿Qué es aceptable como solución transitoria, aunque

31. Iniciada por la multinacional americana Enron y adquirida por Iberdrola tras la quiebra de aquella.

implique impactos que cada vez se conocen y describen mejor, para evitar llegar al abismo?

Sostengo que el ecologismo como razón crítica es imbatible en una sociedad con tan profunda contradicción entre tecnosfera y biosfera. Si seremos parte del movimiento de emancipación o los últimos profetas de una catástrofe anunciada, es lo que la historia debe dilucidar.

Movimiento feminista: una trayectoria singular

JUSTA MONTERO

Lejos estamos de haber conseguido que el ser mujer no determine nuestras vidas, pero no cabe duda de que la situación que hoy tenemos dista mucho de la que se vivía hace apenas treinta años. Incluso hay quienes afirman que la mayor transformación social del siglo XX ha sido la protagonizada por las mujeres, calificándola de revolución silenciosa. Sin embargo, el complejo proceso impulsado y protagonizado por el movimiento feminista no ha sido silencioso ni tranquilo y, en ocasiones, ha tenido importantes costes personales, incluida la vida para algunas mujeres. Nadie ha regalado nada ni ha sido el devenir de la sociedad quien nos ha conducido de forma natural hasta donde estamos, más bien, al contrario, se ha hecho frente a fuertes resistencias. Reclamar el carácter movilizador de este proceso y el papel jugado por el movimiento no sólo es de justicia sino imprescindible para nuestra memoria colectiva.

Esa historia, corta en el tiempo pero rica y compleja por su diversidad y por las derivas que ha ido tomando, propicia un movimiento muy plural y con personalidad propia en las distintas nacionalidades. Sin embargo, la necesidad de sintetizar hace que en el presente artículo sólo se destaquen, a grandes trazos, algunos hechos, actividades y debates que marcan su desarrollo a nivel general.

Inicios que dejan huella

El movimiento feminista emerge en el Estado español en las postrimerías de la dictadura franquista, hecho que, en buena medida, marcará su historia y le dotará de una marcada singularidad respecto a la evolución en otros países de nuestro entorno.

Tomaré 1975 como punto de partida de esta nueva andadura, pues es en diciembre de ese año, a pocos días de la muerte de Franco, cuando se celebran en Madrid las «Jornadas de Liberación de la Mujer» en condiciones de semiclandestinidad.[1] Fueron la primera expresión pública de ese movimiento y el inicio de una larga cadena de encuentros que se irán organizando por todo el territorio empezando en Cataluña (Barcelona, 1976) y Euskadi (Bilbao, 1977).

Se van creando espacios de encuentro, en los que las mujeres intercambian opiniones y experiencias, reconociéndose en los sentimientos que les provocan las exclusiones y prohibiciones a los que se enfrentan. Identifican los problemas con los que se encuentran en la familia, en el trabajo, con la pareja, a los que van poniendo nombre.[2]

Comienza así un camino que expresa y representa la lucha de las mujeres por su libertad y que despierta el entusiasmo y la energía de mujeres que, de muy variadas formas y desde muy distintos lugares, reclaman y afirman una nueva identidad. Para todas ellas se inicia un viaje sin retorno en el que ya nada será igual en sus vidas, pues empiezan a verse a sí mismas y a ver y a entender el mundo de forma muy distinta a como lo hacían hasta ese momento.

Ese apasionante proceso individual abre la esperanza a poder cambiar la vida, y adquiere una dimensión colectiva a través de los múltiples grupos que las mujeres organizan: grupos que tratan sobre lo divino y lo humano, grupos de autoconciencia, grupos en los barrios, en las empresas, en la universidad. Desde la acción se afronta con urgencia la desconstrucción del modelo de feminidad en el que la dictadura franquista había encerrado a las mujeres, que les reservaba la procreación, el matrimonio y el sometimiento al varón como destino natural, con la exclusión del ámbito público que conlleva. Por eso los primeros años estuvieron particularmente marcados por la crítica sin matices a la maternidad y el matrimonio, a la familia y al modelo sexual,[3]

1. Esta opción parte del profundo reconocimiento a todas las mujeres que en los difíciles años anteriores habían ido creando las condiciones que hicieron posible este encuentro.
2. A modo de recordatorio pueden servir los siguiente datos: hasta mayo de 1975 era obligatorio el permiso del marido para que las mujeres casadas pudieran ejercer su profesión, adquirir o administrar bienes, comparecer en juicio; hasta mayo de 1978 está penalizado el adulterio y amancebamiento, con penas mucho más duras si «la adúltera» era la mujer; en esas mismas fechas se suprime el servicio social obligatorio para las mujeres (dirigido por la Sección Femenina) sin el cual no se podía viajar, estudiar. Informarse y conseguir algún método anticonceptivo deja de ser delito en octubre de 1978.
3. Lo tajante de la crítica produjo sin duda que mujeres feministas se sintieran excluidas o incómodas con el discurso que se formulaba.

afirmando e incluso exaltando cualquier otra posibilidad de ser y hacer en todos los ámbitos de la vida: desde las relaciones personales y las sexuales a las opciones de trabajo. Se desarrolla así una intensa actividad cuyo objetivo explícito es sacudir a una sociedad machista hasta el esperpento.

En la lucha por una sexualidad libre, contra la penalización del adulterio, por la legalización de los anticonceptivos, la exigencia de guarderías, de educación sexual, el derecho al divorcio, al trabajo asalariado,[4] o la exigencia de Amnistía para las más de 350 mujeres que permanecían en las cárceles condenadas por los llamados delitos específicos (adulterio, aborto, prostitución), el feminismo despliega una gran actividad para difundir sus ideas y demuestra una enorme capacidad propositiva. Ejemplos de esto último son los proyectos de ley alternativos que elabora la Coordinadora estatal de organizaciones feministas (primero sobre el divorcio y posteriormente sobre el aborto), o la puesta en marcha de centros de mujeres donde, junto a actividades de denuncia y afirmación ideológica, se facilitan anticonceptivos que en aquel momento eran ilegales.[5]

Los provocativos eslóganes, representaciones y símbolos, como el propio símbolo feminista o las manifestaciones sólo de mujeres, el lenguaje utilizado y unas formas de actuación propias, inusuales hasta el momento, perfilan otra particularidad del movimiento: su crítica a la forma de hacer política y a la idea reduccionista de la misma que dominar el escenario político.

Pero protagonizar un cambio social de la envergadura del propuesto por el feminismo, enfrentado a resistencias explícitas e implícitas, requiere de un sujeto, las mujeres, que se va a ir construyendo sobre los nuevos códigos de referencia que crea, y sobre un «nosotras» basado en la identificación de unas con otras. Un claro ejemplo de ello es el reiterado recurso a un «yo» afirmativo y desafiante: «yo también soy adúltera», «yo también he abortado», «yo también tomo anticonceptivos», «yo también soy lesbiana». Sobre un discurso apoyado en estos pilares, se va formando esa incipiente identidad colectiva que animará las luchas. Y de este modo se consolida un movimiento dispuesto a poner todo en cuestión: desde las relaciones de poder establecidas por los hombres, desvelando los privilegios masculinos, a las estructu-

4. La idea de que el salario de las mujeres era de apoyo y que el derecho al trabajo era el del varón, cabeza de familia, estaba fuertemente arraigado. A finales de los años 70 se suceden importantes huelgas de trabajadoras en distintas ciudades, entre otras, las de Induyco y Confecciones Puente en Madrid.

5. Los centros de mujeres servirían posteriormente de modelo para los centros de planificación familiar de los primeros Ayuntamientos democráticos.

ras económicas y sociales que las perpetúan, sin olvidar la necesaria subversión de normas, valores y tradiciones que tratan de naturalizar la subordinación de la mujer y que están fuertemente arraigadas en el imaginario colectivo.

Lo que da singularidad al movimiento es el contexto de convulsión social en el que discurren sus primeros años, marcado por una lucha dirigida a cambiar el régimen político y la oportunidad que ello brinda de perfilar un modelo alternativo de sociedad. El movimiento definió y defendió su participación como protagonista del cambio radical de la sociedad a la que aspiraba y veía posible conseguir. En el terreno político el ejemplo más claro es la elaboración de propuestas alternativas a los artículos de la Constitución, particularmente los que hacían referencia a la familia, al trabajo, a la educación y de forma menos explícita al aborto, y la toma de posición rechazándola por «machista y patriarcal» que mantuvo gran parte del movimiento y que centró su actividad en 1978.[6]

Pero esas esperanzas e ilusiones se vieron truncadas por la política de pactos y consensos (el llamado espíritu de la transición) que practicaron la mayoría de los partidos políticos de la izquierda y que representaron un jarro de agua fría para las reivindicaciones feministas. La supeditación de las aspiraciones expresadas por el movimiento a dichos pactos tuvo en este caso un doble filtro. A la consideración política de «lo posible» que regía el consenso, se unía la tendencia a relegar a un segundo plano las reivindicaciones feministas, escudándose en la misógina posición de los distintos sectores de la derecha heredera del franquismo. Además esta posición era también deudora de sus posiciones «etapistas», según las cuales primero era la lucha general (en el bien entendido que la visión androcéntrica identifica lo «general» con lo que atañe a los varones) y después, lo específico de las mujeres.

Todo ello alimentó el desencanto y la desconfianza en el compromiso de los partidos políticos con la causa feminista, que se manifestaría posteriormente con toda su crudeza.

En busca de un marco teórico

La elaboración de un cuerpo conceptual, una teoría que alimente la práctica feminista y fundamente un nuevo marco de interpretación de la realidad, va

6. Una actitud semejante se mantuvo respecto al Referéndum sobre la ley para la reforma política de 1976 y respecto a los Pactos de la Moncloa.

a estar unida, en su inicio, a la acuciante necesidad de legitimación del propio movimiento y a la afirmación de las mujeres como sujeto político. Se requería una teoría que diera una explicación global a la opresión y subordinación de las mujeres, que abundara en su universalidad y afianzara la reclamada y todavía precaria autonomía del movimiento.

Todo ello estuvo en la base de algunas de las fuertes polémicas de la época. Así las distintas corrientes ideológicas que surgen se definirán y diferenciarán por su caracterización de la opresión (en la que ocupaba un importante lugar la explicación de sus orígenes), la delimitación de «los enemigos» y los rasgos de la sociedad del futuro que apuntaban.[7]

Desde el llamado «feminismo radical»[8] se consideraba la opresión de las mujeres como la opresión primigenia, origen del resto de dominaciones y clave de la estructura del conjunto de la sociedad. La opresión podía basarse, siguiendo las tesis de Shulamith Firestone, en las diferencias biológicas que llevaban a mujeres y hombres a formar dos clases sexuales diferenciadas y enfrentadas por su distinto papel en la reproducción; o bien, de acuerdo con Christine Delphy, en la explotación que los hombres hacían de la fuerza de trabajo de las mujeres apropiándose de la plusvalía que generaban en la reproducción de la fuerza de trabajo. En este caso, mujeres y hombres formaban clases sociales igualmente enfrentadas, en un modo de producción doméstico paralelo al modo de producción capitalista. De ambas explicaciones derivaban estrategias en las que los hombres constituían «el enemigo principal».

La búsqueda de una base material de la opresión, que se situaba en el modo de producción doméstico, expresa a la vez la influencia sobre esa corriente de la teoría marxista clásica y su voluntad de confrontación con ella. Para los marxistas el origen de la opresión de las mujeres se sitúa en el surgimiento de la propiedad privada y la sociedad de clases. El trabajo doméstico es un aspecto estructural del sistema capitalista y la lucha contra el capitalismo subsume el resto de contradicciones sociales, incluida por tanto la de sexo. Independientemente de otras consideraciones, estas polémicas empujaron a las mujeres provenientes de la tradición marxista (que eran mayoría en el movimiento) a un intenso trabajo de revisión y reformulación de dicha teoría, para abrirla a las categorías formuladas desde el feminismo.[9]

---

7. Las denominaciones de las corrientes de aquella época (radical, socialista, independiente) encerraban, cada una de ellas, una amalgama de interpretaciones diferentes aunque claramente delimitadas respecto a las otras.
8. Corriente representada por los llamados «colectivos feministas».
9. Este esfuerzo tendría distinto alcance y resultados en los diferentes partidos de izquierda.

Por otro lado, para la corriente denominada «feminismo socialista»,[10] la opresión de las mujeres no derivaba mecánicamente del sistema de explotación, por lo que la contradicción de sexos no podía reducirse al enfrentamiento de clase. Pero al no ser tampoco externa a ella, por estar imbricada en el mismo sistema, también requería la destrucción del capitalismo. Por lo tanto, la liberación de las mujeres necesitaba de un movimiento autónomo que articulara la lucha antipatriarcal y la lucha anticapitalista.

Ese manifiesto interés por teorías globales y cerradas encontró en el concepto de patriarcado un buen aliado. Mientras que para «las radicales» se trataba de un sistema universal y global de dominación, paralelo al sistema capitalista y perpetuado a lo largo de la historia, en el campo del feminismo socialista produjo una extensa literatura en la que se establecían distintas teorías sobre su relación con el capitalismo, integrando el término y recogiendo así el doble carácter de la opresión.[11]

Una tercera corriente, denominada «feminismo independiente»,[12] con menos pretensiones en el terreno teórico y con una voluntad manifiesta de sacar el debate del ámbito económico, hizo de la revalorización de lo femenino el centro de su propuesta. Partir de los valores, sentimientos y atributos de las mujeres dándoles una proyección liberadora y afirmar esa diferencia respecto a los hombres, debía ser el objetivo del feminismo. Por eso mismo se criticaba la política de igualdad seguida por el movimiento, por considerar que asimilaba a las mujeres con los hombres.

La réplica a esta postura llamaba la atención sobre los problemas que representaba reivindicar el modelo de feminidad que tradicionalmente había servido para mantener la opresión. Y rechazaba la acusación de asimilación a los hombres ya que ni en la práctica ni en la teoría se concebía la igualdad como un principio uniformador de las mujeres, sino como referencia a una humanidad libre en la que las diferencias entre lo masculino y lo femenino no

10. Grupos como el Frente de Liberación de la Mujer de Madrid, ANCHE de Barcelona, grupos de barrios, de universidad, etc… se podrían englobar genéricamente en esta corriente.
11. Aunque sea dar un salto en el tiempo, resulta interesante comprobar cómo la versatilidad del concepto ha facilitado que siga estando en el candelero aunque los términos del debate sean otros. Hay quien sencilla y llanamente declaran su muerte simbólica; quienes siguen considerándolo concepto útil y eficaz para expresar el conjunto de mecanismos por los que se reproduce la dominación masculina, o quienes relativizan su utilidad por los problemas que su ahistoricidad plantea al simplificar procesos complejos y sus manifestaciones en formaciones históricas bien distintas.
12. Formado por mujeres de distintos grupos, entre los que era particularmente activa Gretel Amman, que posteriormente formaron «grupos de mujeres independientes».

debían tener valor. De este modo, acabar con las discriminaciones y conseguir derechos para las mujeres requería de la lucha por la igualdad.

Este debate, en el que se apuntan elementos que reaparecerán en las polémicas de los años 90 sobre la igualdad y la diferencia, tuvo su punto culminante en las «Jornadas de Granada».[13] Allí se entrecruzó con una «vieja» discusión sobre «la doble militancia» (la de las mujeres que además de formar parte de grupos feministas pertenecían a partidos y/o sindicatos). Una polémica particularmente crispada al cuestionar la autonomía de estas mujeres por considerarlas contaminadas por la ideología de los hombres que dirigían mayoritariamente esas organizaciones. En consecuencia se propugna un modelo organizativo basado en la única militancia y la «fidelidad» al feminismo.

Aquellas Jornadas, a las que asistieron 3.000 mujeres y fueron un acontecimiento de enorme valor e interés, concluyeron con la primera y dolorosa ruptura del movimiento. Un ambiente y unas prácticas que buscaban la diferenciación por encima de los puntos de encuentro, donde se primaba una coherencia formal entre teoría y estrategia, con dificultades para dialogar con las diferencias y asumir la pluralidad en el campo de las ideas, está en el origen de la forma en que se saldó el conflicto. Se trata del alto precio pagado por la falta de madurez del movimiento.

Esta ruptura quebró el funcionamiento unitario que hasta entonces se había dado en torno a la Coordinadora estatal de organizaciones feministas. El feminismo independiente mantuvo durante algunos años Jornadas anuales como punto de encuentro, y la Coordinadora estatal siguió aglutinando a un amplio sector del movimiento y organizando sucesivas Jornadas de ámbito estatal tanto monográficas sobre algunos temas (aborto, sexualidad, violencia), como generales del movimiento. En cualquier caso desde entonces hasta ahora los encuentros y desencuentros de las distintas corrientes han tenido dinámicas y pesos muy distintos según las nacionalidades.

Las relaciones entre movimiento e instituciones

Las relaciones del movimiento con las instituciones son otro factor de polémica presente prácticamente desde el primer momento. La vía del feminismo institucional se inicia en 1977 con la creación, por parte del gobierno

13. Jornadas feministas estatales, convocadas por la Coordinadora estatal de Organizaciones Feministas en diciembre de 1979.

de UCD, de la Subdirección General de la Condición Femenina y se consolida con la llegada del PSOE al poder en 1982, más concretamente a partir de la creación en 1983 del Instituto de la Mujer del gobierno central.[14] La creación de un organismo específico de la Administración es sin duda consecuencia lógica de la exigencia del movimiento de políticas públicas dirigidas a cambiar la situación de las mujeres. A lo largo del tiempo la puesta en marcha de políticas de igualdad en materia de empleo, educación, salud y violencia, pasa a ser una constante de los distintos gobiernos, aunque con importantes diferencias tanto discursivas como de contenido según el partido en el poder. Sin ir más lejos la política del PP requeriría un análisis detallado que partiera de plantear la viabilidad de un «igualitarismo de derechas».

El feminismo institucional tiene su origen en el desarrollo del Estado del bienestar, lo que explica que hayan sido en los países del norte de Europa donde ha tenido mayor presencia el llamado «feminismo de Estado». Esta misma razón explica que el actual recorte del Estado del bienestar implique una drástica limitación de cualquier política igualitarista, pues entra en contradicción con el impulso de las formas de protección familiar, basadas siempre en el trabajo de la mujer, para paliar las necesidades que deja sin atender. Esto significa establecer una pugna por redefinir los espacios público y privado que el feminismo ya había cuestionado,[15] al tiempo que abre una brecha aun mayor entre la retórica igualitarista y las medidas concretas que finalmente se aplican.

La puesta en funcionamiento de esta maquinaria obliga, no sin cierto desconcierto, a una toma de posición en el movimiento que, por supuesto, lo hace de forma polémica y da lugar a estrategias diferenciadas.

Por un lado, se produce una integración de mujeres que se sienten atraídas por la posibilidad de poner en marcha políticas concretas desde la Administración y abandonan su actividad en los grupos feministas, incorporándose a puestos en organismos de diferentes administraciones, en una apuesta por lo que califican como «feminismo eficaz y realista».

---

14. Con posterioridad y tras el traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas se crearán los correspondientes Institutos de la Mujer que, junto con las concejalías y otros organismos locales irán completando el entramado institucional dedicado al desarrollo de las políticas de igualdad.
15. En el estudio de Julia Varela, Pilar Parra y Fernando Alvarez Uría «Género y cuestión social» se encuentra un interesante análisis sobre estos procesos. Cf. Neus Campillo (Coordinadora): *Género, ciudadanía y sujeto político. En torno a las políticas de igualdad*, Institut Universitari d'Estudis de la Dona, Universitat de Valencia. 2002.

Por otra parte, con el transcurso del tiempo, desde el feminismo institucional se recoge parte de las reivindicaciones del movimiento y en su retórica incorporan términos y conceptos feministas que vacían de contenido crítico, al tiempo que se cuestiona el valor y pertinencia del propio movimiento. Al desplazarse el centro de gravedad a las instituciones, a la confianza en su supuesta capacidad para garantizar la igualdad de las mujeres, quieren dejar al movimiento un papel en todo caso instrumental, de acompañamiento o apoyo crítico a las políticas gubernamentales. A este respecto una de las críticas que se hacen reside en la utilización de la política de subvenciones como mecanismo de control del movimiento.[16] Tratan de determinar, a través de la asignación de recursos, los objetivos y actividades de las organizaciones, generando el clientelismo al que se prestan algunas organizaciones y apoyando un diálogo con grupos más afines y cómodos políticamente.

La polémica sobre los límites de las políticas institucionales se plantea también por las concepciones ideológicas que las sustentan. Por un lado, porque representan la versión más formal del discurso de la igualdad y, por otro, porque se basan en la aceptación del sistema y del orden social establecido. Asumen, por lo tanto, las limitaciones estructurales que representa para la libertad de las mujeres, así como las propias diferencias que los mecanismos de inclusión y de exclusión que le son inherentes establecen entre ellas: las que tienen trabajo estable y las que lo tienen precario, las que están en el poder y las que no tienen ni los papeles, las buenas esposas y las prostitutas, las que pueden hacer uso de las leyes y las que no.

Las relaciones entre un movimiento crítico y reivindicativo y las instituciones son necesariamente conflictivas y complejas. Muchas veces, en la práctica concreta se producen interesantes alianzas entre mujeres de un espacio y otro que ayudan al diálogo. Diálogo que se ha mostrado más sólido en la medida en que se establece desde la defensa de la autonomía del movimiento, evitando su supeditación a las políticas gubernamentales, a sus dinámicas e intereses específicos e insistiendo en la diferente naturaleza y campo de actuación del movimiento feminista y de las instituciones.

16. Dejo a un lado el análisis sobre el efecto que pueden tener las subvenciones para grupos y actividades culturales y de ocio en cuanto a movilización de mujeres, posibilitándoles salir del espacio privado. Fenómeno que permitiría retomar el debate propuesto por Máxime Molyneus sobre el recorrido que puede darse entre la defensa de intereses prácticos a intereses estratégicos de género. Tampoco abordo por razones obvias de espacio, los límites y problemas que plantea el «asociacionismo desideologizado».

Movilizaciones feministas

En un contexto cada vez más complejo el movimiento logra su legitimidad social al mantenerse como referente para muchas mujeres, independientemente de su nivel de identificación con el mismo. Sin duda lo explica el hecho de haber conseguido, con la propia existencia del movimiento, cambios tanto en su vida como en la propia sociedad.

Este proceso se forja sobre un mosaico de prácticas: las que tienen una proyección política (en la acepción tradicional del término) exigiendo al Estado servicios, cambios en leyes, en el sistema educativo, etc.; aquellas que expresan su carácter reivindicativo en el campo social; las que tienen una dimensión cultural (festivales de cine, tertulias literarias), o las centradas en crear espacios específicos de mujeres (desde librerías hasta bares). En ese marco cobra particular relevancia, a partir de los años 80, el feminismo académico que protagoniza un fructífero desarrollo del pensamiento feminista planteándose —al menos buena parte de él— la relación y el diálogo con las grupos del movimiento. Pero la extensión del feminismo tiene que ver también con la práctica de muchas mujeres en organizaciones sindicales y sociales de muy distinta naturaleza (ecologistas, antimilitaristas, cristinas, por citar algunas). Y a todo ello hay que sumar ese feminismo difuso que representan las mujeres que, sin reconocerse feministas, realizan una práctica en sus espacios de vida —sea el trabajo, la casa, en las relaciones de amistad o de pareja— en los que van abriendo espacios a su autonomía.

Resulta imposible citar ejemplos siquiera de cada uno de los temas sobre los que trabajan los grupos. Me detendré en el tratamiento y enfoque de algunos que tienen una continuidad en el tiempo y han desempeñado un papel destacado en la vertebración del movimiento.

Uno de ellos es, sin duda, la lucha por el derecho al aborto, que se inicia con la exigencia de Amnistía para «las 11 mujeres de Bilbao» y vuelve a unir los esfuerzos de todo el movimiento tras la crisis de Granada. Se abre una larga campaña[17] centrada en el lema: «derecho de las mujeres a decidir», que tendrá un importante impacto entre las mujeres al recoger la aspiración de autonomía y libertad. En unas jornadas estatales se acuerda adoptar una estrategia que contemple el derecho al aborto en un marco global de lucha por los

17. En 1979 se hace público el procesamiento de las mujeres, el juicio se celebra en 1982 y la sentencia final se dicta en 1983. En 1982 presenta el proyecto de despenalización parcial el PSOE, que se hace efectivo en 1985. Las Jornadas específicas sobre aborto se realizaron en Madrid en 1981.

derechos de las mujeres, dirigida a conseguir una ley que garantice el ejercicio de ese derecho de forma «libre y gratuita». La Coordinadora estatal elabora una propuesta de ley y los grupos impulsan una intensa campaña que incluye, puntualmente, la realización de abortos en un abierto desafío a la situación de ilegalidad.

Esa batalla se gana socialmente y logra una importante movilización de mujeres con el apoyo de sectores muy amplios de la población (del campo jurídico, medios de comunicación, organizaciones sociales de todo tipo). Pero el gobierno socialista se limitará a aprobar una despenalización parcial, cediendo así a las presiones de los sectores más reaccionarios y machistas de la sociedad: la jerarquía eclesiástica, parte de la clase médica, la derecha social y política.

Otro de esos temas es la violencia sexista contra las mujeres. Si hoy la atención está puesta en los malos tratos en el ámbito de la pareja, las primeras campañas fijaron la atención en las agresiones sexuales. En ambos casos, se caracteriza la violencia como una manifestación del poder que los hombres creen tener sobre las mujeres y se pasa a desvelar los mecanismos ideológicos, sociales y simbólicos por los que éstos consideran que pueden someter a las mujeres a su voluntad. A la vez se denuncia la responsabilidad de la sociedad, no sólo por la complicidad del silencio, sino por generar y alentar los estereotipos de masculinidad y feminidad y el modelo sexual en los que arraigan.

La campaña por la reforma urgente del Código Penal, impulsada por las comisiones anti-agresiones del movimiento a mediados de los años 80, además de lograr cambios importantes en el tratamiento legal de la violencia sexual,[18] consigue abrir un debate público sobre el derecho de las mujeres a su sexualidad y, con dificultades por las fuertes resistencias con las que se topa (no hay más que recordar algunas sentencias judiciales), que las mujeres pasen de ser tratadas como víctimas, a sujetos con capacidad para afirmar su libertad sexual.

Pero además, las campañas contra la violencia ponen sobre el tapete el obstáculo que para las mujeres representa la división entre los espacios privado y público. Se denuncia así una división según la cual lo que acontece en el ámbito privado no se rige por la ética de la justicia sino por una moral cuyas

18. Entre otros, el cambio en la denominación de las agresiones sexuales que pasan de ser tipificado como delitos «contra la honestidad» a delitos «contra la libertad sexual»; la consideración como delito de la violación dentro del matrimonio, la tipificación delictiva de los malos tratos.

reglas vienen dictadas por la defensa del poder masculino. Que las mujeres pasen a visibilizar su problema, dándole el movimiento una dimensión social, ha obligado a su tratamiento como un asunto público y político.

El lema «lo personal es político» expresa este proceso; lema cuyo tratamiento resultará polémico a lo largo de los años, pues llevado a sus últimas consecuencias plantea el riesgo de normativizar los comportamientos. Como también será polémico el tratamiento legal de los temas antes mencionados. En primer lugar, porque los cambios legislativos sirven de poco si no van acompañadas de medidas educativas, asistencias, sociales, de un compromiso para combatir las ideas y actitudes cómplices de la violencia, o abordar el autoritarismo de la institución familiar. Pero, en la práctica, todo ello concita menos acuerdo que el hecho de aplaudir una ley. En segundo lugar, porque tras la inicial exigencia de reforma de un Código Penal anacrónico, se ha desarrollado una tendencia, dentro y fuera del movimiento, a considerar la vía penal el campo prioritario de actuación y, por lo tanto, la clave para la resolución del problema (particularmente de los malos tratos en la pareja). Esto crea una distorsión del sentido y límites del Código Penal que en modo alguno es el espacio desde donde se garantizan los derechos.

Diferencias y semejanzas entre las mujeres ¿Dónde queda la política feminista?

Con el tiempo, y producto de su propia actividad, el feminismo se extiende y se transforma. Más mujeres toman la palabra y al organizarse logran dar un nuevo significado a viejos problemas y manifestar nuevas necesidades y deseos. La identidad colectiva, ese sujeto que había protagonizado los primeros cambios, comienza a debilitarse al mostrar su dificultad para acoger al conjunto de mujeres que se movilizan y que no se ven reflejadas en un discurso que habla de ellas de forma genérica y en unas campañas que no contemplan su singularidad. Un ejemplo es el de las mujeres jóvenes, con un recorrido diferente al de la generación que las ha precedido y una posición y percepción de los problemas distinto al de éstas. Algo que también ocurre con las mujeres inmigrantes que incorporan aspectos culturales propios claramente diferenciados para los que reclaman el diálogo.

Todo ello obliga al movimiento a analizar las nuevas formas en que se manifiesta la subordinación en una realidad cambiante, a realizar una revisión de lo anteriormente establecido como necesidades de las mujeres y a adecuar sus reivindicaciones y discursos. Se abre así un período de reflexión al que acompaña una actividad más diversificada, atomizada en el discurso y con menor proyección pública, que se puso de manifiesto en las Jornadas feministas ce-

lebradas en Madrid (1993) y en Córdoba (2000), donde la profusión de colectivos, experiencias y temas a debate es un exponente de lo que antes señalaba.

En esta etapa caracterizada por la explosión de la diversidad, buena parte de la atención en el campo de la teoría y de la práctica pasa de estar centrada en las diferencias de las mujeres con los hombres, a analizar la significación y alcance de las diferencias entre las mujeres. Existe un amplio abanico de posiciones al respecto, que van desde la afirmación de las mujeres como un colectivo homogéneo con una identidad en sentido fuerte, prácticamente sin fisuras, a las que niegan cualquier similitud entre ellas que pueda tener una significación política. A continuación mencionaré sólo las posiciones más significativas, explicando algunas de sus ideas.

Hay un gran bloque de posiciones que parten de la existencia de mundos diferentes para mujeres y hombres. Desde las posturas defendidas por el feminismo cultural[19] las diferencias entre las mujeres no son relevantes, ya que lo que las define deriva de una esencia o naturaleza femenina que comparten todas ellas y las unifica en un colectivo homogéneo. El esfuerzo debería dirigirse, en consecuencia, a construir una cultura femenina alternativa que desarrolle los valores y atributos de los que son portadoras las mujeres.

Sin embargo, la teoría de la diferencia sexual[20] que también remite a mundos contrapuestos, no prescinde de las diferencias entre las mujeres, muy al contrario las afirma como inspiradoras de fuerza y sentido de su existencia y, por lo tanto, dedica mucha atención a las formas que adoptan esas relaciones. Sin embargo, al proponer como objetivo el impulso de un mundo femenino, elude el hecho de que las ideas, intereses y procesos sociales que subyacen en sus prácticas no sólo son diversos sino que pueden ser contrapuestos a los objetivos de liberación y pueden fundamentar relaciones de desigualdad entre las propias mujeres.

En otra dirección apuntan algunas posturas[21] que se esfuerzan en diluir las similitudes que el género establece entre las mujeres, hasta el extremo de

---

19. Corriente que tiene su origen en EEUU, siendo algunas de las figuras más conocidas son Adrienne Rich, Kathleen Barry, Susan Brownmiller.

20. *Il pensiero della differènza sessuale* tuvo como una de sus principales pensadoras a la francesa Luce Irigaray, pero se desarrolló sobre todo a través de colectivos feministas en Italia, y más recientemente en el Estado español.

21. Un análisis crítico de estas posiciones se puede encontrar en el artículo de Linda Alcoff: «Feminismo cultural versus post-estructuralismo: la crisis de identidad de la teoría feminista» publicado en la revista *Debats* nº 76. Institució Alfons el Magnànim, primavera 2002.

negar cualquier identidad común. Este tipo de posturas consideran, por lo tanto, que el punto de partida para la práctica feminista no son las mujeres en tanto que tales sino por la individualidad que cada una representa. Como consecuencia, la lucha feminista solo tiene sentido para ellas en la medida que denuncia las imposiciones que constriñen ese desarrollo individual, pero rechazan cualquier proyección afirmativa que derive de la lucha feminista al negar el sentido colectivo de la misma.

En mi opinión, el punto de partida en relación con este debate sería considerar que la pertenencia de las mujeres al género femenino, junto con sus otras adscripciones sociales (de clase, raza….) y sus itinerarios vitales conforman subjetividades diferenciadas que explican las distintas formas de vivir o percibir la subordinación. La política feminista debería partir de lo que, por otro lado, es una obviedad: la diversidad de las mujeres. Pero una cosa es afirmar que el género no es la única adscripción social de las mujeres y otra que no sea un elemento fundamental en nuestra identidad, hoy y en esta sociedad, y que, por tanto, nos permita establecer similitudes y objetivos comunes en la lucha feminista. Que esa identidad es cambiante y los intereses de las mujeres también no invalida la anterior afirmación, lo que a mi modo de ver hace es convertir en más complejo el terreno por el que tiene que discurrir el feminismo.

Un ejemplo es la evolución en el tratamiento dado a la sexualidad. Primero fueron las feministas lesbianas (organizadas en colectivos específicos dentro del movimiento) quienes cuestionaron la identidad heterosexual dominante, por negarlas y excluirlas. Le han seguido las mujeres transexuales, dando así otro paso en la visibilización de las «minorías» sexuales. Esto ha favorecido la apertura del discurso, por parte del movimiento, a las diversas prácticas sexuales (muchas de ellas consideradas desviaciones de la norma), y a criticar la jerarquización social de las opciones y prácticas sexuales de las mujeres. Además todo ello puede tener el objetivo común de criticar el modelo y reivindicar la libertad sexual para todas. Por otro lado, la propia existencia de estos colectivos que reclaman su singularidad entra en colisión con cualquier intento (incluso desde el feminismo) de normativizar el comportamiento sexual de las mujeres o de encerrarlas en una identidad única.

Como han señalado diversos autores[22] todo conflicto implica afirmaciones de identidad y el desarrollo de intereses colectivos. Y el conflicto entre los sexos existe, no hay más que remitirse a la realidad, pues pese a los cambios logra-

22. Pedro Ibarra y Benjamín Tejerina. «Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural». Madrid, Trotta, 1998.

dos se mantienen mecanismos de dominación y sujeción de las mujeres y lo femenino y lo masculino sigue marcando en buena medida su vida. Y es así porque la diferencia sexual coloca a las mujeres, como colectivo, en una posición de subordinación que genera desigualdades que actúan social, económica, cultural, y políticamente ¿Cómo no compartir experiencias de discriminación y de exclusión por más variados que sean los ámbitos donde se producen? ¿Cómo no identificarse en la búsqueda de espacios de libertad y autonomía personal, por muy variadas que sean las formas de hacerlo? La cuestión no es aceptar la diversidad simplemente como un dato de la realidad, pues bloquearía cualquier posibilidad de rescatar los aspectos comunes y formular propuestas de cambio. El reto, que no es menor, radica en no dar por lógica y natural la unidad entre las mujeres, sino en tratar de articular las diferencias para ir trabando esa unidad. Ello requiere el diálogo entre las distintas experiencias y prácticas feministas y una política de alianzas sobre las propuestas y reivindicaciones que se formulan desde los distintos colectivos de mujeres.

Significa también la posibilidad de desarrollar políticas y discursos que integren el reconocimiento de cierta identidad cultural de las mujeres, de esos valores universalizables que derivan de la posición que las mujeres ocupamos en la sociedad y que Giulia Adinolfi[23] denominó «subcultura femenina», junto con políticas que representen un enfrentamiento a las desigualdades y discriminaciones que generan las estructuras sociales y económicas. La combinación de ambos procesos es un nuevo reto para el feminismo a la vez que un estímulo para seguir su trayectoria.

23. *Cf.* Giulia Adinolfi: «Sobre las contradicciones del feminismo», *mientras tanto* nº1, 1979.

Trayectoria y efectos del movimiento pacifista*

ENRIC PRAT

Las actividades en contra de la guerra de Irak de los meses de febrero, marzo y abril de 2003 contaron con una gran participación ciudadana: manifestaciones en la calle, caceroladas, festivales de música, concentraciones a la puerta de las empresas, movilizaciones estudiantiles, las protestas de los artistas, la gran cantidad de carteles contra la guerra que había en las tiendas, centros de trabajo y estudio... Fue una movilización internacional, pero la respuesta en España fue particularmente fuerte. Además, la opinión pública se mostró mayoritariamente contraria a la guerra, como lo demostraron las encuestas de opinión.

Las claves explicativas de esta gran participación ciudadana y de la existencia de una opinión pública contraria a la guerra de Irak son diversas. Una de ellas es la situación internacional creada después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en la que destaca una ofensiva militar de la Administración de Estados Unidos en defensa de sus intereses económicos y geoestratégicos (negocio de la venta de armas, control del petróleo, hegemonía en las relaciones internacionales), concretada en la doctrina militar de la «guerra preventiva» y en la realización práctica de la guerra en Irak, con todas las consecuencias que está comportando (muertos, heridos, torturas, más violencia y odio en la región...).

Un segundo elemento fue la postura extremadamente belicista y sumisa al Imperio del Gobierno Aznar, que provocó una división entre los partidos

* Este texto es una versión ampliada de la intervención realizada el 26 de junio de 2004 en el Diálogo «Hacia un mundo sin violencia», Forum Universal de las Culturas Barcelona 2004. Agradezco a Rafael Ajangiz, Jordi Foix y Pere Ortega las sugerencias que me hicieron a la primera versión de este artículo.

sobre esta cuestión. Fuerzas políticas como IU, ICV, PSOE-PSC, ERC y CiU se declararon contrarios a la política del Gobierno del Partido Popular, sumándose a las movilizaciones contra la guerra.

El tercer aspecto a considerar fue el período precedente de acciones contra la globalización capitalista, ya que las actividades contra la guerra hay que situarlas en el ciclo de protestas, a escala internacional, de los últimos años. Las movilizaciones de los movimientos altermundistas y las manifestaciones antiguerra que se produjeron en diversas partes del mundo, ayudaron a que las que se hicieron aquí fueran más masivas; y las que se hicieron en las ciudades de España contribuyeron a extender las movilizaciones pacifistas y altermundistas de otros países.

Un cuarto factor a resaltar es la actividad previa realizada por las *Plataformas contra la guerra* y los grupos que apoyaron sus movilizaciones. Estas *Plataformas* unitarias agruparon a centenares de entidades y organizaciones. Finalmente, hay que tener en cuenta que desde hace muchos años existe entre la población una conciencia o cultura pacifista, debida en gran parte a la larga actividad del movimiento pacifista, que se refleja regularmente en las encuestas de opinión. Por lo tanto, para comprender bien las movilizaciones contra la guerra del 2003 se ha de conocer la actividad anterior de los movimientos por la paz y antimilitaristas, así como sus impactos.

I

El movimiento por la paz ha sido uno de los movimientos sociales contemporáneos más importantes de España. Sus actividades se han mantenido continuadamente durante varias décadas. A veces con una gran visibilidad social, cuando centenares de miles de personas se han manifestado en la calle en contra de las guerras, de las armas nucleares o de los bloques militares. En cambio, en otras ocasiones las actividades pacifistas han sido impulsadas por un reducido número de personas y colectivos, aunque vistas en conjunto y con una perspectiva histórica, estas actividades no tan visibles para el conjunto de ciudadanos han tenido unos efectos sociales considerables. El movimiento pacifista ha pasado por etapas en las que ha jugado un papel de catalizador de las movilizaciones ciudadanas por la paz y en contra de la guerra, y por fases en las que su función principal ha sido la de dinamizador cultural (elaborando propuestas alternativas de defensa, impulsando la educación para la paz, etc.).

El movimiento por la paz ha desarrollado campañas y acciones en las que ha criticado las diversas dimensiones del militarismo y ha propuesto alternati-

vas de paz y desarme. Estas actividades se pueden agrupar en tres ámbitos: en contra de las guerras y de los conflictos armados, oposición a todo lo que contribuye a la preparación de la guerra y fomento de una cultura de la paz.

Por lo que respecta a las guerras y a las intervenciones militares, las movilizaciones más numerosas fueron las manifestaciones ciudadanas y estudiantiles en contra de las guerras del Golfo Pérsico de 1991 y de Irak de 2003. Pero a lo largo de la década de los años noventa y durante los últimos años, se han realizado manifestaciones y concentraciones por la paz y contra la guerra ante otros conflictos bélicos e intervenciones de los ejércitos de Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. En este terreno se pueden citar las respuestas del pacifismo ante guerras como las de los países de la antigua Yugoslavia, la de Chechenia, la de Timor o la de Afganistán. Una de las tareas y retos actuales del pacifismo es mantener una actividad regular sobre el conjunto de guerras que se producen en el mundo,[1] empezando por dar información sobre los conflictos bélicos que son sistemáticamente ignorados por los medios de comunicación.

Los grupos pacifistas y antimilitaristas han mantenido opiniones críticas sobre las intervenciones militares. Han constatado que antes de las mismas las potencias han vendido armas a los países en conflicto, no han agotado las acciones políticas, las presiones diplomáticas y las negociaciones, y la mayoría de las veces no han intervenido para defender los derechos humanos sino por razones estratégicas (asegurarse el control del petróleo y la presencia militar en zonas de interés económico y geoestratégico) o militares (excusa para reestructurar ejércitos, crear fuerzas militares de intervención rápida, fabricar armas más modernas). Por otra parte, han indicado que la experiencia de diversas intervenciones militares ha demostrado que después de las mismas los conflictos y enfrentamientos bélicos no se han resuelto sino que, además de afectar negativamente a la sociedad (muertos, heridos) y al medio ambiente, se han generado nuevos problemas, como el aumento vertiginoso de refugiados, la violación de los derechos humanos o la instrumentalización de estas intervenciones de ejércitos extranjeros por parte de los regímenes que se pretende combatir, facilitando la represión sobre la oposición democrática interna y los disidentes. También han criticado la tendencia a realizar intervenciones militares sin mandato y al margen de Naciones Unidas.

El movimiento pacifista ha rechazado de forma contundente la «guerra preventiva», catalogándola como una doctrina militar de ataque, agresiva, que puede fomentar la proliferación de armas de destrucción masiva en los países

1. En el año 2003 más de 30 países estaban en guerra.

que se sientan amenazados por ella, y que vulnera la legalidad internacional, ya que la Carta de las Naciones Unidas solo contempla el uso de la fuerza en legítima defensa en el caso de que se produzca un ataque armado.

El movimiento por la paz ha dejado muy clara su opinión de que las fuerzas militares, por los instrumentos que emplean —armas— y por la instrucción que reciben —mentalidad belicista y sumisa— no son las adecuadas para contribuir a la resolución pacífica y justa de los conflictos. El hecho de que algunos cuerpos militares que han intervenido en conflictos, incluso los que lo han hecho como «cascos azules» de las Naciones Unidas, hayan estado implicados en maltratos y agresiones a las poblaciones autóctonas, violaciones de personas, en la organización de redes de prostitución y contrabando ilegal de mercancías, han venido dando la razón a las denuncias efectuadas por las organizaciones pacifistas y a sus propuestas de que ante los conflictos bélicos se requieren expertos en mediación, organizaciones especializadas en tareas humanitarias, entidades que se dediquen a la cooperación para el desarrollo y el impulso de un diálogo intercultural real.

Frente a las intervenciones militares, el movimiento pacifista ha defendido la resolución de los conflictos por medios alternativos a los militares, como la prevención, la diplomacia, las acciones políticas o la suspensión de la venta de armas a los países en conflicto.

Además de las manifestaciones en la calle, se han desarrollado otras actividades pacifistas ante los conflictos bélicos. Hay que recordar experiencias como las *Brigadas Internacionales de Paz*, que mantienen, desde su fundación en 1981, equipos de acompañantes/observadores internacionales en áreas de conflictos armados,[2] con el objetivo de proteger la actuación política de las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos que sufren represión o amenazas.

También hay que resaltar la tarea de algunos colectivos de mujeres antimilitaristas, como la Red de grupos *mujeres de negro*, centrada en la crítica de las guerras desde el punto de vista de las mujeres y en dar a conocer la situación de las mismas en los conflictos bélicos, como víctimas de una violencia específica de género (agresiones sexuales, violaciones...) y como protagonistas de una lucha de resistencia a la guerra y de una labor por la supervivencia de las personas y el cuidado de los enfermos y los heridos; y en

2. Desde su fundación hasta la actualidad, *Brigadas Internacionales de Paz* ha enviado acompañantes/observadores a los conflictos de Guatemala, El Salvador, Sri Lanka, Colombia, Haití, México y Timor. *BIP* nació en España el año 1988.

la potenciación del diálogo y la solidaridad entre las mujeres de las diferentes partes enfrentadas en los conflictos armados, para que luchen conjuntamente contra la guerra y por una paz justa y sin opresión, a través de la negociación y la mediación.[3]

Tampoco se ha de olvidar las campañas de apoyo a los desertores de la guerra del Golfo Pérsico de 1991 impulsadas por diversos colectivos pacifistas y antimilitaristas, en el marco de la campaña insumisión.[4]

Finalmente, en este terreno de los conflictos violentos hay que valorar el trabajo a favor del diálogo, el acuerdo y la paz en el País Vasco realizado por los grupos *Gesto por la Paz* (desde su formación en 1986) y *Elkarri* (desde su nacimiento en 1992).

El segundo ámbito de trabajo ha sido la oposición a todo lo que contribuye a la preparación de la guerra y amenaza la paz, es decir, las armas, los gastos militares, la investigación científica con finalidades bélicas, la industria y el comercio de armas, la permanencia de bloques y bases militares, la existencia de ejércitos numerosos[5] y las doctrinas militares agresivas.

En el movimiento por la paz hay unanimidad en el análisis de que las guerras se producen porque previamente se toman decisiones para su preparación desde diferentes ámbitos de la sociedad (gobiernos, parlamentos, fuerzas armadas, industrias de armas, partidos políticos, centros de investigación militar...), como aprobar la participación en una agresión militar contra otros países, decidir el fortalecimiento de los ejércitos, aumentar los gastos militares o fabricar y vender nuevas armas. Pero en los últimos años los grupos pacifistas y antimilitaristas también están poniendo el acento en la responsabilidad personal que tienen los ciudadanos en la preparación de la guerra, en la medida en que se desentienden de problemas como los siguientes: una parte de las aportaciones que se hacen a través del impuesto sobre la renta se destina a gastos militares; se compran acciones, se realizan planes de pensio-

3. Por ejemplo, *Dones x Dones*, uno de los grupos que forma parte de la *Red Internacional de mujeres de negro* y de la *Red de grupos mujeres de negro* en España, se ha ocupado de las relaciones entre grupos de mujeres de los Balcanes, de Israel y Palestina, de Estados Unidos y Afganistán, de Chechenia y Rusia, de Marruecos y El Sahara, de Argelia y, recientemente, de Colombia.

4. En Barcelona, la campaña «Deserció ara», hizo un llamamiento a la desobediencia civil y dio apoyo a dos desertores catalanes.

5. Naciones Unidas calcula que hay unos 26 millones de militares profesionales en el mundo. El modelo de Ejército aprobado en 1998 por el Gobierno del Partido Popular preveía contar con unos 120.000 soldados profesionales, aunque actualmente se está lejos de esta cifra (a finales de 2003 estaba formado por unos 70.000).

nes o se depositan ahorros en empresas vinculadas a la industria de armas; se vota a partidos políticos que apoyan acciones armadas contra otros países, aprueban gastos militares o potencian el comercio de armas. En consecuencia, se va ampliando la conciencia de que para evitar las guerras no hemos de colaborar en su preparación.

Las propuestas de actuación son diversas: no votar a los partidos políticos que sostienen el militarismo; objeción fiscal; objeción científica, es decir, la negativa de los investigadores a participar en el desarrollo de proyectos militares; objeción laboral, que consiste en negarse a realizar trabajos que tengan finalidades bélicas; objeción financiera, que opta por no invertir ni depositar ahorros en empresas vinculadas a la industria y el comercio de armas, potenciando alternativas como los bancos y los fondos éticos; apoyar, colaborar y participar en actividades, campañas y organizaciones pacifistas y antimilitaristas.

Las campañas y acciones más significativas referidas a estos temas han sido las siguientes. Sobre las armas hay que resaltar la campaña municipios desnuclearizados, desarrollada en 1983-1984, durante la cual unos 400 Ayuntamientos de España aprobaron mociones en las que declaraban su territorio libre de armas nucleares; la campaña internacional por la prohibición de la fabricación, almacenamiento y venta de minas antipersona; y la campaña «Adiós a las armas», por el control de los 500 millones de armas ligeras que circulan por el mundo (pistolas, ametralladoras, rifles, lanzagranadas, cañones...), iniciada en 1999 por unas veinte ONGs y coordinada por la *Càtedra Unesco sobre Pau i Drets Humans* de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Ante las diversas cuestiones implicadas en la economía de la defensa se han realizado diversas campañas. La objeción fiscal a los gastos militares, cuya primera campaña se hizo en 1983, consiste en deducir en la declaración del impuesto sobre la renta el porcentaje equivalente al que en los Presupuestos Generales del Estado se destina a financiar las fuerzas armadas, la investigación de programas militares o la compra de armas,[6] y en la donación del dinero liberado a entidades que desarrollan proyectos de paz, de conservación del medio ambiente, de combate contra la pobreza y otras necesidades

6. En los últimos años el Ministerio de Defensa acapara el 5'6% de los Presupuestos del Estado, aunque también hay gastos militares adjudicados a otros ministerios, como es el caso de los gastos derivados de la participación de España en la construcción de un avión de combate europeo, que están contabilizados en el Ministerio de Industria. En el año 2003 el gasto militar de España fue de 43 millones de euros al día.

sociales. La *Fundació per la Pau* impulsa una campaña para que los recursos destinados a la investigación militar sean utilizados en investigación orientada a fines civiles.[7]

También hay que citar las marchas contra las fábricas de armamentos y a favor de su conversión en producción civil de utilidad social realizadas en el País Vasco desde principios de la década de los años noventa, dando lugar a la formación del colectivo *Gasteizkoak*, que ha realizado diversas propuestas de conversión de las industrias de armas, entre ellas la de Explosivos Alaveses (EXPAL), que generó un importante debate entre los diversos sectores implicados (sindicalistas de la fábrica, grupos pacifistas, colectivos sociales...). Esta labor condujo a la constitución, en Álava, de la *Plataforma Moldaketa*, que agrupa a colectivos juveniles, antimilitaristas, ONGs, grupos cristianos y organizaciones internacionalistas, y plantea la conversión de la industria militar vasca.[8]

La *Campanya contra el comerç d'armes* (*C3A*), que se formó en Barcelona en otoño de 1988, impulsada por *Justícia i Pau*, la *Fundació per la Pau* y la *Coordinadora pel Desarmament i la Desnuclearització Totals*, realizó diversas tareas de investigación y denuncia de temas vinculados a la industria y el comercio de armas, hasta que en el 2001 se transformó en el *Centre d'Estudis per la Pau J.M. Delás*, integrado en *Justícia i Pau*. Entre las actividades a favor de la transparencia y el control de la exportación de armas hay que mencionar la campaña «Hay secretos que matan», iniciada en 1994 por *Amnistía Internacional*, *Greenpeace*, *Médicos sin fronteras* e *Intermón (Oxfam)*, que contó con el apoyo de más de mil entidades y asociaciones, nueve parlamentos autonómicos y unos doscientos ayuntamientos, en las que se ha reclamado que los gobiernos informen a los parlamentos y a la sociedad sobre sus exportaciones de armas y se ha reivindicado la adopción de códigos de conducta en el comercio de armas, en los que se exija a los gobiernos destinatarios de las armas el respeto a los derechos humanos, que no existan en el país conflictos bélicos internos y que no estén implicados en agresiones armadas contra otros países o pueblos.[9]

Sobre los bloques y las bases militares destacan las movilizaciones contra de la pertenencia de España en la *OTAN*, que se iniciaron a principios de los años ochenta con una *Marcha antiOTAN* organizada por el *GANVA* (*Grup*

7. En España, el 35% del dinero público dedicado a la investigación se destina a investigación militar, que asciende anualmente a unos 220.000 millones de las antiguas pesetas.
8. En España, unas 14.000 personas trabajan en industrias de armas.
9. En la actualidad, unos 85 países reciben armas españolas.

d'Acció Directa No-violenta AntiOTAN), continuó con las manifestaciones convocadas por los *Comités Anti-OTAN* en los años 1981 y 1982, y después con las acciones a favor de la convocatoria de un referéndum claro y vinculante sobre esta cuestión, convocadas por la *Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas* (1983-1986).

Han sido muy significativas las acciones por la anulación del Convenio Bilateral con los Estados Unidos, el desmantelamiento de las bases militares norteamericanas y contra la presencia de barcos de la *OTAN* y de la *Sexta Flota* norteamericana en los puertos del Mediterráneo, entre las que sobresalen la campaña «Bases Fuera», que se desarrolló entre 1987 y 1989 a iniciativa de la *CEOP*; las *Marchas* a la base aeronaval de Rota, convocadas periódicamente, desde 1983 hasta la actualidad, por el ecopacifismo andaluz; las marchas a los campos de tiro de Las Bardenas, El Teleno o Anchuras en los años noventa; las denuncias realizadas por el movimiento por la paz cada vez que las bases militares se han utilizado para agredir a otros países, como fueron los casos de Libia (1986) e Irak (1991, 1998); las movilizaciones de los ciudadanos de Campo de Gibraltar en protesta por la presencia del submarino atómico británico *Tireless*, que permaneció durante un año, entre el 2000 y el 2001, en el muelle de Gibraltar con el reactor nuclear averiado; y las acciones que viene protagonizando, desde 1998, la coordinadora *Tarragona Patrimoni de Pau*, que agrupa a más de treinta entidades tarraconenses que trabajan para que el puerto de Tarragona deje de ser base logística de los barcos militares de la *Alianza Atlántica* y de la *Sexta Flota* y no recalen en sus costas buques de guerra, algunos de los cuales son de propulsión nuclear y quizás portadores de armas nucleares.

Recientemente, *Justícia i Pau* está impulsando la campaña «Globalicemos la paz. Por una defensa europea no armada», en la que se defiende una Europa desmilitarizada, sin bloques militares, sin producción ni comercio de armas, frente a la concepción militarista de la seguridad que impera entre los dirigentes de la Unión Europea, que en los últimos años han dado pasos decisivos para contar con una fuerza militar relevante, aunque coordinada con la *OTAN* y en estrecha alianza con los Estados Unidos. Las iniciativas más importantes de la Unión Europea han sido la creación de *EADS* (*European Aerospace Defense Space Systems*), un consorcio europeo para la fabricación de armas, formado por las industrias armamentistas de Alemania, Francia, Italia y España, y la *Agencia Europea de Armamentos*, encargada de controlar la producción y exportación de armas; el desarrollo de programas de fabricación conjunta de armamentos, como el avión de combate europeo *Eurofighter*, el avión de transporte militar *Airbus* o el helicóptero *Tigre*; la decisión de crear una fuerza de intervención rápida, compuesta inicialmente por unos 60.000 militares; y la voluntad manifiesta

de aumentar los gastos militares en todos los países miembros de la Unión Europea.[10]

Frente al Ejército hay que mencionar la larga lucha por el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia y por la abolición del servicio militar obligatorio, iniciada en plena dictadura franquista, cuando aparecieron los primeros objetores de conciencia, y sostenida por el *Movimiento de Objeción de Conciencia* (formado en 1976), los grupos antimilitaristas *Mili KK* (creados a partir de 1984) y la campaña insumisión (1989-2002). Asimismo, hay que recordar las actividades en contra de la incorporación de las mujeres en las Fuerzas Armadas, impulsadas en la década de los años ochenta por los grupos de mujeres antimilitaristas. También han sido destacadas las manifestaciones en protesta por la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, particularmente la del 20 de mayo del 2000, convocada por la *Plataforma contra la desfilada militar* de Barcelona, en la que participaron decenas de miles de ciudadanos. Tampoco se ha de olvidar la tarea que desarrollaron asociaciones como la *IDS* (*Informació per a la Defensa dels Soldats*), constituida en 1990 a iniciativa del *Mili KK* de Barcelona, asesorando y ayudando a los soldados profesionales que padecen maltratos, agresiones, violaciones, vejaciones, sanciones injustas o abusos de poder.

Uno de los retos del antimilitarismo es la promoción de actividades dirigidas a los jóvenes, para que no ingresen voluntariamente en el ejército, así como la reivindicación del derecho a la objeción de conciencia para los soldados profesionales. Por esa razón, es de una gran importancia la campaña «Escuelas Objetoras», iniciada en 1998 por la *Fundació per la Pau*, a través de la cual los centros de enseñanza (de secundaria y de primaria) se pueden declarar objetores de conciencia, comprometiéndose a educar por la paz y negándose a colaborar en las campañas del Ministerio de Defensa para fomentar el espíritu militarista en las escuelas y reclutar voluntarios para ser soldados del Ejército, no organizando charlas ni distribuyendo sus materiales de propaganda.[11]

El tercer ámbito de actuación ha sido el fomento de una cultura de la paz, a partir del desarrollo de tareas como la investigación para la paz, iniciada por el *Institut Víctor Seix de Polemologia*, que se creó en 1968, e impulsada

10. El gasto militar conjunto de los países miembros de la Unión Europea supone el 19'52% del gasto militar mundial (*The Military Balance 2002-2003*).
11. Hasta ahora, unos 250 centros de enseñanza de Cataluña se han declarado objetores de conciencia. Campañas similares a ésta se han desarrollado en Madrid, Pais Valencià, Canarias, Aragón, Castilla-León, Andalucía y País Vasco.

durante estos treinta y seis años por diversas asociaciones e instituciones (*Seminario de Investigación para la Paz* de Zaragoza, *Universidad Internacional de la Paz* de Sant Cugat del Vallés, *Centro de Investigación para la Paz*, *Fundació per la Pau*, *Centre J.M. Delàs d'Estudis per la Pau* de *Justicia i Pau*). La educación para la paz, que incluye el fomento de valores como el diálogo, el respecto y la cooperación, comenzó sus actividades en los años setenta con las campañas contra los juguetes bélicos y sexistas, y ha seguido desarrollándose hasta la actualidad a través de los diversos grupos que se han dedicado a ella (*Ensenyants per la Pau*, la revista *En Pie de Paz*, el colectivo *No-violencia y Educación*, el *Seminario de Educación para la Paz —Sedupaz-*, el *Seminario Permanente de Educadores y Educadoras para la Paz* de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Barcelona); la divulgación y análisis pacifistas realizados por diversas revistas vinculadas al movimiento por la paz, como *La puça i el General*, *mientras tanto*, *En pie de Paz*, *El Mocador* y el *Diari La Pau*.

En conjunto, todos estos grupos, organizaciones, revistas, campañas y plataformas han defendido unos objetivos comunes, compartidos por multitud de personas, como la oposición a las guerras, por la paz, la desvinculación de España de la *OTAN*, el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia y la abolición del servicio militar obligatorio. Y han indicado diversos caminos y alternativas viables para construir la paz y la justicia en el mundo, como el desarme, que el dinero de los gastos militares se destine a necesidades sociales, una reducción drástica de los ejércitos, la prevención y la resolución pacífica y justa de los conflictos bélicos, la noviolencia, la desobediencia civil, la objeción fiscal, la objeción de conciencia o la educación para la paz.

II

En el libro *Antes muertas. Mujeres contra el peligro de guerra nuclear*, coordinado por Dorothy Thompson (laSal-edicions de les dones, Barcelona, 1983), hay un poema de Janet Dubé, en el que se plantean algunos interrogantes sobre la eficacia de la lucha pacifista: ¿Si hago algo por la paz, servirá? ¿Si hago algo por la paz, me ayudará a mí o ayudará a la paz? ¿Si no hago nada, que significa?

Estas mismas dudas sobre la eficacia de las acciones contra la guerra y a favor de la paz las han tenido muchos ciudadanos que han participado en las manifestaciones pacifistas y bastantes de los activistas de las organizaciones del movimiento por la paz, sobre todo cuando comprueban que a pesar de las grandes movilizaciones ciudadanas no consiguen sus objetivos. Hay veces

que hasta se preguntan si ha valido la pena participar en las actividades pacifistas o si éstas han tenido algún tipo de efecto.

De entrada hay que reconocer que existen grandes dificultades para plasmar las propuestas y alternativas del movimiento por la paz. En primer lugar, sus adversarios son muy poderosos (ejércitos, partidos políticos que apoyan el militarismo, industrias de armas...). Por otra parte, los gobiernos no están dispuestos a negociar su política exterior y de defensa ni su modelo de ejército. Estos temas forman parte de las políticas que son decididas por un número limitado de personas (gobierno, direcciones de los partidos políticos defensores del sistema, cúpulas militares...). También hay que señalar que la opción de las elites dominantes, normalmente, es resistir las presiones de los movimientos sociales, no hacer concesiones a corto plazo y, cuando se ven obligados a realizar modificaciones en sus políticas, no reconocen la incidencia de las movilizaciones ciudadanas en sus decisiones, ya que saben que de esta manera debilitan a los movimientos.

Otro de los obstáculos es el carácter indirecto de la democracia existente en nuestra sociedad, en la que los representantes elegidos tienen la última palabra y la única legalmente válida en todos los niveles de decisión política. La Constitución española reconoce el derecho a una posible participación directa, universal y decisoria de los ciudadanos solo para la ratificación de la propia Constitución y de los Estatutos de Autonomía (art. 23.1). Las otras formas de participación directa no son de carácter decisorio, sino exclusivamente consultivo e interpelativo (petición —arts. 29 y 77-, iniciativa legislativa popular —art. 87.3- y referéndum —art. 92-). Y aún así, en el caso de la iniciativa legislativa popular se excluyen las materias orgánicas, tributarias, internacionales o de gracia.

Por tanto, no se contemplan canales efectivos para la participación de la población y de los movimientos sociales en la toma de decisiones. Por esa razón, los movimientos sociales reivindican una mayor profundización de la democracia, a partir de reformas constitucionales que incrementen el poder de la ciudadanía y las posibilidades de influencia de los movimientos sociales. En particular, piden la articulación de mecanismos de democracia directa desde los cuales la ciudadanía pueda decidir o al menos influir de forma efectiva en los asuntos que le afectan, como el referéndum vinculante para la aprobación de presupuestos y leyes, en todos los niveles de la Administración (estatal, autonómico y municipal). Un ejemplo de reivindicación de mecanismos de democracia directa fue el que hizo el movimiento contra la guerra de Irak en el año 2003, cuando en una de las tres preguntas de la consulta sobre la guerra se refería a la reivindicación de un referéndum vinculante para decidir la postura de España en este conflicto.

Ahora bien, a pesar de las limitaciones apuntadas, los movimientos sociales, a través de la presión que ejercen con sus acciones, influyen en las instituciones donde se concentra el poder político, económico, social y cultural de la sociedad, y demuestran tener una importante capacidad para situar nuevos temas en el debate público y en la agenda política de estas instituciones, especialmente en aquellas que están más próximas a los ciudadanos, como es el caso de los Ayuntamientos.

En algunas ocasiones los movimientos consiguen sus objetivos políticos o legislativos, aunque, a menudo, éstos se plasman sólo de forma parcial y el resultado final acostumbra a ser un híbrido entre lo que planteaba el movimiento y los propósitos de otros actores sociales y políticos, entre ellos los adversarios del propio movimiento.

Habitualmente los movimientos sociales no consiguen, a corto plazo, sus objetivos políticos, pero en cambio, sus ideas, valores y alternativas son aceptadas por amplios sectores de la sociedad, creándose así las bases culturales necesarias para cambios sustantivos posteriores. Por este motivo, hay que tener en cuenta que para valorar correctamente los impactos de los movimientos sociales se necesita perspectiva histórica, ya que la gran mayoría de sus efectos acostumbran a producirse de forma lenta y acumulativa, y a visualizarse a medio y largo plazo, a veces bastante después de la acción del movimiento.

Sobre los efectos del movimiento por la paz hay un ejemplo actual muy evidente, ya que en el reciente cambio de gobierno en España y en la decisión de retirar las tropas españolas de Irak han influido mucho las movilizaciones en contra de la guerra y de la participación española en la misma decidida por el Gobierno de Aznar. Pero este no es el único impacto conseguido por el movimiento pacifista. Un análisis profundo de su historia nos indica que ha logrado otros resultados.

Se consiguió la convocatoria del referéndum sobre la *OTAN* en marzo de 1986. También se ha de indicar que la inclusión de las tres condiciones de la pregunta del referéndum, entre ellas la prohibición de instalar armas nucleares en el territorio español y la reducción progresiva de la presencia militar de Estados Unidos en España, se hizo, en parte, por la incidencia del movimiento por la paz, ya que el gobierno sabía que no podía ganar el referéndum con una simple propuesta de permanencia en la Alianza Atlántica.

En el año 2002 se suprimió el servicio militar obligatorio, como consecuencia de la confluencia de diversos factores: la prolongada acción del movimiento antimilitarista, el vertiginoso aumento del número de objetores de

conciencia[12] e insumisos,[13] una opinión pública que rechazaba la *mili* (cerca del 65% durante los años ochenta y alrededor del 75% durante los noventa), y la tendencia a la profesionalización de los ejércitos de la *OTAN* tras el final de la guerra fría, derivada de una reformulación de las políticas de defensa en las que se puso el acento en el armamento tecnológicamente sofisticado, las unidades militares de intervención rápida y las tropas profesionalizadas, capaces de manejar las nuevas armas y realizar con eficacia las misiones. Además, la persistente lucha de los objetores de conciencia, los insumisos y los grupos antimilitaristas es en parte responsable de la poca credibilidad social que tienen en la actualidad las Fuerzas Armadas y de sus dificultades para conseguir un número suficiente de voluntarios.

La Unión Europea, incluida España, firmó el Tratado Internacional que prohíbe la fabricación de minas antipersona y se han aprobado algunos Códigos de Conducta sobre exportación de armas convencionales.[14] Como muestra de los avances que se han realizado hacia una mayor transparencia de las exportaciones de armas, el Congreso de los Diputados aprobó en marzo de 1997 una proposición no de ley en la que instaba al Gobierno a incorporar a la legislación española los criterios sobre transparencia y control de las exportaciones de material de defensa aprobados por la Unión Europea en 1991 y 1992, a enviar semestralmente los datos de esas exportaciones a las Comisiones de Defensa y de Asuntos Exteriores del Parlamento, y a facilitar a estas Comisiones la lista de países que están en situación de conflictividad o militarización o no respetan los derechos humanos, para someterlos a restricciones en cuanto a exportación de material de defensa. Desde la aprobación de esta proposición no de ley se han publicado varios informes oficiales que aportan información sobre los países receptores de material de defensa y los valores absolutos de productos vendidos, aunque no informan sobre los productos que se exportan a cada país.

Las nuevas formas de lucha como la insumisión y la desobediencia civil son aceptadas por un amplio sector de ciudadanos. Las organizaciones del movimiento por la paz han sido marcos de participación política para los activistas y espacios donde se han configurado y compartido unos valores nuevos. El movimiento por la paz ha mostrado tener una gran capacidad para integrar a personas de diversas generaciones. La mayoría de los activistas que han participado en un momento de su vida en las organizaciones pacifistas y antimilitaristas han mantenido posteriormente sus ideas pacifistas.

---

12. La suma de objetores de conciencia entre 1976 y 1988 ascendió a un total de 738.832.
13. En los diez años de insumisión hubo unos 20.000 insumisos.
14. Estados Unidos en 1997, la Unión Europea en 1998.

Los análisis, propuestas y debates del movimiento pacifista han hecho reflexionar y modificar sus ideas a multitud de personas y sectores sociales y políticos (partidos, instituciones religiosas, medios de comunicación, científicos, profesores, artistas, médicos...) en temas tan esenciales como la guerra, la paz, la violencia, las armas nucleares, los gastos militares, las industrias de armas, los ejércitos o los modelos de defensa. En fin, las actividades del movimiento por la paz han generado un sedimento, sensibilidad o cultura pacifista entre la población, que se refleja regularmente en las encuestas de opinión, donde una mayoría de ciudadanos se muestra contrario a las guerras, que se expresa a menudo en un apoyo social amplio a las campañas y actividades del movimiento por la paz, y que permite que haya una extensa respuesta pacifista cuando se producen guerras o aumenta de forma alarmante el militarismo, como se ha demostrado en las recientes movilizaciones contra la guerra de Irak.

De todas formas, aunque la acción pacifista no fuera eficaz, continuaría teniendo sentido la participación en actividades pacifistas, la objeción de conciencia y la desobediencia civil frente al militarismo, para dejar un testimonio ético a favor de la paz y que todos sepan que preparan la guerra sin nuestro consentimiento y que no queremos que hagan la guerra en nuestro nombre. En cualquier caso, la experiencia histórica ha demostrado que el militarismo, la economía de las armas y la cultura belicista han sido ineficaces en la solución de los conflictos y que se han de dar oportunidades a la paz.

Sabadell, julio 2004

Bibliografía

AJANGIZ, Rafael, «Movimiento pacifista: Una crisis que no es tal», en Elena Grau y Pedro Ibarra (coord.). *Una mirada sobre la red. Anuario movimientos sociales,* Donostia/Barcelona, Gakoa/Icaria, 2000, pp. 165-183.

— *Política militar y movimientos sociales: el fin de la conscripción en Europa*, Leioa, Universidad del País Vasco, 2000 [tesis doctoral].

FONT, Tica (coord.), *La paz en movimiento: campañas y experiencias de movilización (I) y (II),* Bilbao, Cuadernos Bakeaz, núms. 41 y 42, octubre y diciembre de 2000.

OLIVERES, Arcadi, *Contra la fam i la guerra*, Barcelona, Angle Editorial, 2004.

PRAT, Enric, «Los impactos del movimiento por la paz y antimilitarista de los años ochenta y noventa», ponencia presentada en el VI Congreso de Ciencia Política y de la Administración, Barcelona, septiembre 2003.

— «Sorgiment i desenvolupament del moviment per la pau a Catalunya, 1981-1986», en Enric Prat (coord.), *Els moviments socials a la Catalunya contemporània,* Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2004, pp.155-178.

— *El movimiento por la paz de los años ochenta en Cataluña,* Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 2004 [tesis doctoral].

Objeción de conciencia, insumisión, movimiento antimilitarista

RAFAEL AJANGIZ

La *mili* es historia. No han transcurrido ni tres años desde su suspensión oficial, y se ha convertido en algo tan del pasado que parece cosa de otro siglo, de otra generación. Desde luego, nadie la menciona, nadie escribe sobre ella; hasta las historias de la *mili* que nos regalaba Ivá, desvinculadas ahora de la amarga realidad que las hacía entrañables, suenan hoy lejanas y hasta inverosímiles. Tan es así que, a diferencia de Francia o Italia, en España nadie cree posible que la *mili* pueda volver algún día. Hemos pasado página dejando atrás, que se dice pronto, cien años de obligación cuasiuniversal y otros tantos de quintas de pobres e infortunados.

Hay más. Para quien crea que el fin de la *mili* era inevitable por la sencilla razón de que militares y gobernantes estaban decididos a construir un ejército profesional suficiente para las aventuras internacionales que traen los *nuevos tiempos* de la globalización[1] hay que hacer notar que, entre otros, siguen siendo fieles a la conscripción países como Alemania, Noruega, Dinamarca o Polonia, y ello en modo alguno les impide jugar un papel más estelar que España en esos escenarios. Más bien al contrario, en nuestro país la supresión de la *mili* ha dado paso a unas fuerzas armadas muy debilitadas en relación a las ambiciones reales de los que mandan: cuentan con alrededor de 110.000 efectivos en vez de los 180.000 previstos, sufren un crónico e irrecuperable déficit de reclutamiento, están sumergidas en una severa crisis

1. Cf. DANDEKER, C.: «New times for the military: some sociological remarks on the changing role and structure of the armed forces of the advanced societies» *British Journal of Sociology* 45(4), 1994, págs. 637-654.

de identidad y funcionalidad de la que sólo parecen salvarse las contadas unidades que salen al extranjero con mandatos estrictos de ayuda humanitaria, y la sociedad considera excesivas todas esas inversiones en unos armamentos y equipamientos que, por otra parte, resultan imprescindibles para que los ejércitos españoles puedan simplemente estar ahí.[2] A modo de prueba del algodón, basta con acercarse a cualquier cuartel y departir con los militares que lo habitan. En definitiva, hoy y en este país, es menos utópica que nunca la histórica reivindicación del movimiento antimilitarista de abolir los ejércitos; poco les falta para convertirse en un ralo e inocuo vestigio de lo que en otro tiempo conocimos. Algo que en los años ochenta sólo creían asequible las gentes más redomadamente optimistas del propio movimiento por la paz.

Este es el legado de la lucha por la objeción de conciencia en nuestro país. Sin menospreciar en absoluto las movilizaciones en contra de la OTAN, de las intervenciones militares y demás, la desobediencia al reclutamiento forzoso es la única protesta que nos diferencia radicalmente de los países europeos que han acompañado a España en el abandono de la conscripción. Bélgica, Holanda, Francia e Italia, por nombrar los más evidentes, han aprovechado este paso para profesionalizar y potenciar efectivamente sus fuerzas armadas; España, en cambio, todo lo contrario. Este hecho avala la especial influencia del contexto de movilización social que hemos sabido construir aquí. Puede parecer triunfalismo, pero los datos objetivos de cualquier diseño comparativo con países del entorno son tozudamente inequívocos.[3]

Procedamos pues, a continuación, a un breve recorrido por esta singular experiencia de desobediencia civil. Sin ánimo alguno de sentar cátedra, podemos identificar cuatro etapas o hitos en su evolución: su nacimiento como actitud de una minoría que quería ser pedagógica en un mundo político que mitificaba la violencia; la consolidación y maduración de una estructura de pensamiento-acción que sabe hacerse un sitio en el escenario político de la primera democracia; la puesta en práctica definitiva de una movilización largamente esperada; y la resaca de un triunfo que siempre sabe a poco.

El nacimiento

Si bien es cierto que la cuestión del reclutamiento forzoso no entra realmente en la agenda política española hasta mediados de los ochenta, también lo es

2. Cf. AJANGIZ, R.: *Servicio militar obligatorio en el siglo XXI, cambio y conflicto*. Madrid, CIS, 2003 y DÍEZ NICOLÁS, J.: *Identidad nacional y cultura de defensa*, Madrid, Síntesis, 1999
3. Cf. AJANGIZ, *op. cit*.

que su inclusión está codificada por la resistencia que en los primeros setenta los objetores de conciencia habían empezado a oponer en un contexto marcadamente adverso. Podríamos incluso decir, sin faltar a la verdad, que el movimiento de objeción de conciencia fue, de hecho, el primer movimiento por la paz de este país o, al menos, su primer embrión, y que siempre ha jugado un importante papel en la construcción de las ideas y modos de acción que hoy definen y distinguen al movimiento.

Ello ha sido posible, en buena medida, gracias a la fuerza de sus ideas y convicciones, la coherencia entre sus fines y los medios empleados, y la decidida voluntad de preservar su independencia frente a los cantos de sirena de partidos y otras fuerzas políticas. La suya no ha sido una secuencia de campañas dictadas por la coyuntura sino un proyecto finalista, utópico en el mejor y más movilizador sentido de la palabra, dirigido a acabar con el militarismo en su definición más amplia y comprensiva. Ello y su ubicación en el llamado pacifismo radical, en oposición al pacifismo liberal o internacionalista que opera en claves de política real o realista y que suele integrar a partidos políticos de izquierda, es lo que le ha llevado a definirse como movimiento antimilitarista, denominación esta que apenas se usa en Europa, donde se habla genérica y generalmente de movimiento por la paz. En todo caso, el que ahora se conoce como movimiento antimilitarista fue conocido en sus inicios como movimiento de noviolencia y objeción de conciencia.

Efectivamente, integrados en grupos cristiano de base como Pax Christi y Justicia y Paz, los primeros objetores de los setenta optaron por la noviolencia y la desobediencia civil en un contexto de movilización que tendía a ensalzar la violencia revolucionaria como vanguardia necesaria del cambio político y social. Para ellos, la lucha por el reconocimiento de la objeción de conciencia no fue sino un medio de concienciación y transformación social para avanzar en la construcción de una sociedad alternativa basada en la noviolencia y la justicia social. A diferencia de la concepción dominante en Europa como mero derecho individual a ser eximido del servicio de armas por razones de conciencia, la suya fue una objeción de conciencia política y antimilitarista que ambicionaba la abolición de la conscripción y de los ejércitos.[4]

Todo comenzó en 1971. Inspirándose en la campaña de objeción colectiva que se iniciaba entonces en Francia e Italia, Pepe Beunza se convirtió en el primer objetor español que se negó política y públicamente a incorporarse al servicio militar. Sufrió por ello cárcel, destierro y condenas en cadena, pero

4. Cf. LEDERACH, J.P.: *Els anomenats pacifistes. La no-violencia a l'Estat espanyol*. Barcelona, Edicions de la Magrana, 1983 y OLIVERES, A. «Los cristianos y su lucha por la paz. Algunas notas sobre la situación en España», *Documentación Social* 52 (1983): págs. 133-150.

también convocó la solidaridad necesaria para dar impulso al movimiento.[5] Meses después de su liberación, en enero de 1975, empezaron a organizarse servicios civiles autogestionados en distintas ciudades españolas.[6] Y en enero de 1977 se constituyó formalmente el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), la organización que ha liderado la movilización contra la conscripción hasta su supresión en el año 2001.

Frutos de aquella primera movilización fueron la inclusión de la referencia a la objeción de conciencia en la Constitución de 1978 y, lo que es más importante, la carta que el ministro de Defensa, teniente general Gutiérrez Mellado, envió a los jefes de Estado Mayor de los tres ejércitos en 1976, coincidiendo con la amnistía general, «rogándoles que adoptaran con carácter transitorio el pase a la situación de incorporación aplazada de todos aquellos que en el momento de incorporarse alegaran ser objetores de conciencia».[7] Esta instrucción, dirigida a evitar la secuencia de detenciones de desobedientes que tan mala imagen daban a la recién nacida democracia, estuvo vigente hasta 1985.

Sin duda, el contexto político de la dictadura terminal y de la transición fue una verdadera ventana de oportunidad política que en buena medida explica la mayor resonancia y provecho de la desobediencia de los objetores españoles en comparación con la de los franceses e italianos. Por tres buenas razones. En primer lugar, la desobediencia tuvo y retuvo el valor añadido de la lucha por los derechos humanos y por la instauración de la democracia y de las libertades políticas. La cadena ininterrumpida de ayunos y huelgas de hambre, sentadas y encadenadas noviolentas disueltas violentamente por los militares y las fuerzas de orden público, encarteladas y otras acciones testimoniales, expresaban bien a las claras el compromiso de los y las pacifistas por el cambio político.[8] El hecho de que lo militar fuera durante mucho tiempo la asignatura pendiente de ese cambio contribuyó a extender el marco de solidaridad más allá de lo previsible. Hechos como la aplicación de la justicia militar e ingreso en prisión de veinte antimilitaristas en 1980 por distribuir octavillas en contra del reclutamiento, permitieron enlazar y entender la detención de insumisos como otra invasión de los militares en el ámbito de la libertades civiles y políticas de la sociedad.

---

5. Cf. OLIVER, P.: *La utopía insumisa de Pepe Beunza. Una objeción subversiva durante el franquismo*, Barcelona, Virus, 2002.
6. Cf. LAFUENTE, J.L. y VIÑAS, J.: *Los objetores. Historia de una acción*, Barcelona, Movimiento de Objetores de Conciencia, 1977.
7. Cf. RODRIGO, F.: *La objeción de conciencia en España*. Instituto de la Juventud. Ministerio de Cultura, 1986, pág. 5.
8 ROCA, J.: ¿*Qué son los objetores de conciencia*?, Barcelona, La Gaya Ciencia, 1977.

En segundo lugar, el movimiento participó en las redes políticas de la transición, un mundo en el que se mezclaban indistintamente activistas de partidos políticos y movimientos sociales,[9] como el representante legítimo del pacifismo en general y de la objeción de conciencia en particular.[10] Ello le permitió contar con alianzas significativas algunos años más tarde, cuando el gobierno socialista decidió finalmente regular esta política. La convicción y coherencia ética del movimiento, en relación con una política pública que sólo obliga a quienes detentan el gobierno de España, ha tenido siempre el valor añadido de la legitimidad y la buena imagen en un contexto político habitualmente dominado por particulares y circunstanciales intereses políticos.

Y en tercer lugar, se benefició de la coyuntura de una transición militar inconclusa[11] para acumular fuerzas y apostar por una definitiva desobediencia contra el reclutamiento. En un contexto general de amenaza involucionista, militares y pacifistas alimentaron una tensión constante que durante años impidió regular de un modo razonable y aceptable la cuestión de la objeción de conciencia. Los militares frustraron los primeros proyectos de ley sobre objeción de conciencia, condicionaron la redacción del decreto gubernamental de 1976 que reconocía la objeción de conciencia por motivos estrictamente religiosos, y exigieron la mención expresa del servicio militar obligatorio en la Constitución. Los objetores, por su parte, advirtieron que nunca se acogerían a una legislación insuficiente y movilizaron mediaciones suficientes para defender su proyecto de servicio civil autogestionado por la paz.[12]

Así las cosas, la regulación efectiva de la objeción de conciencia no llegó hasta el 28 de diciembre de 1984, un año en el que el gobierno socialista aprobó varias medidas relativas a las fuerzas armadas, entre ellas una nueva ley de servicio militar que reducía su duración a doce meses. Por mucho que se haya dicho, si se compara efectivamente con las leyes vigentes en la Europa de entonces, la ley de objeción de conciencia no era una mala ley: la mayor duración de la prestación sustitutoria y la prohibición de la objeción sobrevenida eran condiciones habituales en los demás países; a diferencia de

9. ALONSO, L.E.: «Los nuevos movimientos sociales y el hecho diferencial español: una interpretación» en José Vidal-Beneyto (ed.) *España a debate (II): La sociedad*, Madrid, Tecnos, 1991.
10. Cf. RIECHMANN, J. y FERNÁNDEZ BUEY, F.: Redes que dan libertad. Introducción a los nuevos movimientos sociales, Barcelona, Paidós, 1994.
11. Cf. AGÜERO, F.: *Militares, Civiles y democracia. La España posfranquista en perspectiva comparada*, Madrid, Alianza, 1995 y BAÑÓN, R.: «Spanish Military Reform and Modernization» en Kenneth Maxwell (ed.) *Spanish Foreign and Defense Policy*, Westview Press, Boulder, 1991, págs. 237-261.
12. SAMPEDRO, V.: *Movimientos sociales: debates sin mordaza. Desobediencia civil y servicio militar (1970-1996)*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1997.

Alemania, Noruega, Francia, Italia, etc., la institución militar española fue excluida del proceso de reconocimiento y gestión de la objeción de conciencia; y el tribunal de reconocimiento español (CNOC) renunció a su papel de criba aceptando todas las solicitudes que le llegaban, incluida la declaración colectiva del MOC que en Francia e Italia había llevado a los objetores a la cárcel, porque consideró que sus firmantes eran lo más coherentes objetores de conciencia.[13] Sin embargo, contra todo pronóstico, el movimiento consiguió generalizar la idea de que la ley no respetaba el derecho fundamental a la objeción de conciencia y el Defensor del Pueblo se decidió a interponer un recurso de constitucionalidad.[14] Algo tuvo que ver también que en el primer año de andadura de la LOC, sumando colectivas y testigos de Jehová, el 86% de los solicitantes fueran presuntos desobedientes.[15] Estas circunstancias decidieron al gobierno a inhibirse una vez más y esperar la llegada de tiempos mejores.

De la colectiva a la insumisión

La relativa tranquilidad de los años ochenta permitió, por un lado, que el movimiento madurara sus planteamientos ideológicos y estratégicos; analizó, por ejemplo, cómo los gobiernos de los otros países europeos habían conseguido desactivar el potencial de cambio de la objeción de conciencia y por qué no había prosperado su versión desobediente de la insumisión. Y posibilitó, por otro lado, una relativa normalización de la objeción de conciencia: entre 1980 y 1988 el número acumulado de objetores ascendió de 2.500 a 38.500.

Ambos procesos propiciaron un prolongado y acalorado debate interno sobre qué respuesta dar a la cada vez más cercana aplicación de la LOC: aceptarla críticamente y hacer de la prestación sustitutoria una verdadera alternativa al servicio militar, o desobedecerla frontalmente e impedir de nuevo su puesta en marcha. El fondo de la cuestión no era una discrepancia de corte ideológico, sino el cálculo de lo que era posible o no hacer, de lo que se podía exigir y esperar de los objetores acumulados, de la capacidad de asumir los costes personales de la desobediencia, de las previsiones de éxito y fracaso de ambas estrategias. Al final, a diferencia de lo que había pasado en Europa, el

13. RAMOS, M.: *Diez razones para una discrepancia*. Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, 1988.
14. RIUS, X.: La objeción de conciencia. Motivaciones, historia y legislación actual. Barcelona, Integral, 1988.
15. *Vid*. RODRIGO, F.: *op. cit.*

grueso del movimiento organizado optó por la insumisión y los partidarios de la aceptación crítica de la LOC se reunieron bajo las siglas de la Asociación de Objetores de Conciencia (AOC), organización que prosperó sobre todo en Catalunya.

Este hecho podría explicarse sobre la base de dos diferencias relevantes del movimiento español en relación a sus iguales europeos. Una, la prevalencia de una concepción política, colectiva, movimental, del hecho de objetar, sobre la idea dominante en Europa de una elección individual fundamentada en fuertes convicciones personales. Y dos, la decidida oposición al reclutamiento forzoso. Esta segunda cuestión dividía claramente a los representantes de los distintos grupos europeos en los Encuentros Internacionales de Objeción de Conciencia que comenzaron a celebrarse anualmente a mediados de los ochenta. Los españoles se encontraron con que tenían que convencer a la gran mayoría de los europeos de que la abolición de la conscripción era una meta perfectamente legítima y deseable. Entre sus pocos aliados estaban los sudafricanos blancos, que estaban por aquel entonces practicando la desobediencia al reclutamiento forzoso —*End Conscription Campaign*— en su lucha contra el régimen del *apartheid*.[16]

El movimiento de objeción de conciencia siempre fue claro y determinante en esta cuestión, y una cosa llevó a la otra. El primer congreso, celebrado en 1979, cerró con la siguiente declaración: «El MOC se opone a toda conscripción —servicio obligatorio impuesto por el estado— con fines militares o civiles y aboga por su abolición total»; la solicitud colectiva que se puso en marcha en 1985 advertía que «de la misma manera que objeto al Ejército... objetaré a la Prestación Social Sustitutoria, que reproduce los mismos esquemas de militarismo»; el segundo congreso de 1986 confirmó la objeción total o insumisión como la estrategia central del movimiento; finalmente, cuando el CNOC empezó a rechazar la colectiva para comprobar cuántos estaban realmente dispuestos a oponerse a la LOC, el MOC eligió la desobediencia directa al servicio militar. Esta determinación, capaz de sublimar los costes personales derivados de lo que en aquel momento parecía más una apuesta abierta y demasiado arriesgada que la eficaz estrategia que se ha revelado después, tan es así que los otros colectivos antimilitaristas esperaron algún tiempo antes de sumarse a ella, se asienta en gran medida sobre la fuerte convicción e identidad colectiva forjadas en un movimiento asambleario y organizado horizontalmente.

16. IBARRA, P. (ed.): *Objeción e insumisión, claves ideológicas y sociales*, Madrid, Fundamentos, 1992.

En cualquier caso, también hay que hacer notar que esta locura contaba con la necesaria complicidad de amplios sectores de la izquierda política y movimental de este país, conquistada en buena medida en el marco de la campaña anti-OTAN, sobre la base de su independencia con relación a los distintos partidos políticos y el papel de mediación que jugó entre las distintas plataformas pacifistas. Contra todo pronóstico, la idea de resistencia a la conscripción salió fortalecida de aquel referéndum que tan aciago fue para otros sectores del movimiento por la paz.[17]

Dos años después, con aquel triunfo en sus manos, e inmediatamente después de recibir con satisfacción la sentencia del Tribunal Constitucional favorable a la LOC, el gobierno español se decidió a cerrar el ciclo de la desobediencia. Fabricó una amnistía para los objetores habidos hasta el momento, que suponía más ideologizados y decididos, y quiso encauzar a los más jóvenes y recientes hacia la aceptación de la LOC. Pero el conflicto escaló en lugar de debilitarse. En vez de esperar a la anunciada desobediencia a la prestación sustitutoria, el MOC organizó una insumisión directa al servicio militar con la vista puesta en su abolición.

Por fin, la definitiva desobediencia

Este regate estratégico fue doblemente oportuno. En primer lugar, revistió de fuerza narrativa lo que hasta entonces había sido una sorda e inadvertida demanda social, la de abolir el reclutamiento forzoso. El debate político general sobre la voluntariedad u obligatoriedad del servicio militar desplazó a la específica controversia sobre los objetores y su prestación sustitutoria. Y por primera vez, la gente empezó a pensar en su abolición. Hay que recordar que la sociedad, sobre todo los jóvenes, vivían esa obligación como un agravio inadmisible pero insuperable al mismo tiempo: la *mili* no se cumplía por gusto o convicción sino porque, a pesar de su dudosa funcionalidad, era inevitable, infalible.[18] En ese contexto, el valor añadido de la desobediencia fue conferir credibilidad empírica al deseo preexistente de abolir la obligación;[19] el atractivo de la propuesta lanzada por el movimiento era indudable.

---

17. BARROSO, C., RÍO, L. y SANTACARA, A. «¿Dónde están los pacifistas? Notas sobre el pacifismo en España», *Papeles para la Paz* 45, (1992), págs. 237-247.
18. BARROSO, C.: *¿Para qué sirve la «mili»? Funciones del servicio militar obligatorio en España,* Madrid, Siglo XXI, 1991.
19. SNOW, D.A, ROCHFORD, E.B., WORDEN, S.K. y BENFORD, R.D. (1986) «Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation» *American Sociological Review* 51 (1986), págs. 464-481.

Efectivamente, la desobediencia se hizo con un espacio estable en los medios de comunicación de masas por la fuerza del mensaje y por el amable y elocuente formato de sus acciones. El número de noticias fue creciendo progresivamente y mantuvo cotas muy elevadas entre 1991 y 1994, dando pie, además, a muy numerosas editoriales, artículos y comentarios de opinión en todos los medios de ámbito estatal y regional.[20] Un dato significativo al respecto es el elaborado por Sampedro[21] sobre una muestra aleatoria de noticias aparecidas en *El País*, *ABC* y *El Mundo* entre 1989 y 1993: el MOC fue el promotor del 44% de las noticias aparecidas en *El País*, del 40% en *El Mundo* y del 25% en *ABC* frente al 25%, 17% y 34% del actor institucional; además, *El País* y *El Mundo* cambiaron su línea editorial, antes favorable a las tesis gubernamentales. Estos y otros datos análogos acreditan que el movimiento consiguió romper el control elitista de la agenda mediática que ha caracterizado siempre a las políticas de estado en general y a las militares en particular, así como impedir la habitual criminalización y marginalización que sufren los movimientos opositores a la definición elitista de esas políticas.

En segundo lugar, el regate estratégico fue igualmente oportuno porque adelantó al movimiento en el tradicional juego de acción-reacción. Puede afirmarse, positivamente, que la reacción gubernamental caminó globalmente a remolque de la movilización y que las jugadas del movimiento obligaban al contrario en un especie de partida de ajedrez. Veamos la secuencia. Al poco de iniciarse la insumisión, el fiscal general del estado ordenó paralizar las órdenes de prisión dictadas por los jueces militares porque causaban escándalo social. Algunos meses más tarde, en las elecciones generales de 1989, el gobierno socialista se vio forzado a reducir la duración del servicio militar a nueve meses y a trece la prestación sustitutoria. Este fue el origen de la Ley de Servicio Militar de 1991 y del modelo mixto de Fuerzas Armadas 2000. Al cabo de tan sólo cinco años, este modelo devino impracticable y el recién elegido gobierno popular optó por suprimir la conscripción y componer unas fuerzas armadas enteramente profesionales. Por fin, al día de hoy, el nuevo modelo sin *mili* resulta poco operativo para las misiones encomendadas porque no consigue reclutar soldados en cantidad y calidad suficiente. Otro tanto pasó en Estados Unidos en los años setenta y los medios que pusieron para superar la crisis, talonario, formación, empleo y mucha presión y engaño sobre las clases más populares, parecen estar fuera del alcance de los responsables españoles de defensa.

---

20. Cf. AGUIRRE, X., AJANGIZ, R. , IBARRA, P. Y SAINZ DE ROZAS, R.: *La insumisión, un singular ciclo histórico de desobediencia civil*, Madrid, Tecnos, 1998.
2.1 Cf. SAMPEDRO, V.: *Movimientos sociales: debates sin mordaza. Desobediencia civil y servicio militar (1970-1996)*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1997.

Los medios

Varios han sido los ejes que han permitido a la insumisión lograr su objetivo de acabar con la conscripción. El primero y más importante: la cárcel. En vez de evitarla, conocedores de que la represión daba relevancia a su acto, deslegitimaba a las autoridades y, al mismo tiempo, reducía los costes personales y grupales de la represión, los insumisos «buscaron» deliberadamente la cárcel.[22] No fue el caso de todos los insumisos; hubo grupos que impulsaron estrategias elusivas, incluida la clandestinidad, para evitar el ingreso en prisión, pero nunca desplazaron la desobediencia civil de libro que impulsaron las organizaciones centrales del movimiento. En cualquier caso, la dificultad mayor de esta estrategia fue empezar, reunir el primer año un número simbólicamente suficiente de personas dispuestas a soportar una prolongada estancia en prisión, que luego no lo fue tanto. Después, en parte porque las medidas punitivas eran asequibles, en parte porque no se aplicaban a todos, lo cierto es que se fue formando la típica bola de nieve.

Ciertamente, nadie esperaba que el sistema de control formal tuviera tantos problemas para hacer cumplir la norma; lastrada por la falta de legitimación social, la acción gubernamental no tuvo la firmeza y coherencia necesaria para imponerla. Su primer requiebro fue traspasar las causas de la justicia militar a la justicia civil; las presentaciones de insumisos estaban dañando aún más la de por sí empobrecida imagen de las fuerzas armadas y, con ello, los planes de modernización. Pero el sistema judicial ordinario respondió de manera desigual y arbitraria: unos jueces condenaban por decreto, aceptando sin más la pena propuesta por los fiscales; otros alegaban dudosos eximentes para salvar a los insumisos de la cárcel, y algunos, sencillamente, los absolvían; muchos fueron también quienes amontonaron los expedientes a la espera de tiempos más tranquilos.

A renglón seguido, el problema se trasladó a las cárceles: los insumisos presos, que empezaban a contarse por cientos, comenzaron a criticar las bases reales del sistema penitenciario. El gobierno concedió entonces el tercer grado o prisión abierta para minimizar las consecuencias y reducir el escándalo social. Pero no contaba con que los insumisos se plantaran y desobedecieran esa falsa libertad, recuperando con ello su protagonismo anterior. Decidió entonces sustituir la pena de prisión por una inhabilitación especial de doce años. Pero tampoco sirvió de mucho. Presionado social y políticamente, el gobierno terminó reduciendo la inhabilitación a cuatro años y empezó a otorgar, de oficio, indultos no solicitados. El objetivo era eliminar como fuera un

22. Cf. MARTÍN BERISTAIN, C. *La insumisión encarcelada*, Barcelona, Virus, 1992.

conflicto harto incómodo. Rizando el rizo una vez más, los antimilitaristas respondieron con la insumisión en los cuarteles, que consistía en desertar después de incorporarse a filas. Recuperaron así el enfrentamiento directo con la institución militar y prolongaron la resistencia hasta el fin mismo de la conscripción.

Un segundo eje del conflicto fue la construcción de un colchón social y político suficiente. La insumisión contó con el apoyo explícito de PNV, EA, EE, EUE y HB en el País Vasco, BNG y GC en Galicia, ERC en Catalunya e IU en el conjunto del estado. Hay que decir que fue un apoyo sin servidumbre ni clientelismo, que su éxito se basó en la independencia del movimiento y en la pluralidad, a veces complicada de escenificar, del llamado colchón político y social de la movilización. El colchón político, por ejemplo, se tradujo en la aprobación de numerosas mociones de apoyo a los insumisos: hemos contabilizado siete en el parlamento español, otras siete en el vasco, tres en el catalán, y dos en el europeo.

Con harta frecuencia, se ha hecho referencia al País Vasco como paradigma de este apoyo político; ciertamente, allí se tradujo en una mayor desobediencia municipal a realizar las funciones del reclutamiento y también un mayor boicot institucional a la prestación sustitutoria, pero el cambio no habría sido posible si no hubiera tenido lugar en el resto del estado. Al respecto, resulta muy clara la evolución de la postura de los partidos políticos desde la entrada en juego de la insumisión en enero de 1989. A partir de ese momento, la propuesta de abolir el servicio militar obligatorio fue progresivamente ganando adeptos: UCD en las generales de 1986, PNV en las de 1989, IU, CiU y HB en las de 1993, dudas importantes en el PSOE y PP en las de 1996, fin de la historia poco después.

Un tercer eje del conflicto fue el llamamiento que el movimiento hizo a las entidades e instituciones sociales a no colaborar con el sistema de prestación sustitutoria. Al margen de su retraso, los comienzos de esta prestación fueron muy problemáticos porque se entendió racionalmente como un instrumento para legitimar el castigo a los insumisos; no en vano, muchos insumisos provenían precisamente del sector de entidades que fueron llamadas a colaborar en su desarrollo. Con el tiempo, las autoridades fueron deshaciendo esa solidaridad, en buena medida gracias a medidas coercitivas como condicionar las subvenciones a la aceptación de prestacionistas; habilitaron muchos puestos, además, en las distintas administraciones públicas. Pero lo cierto es que la prestación sustitutoria nunca consiguió institucionalizarse, si por institucionalización entendemos que la sociedad civil comparta las definiciones institucionales que objetivan y legitiman un sistema determinado. Y, lo que es más importante, el sistema de la presta-

ción sustitutoria nunca pudo absorber el acelerado crecimiento de la objeción de conciencia.

En realidad, el sistema del reclutamiento forzoso se vino abajo porque estos tres ejes de conflicto invalidaron las medidas de contención que privilegian el cumplimiento del servicio militar en relación a sus alternativas. En la mayoría de los casos, la insumisión se sancionó con penas asequibles para la mayoría de los insumisos, bastante más llevaderas que cumplir con el servicio militar o la prestación sustitutoria. Y la objeción de conciencia se convirtió en una auténtica vía de escape a la conscripción al desvincularse de la obligación de la prestación sustitutoria. A mediados de 1993, una inspección oficial determinó que «no había actividad comprobable» en el 25% de los casos y que «no se cumplía el horario» en otro 31%. Estamos hablando de los incorporados a la prestación, una minoría, porque por aquellas fechas, los incorporados, 10.500, no constituían ni el 10% de los 118.000 objetores sujetos a esa obligación.

Con estas cifras se entiende que, en febrero de 1994, el ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, calificara la situación de auténtico «problema de estado», entendiendo por tal que las fuerzas armadas empezarían a quedarse sin reclutas suficientes en un plazo de tres años si la objeción continuaba creciendo de esa manera. El gobierno intentó entonces reconducir la situación implementando un plan especial de fomento de la prestación sustitutoria. Pero dos años más tarde, a finales de 1995, en plena campaña electoral, la situación era más grave si cabe: sólo uno de cada cinco objetores habidos hasta el momento se había incorporado efectivamente a la prestación sustitutoria, la bolsa de objetores en espera de ser llamados era de 200.000, y la objeción de conciencia continuaba creciendo sin parar. En muchos cuarteles el déficit de reclutas empezaba a ser visible.

Así pues, por mucho que se dijera entonces y algunos, cada vez menos, sigan insistiendo en la preclara visión de estado y capacidad de liderazgo de Aznar, esta coyuntura, la de una obligación impracticable y socialmente insostenible, fue la que tácitamente dictó la decisión gubernamental de suprimir el reclutamiento forzoso. Hubo muchas dudas al respecto. Más de uno, entre ellos el propio ministro de defensa, opuso que esta decisión histórica era un callejón sin salida que hipotecaba seriamente el futuro de las fuerzas armadas: no contaban aún con suficientes soldados profesionales y su reclutamiento se iba a poner cuesta arriba sin el incentivo de la forzosidad. El tiempo les ha dado la razón. Pero el conflicto era tan dañino y las perspectivas tan aciagas que se impuso la idea de empezar de cero, ahí mismo, el proyecto de recuperación, relegitimación y modernización de la institución militar. Francia era el modelo a seguir, pero el punto de partida y la coyuntura espa-

ñola era tan distante y distinta, que ambos procesos han resultado claramente divergentes y opuestos.[23]

Al final, el volumen de la resistencia al servicio militar en España ha sido el más alto conocido nunca en Europa. Se han registrado cerca de un millón de objetores de conciencia en los últimos diez años sobre un contingente anual que ha venido situándose entre 200.000 y 250.000 reclutas. Además, están los insumisos. Resulta imposible hacer un cómputo preciso del fenómeno de la insumisión, pero, sumando insumisos al servicio militar y a la prestación sustitutoria, 20.000 parece ser la cifra comúnmente admitida y mejor fundamentada sobre los datos existentes, una cifra a todas luces espectacular para un entorno europeo donde, en el mejor de los casos, los insumisos nunca han pasado de unos pocos centenares.[24]

Ahora bien, ¿qué explica, en realidad, este crecimiento tan espectacular de la objeción de conciencia e insumisión? Las claves hay que buscarlas en algo tan elemental como la elección racional. Weber dijo en su día que «la mayoría de la gente obedece por costumbre y un cálculo racional de las ventajas». Ello explica por qué los gobiernos europeos se han resistido a reconocer la objeción de conciencia y luego han impuesto diversas condiciones para aumentar sus costes en relación a los del servicio militar: trabas e impedimentos al reconocimiento de la objeción de conciencia como la preceptividad de informes positivos de terceros, ausencia de antecedentes penales, o razonamientos adecuados en la solicitud, denegación sistemática de solicitudes, mayor duración de la prestación sustitutoria, control de su cumplimiento por parte de la institución militar, cárcel y represión para los desobedientes, etc.[25] Más sofisticadas a medida que, debido al cambio cultural y de valores de las nuevas generaciones, ha ido aumentando el número de jóvenes que cumple con resignación, no por verdadera voluntad sino para evitar males mayores, con esta obligación, sea en su vertiente militar o en su vertiente civil sustitutiva. Un buen ejemplo de esta sofisticación es la realidad alemana:; gracias al apoyo de un sector importante del ala más liberal del movimiento pacifista, a los intereses de las grandes organizaciones que emplean prestacionistas, al discurso institucional de que el sistema de conscripción es la mejor defensa frente a la vuelta del fascismo, la prestación sustitutoria ha terminado convirtiéndose en la mejor disuasión y el mayor obstáculo para abolir el servicio militar obligatorio.

---

23. Cf. AJANGIZ, *op. cit*.
24. Cf. AGUIRRE, X., AJANGIZ, R., IBARRA, P. Y SAINZ DE ROZAS, R., *op. cit*.
25. Cf. GORDILLO, J.L.: *La objeción de conciencia. Ejército, individuo y responsabilidad moral*, Barcelona, Paidós, 1993.

En nuestro país, sin embargo, el protagonismo de la insumisión invirtió el agravio comparativo en detrimento del servicio militar. Su desobediencia civil redujo notablemente los costes de la objeción de conciencia, convirtiéndola en la más eficaz y relativamente cómoda vía de escape no sólo a la *mili* sino a la obligación en sí misma. La falta de plazas y los ventajosos apaños de una prestación sustitutoria que nunca contó con la colaboración y legitimación social que tiene en otros países, gracias a que el movimiento de objeción mantuvo en todo momento una inequívoca posición de denuncia y rechazo, y lo barata que salía la no presentación y hasta la desobediencia abierta con tanto insumiso suelto, animó la bola de nieve que a la postre acabó con esta política. El dato que mejor corrobora este argumento es que, para una mayoría de insumisos, los costes personales de su desobediencia han sido inferiores, en general, a los que hubiera supuesto cumplir con la *mili* o con una prestación sustitutoria de verdad.

El cierre del ciclo

A estas alturas, resulta muy evidente que se ha cerrado el ciclo de esta movilización. La excarcelación de los últimos insumisos en los cuarteles hace dos días podría considerarse la clausura formal de lo que ha sido un ciclo inusualmente largo: treinta años largos.

Tanto tiempo y tan longeva tradición de resistencia han dificultado, sin duda, la pronta adaptación del movimiento a las nuevas circunstancias. Le ha costado algún tiempo, por ejemplo, apropiarse del fin de la *mili*, asimilar este histórico cambio como un éxito largamente buscado de su acción desobediente. Pasa muy a menudo con los movimientos ambiciosos que persiguen múltiples y ambiciosos objetivos: la reivindicación estrella sabe a poco cuanto está al alcance de la mano y se sustituye inmediatamente por otra un poco más lejana, más utópica en el sentido más positivo de esta palabra, como motor necesario de la acción. En realidad, hace ya bastantes años que el movimiento reivindica la abolición de los ejércitos, algo que no es tan imposible, como hemos visto, si reflexionamos un poco sobre la pobre realidad de las fuerzas armadas españolas y su crisis de identidad. La duda que nos asalta es si podemos o no aprovechar mejor esa debilidad para acabar la faena.

De manera harto infatigable, como siempre, el movimiento sigue trabajando la objeción fiscal, promoviendo la educación para la paz, denunciando la producción y comercio de armamento, el gasto militar, las bases militares y campos de tiro, protestando las intervenciones militares, apoyando a los movimientos de objeción e insumisión de otros países, etc. No es, por tanto, un

movimiento desaparecido. Esta ahí, trabajando sus temas de siempre, y asegurando la transmisión del aprendizaje acumulado, esa clave indispensable para poder aprovechar con acierto las nuevas ventanas de oportunidad que están por llegar o habrá que saber abrir.

En todo caso, es indudable que la movilización aquí analizada ha fortalecido al movimiento e incrementado, en general, su capital político y social. Es muy destacable, por ejemplo, el fuerte impacto biográfico que la desobediencia ha tenido en tantas y tantas personas que han abrazado esta causa en sus distintos momentos. Podríamos decir incluso que, por encima de diferencias personales y variopintos proyectos de vida, existe una genérica identidad colectiva que emparenta a todas ellas.

Además, el movimiento ha sabido transmitir algunas de sus más básicas señas de identidad como, por ejemplo, la noviolencia y la desobediencia civil, mucho más legitimadas y practicadas hoy por los más diversos actores sociales que hace veinte o treinta años; en la actualidad, es la violencia política quien ocupa el minoritario espacio que tenía entonces la noviolencia de los objetores. O su discurso antimilitarista, en contra de todos los ejércitos. O los conceptos de violencia estructural y paz positiva. O la defensa de la democracia radicalmente participativa; no en vano, el movimiento sigue fiel a esa estructura reticular de grupos asamblearios y abiertos que fue tan común en los setenta y que, en última instancia, parece ser la clave de la longevidad, fortaleza interior, coherencia y eficacia estratégica que han hecho de este movimiento uno de los más exitosos y transformadores de los últimos veinticinco años.

Bibliografía

AGUIRRE, X., AJANGIZ, R., IBARRA, P. y SAINZ DE ROZAS, R.., *La insumisión, un singular ciclo histórico de desobediencia civil*, Madrid, Tecnos, 1998

AGÜERO, F., *Militares, Civiles y democracia. La España posfranquista en perspectiva comparada*, Madrid, Alianza, 1995.

AJANGIZ, R., *Servicio militar obligatorio en el siglo XXI, cambio y conflicto*. Madrid, CIS, 2003.

ALONSO, L.E., «Los nuevos movimientos sociales y el hecho diferencial español: una interpretación» en José Vidal-Beneyto (ed.) *España a debate (II): La sociedad*, Madrid, Tecnos, 1991.

BAÑÓN, R., «Spanish Military Reform and Modernization» en Kenneth Maxwell (ed.) *Spanish Foreign and Defense Policy*, Westview Press, Boulder, 1991, págs. 237-261.

BARROSO, C., *¿Para qué sirve la «mili»? Funciones del servicio militar obligatorio en España,* Madrid, Siglo XXI, 1991.

— RÍO, L. y SANTACARA, A., «¿Dónde están los pacifistas? Notas sobre el pacifismo en España», *Papeles para la Paz* 45, (1992), págs. 237-247.

DANDEKER, C., «New times for the military: some sociological remarks on the changing role and structure of the armed forces of the advanced societies» *British Journal of Sociology* 45(4), 1994, págs. 637-654.

DÍEZ NICOLÁS, J., *Identidad nacional y cultura de defensa*, Madrid, Síntesis, 1999.

GORDILLO, J.L., *La objeción de conciencia. Ejército, individuo y responsabilidad moral*, Barcelona, Paidós, 1993.

IBARRA, P. (ed.), *Objeción e insumisión, claves ideológicas y sociales*, Madrid, Fundamentos, 1992.

LAFUENTE, J.L. y VIÑAS, J., *Los objetores. Historia de una acción*, Barcelona, Movimiento de Objetores de Conciencia, 1977.

LEDERACH, J.P., *Els anomenats pacifistes. La no-violencia a l'Estat espanyol*. Barcelona, Edicions de la Magrana, 1983.

MARTÍN BERISTAIN, C., *La insumisión encarcelada*, Barcelona, Virus, 1992.

OLIVER, P., *La utopía insumisa de Pepe Beunza. Una objeción subversiva durante el franquismo*, Barcelona, Virus, 2002.

OLIVERES, A., «Los cristianos y su lucha por la paz. Algunas notas sobre la situación en España», *Documentación Social* 52 (1983): págs. 133-150.

RAMOS, M.: *Diez razones para una discrepancia*. Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, 1988.

RIECHMANN, J. y FERNÁNDEZ BUEY, F., *Redes que dan libertad. Introducción a los nuevos movimientos sociales*, Barcelona, Paidós, 1994.

RIUS, X., *La objeción de conciencia. Motivaciones, historia y legislación actual*. Barcelona, Integral, 1988.

ROCA, J., *¿Qué son los objetores de conciencia*?, Barcelona, La Gaya Ciencia, 1977.

RODRIGO, F., *La objeción de conciencia en España*. Instituto de la Juventud. Ministerio de Cultura, 1986.

SAMPEDRO, V., *Movimientos sociales: debates sin mordaza. Desobediencia civil y servicio militar (1970-1996)*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1997.

SNOW, D.A, ROCHFORD, E.B., WORDEN, S.K. y BENFORD, R.D. (1986), «Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation» *American Sociological Review* 51 (1986), págs. 464-481.

WEBER, M., *Economía y sociedad*, México, Fondo de Cultura Económica, 1964.

El movimiento estudiantil universitario

De la Ley de Autonomía Universitaria (1979) a la Ley Orgánica de Universidades (2001)[1]

Carlos Vaquero

Aclaraciones sobre el Movimiento Estudiantil

Antes de empezar, creo que es necesario definir lo que entiendo por movimiento estudiantil. Lo utilizaré de la siguiente manera: es un agente colectivo que interviene en el proceso de transformación universitaria, promoviendo, impidiendo o anulando un cambio.

Esta definición general exige algunas aclaraciones. Así, aunque hago referencia a la transformación universitaria como objetivo específico, que lo diferencia de otros movimientos sociales, es evidente que incide de una manera directa e indirecta en otros aspectos de la realidad social, política y cultural.

Y esto lo hace básicamente de dos maneras.

1. Actuando de una forma política indirecta cuando tiene como objetivo incidir en el espacio político público —gobierno, ministerio, parlamento, partidos…— para, por ejemplo, paralizar una Ley con la que se muestra en desacuerdo. Desde esta perspectiva, es una forma de actuación política no institucionalizada.

---

1. Una parte de este escrito está basado en mi texto «Movimiento estudiantil y cambios políticos en la España actual. La influencia del cambio de época en la acción colectiva estudiantil», capítulo del libro coordinado por Paloma Román y Jaime Ferri, *Los movimientos sociales: conciencia y acción de una sociedad politizada*, Madrid, Consejo de la Juventud de España, 2002.

Pero, además, puede intervenir en un proceso de transformación política directa cuando considera que la transformación universitaria sólo es posible dentro del cambio de los parámetros políticos. Para ello, esta perspectiva tiene que ser asumida como mentalidad colectiva por el conjunto de los estudiantes que participan en él y no por algunos grupos que forman sus redes organizativas. El movimiento estudiantil durante el franquismo adquirió esta connotación. De esta manera, si el franquismo era el escollo primario para solventar la degradación de la universidad, acabar con él implicaba para amplios sectores de estudiantes (no así para los grupos más politizados que pensaban que el problema, además del franquismo, era el capitalismo) la resolución, o el inicio de la resolución, de la crisis universitaria.

2. Constituyéndose como un importante mecanismo de socialización ciudadana —cívica y política— y de formación de recursos para otros movimientos sociales y partidos políticos. La clave es la apropiación y utilización del tiempo para el aprendizaje de estrategias de pensamiento, discusión, organización y acción colectiva. El colectivo estudiantil es un grupo social con una disponibilidad biográfica importante para impulsar la acción colectiva, pues dispone de tiempo y tiene pocas restricciones personales: trabajo, familia, hipotecas…

Dentro de este contexto, el movimiento estudiantil adquiere una importancia que va más allá del papel numérico que los estudiantes tienen como grupo social. Los estudiantes, formados en esos mecanismos de socialización ciudadana, cuando dejan la universidad y por el papel que ocupan en la sociedad, tienen una gran incidencia en la conformación de las corrientes sociales, culturales y políticas: la opinión publicada, los profesores, los técnicos y profesionales, los artistas, las elites dirigentes, los partidos políticos, los representantes parlamentarios…

Una de las características del movimiento estudiantil es su carácter cíclico, discontinuo; ya que ha combinado períodos álgidos con reflujos importantes, momentos de fuertes movilizaciones con años de apatía (ver recuadro 1). Al mismo tiempo, tiene un carácter inesperado e impredecible. En un determinado curso, los estudiantes, que se han mantenido durante cierto tiempo en la pasividad, se sienten repentinamente agraviados y estallan de repente provocando revueltas y algaradas, a menudo de gran intensidad. Aunque es difícil predecir cuando van a surgir conflictos estudiantiles, entre los factores explicativos podemos encontrar:

– Uno o varios factores precipitantes: una ley nueva, un aumento de las tasas académicas, la actuación de la policía o de las autoridades académicas…
– Una situación política propicia.

– La acción de las redes organizativas que existen en el medio estudiantil.
– Un proceso de liberación cognitiva, que transforma la conciencia colectiva de un grupo significativo de estudiantes y les lleva a abandonar las actitudes pasivas y reclamar o potenciar algo.

En relación con esto último el movimiento estudiantil puede ser entendido también como síntoma de problemas y conflictos profundos que afectan a la sociedad. Tiene, por lo tanto, un carácter expresivo en la medida en que es especialmente sensible al malestar social, político y cultural. Es esa manifestación de tensiones subyacentes lo que hace difícil predecir sus estallidos y «normalizarlo» como grupo de presión.

Recuadro 1
CONFLICTOS ESTUDIANTILES

- *La Lucha contra el Sindicato Español Universitario, las Asociaciones Profesionales de Estudiantes y por los Sindicatos Democráticos de Estudiantes. 1964-1969.*
- *La represión en la Universidad: hasta que la paz vuelva a los espíritus. Los comités de curso. El movimiento universitario contra la selectividad y la Ley General de Educación: 1970-1975.*
- *La búsqueda de una alternativa democrática: 1975-1977.*
- *La transición política: El movimiento estudiantil contra la Ley de Autonomía Universitaria y el Estatuto de Centros docentes: 1979-1980.*
- *El PSOE en el Gobierno: la selectividad y la defensa de una universidad pública de calidad: 1986-1987; las tasas 1993-1994; el pluralismo estudiantil y las redes organizativas.*
- *El Partido Popular en el Gobierno: La defensa de la enseñanza pública de calidad frente a la privatización. Las movilizaciones contra la LOU: Otra universidad es posible.*

Desde 1978 ha tenido tres grandes eclosiones generales en el conjunto del Estado.[2] Cada partido, de los tres que han gobernado durante estos años —UCD, PSOE, PP—, ha tenido su gran conflicto. En dos de ellos han sido precursores —y en parte aceleradores— del cambio: en el curso 1979-

2. Podríamos añadirle una cuarta, en relación a las luchas contra la subida de las tasas académicas del curso 1993-94, aunque no tuvo la amplitud, ni las consecuencias de las anteriores.

1980 contribuyó a la crisis de la UCD y a la llegada dos años después del Gobierno del PSOE; en el curso 2001-2002 fue expresión del malestar contra la forma de gobierno autoritaria del PP, sumándose la educación a la cesta de agravios que, en combinación con los sucesos de marzo de 2004, provocaron el desalojo del PP del Gobierno. Ambos tuvieron como detonante la elaboración de una ley general educativa —la LAU en 1979; la LOU en 2001— ampliamente rechazada por una buena parte de la comunidad universitaria. El otro gran conflicto, el del curso 1986-1987, que como veremos refleja malestares diversos, se constituye como el punto de inflexión de las expectativas que había abierto la llegada del PSOE al Gobierno, y se inscribe dentro de los grandes conflictos de la segunda mitad de los ochenta: el referéndum de la OTAN y la huelga general del 14 D; y fue precursor del deterioro de la imagen del PSOE durante la primera mitad de los noventa.

Dicho lo anterior, conflictos estudiantiles durante estos años han existido muchos, con diferente intensidad, temática y amplitud geográfica. Los ha habido específicos de una facultad, normalmente por cuestiones de infraestructura o calidad de la enseñanza; de una titulación académica, como los de Biología, Psicología o Medicina, que han tenido una coordinación estatal importante, y algunos de ellos, como el de Medicina, una gran repercusión social y política; los hubo también de una Universidad, por problemas propios, como la cuestión de los pisos y residencias estudiantiles en la Universidad de Santiago, o en la de Sevilla por el rechazo a los Estatutos universitarios; también por cuestiones pacifistas —referéndum de la OTAN—, o por la subida de las tasas —durante diferentes años—o por la admisión de los no admitidos en diversas facultades…

No es posible en el marco de este escrito referirse al conjunto de estos movimientos, de los que es necesario realizar estudios específicos, que hasta ahora han brillado por su ausencia. No obstante, sí podemos al menos establecer algunas características generales:

– La asamblea como forma de organización y decisión central y la búsqueda de fórmulas organizativas que den la máxima participación e iniciativa a todos los estudiantes que quieran comprometerse con el movimiento. El Movimiento Estudiantil siempre se ha movido en la tensión que se da entre la eficacia y la democracia participativa, entre la necesidad de dar respuestas rápidas y efectivas y la búsqueda de la implicación del máximo número de personas.

– La utilización de un repertorio de acción colectiva muy variado y creativo (ver Recuadro 2).

Recuadro 2
UNA ACTIVIDAD RICA E IMAGINATIVA

Además de la masividad y fuerza de la contestación estudiantil de Santiago, ésta se ha rodeado de una fama especial por la viveza e imaginación de sus acciones. A las huelgas, asambleas, concentraciones, manifestaciones…se suman múltiples actividades. «Ya desde el principio se plantea que a otro tipo de organización también debe corresponder otro tipo de movilización. En la primera asamblea de Políticas salen cosas nuevas, como hacer una 'cacharrada', irnos a rezar a la catedral, ir todos desnudos por la calle…El organizarnos en grupos permite que las ideas que nacen en la asamblea se vayan filtrando, pasen a la comisión de actividades, y salgan otro tipo de actos que, combinados con los clásicos, le van a dar también credibilidad al estudiante, porque se ve que está todo el día trabajando, que no vaguea al no ir a clase».

La actividad es continua: la ciudad es testigo de —además de lo citado— cortes de tráfico, caceroladas, el 'entierro' de la Universidad, las concentraciones ante el INEM para apuntarse al paro, los intentos de colapsar el trabajo en el BSCH…, de clases en la calle. «Montamos también un 'mitin' del PP en la plaza del Obradoiro, una parodia, una sátira, con una parafernalia increíble: los del estrado dando un mitin rodeados de secretarias, los estudiantes gritando 'Sí a la LOU', todos con banderitas…».

Precisamente uno de los rasgos importantes de este movimiento es que busca el diálogo con la sociedad, dar a conocer a la gente sus razones. Para ello, por ejemplo, ponen en marcha mesas informativas todos los días en centros estratégicos. Su propia 'huelga de consumo' es un acto que logra el apoyo de los hosteleros. Todos los días se publica un periódico que se llama Asamblea, como contrainformación…

M. Llusia, «El movimiento estudiantil gallego: asambleario, masivo y abierto a la sociedad», *Página Abierta*, nº 121-122, diciembre 2001-enero 2002.

– La exigencia de una participación real de los estudiantes en cualquier cambio, ley o reforma que les afecte.

Antes de continuar, conviene detenerse brevemente en la cuestión de la participación, que es una de las ideas fuerza clave que está presente en el movimiento estudiantil desde los años sesenta. Ésta adquiere importancia en el

contexto del tránsito de una universidad de elite a una de masas, una de cuyas características más importantes es el aumento espectacular del número de estudiantes que acceden a la enseñanza superior. Aspecto que va acompañado por un incremento del número de profesores y de los presupuestos estatales. Estos cambios hacen mucho más compleja la gestión de la Universidad, pues al aumento de tamaño genera problemas de eficacia en la organización y de administración especializada de recursos. Al mismo tiempo, se va consolidando entre los estudiantes una corriente política que exige su participación en la gestión de la universidad. En cada momento histórico la participación se ha justificado de distintas maneras. En los años sesenta bajo el supuesto de que los estudiantes eran el único grupo de la universidad que era capaz de impulsar un cambio significativo de esta institución, cuestión que vino enmarcada en la idea de que los estudiantes eran un grupo social, incluso revolucionario, capaz de cambiar la sociedad. Posteriormente, se ha venido enfocando desde la perspectiva de ser un grupo con intereses específicos que deben ser expresados en la gestión de la universidad. Intereses que no nacen exclusivamente de su posición en la Institución educativa, sino que se conforman de acuerdo con ideas, valores, sentimientos, culturas y contextos diversos, y donde la acción de las redes organizativas que actúan en los centros educativos son importantes. Los estudiantes se han convertido, de hecho, en un actor colectivo imprescindible, que van a elaborar propuestas ante los diversos problemas de la universidad.

En el Estado español esta idea de gestión democrática, de participación de todos los sectores, adquiere una incidencia grande en la medida en que se produce en una universidad, la franquista, donde el autoritarismo es muy fuerte y la participación es muy jerárquica, dominada por el poder político y los catedráticos en su nombre. Así, desde un primer momento, la Reforma Democrática se convierte en una de las grandes consignas del Movimiento Estudiantil, y los estudiantes se conciben como la vanguardia de esa transformación democrática.

De esta forma, el primer intento de modificar la Ley Orgánica de Universidades de 1943, que fue la Ley General de Educación de 1970, es criticado, entre otros aspectos, por la ausencia de participación de la comunidad universitaria, y, en concreto, de los estudiantes en su elaboración.

La idea de participación va a adquirir fuerza en los comienzos de la transición política, entre 1975 y 1977. Desde todos los ámbitos de la enseñanza se empiezan a discutir y elaborar alternativas democráticas a la educación franquista. Mediante éstas se intenta articular un debate en el conjunto de la comunidad educativa y extenderlo a diferentes espacios de la sociedad civil organizada. Nunca, en esta sociedad, hubo una discusión tan importante so-

bre la educación, que se convirtió en uno de los elementos centrales para medir el auténtico cambio social. Los consensos que se elaboraron chocaron, posteriormente, con la forma en que se concretó la transición democrática. De hecho, a partir de la muerte de Franco y en el «vacío» que se produce por el cuestionamiento de la legalidad educativa franquista, se empiezan a poner en marcha alternativas concretas y formas de organización educativa ampliamente participativas en el conjunto de las universidades y facultades del Estado. Esta dinámica de reforma democrática, con sus diversas contradicciones, intentó ser cortada por la UCD con la presentación de la Ley de Autonomía Universitaria, cuyos primeros documentos aparecen a comienzos de 1979. Con ella, se pretendió imponer una ley que uniformizara y, sobre todo, centralizara el cambio en la universidad desde la perspectiva ideológica restrictiva del Ministerio de Educación.

Las siguientes leyes generales de Universidad no cambian esta dinámica de actuación. De esta forma, en los años ochenta, con el PSOE en el Gobierno, la LRU, la primera ley de la democracia, se aprueba rápidamente en verano, y la Reforma de los Planes de Estudio se inició con el máximo de los secretos. En los noventa, ya con mayoría absoluta del PP, la LOU fue elaborada y aprobada contra el sentir mayoritario de toda la comunidad universitaria (ver recuadro3).

Como se ve, desde el punto de vista del movimiento estudiantil, existe un hilo conductor que nos lleva desde comienzo de los setenta del siglo pasado a la situación actual y que se concreta en la idea de participación de los estudiantes. Sin embargo, cabe decir que esto adquiere su concreción práctica cuando existe un proyecto de ley o de reforma a la que oponerse, confiriéndole al movimiento su carácter reactivo y siendo a partir de ahí cuando crea propuestas en positivo y alternativas específicas. Fuera de estos momentos puntuales, han sido sectores muy pequeños de estudiantes los que se han preocupado de la participación en la organización y gestión universitaria. Esto tiene que ver con varias cuestiones que se pueden resumir de la siguiente manera: la gestión universitaria tiene que combinar la participación democrática de todos los sectores con una especialización eficaz ante la complejidad de la Institución universitaria. Esto implica tiempo, continuidad y formación de gente. En los estudiantes esto es más complejo y difícil, sobre todo por la debilidad de las organizaciones estudiantiles. Para esto hacen falta organizaciones fuertes, con un nivel de militantes alto y con experiencia, más o menos estables y formación en la gestión universitaria. «El movimiento estudiantil es duro, difícil, complicado, muchos líos y ningún atractivo. Exclusivamente intentas mejorar el estatus de un universitario, en el caso del movimiento estudiantil universitario que conlleva enfrentamiento con profesores, sacrificios porque no puedes participar en muchas cosas que hacen el

Recuadro 3
¿QUÉ DIÁLOGO HA HABIDO PARA ELABORAR EL PROYECTO DE LEY?

Prácticamente ninguno. Las numerosas reuniones del ministerio de Pilar del Castillo con los sectores implicados (rectores, asociaciones de profesores, asociaciones de estudiantes, sindicatos, etc.), han sido una pura escenificación, puesto que en todo momento quedó bien clara la escasa o nula voluntad de diálogo de un gobierno en mayoría absoluta. En opinión coincidente y reiterada de sindicatos y rectores, el Ministerio de Educación ha dado continua muestra de un autismo político absoluto, manteniéndose impermeable a cualquier sugerencia que modificase la ley. No ha dialogado, ha monologado.

Pese a todo y a todos, el Ministerio sigue hablando de un «debate sin precedente» sobre la LOU y se refiere a su único precedente en la democracia española: la LRU, que se debatió en el Parlamento por procedimiento de urgencia en los meses de verano. Parece sin embargo que el actual gobierno ha decidido repetir y aún exagerar los errores del anterior. El anteproyecto de la LOU se aprobó el 27 de julio y, en un procedimiento sin precedentes, carente del más mínimo respeto por las formas democráticas, el PP ordeno 'debatir' las más de ochocientas enmiendas al articulado en una sola sesión de tarde-noche de 11 horas, ¡a razón de una enmienda cada cuarenta segundos!, vetándose la comparecencia de aquellos sectores (sindicatos, asociaciones de los diferentes estamentos universitarios, etc.) a los que el Ministerio decía y dice haber escuchado. Y el procedimiento posterior sigue al mismo ritmo.

Coordinadora de profesorado contra la LOU, «Claves de la LOU», Universidad de Santiago de Compostela.

resto de compañeros, pérdidas de horas de clase. Eso no es atractivo. Alguien que entre en este tipo de movimiento es que está decidido a ayudar»[3].

También, la participación implica necesariamente ofrecer alternativas que sean más o menos viables, pero que sean susceptibles de ser negociadas conjuntamente con todos los sectores de la comunidad universitaria (ver recuadro 4). Y tiene que tener por objetivo convertir a los estudiantes, a través de sus organizaciones representativas, en un poderoso grupo de presión que impulse propuestas, que corrija y cambie actuaciones concretas.

3. *Vid*. Javier Angulo: *Asociarse los jóvenes ¿para qué? Y los adultos*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2002, pág. 46.

Recuadro 4
LAS ALTERNATIVAS

1. Toda alternativa es una cuestión técnica. Por lo tanto, necesita una buena fundamentación, en toda su complejidad, que no es bueno confundir con la propaganda, con las ideas sencillas, que no simples, tan necesarias a cualquier movimiento. Las cuestiones técnicas se enmarcan entre el deseo, la creatividad y la realidad. El problema está en ser demasiado creativo o demasiado pegado a la realidad.
2. La viabilidad de una alternativa no está sólo en su calidad técnica, ni en su bondad, sino en las fuerzas sociales y políticas que la impulsan.
3. Para un movimiento social, la importancia de una alternativa radica, no sólo en su capacidad de mejora de una realidad social, en este caso la universidad, sino en su capacidad para enraizarse entre la comunidad educativa, para conectar con capas cada vez más amplia de ciudadanos. Por lo tanto, las propuestas deben ser sólidas y realistas y convertirse en una buena propaganda del movimiento.
4. Toda alternativa no es una cuestión neutral, ya que expresa valores y perspectivas. Se conecta con deseos y horizontes intelectuales y morales. Es importante dotarse de estos, pues nos sirven de cedazo para las alternativas y sus consecuencias.

El Movimiento Estudiantil en los últimos 25 años

El Movimiento estudiantil fue uno de los pilares más importantes del antifranquismo, luchando por las libertades y aspirando a un cambio social y político. La ausencia de libertades en el conjunto de la sociedad, unido a una toma de conciencia política de amplios sectores universitarios, convirtió a la universidad en un espacio privilegiado para la actividad política.

La universidad se constituyó en un espacio de «lo político» y la lucha por las libertades se convirtió en el objetivo global articulador del movimiento, en la medida en que fue una especie de concepto maletín que absorbió en su seno todo tipo de interpretaciones y concreciones, situándose en esa vaguedad su gran potencial como consigna movilizadora de la acción colectiva.

Sin embargo, con la transición posfranquista la universidad como espacio de «lo político» se reduce progresivamente trasladándose estas funciones fuera de ella. Así, con la progresiva implantación de la Reforma, la represión, que el franquismo impuso como norma en la universidad, pasa a un segundo plano, las libertades van tímidamente implantándose y, fundamentalmente, se va constituyendo un «espacio político público» específico, que va a descongestionar el marco universitario de «lo político». A su vez, se difunde la idea de que el cambio democrático de la universidad vendrá como consecuencia lógica de la conformación de la democracia.

De esta manera, después de ocupar un papel político importante en el desprestigio de la dictadura, durante la Transición la universidad pierde peso político y se convierte en una institución secundaria para la Reforma y su configuración. Progresivamente, el cambio universitario va quedando supeditado a las prioridades, conflictos y pactos políticos externos a la universidad, que vienen determinados por la construcción del espacio político oficial.

No obstante, la vida universitaria continuaba. Las miserias y problemas cotidianos, antes encubiertas por la actuación del franquismo, pasan a un primer plano. Los conflictos, que podemos denominar de «baja intensidad», se suceden entre 1977 y 1979 alrededor de tres ejes:

a Las luchas corporativas para conseguir, por ejemplo, segundos ciclos en facultades o que algunas se constituyan como facultades independientes; o clases prácticas, infraestructuras adecuadas, más medios y mejores planes de estudio...

b. Los conflictos antiselectivos: contra el decreto de 4 convocatorias, contra la subida de las tasas académicas y el establecimiento de *numerus clausus*, contra la supresión de los exámenes de febrero y de los alumnos libres.

c. La reforma institucional de la universidad: autonomía, gestión democrática, estatutos, elección de decanos y rectores...

Estos ejes de la acción colectiva estudiantil son los que aparecerán como determinantes en los años ochenta. La Transición se convierte así en una fase de paso entre los conflictos políticos por conseguir una ruptura con el régimen y la universidad franquista y las luchas por una enseñanza pública de calidad.

Pero, tres años después del comienzo de la Transición, la situación de la universidad no se había transformado significativamente, el gobierno había sido incapaz de aprobar una ley general de universidades y boicoteó los in-

tentos alternativos de cambio que iniciaron algunas universidades y facultades. Y cuando en 1979 el Ministro de Universidades e Investigación, González Seara, anuncia la próxima entrada en la Comisión de Universidades e Investigación del Congreso del Proyecto de Ley Orgánica de Autonomía Universitaria se produce una fuerte, e inesperada, reacción estudiantil.

Este conflicto coincide con una crisis de las instituciones democráticas, con una pérdida de vitalidad del proceso de reforma, con el aumento de la conflictividad social y laboral (por ejemplo, en torno al Estatuto de los Trabajadores) y con una crisis de las expectativas estudiantiles, con el agotamiento, en suma, del crédito concedido al comienzo de la transición.

La democracia vive una situación complicada, lo que se ha venido llamando el desencanto. Estamos ante una convulsión del sistema de partidos, ante una caída de la afiliación partidista y de algunas organizaciones sociales (como los sindicatos); ante un debilitamiento de la participación política y un aumento del abstencionismo. También se da una crítica importante de la política democrática realmente existente. La transición «por arriba» ha horadado el sistema de partidos y la participación ciudadana. El «espacio público» como definitorio de una transparencia política es cada vez más opaco.

Es en este marco en el que hay que entender algunas de las reivindicaciones principales del movimiento contra la Ley de Autonomía Universitaria y el Estatuto de Centros docentes, que hace su aparición en los últimos días de octubre y primeros de noviembre de 1979.

Este movimiento es paradójico. Desde el comienzo de la Transición hasta el estallido de éste no había existido un movimiento estudiantil en positivo, entre la mayoría de los estudiantes, por el cambio universitario. Y, sin embargo, en el movimiento del curso 79-80 se busca como uno de sus puntos principales la participación de los estudiantes, de una manera efectiva y real, en la elaboración de la Ley de la Reforma. En uno de sus manifiestos más importantes podemos leer lo siguiente: «nuestro rechazo de la LAU es global. El proyecto de ley del gobierno ha sido elaborado completamente al margen de los universitarios. Nuestra posición es la de exigir la retirada de las Cortes y que esta ley no sea discutida en ella, ya que la rechazamos globalmente tanto por su contenido reaccionario, como por su forma de elaboración antidemocrática».[4] Esta situación paradójica sugiere la pérdida de

4. Este programa fue aprobado entre el 19 y el 20 de enero de 1980 en Madrid, en una reunión de la Coordinadora Estatal de Estudiantes Universitarios (CEEU), a la que asistieron 503 delegados, 87 observadores universitarios y 26 no universitarios. Todos los entrecomillados sobre la LAU pertenecen a este documento.

expectativas y la incidencia de una de las características que había desarrollado el Movimiento Estudiantil en el Franquismo: su carácter defensivo, reactivo a leyes y normativas concretas.

Se vive una gran desconfianza hacia el espacio político público y hacia el sistema de partidos. Esto se concretó en no respetar las reglas formales del juego parlamentario: «Consideramos que sobre la base del texto del gobierno no es posible que salga una ley favorable a la universidad. Esto significa desestimar por insuficiente la mera posición de enmiendas a la totalidad seguidas de enmiendas parciales, por no explicitar taxativamente la negativa a discutir sobre la base del texto actual... Al exigir la retirada de las Cortes de este proyecto reivindicamos un nuevo proceso democrático de elaboración de la LAU, realizable sobre la base de la participación de los universitarios y el conjunto de los sectores sociales después de un amplio debate público». No solamente estos aspectos están en el movimiento estudiantil universitario, sino que se puede rastrear en el movimiento que surge en las Enseñanzas Medias. La forma de elaboración del proyecto de LAU por el gobierno, con borradores que aparecen y desaparecen de la luz pública, sin saber muy bien a qué obedece esto, o intuyendo que están actuando fuertes grupos de presión, contribuye a aumentar esa desconfianza. También el recelo hacia el sistema de partidos se refleja en la pequeña, casi nula, incidencia que tuvieron el PCE y el PSOE en el desarrollo del movimiento.

El movimiento, como si pasara a través de un túnel del tiempo, retoma algunas de las características que tuvo antes del comienzo de la transición y, en especial, su politización. Esto en un doble sentido: por un lado, como forma de incidir en ese espacio político público, presionando al parlamento y a las instituciones y con una crítica implícita a la forma concreta de realización de la transición; y por otro, como actuación de grupos políticos. El movimiento actuó ante un factor externo (la LAU, como antes fue la LGE o el franquismo), que lo unificó y articuló como respuesta, que a partir de ahí creó propuestas en sentido positivo (documentos, programas, plataformas...), que chocó con la articulación específica del espacio político público y que en ese enfrentamiento un sector amplio de estudiantes adquirió conciencia política.

También engarza con las diversas alternativas democráticas que se elaboran durante el franquismo para la transformación de la institución universitaria. De esta manera, la LAU es concebida como un freno a un auténtico proceso de cambio en la universidad. Desde su radicalidad este movimiento exigió ese cambio, y luchó por conseguir «una universidad radicalmente distinta a la actual», que sea un servicio público, en la que no exista selectividad, que sea democrática y autónoma, imbricada en la realidad social, económica y cultural de las nacionalidades o regiones, una «universidad que no se conci-

ba como un mero ente expedidor de títulos, sino como un proceso activo y participativo entre todos los implicados», en definitiva, «un foro libre, abierto al acceso de todos a la cultura, la crítica y el pensamiento».

Este movimiento, por el cuestionamiento de algunas actuaciones del sistema político que ha ido creando la transición y por la ausencia de alianzas y la fortaleza progresiva del sistema de fuerzas en conflicto (partidos parlamentarios, gobierno, Ministerio, policía, extrema derecha) con el que se enfrenta, tiene unos costes importantes —entre ellos tres estudiantes muertos— y ve reducido a un mínimo sus oportunidades políticas. No obstante, la acción colectiva estudiantil contribuyó a desgastar al entonces partido de gobierno, la UCD, y a reforzar la necesidad de un cambio de determinados parámetros políticos que contribuyeron con posterioridad a la victoria del PSOE en 1982.

Podemos afirmar que con este movimiento surge una nueva generación política que pasa a engrosar los recursos humanos con que van a contar los movimientos sociales que se van a generar en esos años. Además, muchas de las características de este movimiento, que ahora, tras el desarrollo de los nuevos movimientos sociales nos parecen «normales», en aquel momento supusieron un ruptura con las normas políticas recientemente constituidas durante la transición. La acción colectiva estudiantil vuelve a poner sobre el tapete la importancia de los movimientos sociales —populares o de masas, en lenguaje de la época— en la ampliación y profundización de la democracia, el papel específico y autónomo que deben cumplir —no supeditado a los intereses del espacio político— y su relación conflictiva con los partidos políticos y las instituciones. En definitiva, este movimiento supone el paso de una acción colectiva fundamentalmente política, a otra más diversificada, donde lo social, lo corporativo y lo político se entremezclan de una forma compleja e inestable en los años ochenta. La acción colectiva estudiantil se desarrolla a partir de este momento de una forma bifronte, como movimiento social y como grupo de presión académico y corporativo.

Al mismo tiempo, tuvo un carácter demostrativo, pues contribuyó a hacer manifiesto muchos de los tics autoritarios latentes de una buena parte de la clase política dirigente y de la policía. Hay una vuelta a los estereotipos y lugares comunes que sirvieron para transformar la Ciudad Universitaria en un campo de batalla durante el franquismo: la concepción conspirativa de la historia que atribuye la agitación de los medios universitarios a la actividad o las manipulaciones de grupos políticos, o a fuerzas oscuras a sueldo. Y, también, expresivo en la medida en que fue una manifestación de las diversas frustraciones que empezaron a repercutir sobre la universidad española: el desencanto por una vida pública democrática secuestrada por los estados mayores de los partidos, la irritación por la mala calidad de la enseñanza, las

negras perspectivas del desempleo o subocupación que aguardan a los licenciados...

La victoria del PSOE en octubre de 1982 genera una nueva expectativa de cambio entre amplios sectores universitarios, sobre todo en el área de la cultura y de la educación. Esta expectativa, unida a la necesidad de acabar con el vacío legal en el que se mueve la institución, provoca que la aprobación de la Ley de Reforma Universitaria, en el mes de agosto y sin participación de la comunidad universitaria, no cree problemas entre algunos sectores que pusieron el grito en el cielo con la Ley de Autonomía Universitaria. La postura ante la LRU provoca una primera ruptura entre las redes organizativas del movimiento estudiantil: se crea un bloque anti-LRU, que recoge al grueso de las redes creadas en la oposición a la LAU y al ECD, y que tiene en las universidades situadas en Galicia, País Vasco, Canarias y Cataluña, su núcleo fuerte de oposición; y otro, por la lectura progresista de la ley, movimiento muy influenciado por el PSOE y el PCE.

Lo fundamental en ese período es la discusión sobre las formas organizativas a impulsar entre los estudiantes. Por parte del sector que acepta la legalidad de la LRU, se le va a dar una importancia central al trabajo institucional académico, creando marcos estables de organización coordinados en el conjunto del Estado, cuyo objetivo es convertirse en un grupo de presión efectivo en el desarrollo de los procesos constituyentes que se van a empezar a desarrollar, como aplicación de la LRU, en todas las universidades.

Para el bloque anti-LRU, se vive con tensión lo institucional, que es planteado como un trabajo más, enfocado a la transformación de la universidad, impulsando su acción hacia objetivos sociopolíticos ligados a otros movimientos sociales, que en esos momentos van alcanzando fuerza en la sociedad: movimiento anti-Otan, feminista, ecologista, de solidaridad internacional. Las formas organizativas plantean que deben adaptarse a la diversidad del movimiento en las facultades, buscando colectivos y asociaciones que potencien la participación asamblearia y la dinamización de la acción colectiva; mostrándose muy reacios a la creación de organismos estables de coordinación estatal.

Esta discusión, que se da con fuerza hasta 1985, refleja la realidad de fondo de la evolución de las redes organizativas: su diversificación. Se empiezan a constituir grupos por facultad (asociaciones, plataformas, colectivos), que agrupan a un conjunto más o menos amplio de estudiantes, que tienen un carácter más o menos unitario (en un primer momento suele existir uno por facultad, pero inmediatamente se diversifican en base a orientaciones, intereses e ideologías), que realizan actividades variadas (reivindicativas, cultura-

les, políticas, sociales, institucionales) o específicas (nacen para un tema concreto: participación institucional, feministas, ecologistas) y que tienden a coordinarse con otros centros y con grupos y redes afines, tanto dentro como fuera de la universidad.

Las diferencias empiezan a darse en los programas, en el papel que ocupa en su actividad lo institucional, en su conexión con los movimientos sociales de la época y con grupos políticos, en su conexión con algunas de las características del movimiento estudiantil de las décadas pasadas, en su interés en la coordinación estable de distrito y estatal. En esa diversificación adquiere una importancia central el comienzo, en enero de 1984, de las elecciones a los Claustros Constituyentes universitarios y las elecciones a Juntas de Facultad. La participación en las elecciones estudiantiles, lo institucional, marca a los diversos grupos. Pero también, el impulso en los años ochenta de los movimientos sociales y de los movimientos nacionalistas radicales en las universidades de Cataluña, Galicia, Euskadi y Canarias.

Grupos estudiantiles van nutriendo los recursos humanos de los movimientos sociales de la época y su participación en la campaña del referéndum de la entrada en la OTAN es significativa. Empiezan a surgir grupos estudiantiles que se postulan como defensores de los intereses corporativos de los estudiantes. Desde independientes o ligados a partidos de derecha y que siguen sus vicisitudes, hasta también grupos de extrema derecha.

Los conflictos estudiantiles vienen marcados por cuatro factores, que van a influir significativamente en su discurrir:

1. La extensión de la tercera revolución educativa entre 1975 y 1986. «En efecto, en este plazo históricamente tan corto el sistema educativo español incorpora en la secundaria unos 853.000 alumnos más de los que atendía en 1975. Esta incorporación… supone un incremento del alumnado de casi el 76%. Semejante esfuerzo saturó centros y obligó a abrir otro nuevos incorporando profesores sin experiencia, todo ello sin modificar las estructuras educativas, sin adaptar la formación inicial y sin profesores de apoyo para los casos más difíciles. Este cambio radical se plantea en el resto de los países desarrollados entre 1970 y 1985, más o menos en las mismas condiciones, pudiendo identificarse como la causa desencadenante de la crisis que se detecta entonces en los sistemas educativos europeos».[5]

5. José M. Esteve: *La tercera revolución educativa. La educación en la sociedad del conocimiento*, Barcelona, Paidós, 2003, págs. 85-86.

2. Las políticas neoliberales de reducción del gasto público. El aumento de la escolarización en las Enseñanzas Medias y en la Universidad va a ir generando problemas de difícil solución, al no ir acompañadas de un presupuesto e inversiones suficientes que permitan cubrir con dignidad esos aumentos: la calidad de enseñanza y vida en los institutos y universidades disminuye.

3. Las expectativas de futuro. La crisis asoma con toda su fuerza, el problema del paro y la inseguridad hacia el futuro pasa al primer plano de las preocupaciones juveniles. La universidad como estrategia para no quedar excluido y el deterioro de las condiciones de estudio y de vida adquieren una relevancia central en las plataformas reivindicativas: el valor dinerario de las reivindicaciones pasa a un primer término. La potenciación de la escolaridad va unida a la difusión de la idea del título como único capital con el que cuenta el joven para salir de la exclusión.

4. Los cambios de mentalidades. Se extienden toda una serie de valores que rompen con las preocupaciones de las décadas anteriores: la competitividad, la búsqueda del éxito en relación al mercado laboral, el dinero como valor social determinante.

La sensación de vivir mal; el miedo al futuro, al paro, a la marginación y exclusión, a una sociedad que les exige demasiado y no les da medios suficientes, a una sociedad durísimamente competitiva que individualiza la responsabilidad de construir un futuro de suma cero. El movimiento estudiantil expresa todo esto de acuerdo a las tendencias predominantes de una época, en las que el pragmatismo y la necesidad de una buena preparación para poder competir en una sociedad implacable son muy importantes. Así, es difícil que los estudiantes estén por cambiar el mundo cuando esto «ya no se lleva», es complicado que tengan una actitud crítica hacia la sociedad cuando el tejido social crítico es pequeño.

Esta situación lleva a que, por primera vez en la historia del Movimiento Estudiantil en el Estado español, el principal conflicto estudiantil de la época se produzca con más intensidad en las Enseñanzas Medias que en la Universidad.

El movimiento estudiantil del curso 1986-1987 comienza con una convocatoria de manifestación para el 4 de diciembre, con reivindicaciones ligadas a la supresión de la selectividad y de los *numerus clausus*, a la congelación de las tasas académicas y su progresiva disminución, al aumento de las becas y, en general, al incremento de los presupuesto generales del Estado dedicados a la educación. Manifestaciones como éstas y con reivindicaciones parecidas se habían convocado varias veces durante los años ochenta, con un éxito bas-

tante pequeño. Sin embargo, para sorpresa de los organizadores y de muchos de los asistentes, miles de estudiantes salen a la calle, y con una característica añadida: la mayoría eran gente muy joven, entre 14 y 18 años, procedente de los Institutos de Enseñanzas Medias. Jóvenes que en su mayoría asistían por primera vez a una manifestación.

La preparación de la manifestación en los centros de estudio fue, en general, muy pequeña: los jóvenes se enteran por carta de la convocatoria, por los medios de comunicación o por algunos de los profesores. La gente paraba no por una conciencia muy clara, sino porque tenían ganas de parar. Había un sentimiento de «vamos a parar, vamos a hacer algo».

En el éxito de esta convocatoria confluyen varios elementos: el primero es el «efecto simpatía» producido por los conflictos estudiantiles que se desarrollan desde noviembre en Francia, en contra del proyecto de reforma universitaria, impulsado por el ministro Devaquet, que tiene paralizada la enseñanza y que congrega a decenas de miles de personas en manifestaciones, y que son difundidas en España por los diferentes medios de comunicación, sobre todo por la televisión.

El segundo fue su carácter expresivo de miedos, descontentos y malestares difusos en la enseñanza y en la sociedad, provocados por la situación de los jóvenes en los años ochenta, comentada anteriormente, y que dispara su hartura, por ejemplo, con rumores como el de una posible supresión de los exámenes de septiembre, que es vivido como una nueva traba selectiva, o el miedo a la selectividad y a quedarse excluidos si no la aprueban. El movimiento cumplió para los jóvenes un papel de autoafirmación, de sentirse protagonistas de algo; y expresaba la necesidad de ser escuchados. Al tiempo, que reflejó como seña de identidad un fuerte antiautoritarismo como manifestación del carácter de revuelta juvenil que tuvo.

Posteriormente, la disputa se «dispara» como reacción a la actuación desproporcionada y brutal de la policía, dirigida por el que era Ministro del Interior en aquel momento, José Barrionuevo. Asimismo, en un primer momento, fue determinante la mala gestión, provocada por el desconcierto y el no comprender el verdadero significado del movimiento, del Ministerio de Educación y del Gobierno Socialista, que no fueron capaces de recibir a los estudiantes y sentarse a dialogar y negociar con ellos —y, por tanto, de darles la palabra por vías que no fueran exclusivamente las de la calle— hasta que hubo un herido de bala, después de casi mes y medio de conflicto.

Aunque los estudiantes universitarios estuvieron presentes en las movilizaciones, fue a partir de febrero cuando aumentan su participación, cogiendo el

relevo de las enseñanzas medias, en relación a la Reforma de los Planes de Estudio, cuyo objetivo era reestructurar las enseñanzas universitarias. Varias eran las críticas que se le hacían a esta reforma, pero la cuestión previa estaba relacionada con la forma antidemocrática en que se estaba llevando a cabo todo el proceso, con secretismo y confusión. También se criticaba que en la composición de los 16 grupos de trabajo que se formaron para llevarla adelante no hubiera ningún tipo de representación estudiantil.

Una de las cuestiones importantes que se produjo en estas movilizaciones fue la discusión, sobre todo en las enseñanzas medias, acerca del tipo de organización adecuado para coordinar la respuesta estudiantil en momentos de conflicto. Esto se produce al calor del impulso dado por la LODE, que reconoce y regula el Derecho de Asociación de los estudiantes de las Enseñanzas Medias y les concede subvenciones y publicidad, a las Asociaciones de Estudiantes (1986), creando un cauce legal que impulsa en un primer momento la participación.

El debate, y la confrontación en algunos momentos, se produce entre aquellos que siguiendo un modelo sindical pensaban que correspondía a las organizaciones ya establecidas —por ejemplo, el Sindicato de Estudiantes— y creadas al calor de la LODE el impulso y coordinación de las movilizaciones; y los que siguiendo la tradición de lo que había sido hasta ese momento el Movimiento Estudiantil le daban un papel a las asambleas, a la elección de representantes en ésta —que podían pertenecer o no a organizaciones ya establecidas—, y a su coordinación con representantes de todos los centros educativos. Este sector pensaba que eran estos organismos los que, en momentos de conflicto, garantizaban la unificación, representatividad y amplitud del movimiento y de las diferentes acciones que se pudieran emprender. Siguiendo este modelo se creó la Coordinadora de Enseñanzas Medias y Universidad.

El derecho de asociación de los estudiantes en las Enseñanzas Medias fue utilizado por diversas fuerzas políticas y sociales para garantizarse un mecanismo de influencia y presión ligado a sus intereses. Se crean, a nivel estatal, cuatro grandes asociaciones: la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes —que más tarde adoptaría el cartel electoral con el que se presentaba a las elecciones UDE—, ligada al PSOE; Estudiantes Progresistas, ligada al PCE-IU; la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes CANAE, impulsada por la Federación Española de Religiosos de Enseñanza FERE; y el Sindicato de Estudiantes, creada por una de las corrientes de la IU Internacional trotskista.

Estas asociaciones se nutren en un primer momento de la dinámica participativa generada tras las movilizaciones de 1986-1987, y van progresi-

vamente perdiendo fuerza en los años noventa, en parte por la dificultad del trabajo asociativo en las Enseñanzas Medias, pero también por el contexto que se abre para la izquierda tras la caída de Muro de Berlín y por el deterioro del PSOE en el gobierno, con el consiguiente desgaste y desconfianza de los jóvenes hacia la política y hacia las organizaciones.

Los que mejor resisten en ese momento son los que logran presentarse como «apolíticos», que conectan con una generación que se ha hecho joven con el PSOE, es decir, con la izquierda, pero sobre todo con la parte más dura de su paso por el gobierno. Una generación menos ideologizada y más basada en valores fuertes. La evolución de CANAE refleja una parte del recorrido de esta generación. En el boletín especial de su 15 aniversario podemos leer: «Cada fuerza sociopolítica quería estar presente también entre los estudiantes y eso es lo que ocurrió. Sin embargo el partido de la derecha estaba demasiado débil para hacer nada. Los centros privados, de la iglesia, tendrían que defender sus intereses y el de sus alumnos y sus padres, por sí mismos. Así, frente a CEAE-UDE, Sindicato de Estudiantes y Estudiantes Progresistas, nació CANAE. Dentro de lo difícil que es el nacimiento de cualquier organización no fue tan complicado por dos factores. Uno fue la disciplinada y tenaz organización de los colegios religiosos…y en segundo lugar, el hecho de que en estos centros siempre se promovió la participación de los alumnos, de una forma paternalista y vigilada quizás. A los estudiantes en los colegios religiosos se les anima desde siempre a participar en diversos grupos religiosos, deportivos, de tiempo libre…se les anima a cambiar el mundo, a transformar la realidad…».

Sin embargo, aunque nacen en este contexto, ya desde su primer año de funcionamiento «los dirigentes de CANAE marcaron su independencia no sólo con respecto de la FERE, sino con respecto a cualquier otro movimiento social o partido político. Los dirigentes de CANAE, ninguno de los cuales llegaba a los 20 años, podían ser católicos quizás en su mayoría y desde luego todos venían de centros privados y creían en lo que se llamaba libertad de enseñanza, pero todos estaban concienciados con esas ideas de justicia social, la transformación de la realidad social y los que más tarde se llamaría democracia participativa. Entendieron que lo fundamental era defender los derechos de los estudiantes de la pública y de la privada, por sí mismos, con sus propios y escasos medios y conocimientos. Los lemas fueron 'por y para los estudiantes' y 'aquí no nos casamos con nadie'. Esta política añadió a los enemigos a la izquierda otros a la derecha».

Ese universo mental, que se concreta muy bien en esa dos afirmaciones «por y para los estudiantes» y «aquí no nos casamos con nadie» reflejan bastante bien el cambio de mentalidad que se percibe en amplios sectores de jóvenes

durante los noventa. Cambio que corre paralelo a la readaptación de la imagen que progresivamente va dando el PP en su diferenciación de la derecha más rancia de Alianza Popular, y al desprestigio del PSOE por los casos de corrupción y guerra sucia; y que tiene en la Universidad su punto simbólico en el abucheo que en marzo de 1993 se llevó el presidente del Gobierno Felipe González en la Universidad Autónoma de Madrid.

Por lo tanto van accediendo a la universidad un sector de jóvenes nada marcado por las ideologías tradicionales y más por valores e ideas, en el que confluyen dos grandes canales: uno que bien queda reflejado en el texto anterior de CANAE; y otro el que va saliendo de los Institutos de Enseñanzas Medias, en los que mediante la implantación progresiva de la LOGSE se ha ido haciendo un especial hincapié en la educación en valores, eso sí, en valores finalistas como la solidaridad, la no violencia y los derechos humanos, y no en valores intermedios como el esfuerzo o el compromiso, tan necesarios, entre otras cosas, para la actividad social sostenida. Sectores de esta generación, también como reacción al mundo prosaico y competitivo de finales de los ochenta y principios de los noventa, son los que nutren los diversos movimientos de solidaridad, como el 0,7, o por la condonación de la deuda externa, y hacen actividades de voluntariado y van integrando las diversas ONG, que disparan su crecimiento en esos momentos. Este sector conecta mal y camina en paralelo con los grupos más ideologizados de la izquierda tradicional que actúan en algunas facultades, aunque tras la experiencia del movimiento antiglobalización y el comienzo de un nuevo ciclo de movilizaciones juveniles terminan confluyendo en el rechazo a la LOU y en la ruptura de la mayoría de la comunidad universitaria con el PP.

Curiosamente, si la imagen de Felipe González abucheado en la Universidad Autónoma tuvo un efecto simbólico en el cambio de ciclo político, el aplauso de los estudiantes a Rodríguez Zapatero en el Paraninfo de la Universidad Carlos III en Leganés, en 2004, también fue precursor del cambio. Pero un cambio diferente, que se refleja perfectamente en ese «no nos falles» que le gritaban multitud de jóvenes, y que no es ni más ni menos que una variante del «aquí no nos casamos con nadie» de la mentalidad de los jóvenes de los noventa.

En la Universidad, durante la última década del siglo pasado los conflictos estudiantiles se produjeron en relación a la subida de las tasas académicas, a la deficiencia de la política de becas y a la exigencia de un aumento de la financiación pública de la Universidad. Entre estos se puede destacar los realizados durante el curso 93-94, en los últimos años del PSOE, y en 1996, con el primer gobierno de PP y la conducción liberal del Ministerio de Educación por la ministra Esperanza Aguirre, cuya actuación va a ser precursora del

comportamiento que tendrá el PP cuando consiga, posteriormente, la mayoría absoluta y pueda plantear ya sin ninguna traba ni cortapisa su contrarreforma radical de la enseñanza que generó una gran fractura en la comunidad educativa, y un rechazo general de la mayoría de los sectores universitarios.

La forma de poner en marcha la LOU refleja perfectamente esa forma de gobierno del PP en mayoría absoluta. Esta ley empieza a ser puesta en circulación y darle forma al acabar el curso 2000-2001, en verano, y es aprobada a toda velocidad a finales de diciembre. Esta premura fue diseñada para evitar cualquier tipo de reacción de la comunidad universitaria, y mostró una total desconfianza hacia ella, «proyectando la idea de que las universidades españolas están instaladas en el desastre y que sólo una urgente y drástica operación quirúrgica puede poner fin a su deterioro».[6]

Y, otra vez de una manera inesperada, los estudiantes se echaron a la calle. Varios factores influyeron en ello. Primero el tener un factor precipitante. Aunque la LOU actuó como un gran cajón de sastre para el rechazo, por razones diversas, de la mayoría de las organizaciones y grupos estudiantiles, el factor precipitante clave fue el procedimiento de urgencia que siguió el ministerio para aprobar la ley y el total desprecio hacia las opiniones de la mayoría de la comunidad universitaria: Rectores, claustros, profesorado, sindicatos, grupos estudiantiles…La sensación de humillación, el trato despectivo y desconsiderado, la arrogancia y la prepotencia han sido determinantes para la unanimidad del rechazo. En este contexto, la ley se convirtió en una provocación.

El segundo fue una situación política propicia, en la que el movimiento fue apoyado por una parte de la clase política y por algunos medios de comunicación importantes en su lucha contra el PP.

El tercero fue una buena actuación de las redes organizativas, que desde julio llevaban preparando las movilizaciones, centralizadas después en la Campaña Estatal contra la LOU y en la consigna «otra universidad es posible», que recoge el imaginario del movimiento antiglobalización, conectando con ese nuevo ciclo de movilizaciones juveniles, que se convierte en el cuarto factor explicativo de las movilizaciones.

En todo esto estuvo la fuerza del movimiento de rechazo, que aunque no logró que la LOU se retirara, tuvo un gran éxito, pues dejó esta ley muy

6. «Universidad en la Calle», *El País*, 15 de noviembre de 2001.

desgastada, desprestigió las formas autoritarias de gobierno del PP, facilitó la discusión de los problemas de la universidad y de las posibles soluciones y alternativas, reforzó la idea de que es necesario ante cualquier reforma de la universidad la existencia de un diagnóstico preciso previo y, sobre todo, que es necesario variar las formas de elaboración de una nueva ley, contando con la participación de todos los sectores de la comunidad universitaria.

Para acabar, puede ser interesante analizar el diseño de la Campaña Estatal contra la LOU. Esta Campaña se estructuró para unir a grupos estudiantiles diversos en el rechazo a una ley, a modo de las campañas antiglobalización. La fuerza de esta forma de actuación está en que permite unificar la diversidad en unos puntos mínimos de consenso y posibilita el máximo de iniciativa a todos los que quieren actuar. Sin embargo, una vez que el conflicto estudiantil ha estallado este diseño de campaña se muestra insuficiente para unir y coordinar un movimiento que sea representativo de los estudiantes. La diversidad y la heterogeneidad de las redes organizativas, si no se combina con una representación efectiva de los estudiantes dispara los enfrentamientos entre grupos y la búsqueda de protagonismos, basados en idiosincrasias, modos de entender el desarrollo del movimiento, cuando no en la consolidación del propio grupo. Los sitios donde el movimiento tuvo mayor amplitud fueron, como en el caso de Santiago o Sevilla, donde la agenda la determinaban las asambleas y la coordinación surgía de la representación directa nacida de ellas.

En esto, este movimiento se diferencia del de la LAU, que fue impulsado mediante acuerdo de diversos grupos estudiantiles, pero que cuando estalló fue articulado en reuniones a las que asistían dos representantes por facultad elegidos por las asambleas, y con posturas discutidas en éstas. Estos representantes podían pertenecer a grupos estudiantiles y políticos, pero eran elegidos por sus compañeros de facultad y eran responsables ante ellos. Fue esa relación directa con los estudiantes lo que le dio su fuerza en una situación política bastante adversa.

Los movimientos por la okupación

20 años liberando espacios de la especulación del capital

Robert González

En medio de los fastos del Foro de las Culturas Barcelona 2004 se cumple el 20 aniversario de una crítica urbana al modelo de sociedad que éste defiende. Así, frente a la práctica de la especulación inmobiliaria, la mercantilización de la cultura y la tergiversación de los valores de la paz, la convivencia y la sostenibilidad, se alzan numerosas resistencias de los movimientos populares. Y entre todas ellas, sigue en vigor una de las más potentes, duraderas e imaginativas. Los movimientos por la okupación siguen siendo, sobre todo en Barcelona, pero también en Madrid, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Málaga, Terrassa y otras grandes ciudades del estado español, como una almorrana para las posaderas del nuevo urbanismo capitalista. Las prácticas okupas, desde su surgimiento a principios de los ochenta, con bastante retraso respecto a sus homólogas europeas, han tejido unas fuertes redes sociales de contracultura que aglutinan sus fuerzas en torno al acceso directo a la vivienda y a espacios de sociabilidad fuera de la lógica mercantilista.

En el presente artículo trataremos de explicar una breve historia de la okupación en el estado español, haciendo especial énfasis en el caso catalán. Para ello explicaremos, en primer lugar, los elementos teóricos y prácticos que hacen indispensable la aparición de un artículo sobre el movimiento por la okupación en un monográfico sobre izquierda transformadora y movimientos sociales. En este mismo apartado procederemos a explicar someramente los contextos socio-políticos en que aparece y se desarrolla la práctica de la

okupación en Europa y en el estado español. En segundo lugar, y desde las teorías de las estructuras de oportunidad y de los ciclos de protesta, intentaremos una periodización del movimiento, explicando las principales dinámicas de cambio y continuidad que han operado en su interior en los últimos 20 años. Finalmente, a modo de conclusión, nos preguntaremos por el impacto político del mismo, es decir, sobre cuáles han sido hasta la fecha los resultados de las movilizaciones okupas.

Las prácticas de okupación como movimiento social. El caso del estado español

La okupación de inmuebles abandonados es un fenómeno antiguo, pero su constitución como movimiento social se remonta en Europa a la década de los setenta. Es durante esa década, al calor de la oleada de los nuevos movimientos sociales (en adelante, NMS) cuando se popularizan las okupaciones en países como Alemania, Holanda, Italia o Gran Bretaña. En los diversos países se desarrollan varios modelos de okupación, y el del estado español —de los últimos en incorporarse— bebe de todos ellos. En este apartado justificaremos, en primer lugar, porque consideramos la practica de la okupación como un movimiento social en toda regla. En segundo lugar, presentaremos una serie de modelos de okupación basándonos en una suerte de política comparada de movimientos por la okupación en Europa. Finalmente, caracterizaremos el modelo (o modelos) de las okupaciones en el estado español y explicaremos el contexto social en el que aparece.

La okupación en Europa

Las prácticas de okupación que surgen en Europa en los años setenta pueden considerarse un movimiento social en tanto son llevadas a cabo por colectividades de personas numéricamente significativas, que actúan con cierta continuidad, que surgen en condiciones de conflicto para convertirse en un desafío a las autoridades o poderes (en un primer nivel locales, pero también nacionales y estatales) mediante una acción colectiva no institucionalizada, con la intención de promover cambios (sean estos explicitados o no por el propio movimiento). Por lo tanto, en el movimiento ocupa se dan los rasgos que se consideran fundamentales para definir un movimiento social: conflicto, desafío, cambio y acción colectiva.[1]

1. Cf. Jaime Pastor: *¿Qué son los movimientos antiglobalización?* Madrid: RBA Libros SA, 2002.

Ahora bien, ¿qué es okupar? Para el sociólogo holandés Hans Pruijt[2] la respuesta es bien sencilla: okupar es vivir en (o usar de otro modo) inmuebles sin el consentimiento de su propietario. Podríamos añadir, tal como apunta Martínez López[3] que se trata de un movimiento que se centra en el acceso directo a un bien urbano escaso (la vivienda y los espacios de sociabilidad) y su defensa legitima.

De todas formas, existen y conviven diversos tipos de okupación. Se puede distinguir, en primer lugar, las que se dedican a satisfacer una necesidad de vivienda, de las que se convierten en Centros Sociales Okupados (en adelante CSO) donde realizar todo tipo de actividades contraculturales en un espacio público no estatal, fuera de las lógicas burocratizadas (del estado) o mercantilizadas (del sector privado). Para ilustrar estos dos tipos ideales, cabe una breve reseña histórica comparada de la okupación en Alemania y en Italia.

En el país germano se producen las primeras okupaciones con el movimiento estudiantil del 68, y la segunda oleada, más significativa, se da entre 1978 y 1980. Los primeros objetivos fueron casas afectadas por planes de saneamiento de barrios antiguos. En diciembre de 1980, violentos enfrentamientos provocados por un desalojo provocan el salto del movimiento a los medios de comunicación y una extensión que le llevará a su punto álgido en 1984, con 170 okupaciones. Después de una etapa de dura represión, el cambio de estrategia hacia la negociación por parte de la administración (la llamada línea Berlinesa) provocará la división del movimiento. Los que negociaron accedieron a alquileres bajos y a la inclusión de sus edificios en el programa de renovación de viviendas. Las casas que no negociaron fueron desalojadas y derribadas para construir edificios de alto *standing.*[4]

La okupación en Italia en la década de los setenta nace amparada en el proceso insurreccional de 1977, movimiento que representa el punto de encuentro de la lucha de clases, por una parte, y la lucha estudiantil procedente de 1968, por la otra. El modelo de okupación no era el de vivienda, sino el de

---

2. Cf. Hans Pruijt: «Is the Institutionalization of Urban Movements Inevitable? A Comparison of the Opportunities for Sustained Squatting in New Cork City and Amsterdam. *International Journal of Urban and Regional Research*. Oxford: Joint Editors and Blackwell Publishing Ltd, 2003. También en «Okupar en Europa» en Adell, Ramón y Martínez, Miguel (coords.): *¿Dónde están las llaves? El movimiento okupa: pràcticas y contextos sociales.* Madrid: Los libros de la Catarata, 2004.

3. Cf. Martínez, M.. «Del urbanismo a la autogestión: una historia posible del movimiento de okupación en España» en Adell, Ramón y Martínez, Miguel (coords.), *op.cit.*

4. Cf. Schäfer, Bettina. «L'okupació a Berlin» a *Illacrua*, nº43, març de 1997.

centro social autogestionado. No existía la voluntad de presionar a la administración por el cambio de una política concreta, sino la de la agitación continua y la lucha contra el sistema capitalista. La mayoría de las okupaciones eran utilizadas por la juventud crítica y alojaban radios libres, grupos artísticos y colectivos políticos vinculados a la extrema izquierda y al área de la autonomía.[5] La supuesta vinculación del movimiento con las Brigadas Rojas sirvió al Estado para reprimirlo, mediante la aplicación de la ley antiterrorista y la «guerra sucia». Los principales lideres fueron encarcelados o asesinados, y se mantiene la voluntad de silenciar la memoria del movimiento.[6]

Si Alemania y Italia (donde también hay diversidad interna) han servido como modelos para la ocupación en el Estado español, Holanda es probablemente el país donde mas impacto ha tenido la okupación. Y sin ninguna duda el que cuenta con más pormenorizados estudios sobre el movimiento. Así, Hans Pruijt[7] distingue hasta cinco modelos de la okupación, que nos limitaremos a enumerar: 1) la okupación basada en la pobreza, 2) la okupación como estrategia alternativa de vivienda, 3) la okupación empresarial, 4) la okupación conservacionista y 5) la okupación política.

La okupación el estado español. Prácticas y contextos sociales

Sin olvidar algunas experiencias del primer modelo, como las ocupaciones vecinales de los setenta en Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga o Terrassa[8] o más recientes como el caso de las Casernas de Sant Andreu, okupadas durante el 2003 por más de 700 inmigrantes ilegalizados, podríamos decir que la okupación en el estado español se encuentra a caballo entre la estrategia alternativa para acceder a una vivienda y la okupación política.

Es decir, por una parte, la okupación se puede entender como una arma de combate para llevar a cabo un proyecto transformador que responde a una ideología concreta y previamente definida. Otra visión correspondería a la

5. Cf. Herreros, Tomàs. «Introducció: El moviment okupa a finals del segle XX» a Assemblea d'Okupes de Terrassa (comp), *Okupació, repressió i moviments socials*. Barcelona: Edicions Kasa de la Muntanya-Diatriba, 1999.
6. *Vid.* Balestrini, Nanni. *Los Invisibles*, Barcelona: Anagrama, 1988. A pesar de ello, hoy sobrevive en Italia un vigoroso movimiento de centros sociales autogestionados, algunos emblemáticos, como el milanés Leon Cavalho. De hecho podemos hablar de un resurgir del movimiento al calor de las luchas contra la globalización capitalista. No en vano, del entorno de los centros sociales han surgido iniciativas tan significativas para este movimiento como los *Tutte Bianchi*.
7. Pruijt, Hans. «Okupar en Europa» en Adell, R. y Martínez, M. (coords.): *op. cit.*, págs. 35-60.
8. Gutierrez, V: «Okupación y movimiento vecinal» en Adell, R. y Martínez, M. (coords), *op.cit.*, págs. 117-118.

okupación como medio para llevar a cabo proyectos de experimentación personal y colectiva, siguiendo pautas de comportamiento alternativas, bajo una lógica de insumisión cotidiana entre los integrantes del colectivo. Evidentemente estas dos categorías teóricas no son taxativas sino que responden a los dos extremos del *continuum* donde se situarían las diversas experiencias de okupación en el Estado español.

En cualquiera de los casos, la opción vital de los y las okupas tiene claras connotaciones políticas. Fenómenos como el reciclaje como método para obtener los productos básicos para la subsistencia (alimentos, muebles, ropa), la práctica del vegetarianismo como opción alimentaria, los medios de transporte no contaminantes como la bicicleta o la misma convivencia dentro de estructuras no familiares, con predominio de relaciones antisexistas, no jerárquicas y no autoritarias, tienen una clara voluntad transformadora de la sociedad actual.[9]

Por otra parte, casi todas las okupaciones manifiestan el hecho expreso de practicar la okupación como medio para llevar a cabo otras luchas paralelas de clara voluntad transformadora. Se considera que las okupaciones conjugan en sí mismas objetivos ambivalentes: son, por una parte, fin en sí mismas, espacios recuperados a un sistema de propiedad basado en la especulación y en el predominio del valor de cambio sobre el valor de uso; pero al mismo tiempo son un medio para llevar a cabo una lucha global contra el sistema. Esta última finalidad se aprecia de manera más evidente en las okupaciones que llevan a cabo proyectos de CSO, *Casal Popular*, Ateneo o *Gaztetxe*.

Finalmente, tal como afirma Marina Marinas, la reapropiación de espacios siempre ha sido considerada por la izquierda radical como un recurso movilizador de primer orden, *«...no solo por lo que la lucha contra la especulación supone, sino también porque constituye un reclamo de legitimidad creciente en el seno de una base social expansiva muy sensibilizada, cuando no aturdida, por la segregación social que sufren los jóvenes, y en especial las mujeres.»*[10]

La precariedad laboral creciente, las dificultades para acceder a una vivienda y la escasez de espacios de sociabilidad no mercantilizada en las sociedades

9. Castillo, Eva y González, Robert. «Com i perquè d'aquestes almorranes kabrejades. Anàlisi d'un moviment de protesta política», Barcelona, UAB, inèdit, 1997.
10. Cf. Marinas, Marina. «Derribando los muros del género: mujer y okupación», en Adell, R. y Martínez, M. (coords), *op.cit.*, 2004, pág. 207.

del capitalismo avanzado, son las condiciones sociales de la okupación. Por otro lado, desde el punto de vista urbanístico, Miguel Martínez[11] apunta que, como tendencia general, las okupaciones en el estado español se suelen localizar en los centros históricos y urbanos (Lavapiés y Tetuan en Madrid; Raval, Ciutat Vella, Gràcia o Sants en Barcelona; Alameda de San Luís en Sevilla; el Carme y Russafa en Valencia, etc.); en áreas en reconversión industrial y fábricas o instalaciones deslocalizadas (Baix Llobregat y Vallès Occidental en Barcelona o el margen izquierdo en Vizcaya); y, finalmente, en zonas de renovación urbana con «grandes proyectos» terciarios o residenciales (Poble Nou en Barcelona o El Cabanyal en Valencia). A estas tres ubicaciones preferenciales, cabe añadir la okupación en zonas periurbanas (como Collserola en Barcelona), naves industriales aisladas o periféricas, propiedades abandonadas por el estado o la iglesia (como La Escuela de la Prosperidad en Madrid o el Gaztetxe de Santutxo en Bilbao) y edificios de viviendas sin licencias (Miles de Viviendas, primero en la Trinidad y ahora en el Eixample Derecho de Barcelona).

Breve historia de la okupación en el estado español

Para acotar las etapas hemos recurrido a la teoría de las Estructuras de Oportunidad Política (en adelante, EOP), considerando que subsume a las teorías de ciclos. Las EOP son las dimensiones consistentes del entorno político que fomentan o desincentiven la acción colectiva.

Así, los elementos para pasar de una etapa a otra tendrán relación con el cambio en el comportamiento de las diversas dimensiones de las EOP que ha destacado la literatura de Movimientos Sociales.[12] Éstas son, principalmente, las siguientes: la apertura o cierre relativo del sistema político institucionalizado, la estabilidad o inestabilidad del alineamiento de las elites, la presencia o no de elites aliadas, la capacidad o propensión del estado a la represión, la capacidad de respuesta del sistema político y los ciclos de protesta. También se tendrán en cuenta las Estructuras de Oportunidad Cultural, considerándolas en la faceta de creación de oportunidades para la acción por parte del propio movimiento.

---

11. Martínez, M.: «Del urbanismo a la autogestión: una historia posible del movimiento de okupación en España» en Adell, R. y Martínez, M. (coords), *op.cit.*

12. *Vid*. Tarrow, Sidney. *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la politica* Madrid: Alianza Universidad, 1997. McAdam, D., McCarthy, J. y Zald, M.. *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*. Madrid: Istmo, 1998. Kitscheld, Herbert. «Political opportunity structures and political protest: anti-nuclear movements in four democracie». London: *British Journal of Political Science*, 16, 1986.

En el siguiente apartado comentaremos la evolución de los movimientos por la okupación en el estado español en los últimos 20 años, distinguiendo tres etapas: dos muy claras, tomando como punto de inflexión principal el año 1996 y, una tercera, emergente en, por lo menos, los últimos tres o cuatro años. Periodizar la historia de un movimiento es siempre un ejercicio sujeto a imprecisiones, y en el caso de un movimiento tan reciente y vivo como el de okupación quizás más. Por ello, cabe destacar la coincidencia con otros investigadores en considerar el año 1996 como punto de inflexión.[13]

El 1996 supone el salto a la Agenda Pública de la temática de la okupación a partir de tres principales factores de oportunidad política y de movilización. En primer lugar, la entrada en vigor del Nuevo Código Penal, que supone la criminalización legal del movimiento, en segundo lugar el desalojo del Cine Princesa en Barcelona, que por la importancia y popularidad de este centro social okupado así como por la espectacularidad y violencia del desalojo, supone el acceso del movimiento a la «opinión pública». Finalmente, la entrada de nuevas sensibilidades en el movimiento en esa misma época, provenientes sobre todo del antimilitarismo y del movimiento estudiantil, le dotan de una creciente capacidad de movilización y incidencia pública.[14]

Primera etapa (1984-1996). Nacimiento, apertura y consolidación

A pesar de que hemos decidido agrupar en una sola etapa toda el período previo a la entrada en vigor del Nuevo Código penal, existen en estos primeros 12 años de okupación algunos elementos de cambio. Por ejemplo, a partir de 1992 se produce una apertura del movimiento, con la entrada en el escenario «okupa» de planteamientos mas globales y abiertos que en las primeras okupaciones, derivados de la incidencia del movimiento estudiantil y del antimilitarista, entre otros. No en vano, en 1992 parece articularse en diversos territorios del Estado, la primera, aunque algo tímida, respuesta al contexto de reestructuración capitalista de las grandes ciudades, expresada a tra-

13. *Vid.* Herreros, T.:«Movimiento de las okupaciones y movimientos socials: elementos de análisis para el caso de Catalunya», en Adell, Ramón y Martínez, Miguel (coords), *op.cit.*, 2004; Asens, Jaume: «La criminalització del moviment okupa», a Assemblea d'Okupes de Terrassa (comp), *op. cit.*; Martinez, Miguel. *Okupaciones de viviendas y centros sociales. Autogestión, contracultura y conflictos urbanos.* Barcelona: Virus, 2002; AA.VV. *Xarxes crítiques a Catalunya i Euskadi: Antimilitarismo i Okupació.* Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 2002; Adell, Ramón. «Mani-Fiesta-Acción: la contestación okupa en la calle. (Madrid, 1985-2002)» en Adell, R. y Martínez, M. (coords), *op.cit.*

14. González, Robert , Blas, Asier y Pelàez, Lluc «Okupar, resistir y generar autonomía. Los impactos políticos del movimiento por la okupación» en Ibarra, P; Gomà, R y Martí, S.(eds.) *Creadores de democracia. Movimientos sociales y redes de politicas en Euskadi y Catalunya*. Barcelona: Ed. Icària, 2002.

vés de tres eventos: los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Exposición Universal de Sevilla y la Capitalidad Cultural de Madrid.[15]

En Catalunya, la primera okupación se produce en el barrio de Gràcia, en 1984, donde la práctica de la okupación se liga en esta etapa inicial a la necesidad de vivienda, aunque se dan las primeras experiencias de centro social. La okupación de Cross, en el barrio de Sants, y especialmente la del Ateneo de Cornellà de Llobregat, en 1986,[16] permiten la obtención de locales de reunión de colectivos. Más adelante, el Ateneo Libertario de Gràcia de la calle Perill, se sensibiliza con la temática okupa y acaba convirtiéndose en la sede del movimiento a principios de los noventa. Es el momento álgido de las okupaciones de Gràcia, donde destaca la okupación de la Kasa de la Muntanya en 1989, antigua caserna militar que todavía hoy resiste la presión de los desalojos y la criminalización.

En este contexto, surge el primer embrión de la Asamblea de Okupas de Barcelona, que servirá para coordinar sobre todo las casas de los barrios de Gràcia y el Guinardó, y que tendrá cierta continuidad entre 1989 y 1992. Este mismo año se produce, como se ha señalado anteriormente, el primer elemento de cambio en la historia del movimiento por la okupación catalán. Las luchas antijuegos-olímpicos desembocan en una contundente denuncia de la especulación inmobiliaria mediante las okupaciones de Murtra, Poble Nou y el Casal Popular del Guinardó. Será a través de estos proyectos desde donde se lleva a cabo una apertura y un trabajo con la gente de los barrios de manera más palpable.

La vinculación del movimiento universitario de izquierda radical con la okupación se inició con La Garnatxa, antigua cooperativa vinícola que es okupada por gente procedente de la Universidad de Barcelona y que desembocará en el actual CSO Hamsa, en el barrio de Sants. Otros puntos de contacto con el entorno universitario serán el Colectivo de solidaridad con la rebelión zapatista y las campañas contra el FMI y la Europa del Capital. En los años 94-95 se consolidan los lazos entre el movimiento por la okupación y el movimiento estudiantil radical. Paralelamente se produce una «salida de las casas» con voluntad de trabajar en otros campos fuera de la estricta okupación y su entorno más cerrado. Se trabaja conjuntamente con asambleas de insumisos y personas concretas del Mili KK, realizándose acciones, planteamientos y comunicados conjuntos.[17]

---

15. Martínez, Miguel. «Del urbanismo a la autogestión: una historia posible del movimiento de okupación en España» en Adell, Ramón y Martínez, Miguel (coords), *op.cit*.
16. El Ateneu de Cornellà no pudo resistir la oleada de desalojos de Centros Sociales de finales de 2003. Con sus 17 años de historia ha sido hasta la fecha la ocupación mas larga en Catalunya.
17. Cf. Castillo, E. y González, R., *op.cit.*

Por lo que se refiere a Euskadi, el nacimiento del movimiento por la okupación se produce también alrededor de los movimientos juveniles de los años ochenta, con estéticas punk y de rock radical y ideologías contestatarias. Empiezan a aparecer Gaztetxes por toda Euskal Herria: Guipozkoa (Andoain, Antzuola, Azkoitia, Oñati...), Araba (Llodio) e Iparralde (Baiona) y tienen sus primeras okupaciones en los años 1983 y 1984.[18] A mediados de la década de los ochenta, en una segunda oleada de okupaciones, encontramos el nacimiento de las más emblemáticas (la de la antigua sede de la Bolsa de Bilbao y la de Vitoria-Gateiz, así como la de Pamplona-Iruñea) además de otras okupaciones en prácticamente todos los municipios importantes de Euskal Herria.

En Madrid, una incipiente Asamblea de Okupas, que por entonces se reunía en el Kasal Popular de Arregui, protagoniza la histórica okupación de Minuesa en 1987. Entre 1990-92 se forma el primer intento de agrupar al movimiento autónomo en torno a la coordinadora de colectivos Lucha Autónoma. Las movilizaciones contra la capitalidad cultural de Madrid en 1992, y el encuentro contra el neoliberalismo «Las Otras Voces del Planeta» de 1994, representan la obertura del movimiento okupa madrileño a otros aspectos de la movilización social. Finalmente, en 1994, la fusión de los dos principales proyectos contrainformativos del movimiento autónomo, la agencia de noticias UPA y el boletín Molotov, supone un salto hacia adelante en el campo de la comunicación alternativa.[19]

En resumen, en esta primera etapa, la estrategia parece más dirigida a conseguir identidad que poder, a la creación de una contracultura con cierto apoyo social. La primera apertura del movimiento a partir de las okupaciones de 1992, la asunción de un discurso más global, aunque sólo sea «anti» (anticapitalismo, antimilitarismo, antifascismo, antihomófobo, etc.) y el trabajo de base en los barrios, empiezan a conformar el embrión de una red crítica con potencial movilizador y transformador.

Segunda etapa (1996- 2001): represión, crecimiento y entrada en la Agenda Pública

El mes de enero de 1996, después de los trabajos realizados a finales de 1995 por la Coordinadora Contra el Nuevo Código Penal en la que habían participado colectivos diversos de todo el Estado español, se convoca una asamblea

18. AA.VV. *Vivienda: especulación...& Okupazioak.* Bilbo: Donostialdeko Okupazioa Batzarra-Likiniano Elkartea, 2001.
19. Casanova, Gonzalo: *Armarse sobre las ruinas. Historia del movimiento autónomo en Madrid (1985-1999)*. Madrid: Potencial Hardcore, 2002.

en el Casal Popular del Guinardó (Barcelona) para debatir como afrontarán los y las okupas la criminalización de sus prácticas. La respuesta de los poderes públicos a un problema social real, como es la carestía de la vivienda y la falta de espacios de sociabilidad para los jóvenes, ha sido la represión hacia el movimiento que ponía en evidencia estos problemas de forma mas clara y contundente.

La criminalización de la okupación en el Nuevo Código Penal, que entra en vigor en 1996, marca, paradójicamente, el inicio de una expansión considerable. Según la Comisión de estudio sobre el «movimiento okupa» de la Secretaria General de la Juventud de la Generalitat de Catalunya, entre 1996 y 1998, las casas okupadas en el Principado de Catalunya pasan de 40 a 150,[20] concentradas mayoritariamente en Barcelona ciudad.[21] A pesar de las intensas campañas de desalojos de 1998 (50 con 500 detenciones),[22] de 2001 (32 desalojos respondidos con 27 nuevas okupaciones) y de 2003,[23] el área metropolitana de Barcelona sigue contabilizando en torno a un centenar de okupaciones, siendo al menos 28 de ellas Centros Sociales.[24] En Madrid, sin llegar ni mucho menos a la densidad de okupaciones de Catalunya, también se dispara la solidaridad con el movimiento okupa a partir de la entrada en vigor del nuevo código penal.

Esta etapa dibuja unas EOP cerradas para recibir las demandas del movimiento, y una respuesta básicamente represiva, como se verá en el desalojo del Cine Princesa en Barcelona. A pesar de la sucesión de actos y manifestaciones en solidaridad, el día 28 de octubre de 1996, un impresionante dispositivo policial asalta el Cine Okupado a las 6 horas y consigue desalojarlo después de dos horas y media de enfrentamientos con los okupantes que intentaban resistir.[25] La actuación policial fue criticada por las asociaciones

---

20. «Conclusions» de la *Comissió d'estudi sobre el moviment okupa*, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1998.
21. En esa misma ciudad, según el INE, existían 70.000 edificios abandonados o no utilizados en 1997. *Vid*. Tomas Herreros, «Introducció. El moviment ocupa a finals del segle XX» a Assemblea d'Okupes de Terrassa (comp..), *op.cit.*, 1999.
22. Cf. *Annuari Contra-Infos 1998-1999*, Barcelona, Virus, 2000.
23. Algunos de ellos se han conseguido parar hasta la fecha debido al fuerte apoyo social. Son los casos de La Kasa de la Muntanya en Gràcia y el CSO Hamsa en Sants [*hasta este verano: el 4 de agosto La Hamsa fue desalojada*]
24. González, R.: «La ocupación y las políticas públicas: negociación, legalización y gestión local del conflicto urbano» en Adell, R. Y Martinez, M. (coords.), *op. cit.*
25. La operación se salda con un balance de 48 detenidos y 15 heridos. Alrededor del Cine, situado en la Via Laietana, una de las calles más céntricas de Barcelona, se concentran unas 200 personas, entre las cuales se encuentrn algunos políticos, como Ignasi Riera de IC-V, que pide la dimisión de la Delegada del Gobierno en Catalunya.

vecinales y por todos los partidos políticos excepto el PP. A las ocho de la noche se produce una manifestación de protesta, de unas dos mil personas para reclamar la libertad de los detenidos y contra la actuación policial. Al pasar por la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana, empiezan violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, que se reproducen hasta altas horas de la noche por calles adyacentes. La jornada acabó con siete detenidos y diversos heridos.[26]

En este contexto hay que entender los hechos del 15 de marzo de 1997, cuando se celebra un concierto multitudinario del Born en apoyo al movimiento. La cifra de asistentes supera las diez mil personas y la colaboración de la FAVB (Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona) es decisiva.

La dinámica iniciada por el desalojo del Cine Princesa inicia la mejor etapa del movimiento. Durante los años 1996, 1997 y 1998, la Asamblea de Okupas de Barcelona se reúne regularmente, convirtiéndose en un mecanismo de coordinación importante para los movimientos alternativos de la ciudad. Durante esta «época dorada» del movimiento en Catalunya, se producen diversas acciones espectaculares y significativas. La manifestación más masiva de apoyo a la okupación se produce el 28 de febrero de 1997, por la noche, cuándo cinco mil personas recorren el centro de Barcelona para acabar en el barrio de Sants, ante el CSO Hamsa que tenia orden de desalojo para el día siguiente.[27]

En Madrid, las manifestaciones antifascistas del 20 de noviembre de los años 1996, 1997 y 1998, impulsadas por la coordinadora de colectivos Lucha Autónoma, son también una muestra de esta «etapa dorada» del movimiento de las okupaciones. La cúspide de movilización se da en las protestas por el desalojo del CSO La Guindalera, el 10 de marzo de 1997, que se saldan con la friolera de 165 personas detenidas.[28]

Por otra parte, también en esta etapa se consolidan los principales canales de contrainformación, que conquistan espacios comunicativos desmediatizados,

---

26. El 11 de enero de 1997, seis de los detenidos a raíz de la manifestación contra el desalojo del Cine son condenados a penas de ocho años de prisión y cincuenta retenciones de fin de semana. Tres años después, el Gobierno español absolverá a los condenados atendiendo una proposición no de ley del Parlament de Catalunya, donde todos los partidos, excepto el PP, pidieron la absolución inmediata.
27. Una concentración de más de 300 personas pasa la noche delante de la Hamsa y, una vez mas, los propietarios dan marcha atrás al desalojo. Cf. González, Blas y Pelaez, *op. cit.*
28. Esta cifra de personas detenidas en un solo día es la más alta desde el fin de la dictadura. *Vid.* Casanova, *op. cit.*

de consumo excesivamente interno, pero que permiten a las personas que inician su vinculación al movimiento encontrar «su» información. *Contrainfos* en Catalunya o *Molotov* en Madrid son los ejemplos más significativos en este campo.

En los años siguientes, aunque el movimiento okupa ya no es portada de los diarios, se producen manifestaciones interesantes. La Manifestación contra la Especulación Inmobiliaria del 15 de abril de 2000, movilizó a 4.000 personas en Barcelona, que realizaron murales, *performances* y acciones diversas en las sedes de las principales entidades especuladoras de Barcelona. Por otra parte, el éxito de las movilizaciones antifascistas del 12 de octubre de 2000 en Barcelona, convocadas por la Plataforma Cívica por un 12 de Octubre en Libertad, pone de manifiesto la capacidad de coordinación del movimiento con otros colectivos, incluidas las asociaciones vecinales.[29] En Madrid, las manifestaciones contra los desalojos del los CSO El Laboratorio II y Amparo 24 reúnen un total de 7.000 manifestantes.[30]

A pesar de ello, en los años 1999, 2000 y 2001, el movimiento experimenta ciertos signos de agotamiento, o ¿más bien de cambio? Lo cierto es que, por una parte, los espacios de coordinación y organización interna se van perdiendo para afirmar las identidades particulares de cada casa okupada.[31] Y, por otra parte, la estrategia represiva del estado y de los actores formales de la arena política, provoca un estado de conflicto permanente con la policía y llega a su punto álgido en el año 2001. Ya no se trata de la habitual criminalización de los medios de comunicación sino de que el estado pasa a la acción con amplias operaciones antiterroristas contra algunas personas relacionadas con la protesta okupa, acusadas de pertenecer a ETA en Barcelona[32] o al GRAPO en Madrid.[33]

---

29. La manifestación reunió a mas de 6.000 personas bajo el lema «Feixisme mai més, ni a Sants ni enlloc» («Fascismo nunca más, ni en Sants ni en ninguna parte»)
30. *Vid*. R. Adell, *cit.*
31. En Barcelona, la Asamblea de okupas deja de reunirse con tanta asiduidad hacia 1999, y cuando lo hace es para tratar casi exclusivamente temas antirepresivos. En Madrid, Lucha Autónoma se disuelve en 1998, se refunda con menos colectivos y vuelve a disolverse en 2000.
32. Vaya de paso desde estas líneas una contundente denuncia de la legislación antiterrorista y del sistema judicial español, que han permitido aberraciones como que Laura Riera, activista del movimiento en Terrassa, haya cumplido dos años y 10 meses en prisión preventiva. De hecho el juicio se celebró 2 años y dos meses después de su detención, en octubre de 2003. La sentencia, en mayo de 2004, ha condenado a Laura, junto con Zigor Larredonda y Diego Sánchez, a 9 años por colaboración con ETA, así como a Francesc, Puri y Josep, con penas de cinco años cada uno. Cuando se escriben estas líneas, las respectivas defensas están perfilando sus recursos.
33. Cf. Jaume Asens, *op. cit*.

Tercera etapa (2001 hasta hoy): el movimiento de movimientos y la critica práctica del urbanismo capitalista[34]

Son diversas las aportaciones que apuntan hacia el inicio de un nuevo ciclo en el movimiento de las ocupaciones.[35] Los cambios operados en las EOP del movimiento son evidentes, al menos en dos de sus dimensiones.

La primera, el hecho de hallarnos desde 1999 (Seattle) en un nuevo ciclo de protesta a escala internacional. Este ciclo se manifiesta con fuerza en el estado español, a partir del año 2000, con la Consulta por la Abolición de la Deuda Externa en marzo, la campaña contra el Desfile Militar en Barcelona en mayo y la participación de un buen contingente de movimientos estatales (en especial catalanes) en las movilizaciones de Praga contra el BM y el FMI en septiembre. En 2001, las movilizaciones de la *Campanya Barcelona 2001*, contra el Banco Mundial de junio, consolidan la temática del movimiento de movimientos[36] como central en Catalunya, y las movilizaciones de 2002 contra la Europa del Capital y de la Guerra, durante el semestre de presidencia española de la UE, las extienden por todo el estado. En 2003 y 2004, las amplias movilizaciones contra la Guerra del Irak, y sus inmediatas consecuencias electorales, evidencian, más si cabe, el fuerte cambio en las EOP.

En segundo lugar, otra de las dimensiones, la propensión del estado a la represión, llega a su clímax, como veíamos anteriormente, en 2001. Pero, a partir de ese momento los okupas ya no van a estar aislados ante las oleadas represivas. La creciente legitimidad social del movimiento de movimientos, y la participación en el interior de sus redes del movimiento por las okupaciones va a generar numerosas sinergias en este campo. En primer lugar, los hechos acontecidos el 24 de junio de 2001, con la brutal carga policial contra los

---

34. Se toma prestada esta expresión de un artículo de Iván Miró («Okupació: superant la criminalització. Impulsant de nou la crítica pràctica de l'urbanisme capitalista» a *Contracorrent*, 5, Barcelona, 2001), donde se apunta la voluntad del movimiento de extender la autoorganización popular y el pensamiento crítico entre sectores cada vez más amplios.

35. Cf. T.Herreros, *op. cit*., 2004 y R. González, A. Blas y Lluc Peláez, *cit*.

36. Nosotros sostenemos que el concepto más ajustado a la hora de calificar este fenómeno que se ha convenido en llamar «movimiento antiglobalización» sería el de «movimiento de movimientos». La pluralidad que conlleva esta definición es más fiel a los significados y complejidades presentes en este movimiento. Y ello encaja también con una de las principales características definitorias del «movimiento global», que es la de configurar un espacio de confluencia de los diversos movimientos, que participan o habían participado en anteriores generaciones de movimientos. El movimiento de movimientos, como red amplia y difusa, cristaliza en determinados momentos y espacios de más o menos duración en el tiempo, como son las campañas o las plataformas. De las articulaciones que se producen en el marco del movimiento, se crean también nuevas organizaciones se impulsan iniciativas locales. (*Vid*. A. Verger y R. González, «Les lluites i la construcció del moviment de moviments», *Annuari de l'Avenç*, Barcelona, 2004).

manifestantes en Barcelona, y las imágenes de policías disfrazados de manifestantes provocando disturbios y posteriormente efectuando detenciones, empiezan a poner en duda la estrategia criminalizadora de los *mass media* y el estado. Por otra parte, la convocatoria conjunta de la manifestación en Barcelona el 28 de julio de 2001 contra el intento ilegal de desalojo de la Kasa de la Muntanya y contra la represión sufrida en Génova,[37] muestran aún más esta sinergia entre el movimiento okupa y el movimiento de movimientos, y sus implicaciones en la extensión de la lucha anti-represiva.

Además de las EOP, también se operan cambios de oportunidad generados por el propio movimiento. Vamos a destacar dos. El primero, muy ligado al nuevo ciclo de movilizaciones, es la confluencia con el movimiento de movimientos, tanto en las campañas puntuales como en algunos centros sociales okupados, y finalmente, con el surgimiento de un incipiente movimiento de ateneos «legales». El segundo, es la confluencia con sectores del movimiento vecinal en lo que hemos convenido en llamar «la crítica práctica al urbanismo capitalista».

Así, una parte del movimiento de okupación protagoniza en diversas zonas del estado, algunos de los nodos más activos e imaginativos del movimiento contra la globalización capitalista, recuperando la desobediencia civil y la acción directa no-violenta para el repertorio de acción colectiva del movimiento global. En este sentido, merecen especial atención los centros sociales okupados de Can Masdeu en Barcelona, el Laboratorio III en Madrid o Kukutza III en Bilbao. Todos ellos propugnan una identidad difusa, rehuyendo el estereotipo del «okupa» alimentado por los medios de comunicación en la etapa de auge del movimiento y que se considera contraproducente para avanzar en las luchas. A ello hay que añadir, como decíamos, el resurgir de los ateneos, sobre todo en Catalunya, muchos de ellos por iniciativa de activistas del movimiento de las okupaciones. El centro social Arran, en el barri de Sants (Barcelona), es el más madrugador, el Ateneu Candela de Terrassa, quizás el más claramente alineado con la resistencia global. A ellos hay que sumar la Maxanta en Lleida, Julia Romera en Santa Coloma, la Màquia en Girona, la Rosa de Foc en el barrio de Gràcia (Barcelona), el Kasumay en el barrio de la Ribera (hoy desaparecido), El Brot en el barrio de Sant Andreu (con antiguos miembros del CSO El Palomar). Al mismo tiempo, sectores muy próximos a la okupación también consolidan sus ateneos en el ámbito de la izquierda independentista: La Torna en el barrio de Gràcia, Can

37. En las movilizaciones contra la cumbre del G-8, entre el 18 y el 21 de julio, donde se produjo el asesinato de un manifestante a manos de la policía, así como numerosas detenciones, palizas y torturas.

Capablanca en Sabadell, l'Ateneu X en Vilafranca del Penedés, la Falcata en Lleida y algunas decenas mas en pueblos y ciudades de todo el territorio.

En segundo lugar, deberíamos destacar lo que en el título de esta nueva etapa hemos convenido en llamar «la crítica radical al nuevo urbanismo capitalista». Hoy en Barcelona, a nadie se le escapa que en las resistencias al Fórum 2004 se ha establecido una amplia alianza entre sectores del movimiento de las okupaciones y sectores del movimiento vecinal, incluyendo puntualmente la propia FAVB. Pero no estamos ante un hecho puntual, debido a la respuesta que desde los movimientos sociales se da al evento institucional, sino que es un ejemplo mas de un incipiente nuevo movimiento de defensa el territorio urbano. Por *nuevo movimiento vecinal* entendemos aquellos sectores del movimiento vecinal que han sabido superar la crisis que supuso la cooptación de sus líderes en los años 80 hacia las instituciones gobernadas por partidos progresistas, mediante la entrada de nuevas generaciones de vecinos, a veces pertenecientes o provenientes del movimiento por la okupación. La composición de la vocalia de Jóvenes y Movimientos Sociales de la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), con una significativa presencia de miembros de la extinta Lucha Autónoma, y nuevas asociaciones barriales como el Forat de la Vergonya en el barrio de la Ribera (Distrito de Ciutat Vella) en Barcelona, o la Red de Lavapiés en Madrid, son claros ejemplos de esta nueva oleada de movimiento vecinal. Este nuevo movimiento vecinal centra sus esfuerzos en la lucha contra la especulación, la carestía de la vivienda y los procesos de *gentrificación* social.[38]

A modo de conclusión. Principales impactos del movimiento de las okupaciones

El movimiento de las okupaciones es un movimiento antisistémico que no tiene voluntad de incidir directamente en las políticas públicas. A pesar de ello, su presencia social continuada, y eventualmente, su acceso a la Agenda Pública han generado impactos en algunas áreas de la administración, sobre todo en las de juventud y, en menor medida, en las de vivienda. Esto ha sido debido básicamente a la mayor permeabilidad de las áreas de políticas de juventud. En todo caso, estas áreas tienen muchas dificultades para trasladar demandas y necesidades a otras áreas —urbanismo, trabajo, etc.— de más centralidad.

En las políticas periféricas, como, por ejemplo, las de participación juvenil, el movimiento por la okupación en Catalunya y Euskadi ha sido capaz de

38. Sustitución de la población autóctona existente por otra de mayor poder adquisitivo.

introducir, aunque lo haya hecho involuntariamente, nuevos modelos participativos en las lógicas de las administraciones. En el caso de Madrid, la menor densidad del movimiento y el mayor cierre de la red de políticas, así como una opinión pública menos favorable a la okupación que la catalana o la vasca, han impedido estos impactos. Finalmente, el movimiento ha sido capaz en algunos momentos de generar una extensa red anti-represiva, llegando incluso a establecer coaliciones puntuales con sectores institucionales, mediante el apoyo de abogados, jueces, fiscales y políticos de izquierdas.[39]

En todo caso, las administraciones públicas de uno u otro color político están todavía lejos, en el estado español, de permearse a la influencia de movimientos sociales de carácter autogestionario, y por tanto los principales impactos los debemos buscar en una dimensión más relacional. Efectivamente, las principales aportaciones del movimiento de las okupaciones han sido las que ha hecho sobre otros movimientos que luchan por transformar la sociedad, ya sea actuando como infraestructura (los propios CSO), como recursos de información y comunicación (boletines en papel, medios de comunicación en red como Indymedia) o incrementando el repertorio participativo con la recuperación de las prácticas de desobediencia civil y acción directa (mérito que comparte con el movimiento antimilitarista y por la insumisión). Las nuevas redes de resistencia global, de las cuales el propio movimiento de las okupaciones, junto con otros, es precursor, deberían encontrar en la experiencia de las okupaciones, fórmulas prácticas para su anclaje en lo local.

Bibliografía

AA.VV. *Vivienda: especulación...& Okupazioak,* Bilbo, Donostialdeko Okupazioa Batzarra-Likiniano Elkartea, 2001.

AA.VV. *Xarxes crítiques a Catalunya i Euskadi: Antimilitarismo i Okupació,* Barcelona, Fundació Jaume Bofia, 2002.

ADELL, Ramón. «Mani-Fiesta-Acción: la contestación okupa en la calle (Madrid, 1985-2002)» en Adell, Ramón y Martínez, Miguel (coords), *¿Dónde están las llaves? El movimiento okupa: pràcticas y contextos sociales.* Madrid, Los libros de la Catarata, 2004.

ASENS, Jaume, «La repression al movimiento de las okupaciones: del aparato policial a los mass media» en Adell, Ramón y Martínez, Miguel (coords), *op.cit.*, 2004.

— «La criminalització del moviment okupa», a Assemblea d'Okupes de Terrassa (coomp), *Okupació, repressió i moviments socials*. Barcelona, Edicions Kasa de la Muntanya-Diatriba, 1999.

39. *Vid*. R. Gonzàlez, *op. cit*., 2004.

BALESTRINI, Nanni, *Los Invisibles*, Barcelona, Ed. Anagrama, 1988.

BARRANCO, Oriol, GONZÁLEZ, Robert y MARTÍ, Marc, «La construcció mediática del moviment okupa», ponencia en el Septimo Congreso de la ACS, Reus, 2003.

CASANOVA, Gonzalo, *Armarse sobre las ruinas. Historia del movimiento autónomo en Madrid (1985-1999)*, Madrid, Potencial Hardcore, 2002.

CASTILLO, Eva y GONZÁLEZ, Robert, «Com i perquè d'aquestes almorranes kabrejades. Anàlisi d'un moviment de protesta política», UAB, Barcelona, inèdit, 1997.

Comissió d'estudi sobre el moviment okupa, «Conclusions», Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1998.

CONTRA-INFOS, *Annuari Contra-Infos 1998-1999,* Barcelona, Virus Editorial, 2000.

GOMÀ, Ricard; GONZÀLEZ, Robert, et. alt., *Joventut, okupació i polítiques públiques a Catalunya*, Barcelona, Col.lecció Estudis, Observatori de la Joventut, Secretaria General de la Joventut, Generalitat de Catalunya, 2004.

GONZÀLEZ, Robert , BLAS, Asier y PELÀEZ, Lluc, «Okupar, resistir y generar autonomía. Los impactos políticos del movimiento por la okupación» en Ibarra, P; Gomà, R y Martí, S.(eds.) *Creadores de democracia. Movimientos sociales y redes de políticas en Euskadi y Catalunya,* Barcelona, Ed. Icària, 2002.

— «La okupación y las políticas públicas: negociación, legalización y gestión local del conflicto urbano» en Adell, Ramón y Martínez, Miguel (coords), *op. cit., 2004.*

GUTIÉRREZ, Virginia, «Okupación y movimiento vecinal» en Adell, Ramón y Martínez, Miguel (coords), *op.cit*., 2004.

HERREROS, Tomàs, «Introducció: El moviment okupa a finals del segle XX» a Assemblea d'Okupes de Terrassa (coomp), op.cit., 1999.

— «Movimiento de las okupaciones y movimientos socials: elementos de análisis para el caso de Catalunya», en Adell, Ramón y Martínez, Miguel (coords), op.cit., 2004.

KITSCHELT, Herbert, «Political opportunity structures and political protest: anti-nuclear movements in four democracie». London: *British Journal of Political Science*, 16, 1986.

MARINAS, Marina, «Derribando los muros del género: mujer y okupación», en Adell, Ramón y Martínez, Miguel (coords), *op.cit*., 2004.

MARTÍNEZ, Miguel, «Del urbanismo a la autogestión: una historia posible del movimiento de okupación en España» en Adell, Ramón y Martínez, Miguel (coords), *op.cit*., 2004.

— *Okupaciones de viviendas y centros sociales. Autogestión, contracultura y conflictos urbanos.* Barcelona, Virus, 2002.

MCADAM, D., MCCARTHY, J. I. ZALD, M., *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*, Madrid, Istmo, 1998.

MIRÓ, Ivan, «Okupació: superant la criminalització. Impulsant de nou la crítica pràctica de l'urbanisme capitalista» en *Contracorrent,* 5, Barcelona, 2001.

PASTOR, Jaime, *¿Qué son los movimientos antiglobalización?,* Madrid, RBA Libros SA, 2002.

PRUIJT, Hans, «Is the Institutionalization of Urban Movements Inevitable? A Comparison of the Opportunities for Sustained Squatting in New Cork City and Amsterdam. *International Journal of Urban and Regional Research*, Oxford, Joint Editors and Blackwell Publishing Ltd, 2003.

— «Okupar en Europa» en Adell, Ramón y Martínez, Miguel, *op.cit*., 2004

SCHÄFER, Bettina, «L'okupació a Berlin» a *Illacrua* nº43, març de 1997.

TARROW, Sidney, *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la politic*, Madrid, Alianza Universidad, 1997.

VERGER, Antoni y GONZÁLEZ, Robert, «Les lluites i la construcció del moviment de moviments» a *Annuari de l'Avenç*, Barcelona, 2004.

De la peligrosidad social a las siglas LGBT

JORDI PETIT

A lo largo de estos veinticinco años de desarrollo y avances del movimiento homosexual hubo siempre una doble tradición ideológica que se mantiene hasta la actualidad. Antes de hacer un análisis de los diversos períodos y altibajos de este tiempo, creo oportuno situar estos dos diferentes postulados que sustentaron la formación y actuación de varias organizaciones en el estado español.

El referente de partida es la revolución de Stonewall, aquel levantamiento de los homosexuales y transexuales de Nueva York la noche del 28 de junio de 1969. Hartos del acoso policial y las redadas, la revuelta parte del bar Stonewall y se traduce en tres días de manifestaciones y enfrentamientos. Nacía pues la tercera generación del movimiento homosexual, que lejos de ocultarse para mendigar respeto, exigían igualdad.

Bases ideológicas

En primer lugar hay que situar las bases fundacionales del movimiento que se contienen en el histórico *Manifest* del Front d'Alliberament Gai de Catalunya, un pormenorizado análisis de la represión de la homosexualidad a través de los diversos aparatos del estado, en la más pura ortodoxia althusseriana: la ley, la escuela, la familia, la cultura, los partidos políticos, los medios de comunicación, la religión, etc. A cada una de estas funciones represoras el *Manifest* del FAGC (1976-77) propone alternativas transformadoras, alguna de las cuales, como la creación de comisiones de gays en los partidos políticos no han sido realidad hasta hace pocos años. Las fuentes que recoge este texto provienen del *Gay Liberation Front* de EEUU que

a su vez reformula las aportaciones del feminismo, de la lucha anti-racista y del anti-autoritarismo de finales de los sesenta, para aplicarlo a una teoría de la liberación gay. En síntesis, una vez que la sexología evidencia la variedad de la respuesta sexual humana (*Informe Kinsey* de 1947, entre otras aportaciones), se inventa el término gay en contraposición de la acepción de homosexual, ligada al concepto de enfermedad. El Pride u Orgullo Gay, indica la voluntad de mostrarse ante la sociedad y a la vez transformarla con la inclusión de la homosexualidad en igualdad de condiciones. La crítica a la ideología dominante parte pues de tres denuncias contra la moral judeo-cristiana: el sexismo, el machismo y el heterosexismo (negación o condena de toda sexualidad que no sea la heterosexual-reproductora). Otro rasgo importante de la reflexión inicial del movimiento fue el debate en torno a la pretendida identidad homosexual, en el sentido de afirmar que esta práctica no confiere carácter y por tanto la liberación debía entenderse como un todo social. Ciertamente los primeros pasos de aquellas organizaciones teorizaban vagamente una revolución donde incardinar la emancipación gay. Se llegó hablar de un futuro donde todas las personas fueran pansexuales en un marco de socialismo de nuevo tipo.. Pero la revolución no llegó y planteó luego serios problemas de orientación para el movimiento.

A partir de estas premisas iniciales podríamos, a grandes rasgos, definir las dos tendencias que sustentan el devenir del movimiento gay en el estado español y quizá con mayor énfasis en Catalunya.

En primer lugar, podemos hablar de una gran línea mayoritaria de pensamiento que antepone la igualdad como valor primordial y que tuvo en el teórico francés trotskista, *Jean Nicolas*, a su primer inspirador. Sus propuestas, a partir de negar la identidad homosexual, iban encaminadas a hacer frente común con el resto de movimientos contestatarios para potenciar una revolución social completa. Se trataba por tanto de desarrollar una estrategia de alianzas con sindicatos, partidos obreros y feministas.

En segundo lugar, habría otra línea más radicalizada, que desdeña la política de izquierda y tiene un carácter más bien libertario, que acude a fuentes como el teórico itialiano *Mario Mieli* y que reivindica la diferencia, el lado femenino de cada hombre y el placer anal como revolucionario. Estos grupos minoritarios, siempre atacaron a las demás organizaciones tildadas de reformistas o claudicantes.

Ambas tendencias coinciden en el estado español, con mayor énfasis que en otros países, en una rotunda crítica y rechazo a los locales de encuentro homosexual que califican de ghetto.

La función antirepresiva del movimiento de liberación gay: del éxito a la crisis (1975-1985)

El primer grupo organizado en nuestro país fue el clandestino *MELH (Movimiento Español de Liberación Homosexual)* , fundado por Armand de Fluvià en 1971. De éste, con colectivos en Madrid, Bilbao y Barcelona, nacería luego el *FAGC*. No hará falta insistir en la persecución policial bajo el franquismo y en la marginación social que llevaron a tantas víctimas a la cárcel o al suicidio.

Las organizaciones de liberación gay de finales de los setenta tienen por objetivo fundamental derogar la franquista Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social (LPRS) vigente desde 1970 y que permanecía intacta aún después de promulgada la Constitución de 1978. La estrategia a seguir fue la típica de la izquierda y que había dado buen resultado en la transición: acumular fuerzas sociales e influir en la opinión pública.

Las manifestaciones del Orgullo Gay fueron cada vez más concurridas entre 1977 (la primera en Barcelona) y 1980 (ya en varias capitales como Sevilla, Madrid, Bilbao y Barcelona). Los grupos de ese período eran el *FAGC* de Catalunya, *FLHOC* de Madrid, *EHGAM* en Euskadi y *MAG-PV* en Valencia. Tras la exclusión de la homosexualidad de la LPRS el 11 de enero de 1979 por decisión del Gobierno de la UCD, la siguiente meta fue la legalización de la asociaciones homosexuales, conseguida el 16 de julio de 1980.

En pocos años —cinco desde la muerte del dictador y tres tras la primera manifestación gay— se consiguen los objetivos antirrepresivos básicos. Aunque hubo todavía algunas redadas policiales en locales de encuentro homosexual, la persecución directa termina en ese período y ya con el PSOE en el poder en 1982 se consolidan estas libertades civiles mínimas.

Los motivos de tan rápido logro pueden explicarse en razón de varios catalizadores: movimiento pendular de la sociedad española (todo lo que estuvo prohibido con el franquismo es visto con interés o hasta simpatía), los medios de comunicación asumieron la cuestión homosexual con la misma naturalidad que a los partidos políticos (también antes prohibidos), la izquierda apoyó progresivamente a los grupos de liberación gay y obviamente, muchos homosexuales engrosaron aquellas primeras manifestaciones, fuera como una forma de afirmación personal y del colectivo, fuera para protestar por la represión sufrida.

Los logros de este período antirrepresivo fueron no sólo legales. También se expandió una labor de concienciación e información a la sociedad sobre la

cuestión homosexual —e incluso se puso de moda ser bisexual en círculos *progres*— toda vez que para muchos gays supuso una rápida asunción no vergonzante de su sexualidad. Hubo pues una liberación personal, un proceso de superar viejos sentimientos de culpa y autoopresión.

A ello contribuye en Catalunya la creación del *Institut Lambda*, un centro de apoyo, servicio psicológico y socialización para quienes no se integraban en la militancia. Aquella generación de homosexuales que pasan a llamarse gays ya no quería nada más. Tuvo suficiente con poder respirar e ir a divertirse en las numerosas discotecas que empezaron a proliferar. Tras siglos de oscurantismo había llegado el *destape* y la revolución sexual para la reprimida sociedad española. Los gays no iban a ser menos.

Cabe destacar, en este período inicial, la primera salida del armario: se trata del carmelita descalzo Antoni Roig quien en 1977 publica un libro de confesiones abiertamente homosexual que obtuvo gran eco mediático (*Todos los parques no son un Paraíso*, finalista del Premio Planeta). Como no podía ser de otra manera fue suspendido *a divinis* y expulsado de su orden el 3 de enero de 1978. Lamentablemente obtuvo más apoyo de la prensa que no de los frentes de liberación gay, tan anticlericales que no querían ni oír hablar de un sacerdote aunque se declarara homosexual.

Los grupos de aquellos años formaron la *COFLHEE* (Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español) con una estrategia común anti LPRS. En 1980 los frentes de liberación gay ya han perdido a la mayoría de militantes, en algún caso como el *FAGC* de Catalunya, que había sufrido una escisión del ala libertaria en 1978, la situación era todavía más perentoria. Algunas organizaciones no tardarían en desaparecer como el *FLHOC* de Madrid que sería efímeramente relevado por *AGAMA*, que también a su vez dejaría a la capital sin voz gay.

La distancia entre el grueso de homosexuales que prefieren ir a bailar y a ligar, y el discurso de los grupos de liberación, sobrepolitizado y condenatorio de los locales de diversión, lleva a éstas organizaciones a convertirse en vanguardias muy reducidas, básicamente útiles para denunciar cualquier agresión a través de unos medios de comunicación siempre receptivos. Se estancan, se mantienen gracias a una férrea y encomiable voluntad de unos pocos, pero decrecen la manifestaciones del Orgullo Gay.

Cuando en 1981 el gobernador civil de Barcelona (UCD), desata una ofensiva de cierre de locales de encuentro homosexual, se produce, a pesar de la oposición al *ghetto dorado*, una curiosa acción de protesta, que se ha de mencionar: es, hasta donde alcanzo, la primera y única huelga del ambiente de la historia

del movimiento LGBT en todo el mundo. Se ponen de acuerdo el *FAGC*, la asociación de pequeños empresarios y los gerentes de la mayoría de locales de la ciudad condal (unos treinta establecimientos), para bajar persianas la noche del 9 de diciembre de 1981. De nuevo, la prensa apoyó esta medida sin precedentes, así como la Comisión de Derechos Humanos del Parlament de Catalunya. Finalmente, se ganó la batalla: no hubo clausura de locales. Pero a excepción de casos de lucha anti-represiva como éste, la crisis en el movimiento se arrastraría hasta los cambios que impuso la irrupción del sida.

Tres consideraciones más sobre este período de inercia que se extendería hasta 1985. Los grupos de liberación terminan siendo masculinos, las mujeres, menos visibles, se distancian y crean los colectivos de lesbianas feministas de larga trayectoria. Con el gobierno socialista, desde el primer momento, se realiza una notable tarea pedagógica a través de los medios de comunicación públicos, especialmente en TVE, hasta entonces ajena y vetada a los y las homosexuales. Empar Pineda y yo mismo podemos dar fe de los varios debates y programas de televisión a los que acudimos. Para finalizar decir que el contenido de las publicaciones de los frentes de liberación gay, curiosamente no hablaban de sexualidad, sino de derechos y represión, algo lógico del momento, pero limitador. Sin embargo, había otras formas no militantes de lo que entendemos por movimiento en un sentido amplio. Desde 1977 a 1985 se publicó *Party*, la primera revista dedicada a público homosexual en quioscos, Eloy de la Iglesia estrenó varias películas nada ambiguas, Ventura Pons llevó a Cannes a su *Ocaña, retrat intermitent* o mucho más tarde llegó el éxito de *La muerte de Mikel.* En literatura triunfan Marguerite Yourcenar y sus *Memorias de Adriano*, Copi con el *Baile de las locas* y Manuel Puig y *El beso de la mujer araña*.

Del preservativo a la ley de parejas (1986-1998)

La irrupción del sida llega en un momento donde las escuálidas y testimoniales organizaciones de liberación gay debaten como seguir adelante habida cuenta del cansancio y el estancamiento de sus postulados. La alianza con los movimientos revolucionarios no avanza. Antinucleares, feministas y sindicatos, cada cual va por su lado, y no cuaja una alternativa tipo partido verde alemán —entonces un referente para parte de la izquierda española— que fuese inclusiva de todas estas organizaciones de vanguardia.

El tándem Tatcher-Reagan-Wojtyla expande un mensaje mundial tremendamente conservador que encuentra en esa enfermedad el mejor pretexto para hablar del castigo divino y afirmar los más tradicionales postulados sobre moral y sexualidad. En este marco se produce una crisis en el *FAGC* de Catalunya

en 1985 que daría salida a la renovación del entonces encapsulado movimiento gay en nuestro país. Dos posiciones se debaten entonces: por una parte, quienes quieren afrontar la prevención de la enfermedad en colaboración con las instituciones y desde los locales de encuentro homosexual, lo cual comportaba la formulación de una política distinta. Por otra parte, quienes anteponen el rechazo del ghetto y de toda colaboración con las administraciones.

Las nuevas organizaciones que surgen a finales de los ochenta, con la Coordinadora de Iniciativas Gays en Catalunya como referente (luego sería la federación Coordinadora Gay-Lesbiana), coinciden en sus nuevos postulados con la mayoría del resto de grupos del mundo occidental y se inscriben en una renovada tradición ideológica de lucha por la igualdad como prioridad. Sin embargo, las circunstancias conllevan la necesidad de responder a las demandas concretas del colectivo homosexual y así se crea la figura del voluntariado, que no militante, que se ocupa de dar servicios (teléfonos de información, talleres de sexo-seguro, distribución de preservativos, etc).

Las características básicas de esta renovación del movimiento serían, pues, las siguientes:

- diálogo y exigencia a las instituciones de implementar la igualdad de derechos de las personas sin discriminación por causa de la orientación sexual,
- propuestas de colaboración con las administraciones para la lucha contra el sida en el colectivo homosexual y la creación de servicios que atienden a miles de usuarios,
- acercamiento a los locales de ambiente homosexual para la prevención del sida,
- desarrollo de nuevas asociaciones en base a objetivos concretos o temáticos (cristianos homosexuales, jóvenes, y más tarde, ya más entrados los noventa, aparecen grupos de estudiantes gays y lesbianas, gays seropositivos, etc.),
- se habla de normalización del hecho homosexual como objetivo de futuro y no de ninguna revolución, el lenguaje del movimiento deviene más sindical y menos vanguardista,
- el tema dominante en las publicaciones fue la lucha contra el sida y luego el amplio abanico de los derechos civiles. No se abordaron, pues, temáticas de reflexión sobre sexualidad y vida cotidiana. Seguramente no podía ser de otra manera cuando las defunciones de amigos, conocidos y activistas estaban a la orden del día.

Además, en este período, fluye una corriente que pugna por encontrar nuevos espacios de relación entre gays que no sean solamente la discoteca nocturna.

En este sentido, aparecen los cafés de tarde, por una parte, y, por otra, las actividades lúdicas de las recién nacidas asociaciones, y los bailes de domingo por la tarde del reconstituido Casal Lambda en Barcelona.

Esta renovación consiguió fundar y hacer crecer asociaciones por todas partes, incluida la capital con COGAM que tendría una papel primordial desde finales de los noventa. El programa reivindicativo de esta etapa sitúa la prevención del sida como prioridad absoluta, aunque luego se conforma un proyecto de derechos civiles que abarca desde la destrucción de las antiguas fichas policiales por homosexualidad a la promulgación de una ley antidiscriminatoria (propuesta que pronto devino en reclamar que el Código Penal castigase las discriminaciones por causa de orientación sexual). En este período nace también la estrategia del *Vota Rosa*. Se trata de campañas que parten de la premisa de exigir a las instituciones que cumplan con el deber de implementar la igualdad de las personas. Así en las elecciones al Parlament de Catalunya de 1988 se pone en marcha esta táctica de presentar a los partidos políticos una plataforma reivindicativa durante la campaña electoral, sostener entrevistas ante la prensa con los primeros candidatos sobre su compromiso y luego llamar al colectivo homosexual a votar a quienes mejor se comprometan. Esta fórmula de presión democrática hasta fue adoptada en otros países y con algunas variantes ha seguido realizándose hasta la actualidad. Todo un método para introducir las reivindicaciones del colectivo homosexual en los partidos políticos y a su vez, implicar a lesbianas y gays.

De forma inesperada y ajena a los planes de las organizaciones aparecen casos de personas que reclaman sus derechos como pareja del mismo sexo, dos gays de Vic en 1987 pidieron casarse. Aunque no lo consiguieron pusieron en marcha la reivindicación de las parejas no casadas (como primero se las llamó en una estrategia de sumar fuerzas con las parejas heterosexuales de hecho). Luego en 1989, otro caso como el de Juan Reina en Barcelona, que reclama el derecho de sucesión de su difunto compañero, termina de consolidar entonces esta nueva propuesta de igualdad. En general la década de los noventa supone la plena expansión y consecución de objetivos de este renovado movimiento.

En 1993 tiene lugar la campaña antidiscriminatoria *Democracia es igualdad* que financiada por el Ministerio de Asuntos Sociales fue impulsada por la Coordinadora Gay-Lesbiana, organizada por once grandes ONG de ámbito estatal y apoyada por los sindicatos mayoritarios. Los spots de televisión de esta campaña todavía son recordados por aparecer diversas personalidades que recibían el insulto tópico de su colectivo de origen, en ella Oscar Wilde era llamado maricón. La importancia de esta convergencia de ONG fue doble, no sólo por el proyecto en si, sino también por quedar forjado un polo

social de entidades que respaldaron a la Coordinadora Gay-Lesbiana ante los grupos parlamentarios. Así en 1994 el Congreso de los Diputados, al promulgar la nueva LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos), por vez primera reconoce a las parejas de hecho con la fórmula: análoga relación de afectividad al matrimonio, con independencia de la orientación sexual de sus miembros.

Nótese que habían pasado 14 años desde el último cambio legislativo, cuando se legalizaron las asociaciones homosexuales en 1980. El apoyo entre ONG todavía fue más importante para la promulgación del nuevo Código Penal de 1995, que agravaba los delitos cometidos con ánimo discriminatorio por causa de sexo, etnia, religión , ideología y orientación sexual. Otro gran avance que resulta paralelo al aumento de la aceptación social de gays y lesbianas, según muestran diversas encuestas. Lamentablemente el gobierno socialista, aunque prometió la Ley de Parejas de Hecho por boca de la ministra Cristina Alberdi, no llegó a llevarla al Congreso de los Diputados. La victoria electoral del PP en 1996 y en 2000 alejó toda posibilidad en este sentido, pero Madrid acogió varias grandes manifestaciones estatales pro-ley de parejas.
Sin embargo la mayor aceptación social del hecho homosexual como una cuestión de Derechos Humanos y los debates en el Congreso de los Diputados sobre la Ley de Parejas de Hecho, a finales de la década, por fin hacen entrar a gays y lesbianas en la agenda política.

En todos estos años el Ministerio de Sanidad apoya y financia grandes campañas estatales dedicadas a la prevención del vih/sida entre homosexuales y a la promoción de la solidaridad con los gays seropositivos. Se trata del *Cuídate*, organizado anualmente por la Coordinadora Gay-Lesbiana con la participación de numerosos grupos de todas las autonomías.

El colofón legal de los noventa lo pondría Catalunya con la promulgación el 30 de junio de 1998 de la primera ley de parejas de hecho del estado, que aunque limitada, no tenía precedentes y abría un nuevo horizonte como luego se ha comprobado. Sólo en esa ocasión CiU abandonó a su socio el PP, para votar con la oposición de izquierda aquella ley pionera.

Creo que este año supuso el punto de cambio de humor del colectivo homosexual. Desde la irrupción del vih/sida se instala una conciencia de miedo a la enfermedad, al *que dirán*, si uno resultase afectado y hasta un regreso al armario por parte de muchos a causa de la vinculación social de la pandemia a la homosexualidad. Esta convulsión afectó a la dinámica del ligue en la noche del ambiente y despertó actitudes discriminatorias entre algunos gays al culpabilizar a los afectados como *si se lo mereciesen* a causa de una vida demasiado disoluta, pura homofobia internalizada. Por ejemplo, empezaron a

aparecer contactos en revistas como *Mensual*, que ponían como condición la seronegatividad, cosa que era considerada por la redacción de esta publicación como simple racismo y así lo exponía de forma muy pedagógica. La palabra que define este período es el *miedo irracional*, que se instaló en las relaciones interpersonales y que las asociaciones de lucha contra el sida combatieron como mejor pudieron.

El mejor ejemplo de respuesta a esta situación que produce el movimiento fueron los masivos Bailes de Solidaridad con los gays seropositivos que se celebran en Barcelona desde hace quince años y donde además se produce la visibilidad de varios afectados que hablan en público para recordar a los desaparecidos, celebrar la vida y reclamar derechos y respeto.

Todavía hoy nada es más difícil que declararse gay y seropositivo. Pioneros de este reto fueron el malogrado Manolo Trillo a finales de los ochenta en Madrid, y después Willy Valverde, Antonio Guirado (que no tuvo inconveniente en dar testimonio en TVE en el programa de Raffaela Carrá), Rubén Tosoni, Ferran Pujol y más recientemente Jorge Saz, todos en Barcelona.

Al aparecer los antiretrovirales (en 1996) y con ello mejorar ostensiblemente la vida de las personas enfermas de sida y disminuir la catarata de defunciones de los años anteriores, se produce un cambio de actitud, un respiro hacia 1998. Sin embargo, hoy, aquel avance médico ha dado lugar a un efecto no deseado, un retroceso en la prevención: muchos jóvenes homo y hetero desconsideran las prácticas de riesgo, piensan que el sida es una enfermedad que se cura.

Chueca, el Orgullo LGBT y el matrimonio homosexual (1998-2004)

Durante los años noventa se produce una incorporación progresiva de mujeres lesbianas a las organizaciones, básicamente masculinas, seguramente en la misma medida que en cualquier otra ONG. Aún así la construcción de organizaciones mixtas sigue siendo un reto. Isabel Castro y Gemma Sánchez sucesivamente fueron secretarias generales de la *Coordinadora Gay-Lesbiana*, mientras que Mili Hernández y luego Boti García ocupan la dirección de *COGAM* y Beatriz Gimeno la presidencia de la *Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Transexuales (FELGT).*

A finales de la década asistimos a un fenómeno sin precedentes en España, aunque bien conocido en muchas otras ciudades del mundo. El barrio madrileño de Chueca se convierte paulatinamente en una zona abiertamente homosexual donde se concentran numerosos establecimientos dedicados a

gays y lesbianas, desde restaurantes a librerías, cafés de todas horas y locales nocturnos. Para contento de los antiguos vecinos, Chueca se recupera de su depauperada economía y marginalidad, nuevos vecinos homosexuales se trasladan a vivir allí y se establece un marcado espacio de libertad y convivencia entre todo tipo de personas. A partir de 1997, la manifestación del 28 de junio empieza a crecer en Madrid, fruto de las fiestas del Orgullo que se celebran en Chueca y que abarcan desde espectáculos infantiles hasta actuaciones y baile al aire libre, ocupando calles y plazas. La característica esencialmente renovadora y normalizadora es la participación absolutamente popular y juvenil en estas noches de festejos, la mezcla de homos y heteros es total, todo el mundo va a divertirse con los gays y lesbianas. De ahí que la manifestación sea una continuación de la fiesta y por tanto sea enormemente popular y concurrida, a parte de recoger la presencia de la mayoría de grupos LGBT de todo el estado. La semana del Orgullo en Madrid es ya una cita que supera a las organizaciones convocantes, para muchísimos gays y lesbianas del resto del estado es ya un clásico ir a la capital por esas fechas.

A mi entender cuatro son los factores que explican este paso de gigante: en primer lugar, la renovación del movimiento en Madrid, COGAM se funda en 1986 tras algunos años de no existir ninguna otra asociación, va acumulando prestigio y sabe hacerse oír a través de líderes como Pedro Zerolo. A su vez se fragua la Federación Estatal de Lesbianas, Gay y Transexuales (FELGT) que agrupa a la inmensa mayoría de grupos españoles y que también contribuye a dinamizar la situación. En segundo lugar, la continuada oposición y boicot del PP a la Ley de Parejas y luego la reivindicación del matrimonio dan contenido reivindicativo a la idea básica de igualdad. En tercer término, el nuevo empresariado que abre los locales de Chueca y funda diversas revistas como Shangay, Odisea y Zero, se implica en empujar las fiestas de Chueca y la manifestación. Por último, el tono lúdico-reivindicativo de la manifestación la convierte en una verdadera romería urbana del arco iris y en todo un acto de gran calado político como colocar cientos de miles de personas en el centro de la capital del estado.

Nótese que hasta que las manifestaciones de Madrid no despegan hacia 1997, toda la trayectoria anterior del movimiento ha adolecido de movilizaciones masivas como ésta, fuese en Madrid mismo o en otras ciudades. Para el 28 de junio no se concentraban más que algunos cientos de personas. Las características que explican la tremenda concurrencia a la manifestación de Madrid son semejantes a la del resto de grandes capitales del mundo occidental, quizá con una notable diferencia pues resulta inusual encontrar una organización fuerte como la FELGT, cuando lo corriente son los comités del Pride que agrupan a infinidad de pequeñas y medianas asociaciones, a veces ene-

mistadas entre sí. A excepción de Catalunya, el panorama de entendimiento entre organizaciones del estado es de bastante armonía. En Barcelona perviven dos visiones contrapuestas sobre temas recurrentes como el rechazo del antiguo ghetto, ahora bajo la denominación de *peseta rosa* y la persistencia de un concepto de la manifestación de 28 de junio de lucha y no de celebración. Otras organizaciones apuestan por involucrar al ambiente y la ciudadanía en general para una conmemoración de esta fecha tipo lúdico-reivindicativa, masiva y no testimonial. En estos últimos años hasta hubo incidentes contra las carrozas de locales gays que pretendían participar y ya en 2003 hubo dos distintas convocatorias.

Algunas organizaciones estatales como Fundación Triángulo y la Federación Colegas llevan una trayectoria discrepante en varios temas respecto del resto de asociaciones, cuestionando el talante festivo de las manifestaciones del Orgullo y su reflejo mediático.

A considerar las *salidas del armario* que empiezan a aumentar desde 1999 con el diputado socialista Miquel Iceta y que la revista *Zero*, expande con sucesivos casos de gran eco mediático, como fueron el teniente coronel Sánchez Silva y el sacerdote José Mantero, entre otros. El aporte de *Zero* al movimiento es de primera magnitud.

La *FELGT* durante estos últimos años ha sabido vertebrar un discurso reivindicativo en torno a la igualdad y el derecho de matrimonio que ha emplazado a los partidos políticos sin lugar a excusas, y a su vez ha ejercido y ejerce de referencia en los medios de comunicación. Esta federación reúne asociaciones que desarrollan un mismo estilo de trabajo que combina la reclamación de igualdad de derechos y la lucha contra el vih/sida con un discurso pedagógico y sin victimismos, toda vez que incluyen actividades lúdicas, una continuada presencia en la prensa local y buenas relaciones con las ONG y los establecimientos del ambiente homosexual.

Desde finales de los noventa crece y se hace más visible el movimiento transexual, de manera que en poco tiempo casi todas las organizaciones homosexuales se abren a incluir y apoyar a las personas que desean adaptar su cuerpo al género que sienten. Algunas sentencias favorables, cambios logrados del DNI y un cierto debate sobre la necesidad o no de someterse a la cirugía como condición que justifique la transexualidad, conforman el entramado actual de la cuestión. Por otra parte se trata de los más marginados de los marginados, con grandes dificultades laborales que les empujan a la prostitución y sus secuelas. Mayormente se trata de transexuales femeninas, pero también empiezan a salir del anonimato mujeres que quieren ser hombres.

El debate social sobre el matrimonio homosexual se gana ya en 1997 con los resultados favorables de la encuesta del CIS sobre nuevas familias (un 57% a favor), y a continuación el conjunto de organizaciones emprende el discurso pro-derecho de adopción, finalmente reconocido por alguna sentencia reciente como en el caso de Navarra e incluido en las leyes de pareja de Euskadi, Navarra y Aragón. En este punto se encuentra hoy el movimiento LGBT, apostando por la diversidad que indican esas siglas y pugnando pues por la plena igualdad legal.

Algunas consideraciones sobre estos 25 años

Si hubiera que resumir los elementos definitorios de este período habría que decir que el progreso en derechos y aceptación social han sido progresivos, salvo varios años de estancamiento por el estallido del vih/sida. El estado español creo que puede situarse entre los primeros países del mundo con más libertad para la comunidad LGBT, situándose tras el bloque escandinavo y Holanda.

Las urgencias en combatir la represión y luego combatir el vih/sida impidieron atender a otras cuestiones de la vida cotidiana, contrariamente que en el movimiento feminista: los valores y el desarrollo de cualquier debate amplio sobre sexualidad. Tampoco es un movimiento que haya generado gran debate ideológico: perdimos muy pronto a un intelectual de talla como fue Alberto Cardín. Hasta hace pocos años no despuntan pensadores como Oscar Guasch y Olga Viñuales que han tenido el acierto de reunir una serie de autores y textos de gran interés en *Sexualidades. Diversidad y control social*, (Bellaterra, 2003). En estos años todas las batallas, la anti-represiva, la aceptación social, la prevención del vih/sida y los derechos de las parejas del mismo sexo, pueden darse por ganadas o casi.

Estimo que mientras siempre hubo vocación de buscar alianzas con las ONG y de dialogar con las administraciones, se tardó mucho en superar la inicial condena de los locales de ambiente homosexual y reducir la distancia entre activistas y ambiente.

En síntesis nunca antes lesbianas, gays, bisexuales (un poco escondidos todavía) y transexuales habían llegado a ganar tan altas cotas de libertad en este país. Proceso ganado por un movimiento constante y tenaz, bien arropado por los medios de comunicación, proceso que sintetizaría en un valor adquirido para tantos y tantas antaño vergonzantes: hemos ganado la autoestima.

Consideraciones de presente y de futuro

La plena igualdad legal que se vislumbra cercana con la promesa del matrimonio para personas del mismo sexo y el derecho de adopción, que seguramente ocupará muchos debates y reticencias, no puede ni debe esconder la meta siguiente: la igualdad social.

La injuria en el lenguaje y la poca visibilidad de la afectividad homosexual en la vía pública son las dos caras de la misma homofobia. El gran reto será introducir el valor de la diversidad sexo-afectiva en todos los órdenes de la enseñanza.

Otras cuestiones urgentes van desde la solidaridad internacional (cada dos días se produce un asesinato por homofobia entre Brasil y México) hasta la recuperación de la memoria histórica y la rehabilitación de las víctimas de la represión franquista. Hay que ocuparse del retroceso en prevención del vih/sida y reclamar de las instituciones que abran el debate en los institutos e instalen máquinas expendedoras de preservativos.

Hay temas pendientes como la reinserción laboral de los gays seropositivos, la prevención policial de la delincuencia y como abordar la tercera edad de la comunidad homosexual (de difícil encaje en residencias).

La emigración que viene a nuestro país debe ser objeto de atención para recibir a los homosexuales recién llegados y realizar una labor de información al resto de nuevos ciudadanos que deben conocer los derechos LGBT vigentes en nuestro país.

Los actores del movimiento ya están cambiando, al sector asociativo reivindicativo hay que sumarle otro sector lúdico y colectivos cada vez más específicos. Empresarios de locales de encuentro y revistas son ya otro factor a tener en cuenta, así como a la mayoría de partidos políticos que tiene ya su comisión LGBT. Las propias instituciones toman decisiones y tercian en estos temas. Se produce con una mayor normalización, un efecto de vasos comunicantes con las administraciones, ONG y entidades varias, como los sindicatos o la misma Amnistía Internacional. Los derechos LGBT son cada vez más patrimonio de toda la sociedad y eso implicará cambios en el movimiento asociativo. Seguramente sea necesario abordar nuevos temas con estudios e informes profesionales, (por ejemplo para conocer los casos de suicidios de adolescentes homosexuales, para producir una exposición o para financiar proyectos de grupos LGBT en América Latina). Para este tipo de cometidos se precisan fórmulas como las fundaciones. Así se reúnen fondos públicos y privados para programas de actuación.

En cualquier caso, el futuro se augura sostenido por esa masiva manifestación del Orgullo en Madrid y la salud democrática de una sociedad y unas instituciones que empiezan a hacer suya la lucha contra toda desigualdad.

Bibliografía para una perspectiva histórica del movimiento LGBT en el estado español

ARNALTE, Arturo, *Redada de violetas, la represión de los homosexuales durante el franquismo*, Madrid, Ed. La esfera de los libros, 2003.

DE FLUVIÀ, Armad, *El moviment gai a la clandestinitat del franquisme (1970-1975)*, Barcelona, Ed. Laertes, 2003.

HERRERO BRASAS, Juan A., *La sociedad gay*, Madrid, Ed. Foca, 2001.

MIRABET, Antoni, *Homosexualidad hoy*, Ed. Herder, Barcelona, 1984.

— *Homosexualitat a l'inici del segle XXI,* Barcelona, Ed. Claret, 2000.

OLMEDA, Fernando, *El látigo y la pluma, homosexuales en la España de Franco*, Madrid, Ed. Oberon, 2004.

PETIT, Jordi, *25 años más, una perspectiva sobre el pasado, el presente y futuro del movimiento de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales*, Barcelona, Icaria Editorial, 2003.

— *Vidas del arco iris. Historias del ambiente*, Barcelona, Mondadori, 2004.

SEEL, Pierre y Jean LE BITOUX, *Pierre Seel, deportado homosexual*, Barcelona, Ed. Bellaterra, 2001.

Las ONGD y la solidaridad internacional en España hoy. Campañas y movimientos

Marisa Revilla Blanco

La década de los noventa fue, sin ninguna duda, la del auge de las organizaciones no gubernamentales (ONG). En los inicios de esa década, muy poca gente en España habría podido explicar esas siglas; en el 2000, las «oenegés» ya eran de dominio público. En el medio, se había producido el desarrollo del fenómeno, tanto en número de organizaciones como en recursos (económicos y humanos) gestionados por ellas, con la aparición de fenómenos relacionados, por ejemplo, el voluntariado.

Ahora, en un momento en el que podemos esperar la consolidación del fenómeno, dedicaremos estas páginas a trazar las líneas que nos permitan comprender la situación de un tipo concreto de ONG, las dedicadas al desarrollo (las llamadas ONGD) y sus vínculos con un fenómeno más amplio que denominaremos como «sector de solidaridad internacional».[1] Para ello, nos centraremos en las siguientes cuestiones:

– La consolidación del fenómeno ONGD en España: características, capacidades y presencia pública.
– La presencia y caracterización de lo que hemos llamado sector de solidaridad internacional en España: la Plataforma 0'7, la Consulta de la Deu-

1. Con la idea de «sector» estamos insertando el análisis que haremos de estas acciones, en el ámbito teórico de la Movilización de Recursos. En concreto, estamos utilizando la clasificación de movimiento social que hacen McCarthy y Zald para presentar su modelo de movilización de recursos. Véase McCarthy, John D.; Zald, Mayer N. (1977): «Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory», *American Journal of Sociology*, 82 (6), pp. 1212-1241.

da Externa, los grupos anti-globalización y las movilizaciones contra la guerra.
– La importancia de las «campañas» en este sector de solidaridad internacional.

Para desarrollar estos puntos, primero nos dedicaremos brevemente a la definición de las ONGD y su evolución en España. Después, nos centraremos en la situación de las ONGD en la actualidad. Por último, analizaremos el peso de las ONGD en el que hemos llamado «sector de solidaridad internacional» y las características de estas movilizaciones.

Definición de las ONGD y evolución[2]

Para una definición corta de lo que es una ONGD nos sirven los sinónimos que se utilizan para calificarlas como organizaciones no gubernamentales de cooperación (y su variante, organizaciones de cooperación no gubernamental) u organizaciones de solidaridad internacional. Para una definición más amplia podemos destacar algunas de las características de estas organizaciones: 1) No tienen ánimo de lucro; 2) Cuentan con recursos humanos y económicos que provienen de la solidaridad, de donaciones privadas, del trabajo voluntario, de ayudas públicas, etc.; 3) Son independientes, es decir, disponen de autonomía orgánica e institucional en su toma de decisiones; 4) Son estables, con un grado mínimo de estructura y capacidad jurídica; 5) Su ámbito de actuación se encuentra en la cooperación para el desarrollo y la solidaridad internacional. La característica principal que define a las ONGD es la que se refiere a su ámbito de actuación. En la página web de la Coordinadora de ONG de Desarrollo-España,[3] podemos leer lo siguiente: «Los ámbitos de trabajo de las Organizaciones de la Coordinadora son diversos. Sin duda, su faceta más conocida es la de ayuda humanitaria o de emergencia y la de proyectos en países en desarrollo. Pero son muchas las que hacen campañas de sensibilización de la opinión pública para que participe y se involucre en acciones de solidaridad, y las que trabajan en el campo de la educación para el desarrollo, como vía para generar conciencia y actitudes solidarias desde le enseñanza. Otras se dedican a la investigación y la reflexión, o trabajan en un ámbito más político, estableciendo diálogos para que desde los

2. En este apartado seguimos brevemente alguno de los argumentos expuestos en Revilla Marisa (2003): «Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD)», en Ariño, A. (ed.): *Diccionario de la Solidaridad (I)*. Valencia: Tirant Lo Blanch; pp. 381-392.
3. http://www.congde.org, dentro del apartado «¿Por qué Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo?».

partidos, o desde gobiernos locales, autónomos o nacionales se tomen medidas para favorecer el desarrollo de otros pueblos. También el Comercio Justo está acaparando, cada día más, la atención de las organizaciones». Estas organizaciones que actúan en el campo de la cooperación internacional para el desarrollo realizan transferencias de recursos materiales y financieros.

El fenómeno de las ONGD como se plantea en la actualidad (aunque podamos apreciar una evolución en sus líneas de actuación) apareció después de la II Guerra Mundial,[4], vinculado al proceso de descolonización y al origen de la ayuda oficial al desarrollo. Coincidió en el tiempo, con la implantación de modelos hegemónicos de desarrollo y el planteamiento de las consiguientes políticas para lograrlo. En el caso español, estas organizaciones laicas de inspiración cristiana vinculadas al desarrollo aparecieron en el siglo XX: *Cáritas Española* se fundó en 1942, *Misión y Desarrollo* (que posteriormente se denominará *Intermón*) en 1956, *Manos Unidas* en 1960 y *Médicos Mundi* en 1962. Sin embargo, el gran auge en la creación de organizaciones ocurrió en la segunda mitad de los años ochenta y primeros noventa, coincidiendo con el cambio del lugar de España en la cooperación para el desarrollo: de país receptor a país emisor. Las explicaciones que se dan a esta proliferación de organizaciones en estos años tienen que ver con la aparición de fondos públicos de financiación de proyectos de desarrollo procedentes tanto de las distintas administraciones españolas, como del acceso a los fondos de la Unión Europea, a partir de la integración del país como miembro de la entonces CEE en enero de 1986. En definitiva, y esto se constituirá en uno de los principales retos que afrontan las organizaciones, se suele plantear el auge de las organizaciones al calor de la existencia de financiación.

Es importante atender a la evolución en la actuación de estas organizaciones. David Korten[5] sugiere la existencia de cuatro generaciones de ONGD atendiendo a la definición del problema, los objetivos que se persiguen en el norte y en el sur, la estrategia política, etc. La *primera generación* que se situaría inmediatamente después de la II Guerra Mundial corresponde a las organizaciones asistencialistas. El problema que se define es el de la pobreza entendida como escasez de recursos y servicios, y la estrategia que se sigue es la de la asistencia, la mera ayuda sin intención de transformación. La *segun-*

4. La aparición de organizaciones laicas, aunque de inspiración cristiana se puede fechar en el siglo XIX: *The British and Foreign Anti-Slaves Society* se fundó en 1823, *Cruz Roja* en 1863, el *Ejército de Salvación* en 1865, *Cáritas* en Alemania en 1887 (aunque no se convirtió en *Cáritas Internacional* hasta 1950); y en la primera mitad del siglo XX, *Save the Children Fund* en 1919 y *Oxfam* en 1942.
5. *Getting to the 21th Century: Voluntary Action and the Global Agenda*, West Harfrot, Kumarian Press, 1990.

da generación, a partir de los años 60, surgiría en plena puesta en practica de los modelos de desarrollo. Es el tiempo de la formulación de las teorías de la modernización que definen lo que es desarrollo y subdesarrollo y de su plasmación en el dictado de las políticas que se deben llevar a cabo para lograr el desarrollo por parte de los países «atrasados». Por parte de esta generación de ONGD se combina la estrategia del desarrollo local en el Sur con la sensibilización en el Norte, pero con su acción promueven el modelo de desarrollo del Norte en línea con esas políticas que acabamos de mencionar. La *tercera generación* acomete la denuncia de las causas del subdesarrollo y se marca como objetivo conseguir una asociación real con el Sur. Esta nueva generación emerge en el contexto internacional de la crisis económica de 1973. El cambio en las estrategias y actuaciones de las ONGD en este momento es muy importante ya que la crisis económica supuso la crisis del modelo de desarrollo hegemónico hasta el momento en el discurso oficial internacional del desarrollo: se abandonó el modelo de la modernización y se adoptó el del ajuste estructural. En este contexto, las ONGD comenzaron a demandar un Nuevo Orden Económico Internacional. Se podría decir que el cambio de estrategia se sustenta en un cambio de diagnóstico: no se trata ya de «ayudar» a los países subdesarrollados para que evolucionen en la línea del desarrollo, sino de comprender la dinámica económica mundial y denunciarla. La *cuarta generación* surgida ya en los años ochenta acomete las posibilidades de transformación. Es la generación del «*empowerment*» y de la presión política: se combina el refuerzo de las capacidades de la población con una doble estrategia de denuncia y de elaboración de propuestas.

Más allá de que esta clasificación de generaciones nos pueda ayudar a entender la evolución de las ONGD desde su aparición como tales en la segunda mitad del siglo XX, nos sirve también para entender las diversas estrategias de actuación que adoptan las organizaciones en la actualidad, porque, independientemente de que cada momento haya estado definido por la actuación de ONGD que caracteriza la generación, lo cierto es que el cambio de cada generación no ha supuesto la desaparición de la anterior estrategia, de tal modo que en la actualidad coexisten las cuatro generaciones y, por tanto, los cuatro modos de actuación.

Algunas características de las ONGD españolas en la actualidad

Como decíamos en el inicio, la década de los noventa fue la del auge y la moda en los medios de las ONGD en España. Esa moda tuvo distintas caras: una, la del propio fenómeno organizativo, la difusión de las siglas y de organizaciones concretas; otra fue la del voluntariado, como fenómeno directamente relacionado, y otra, por último, la experiencia comunicativa de la Pla-

taforma del 0'7. Hoy, la moda mediática ha pasado y ya no se dedica tanta atención a lo que hacen las ONGD o los voluntarios. Lo que permanece en los medios son algunas campañas de ONGD concretas para la captación de socios o de fondos. Sin embargo, pasada la moda, ha habido una consolidación de estas organizaciones y hay una experiencia importante en términos organizativos y presupuestarios en la cooperación no gubernamental para el desarrollo.

Nos fijaremos ahora en algunas características de esta consolidación. Para ello hemos realizado una selección de ONGD, cuyos datos se presentan a continuación en el *Cuadro de ONGD*.[6]

Cuadro de ONGD

Nombre ONGD	Gasto 1997 euros	Gasto 1999 euros	Gasto 2002 euros	CONGDE	Subvención AECI 2002[7]
1 Cruz Roja Española	13.120.094	78.327.401		Sí	3.989.544; 17,5% estrat.
2 Manos Unidas	45.812.490	43.417.078	40.883.784	Sí	1.911.688; 4,8% prog.
3 Cáritas Española	22.357.067	57.658.129	40.465.143	Sí	3.499.916; 14,9% estrat.
4 Intermón-Oxfam	23.926.111	32.112.076	37.444.000	Sí	3.305.499; 14,1% estrat.
5 Ayuda en Acción	14.976.981	26.194.723	36.272.465[8]	Sí	3.016.493; 12,9% estrat.
6 Médicos sin Fronteras – España	17.979.890	15.415.960	27.894.710	Sí	
7 ANESVAD	8.353.821	15.789.659	21.924.846[9]	No	1.001.688; 2,5% prog.
8 Acción contra el Hambre	6.165.975	11.196.855	15.907.339	Sí	
9 UNICEF-Comité Español		11.698.223		Sí	
10 Medicus Mundi – Federación	12.231.041	13.639.831	15.044.082[10]	Sí	2.563.577; 6,5% prog.

6. Hemos seleccionado 47 ONGD de dos bases de datos: el *Directorio de ONGD – 2000* de la Coordinadora de ONG de Desarrollo-España (http://www.congde.org) y la *Guía de la Transparencia y las buenas prácticas de las ONG* nº 2 de la Fundación Lealtad (http://www.fundacionlealtad.org). Las ONGD presentadas se han seleccionado de acuerdo con los dos criterios: 1) Que en este Directorio, en el cuadro de gastos en 1999 (pág. 444), el porcentaje de gasto de la organización sea superior al 0,5 del gasto total de las ONGD federadas (39 ONGD - 12 no aparecen en la Guía de la Transparencia y 27 sí aparecen). En este Directorio aparecían 92 ONGD federadas en aquel momento (en la actualidad, son 103 las ONGD federadas en la Coordinadora). 2) Que aparecieran en la Guía de Transparencia, en este caso, las hemos seleccionado por actividad y área geográfica (8 ONGD que no pertenecen a la CONGDE). Agradezco a la Fundación Lealtad que respondieran a mi solicitud enviándome rápida y gratuitamente esta Guía.
7. Datos extraídos del *Seguimiento PACI 2002* (Oficina de Planificación y Evaluación – OPE-. AECI). Corresponden a la tabla 3.2.10 (Subvenciones a ONGD de la AECI. Desembolsos para estrategias de la convocatoria ordinaria de proyectos 2002) y a la tabla 3.2.11 (Subvenciones a ONGD de la AECI. Desembolsos para programas de la convocatoria ordinaria de proyectos 2002). En este último caso, no figuran aquí todas las ONGD que reciben subvención.
8. Dato de 2002 obtenido de la Memoria de Actividades 2002, http://www.ayudaenaccion.org
9. Dato de 2002 obtenido del Informe económico del Ejercicio 2002. http://www.anesvad.org
10. Dato de 2002 obtenido en http://www.medicusmundi.es

11 MPDL	10.169.365	9.957.053	14.670.744	Sí	2.202.724; 5,6% prog.
12 Médicos del Mundo	8.683.916	14.034.308	14.315.233	Sí	2.404.048; 6,1% prog.
13 Jóvenes del Tercer Mundo	4.182.752	4.694.851		Sí	1.151.940; 2,9% prog.
14 Entreculturas – Fe y Alegría	2.252.646	4.316.216	11.066.835	Sí	3.929.382;10,06% prog.
15 FERE- Cooperación Internacional	3.318.187	4.368.202		Sí	2.855.944; 7,3% prog.
16 F. Promoción Social de la Cultura		6.767.550	9.588.984	Sí	3.282.703;14,03% estrat.
17 CODESPA Fundación	6.614.703	8.837.360	9.043.140	Sí	3.296.257;14,08% estrat.
18 Solidaridad Internacional	6.944.887	6.358.320	8.885.720	Sí	3.006.563; 12,8% estrat.
19 Paz y Tercer Mundo	4.496.682	6.828.353	7.520.120	Sí	
20 F. Iberoamérica-Europa (CIPIE)	5.360.601	3.727.308	6.711.618[11]	Sí	1.893.188; 4,8% prog.
21 Fundación Canovas del Castillo	2.866.827	3.720.683		Sí	2.203.710; 5,6% prog.
22 CIDEAL	1.815.820	2.907.412		Sí	2.061.342; 5,2% prog.
23 CEAR	2.103.542	2.512.230	5.382.829	Sí	1.229.002; 3,1% prog.
24 Entrepueblos	1.548.483	2.962.064		Sí	
25 Sodepaz	2.866.927	2.693.135		Sí	
26 Fundación ADSIS	263.007	259.305	5.142.016	Sí	
27 Plan España			5.064.280	No	
28 Asamblea Cooperación por la Paz	1.554.027	3.816.406	4.275.229	Sí	
29 ACSUR Las Segovias	16.727.188	5.121.441	4.155.291	Sí	
30 CESAL	2.288.906	4.043.819	4.038.823	Sí	1.202.571; 3,08% prog.
31 Fontilles Lucha contra la lepra			3.820.925	No	
32 ALBOAN		1.825.483	3.727.067	Sí	
33 Paz y Desarrollo	1.301.780	3.362.676	2.927.028	Sí	
34 ISCOD	1.850.839	1.809.987	2.443.191	Sí	1.803.036; 4,6% prog.
35 Juan Ciudad ONGD	1.593.950	2.009.796	2.158.046	Sí	
36 FUNDESO Fundación Desarrollo Sostenido		1.257.557	1.997.448	Sí	
37 PROSALUS	1.155.139	1.115.262	1.692.464	Sí	
38 Mensajeros de la Paz	688.832	5.944.273	1.669.125	Sí	
39 Cooperación Internacional		826.943	1.413.964	Sí	
40 Tierra de Hombres			1.383.149	No	
41 Madre Coraje			1.334.979	No	
42 Fundación Ecología y Desarrollo			1.168.168	No	
43 Mujeres en Zona de Conflicto			1.146.257	No	
44 Meniños – Fundación para la Infancia			1.071.411	No	
45 ADRA	631.747	994.962	792.322	Sí	
46 AMREF España			393.617	Sí	
47 Pueblos Hermanos	191.879	275.544	346.282	Sí	

El Gasto de 1997 corresponde al Directorio de la CONGDE 1998 (páginas 376 y ss.). Se ha tomado la cifra en pesetas para el cálculo en euros.
El Gasto de 1999 corresponde al Directorio de la CONGDE 2000 (páginas 444 y ss.). Se ha tomado la cifra en pesetas para el cálculo en euros.
El Gasto de 2002 corresponde, salvo que se indique otra cosa, a la Guía de la Transparencia y las Buenas Prácticas de las ONG nº 2. Fundación Lealtad.
La información sobre la pertenencia a la CONGDE corresponde a la actualidad.

11. El dato de 2002 corresponde a lo indicado en distribución de fondos en http://www.cipie.org.

Entre estas 47 ONGD están recogidas las principales organizaciones en términos de volumen de recursos dedicados a la cooperación no gubernamental al desarrollo. Sobre estas ONGD vamos a analizar las que consideramos las características más importantes, como el tipo de financiación o el ámbito de actuación. Sin embargo, antes revisaremos de modo general el cuadro.

Lo primero que podemos constatar es el crecimiento paulatino del gasto total de las ONGD en este corto período que analizamos. Sobre esta tendencia general hay que señalar algunas situaciones concretas porque su crecimiento sobresale entre todos los demás (entre paréntesis se indica el número con el que aparecen en el cuadro): el caso más significativo es el de la Fundación ADSIS (26) que en el 2002 aumenta el gasto de 1997 en un 94,8%; después Entreculturas (14), que lo aumenta un 79,6%; por último, ANESVAD (7) y Mensajeros de la Paz (38) que en 2002 casi multiplican por 3 su gasto de 1997. En un sentido contrario, el caso más llamativo es el de ACSUR Las Segovias (29), que en 2002 divide por 4 su gasto de 1997. También hemos de hacer constar la excepcionalidad de Cruz Roja Española (1), de quien no disponemos del dato de 2002 pero que está lejos, en cualquier dimensión que miremos, del resto de las ONGD.

Financiación

En el análisis de las ONG, en general, y de las de Desarrollo en particular, respecto del modo de financiación, sólo cabe hacer una tipología de acuerdo a cuales sean sus fuentes de financiación o la procedencia de sus ingresos: 1) mayoritariamente privada (cuando la mayor parte de sus ingresos provengan de cuotas de socios, donaciones de particulares o donaciones de empresas); 2) mayoritariamente pública (cuando la mayor parte de sus ingresos provengan de subvenciones de organismos públicos —Administración General del Estado, Administración Autonómica, Administraciones locales, UE—); 3) equilibrada (cuando sus ingresos provengan equilibradamente de ambas fuentes).

Larrú hizo un análisis de las ONGD de la Coordinadora para el Directorio de 2000 en el cual clasificó a las organizaciones de acuerdo con esta tipología, obteniendo los siguientes resultados de las ONGD.[12]

– ONGD con financiación mayoritariamente privada: en primer lugar y a distancia del resto, Cáritas Española (3) con un 73% de sus ingresos pro-

12. Larrú, José María (2001): «Análisis de los proyectos e ingresos de las ONGD de la CONGDE en 1999». *Directorio de ONGD-2000.* Coordinadora de ONG de Desarrollo – España (CONGDE).

cedentes de fuentes privadas; después, Manos Unidas (2), y, por último, un grupo con un porcentaje similar compuesto por ANESVAD (7), Ayuda en Acción (5), Médicos sin Fronteras (6) y UNICEF-Comité Español (9).
– ONGD con financiación fundamentalmente pública: en primer lugar y también a distancia de todas las ONGD, Cruz Roja Española (1) con un 80% de sus ingresos procedentes de fuentes públicas, y después un grupo compuesto por Acción contra el Hambre (8), Médicos del Mundo (12), Medicus Mundi (10) y MPDL (11).
– Equilibrio entre la financiación pública y privada: Intermon-Oxfam (4).

El resto de organizaciones se repartirían según este esquema. Aunque los datos no nos ofrezcan información suficiente para contrastarla, podríamos formular la hipótesis de que cuanto menor sea la ONGD en recursos, mayor será su dependencia de la financiación pública. En este sentido, parece significativo que entre las 10 primeras ONGD en volumen de gasto, 6 son de financiación mayoritariamente privada, 1 de financiación equilibrada y 3 de financiación mayoritariamente pública.

Áreas principales de actuación

Como decíamos al inicio de este artículo, lo que caracteriza a estas ONG es que su ámbito de actuación se encuentra en la cooperación para el desarrollo y la solidaridad internacional. Sin embargo, dentro de ese ámbito de actuación general, se pueden distinguir ámbitos concretos de trabajo. En el Directorio de ONGD-2000 de la CONGDE (páginas 444 y ss.) se presenta la distribución del gasto de las ONGD federadas en 1999 de acuerdo con partidas concretas de gasto: proyectos de desarrollo, acción humanitaria, ayuda de emergencia, programas de educación, administración, investigación, comunicación, publicaciones y formación.

De acuerdo con esta distribución de gasto se pueden hacer algunas observaciones. En primer lugar, Cruz Roja Española sigue marcando la excepcionalidad, porque su gasto en administración constituye más del 50% del gasto en esta partida de todas las ONGD federadas (27.283.407 euros en gasto en administración de Cruz Roja España; 49.107.320 euros en gasto total en esta partida) y, además, constituye también su principal partida de gasto (en torno a un 34% del gasto total de esta organización).

En segundo lugar, aunque la gran mayoría de las ONGD federadas tienen como principal partida de gasto la dedicada a «proyectos de desarrollo», hay algunas ONGD cuyo gasto principal está en otra partida. Así, por ejemplo, los casos más significativos son los de ONGD cuya principal partida de gasto está en «acción humanitaria» y «ayuda de emergencia»: Acción contra el

Hambre, Cáritas Española, MPDL y Médicos sin Fronteras. Además, ANESVAD tiene su principal monto de gasto en la partida «educación», y SETEM en «formación» (es la única ONGD en esta situación, con un 30% de su gasto total).

Por último, si observamos la distribución de gasto en cada partida obtenemos una imagen de cuales son las 5 principales ONGD en cada área de trabajo (la de «proyectos de desarrollo» viene a reflejarse más o menos en el Cuadro de ONGD ya presentado):

- Acción Humanitaria: 1. MPDL (70% de su gasto total), 2. Médicos sin Fronteras (42% de su gasto total), 3. Acción contra el Hambre (34% de su gasto total), 4. Solidaridad Internacional (39% de su gasto total), 5. ANESVAD (12% de su gasto total).
- Ayuda de emergencia: 1. Cáritas Española (58% de su gasto total), 2. Médicos sin Fronteras (35% de su gasto total), 3. ANESVAD (27% de su gasto total), 4. Acción Contra el Hambre (29% de su gasto total), 5. Intermon-Oxfam (10% de su gasto total).
- Educación: 1. ANESVAD (31% de su gasto total), 2. Intermon-Oxfam (11% de su gasto total), 3. Manos Unidas (8% de su gasto total), 4. UNICEF-Comité Español (13% de su gasto total), 5. Acción contra el Hambre (10% de su gasto total).
- Comunicación: 1. Intermon-Oxfam (8% de su gasto total), 2. Médicos sin Fronteras (10% de su gasto total), 3. Medicus Mundi (10% de su gasto total), 4. Médicos del Mundo (5% de su gasto total), 5. Ayuda en Acción (2% de su gasto total).

Algunos problemas de las ONGD

En este apartado vamos a seguir la información que nos proporciona la *Guía de la Transparencia y las buenas prácticas de las ONG* nº 2 de la Fundación Lealtad. De las 47 ONGD con las que estamos trabajando en esta selección, hay 35 que participan en la Guía.[13] Las 11 ONGD que no participan en esta Guía son las siguientes: Cruz Roja Española, Ayuda en Acción, ANESVAD, UNICEF-Comité Español, Jóvenes del Tercer Mundo, FERE-Cooperación Internacional, Fundación Iberoamérica-Europa (CIPIE), Fundación Canovas del Castillo, CIDEAL, Entrepueblos y Sodepaz.

13. En esta Guía se analizan las experiencias de 68 ONG que participan de forma voluntaria y gratuita. Como ya hemos indicado, para esta ocasión hemos seleccionado las organizaciones que son de desarrollo.

En la Guía se analiza el cumplimiento de una serie de principios de transparencia y buenas prácticas.[14] Nos vamos a centrar exclusivamente en los «incumplimientos» de las ONGD que se han seleccionado. El ánimo es básicamente ilustrativo, dado el número limitado de experiencias que se recogen. Nos parece significativo señalar que hay cuatro incumplimientos principales:

- Principio 1.C, sobre el funcionamiento del órgano de gobierno, en concreto dice: «Todos los miembros del órgano de gobierno asistirán, al menos, a una reunión al año». Se incumple en 12 ONGD (por el orden en el que aparecen en el Cuadro de ONGD): MPDL, CODESPA Fundación, Solidaridad Internacional, Asamblea de Cooperación por la Paz, ACSUR Las Segovias, ALBOAN, ISCOD, FUNDESO, Tierra de Hombres, Meniños, AMREF España y Pueblos Hermanos.
- Principio 6A, sobre pluralidad en la financiación, dice: «La organización deberá diversificar su financiación con fondos públicos y privados. En ningún caso los ingresos privados serán inferiores al 10% de los ingresos totales». Este principio se incumple en 9 ONGD: MPDL, Solidaridad Internacional, Paz y Tercer Mundo, CEAR, ACSUR Las Segovias, CESAL, Paz y Desarrollo, Mensajeros de la Paz y Mujeres en Zona de Conflicto.
- Principio 6B, sobre pluralidad en la financiación, dice: «La organización contará con una variedad de financiadores externos que favorezca la continuidad de su actividad. Ninguno de ellos aportará más del 50% de los ingresos totales de la organización». Este principio se incumple en 7 ONGD: MPDL, Fundación Promoción Social de la Cultura, CEAR, CESAL, PROSALUS, Mensajeros de la Paz y Mujeres en Zona de Conflicto.
- Principio 8B, cumplimiento de obligaciones legales, en concreto plantea que se presentará: «Con carácter anual el balance y la cuenta de resultados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de Entidades sin Fines Lucrativos. Estos documentos han de ser aprobados por el órgano de gobierno». Se incumple en 4 ONGD: Medicus Mundi - Federación, Paz y Tercer Mundo, Madre Coraje y Mujeres en Zona de Conflicto.

Quizás lo más significativo sea que 11 ONGD presenten algún tipo de problema con la pluralidad en la financiación: bien porque dependan en más del 90% de la financiación pública, bien porque su financiación dependa en más de un

14. En concreto, se analizan 9 principios: 1. principio de funcionamiento y regulación del órgano de gobierno; 2. principio de claridad y publicidad del fin social; 3. principio de planificación y seguimiento de la actividad; 4. principio de comunicación e imagen fiel en la información; 5. principio de transparencia en la financiación; 6. principio de pluralidad en la financiación; 7. principio de control en la utilización de fondos; 8 principio de presentación de cuentas anuales y cumplimiento de las obligaciones legales; y 9. principio de promoción del voluntariado. Estos principios se dividen a su vez en subprincipios.

50% de un único financiador. Los problemas en la financiación de las ONGD (y sus consecuencias, como la dependencia financiera, el cuestionamiento de la autonomía de la organización o las posibilidades de estabilización de las ONG) son una referencia constante en cuanto nos adentramos en el análisis de las ONGD. Lo que es importante es comprobar que, pasado el momento del «boom» de las ONG, se sigue manifestando este problema, lo que hace que no podamos asociarlo a los momentos iniciales de expansión del fenómeno.

En la Guía se plantea que «hemos podido comprobar que el tamaño de la organización —medido como el presupuesto anual— no presenta relación alguna con el grado de cumplimiento de los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas» (página 4), sin embargo, no es algo que se pueda afirmar comprobando los datos de esta selección de ONGD, donde cabe la duda de la importancia del tamaño de la organización en el cumplimiento de principios, especialmente, de algunos de esos principios, como puede ser los que tienen que ver con la pluralidad financiera.

En otro orden de cosas, podemos afirmar que en la actualidad disponemos de menos información rigurosa y que, por lo tanto, nos es más difícil hacer análisis pormenorizados y comprender fielmente la evolución. En este tiempo hemos perdido un instrumento sumamente valioso: los directorios de ONGD que elaboró la Coordinadora de ONG de Desarrollo-España (CONGDE) durante la década de los noventa; el de 2000, último hasta la actualidad, fue el sexto. Quizás esta pérdida tenga que ver con la disminución de la presencia pública de la CONGDE, derivada de una crisis de representatividad que, a su vez, es reflejo de la composición y de la diversidad ideológica y de modelos de cooperación entre las ONGD presentes en la Coordinadora. Sea cual sea la causa, es difícil sin ese instrumento conocer la evolución de las ONGD en los últimos años, tanto en términos de presupuesto dedicado a la solidaridad internacional, financiación, voluntariado o principales áreas de trabajo.

La Ayuda Oficial al Desarrollo y las ONGD

Al inicio del artículo, en el capítulo dedicado a la definición de las ONGD y a su evolución, decíamos que a las ONG de desarrollo también se las denomina organizaciones no gubernamentales de cooperación al desarrollo y organizaciones de solidaridad internacional. Rafael Grasa ha planteado que en la opinión publica se suele identificar cooperación al desarrollo con ONGD, a pesar de que, en el caso español, menos del 10% del volumen de la Ayuda Oficial al Desarrollo se realiza a través de ONGD.[15]

15. Grasa, Rafael (1999): «Una visión de conjunto». *Directorio de ONGD –1998*. Coordinadora de ONG para el Desarrollo –España. 17-38.

Es por ello por lo que es recomendable dedicarnos brevemente a reconocer el volumen, la evolución y las características de la parte de la cooperación al desarrollo que está realmente gestionada por las ONGD.

Evolución de la AOD neta ejecutada por ONGD

	1995	1997	1999	2000	2001	2002
ONGD (AGE)	6%	6,19%	7,09%	6,65%	4,61%	5,46%
Total AOD neta (euros)	1.008.543	1.091.007	1.279.794	1.319.404	1.906.532[16]	1.817.106

Fuente: *Seguimiento P.A.C.I. 2002*. Oficina de Planificación y Evaluación (OPE). AECI. Tabla 1.1.5. página 42.

Como se puede apreciar en este cuadro, en el que se ofrece el valor relativo de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) gestionada por las ONGD (según porcentaje de la AOD neta de cada año), la cifra está muy por debajo del 10%. La cifra, además, no está consolidada sino que se puede observar un descenso en los dos últimos años respecto de las cifras anteriores.

La mayor parte de la AOD gestionada por ONGD proviene de las Subvenciones a ONGD de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) que se realiza a través de la Convocatoria Ordinaria y que gestiona la Subdirección General de Cooperación Multilateral y Horizontal de este organismo. Esta Convocatoria, de acuerdo con el Plan Director 2000-2004, distingue tres tipos de subvenciones según el importe de la subvención y el tiempo de ejecución: estrategias (actuaciones con un horizonte temporal de tres años), programas (actuaciones con una duración prevista de dos años) y proyectos (con una duración de uno o dos años).

En el Cuadro de ONGD que hemos incluido anteriormente se indica en la columna «Subvención AECI 2002» qué organizaciones han obtenido subvención y en qué cuantía. Sólo se incluye las correspondientes a Estrategias y Programas, dado que son las subvenciones que se detallan en el *Seguimiento PACI 2002*. Siguiendo con este documento, el importe total gestionado bajo el epígrafe de «ayudas a actividades de cooperación para el desarrollo ejecutadas por ONGD» de la AECI fue de 80.147.119 euros, de los cuales, tan sólo el 22,11 se dedicó a proyectos (los de menor envergadura y duración).

16. La cifra total de la AOD de 2001 está de alguna manera distorsionada por la envergadura de la operación de reestructuración de la deuda de Celgusa (Nicaragua), que supuso un aumento de 417 millones de euros en el volumen de AOD de 2001.

Las subvenciones dedicadas a estrategias supusieron un 29,19% de ese importe total y se distribuyeron entre 7 ONGD. Las subvenciones dedicadas a programas supusieron un 48,7% y se distribuyeron entre 20 ONGD. En resumen, tan solo 27 ONGD gestionaron 62.421.093 euros.

La solidaridad internacional: campañas y movimientos

En la introducción de este artículo, hemos planteado que nos detendríamos en el análisis de las relaciones entre las ONGD y lo que llamamos el «sector de solidaridad internacional» en España. Corresponde aquí que nos detengamos brevemente en la explicación de esta propuesta y apuesta teórica.[17]

Desde un punto de vista teórico, se apela al concepto «movimiento social» en demasiadas ocasiones; podríamos decir que lo que se define como movimiento desde un punto de vista periodístico, o incluso, político, no coincide con lo que analizamos como movimiento social. De hecho, se habla en muchas ocasiones de «movimiento anti-globalización» o «movimiento contra la guerra», de la misma forma que también se habla de un *movimiento de solidaridad internacional*.[18]

Aunque son muy diversas las aproximaciones al análisis de los movimientos sociales y amplios los debates teóricos sobre el tema, aquí vamos a contrastar dos formas de definir el concepto movimiento social. Una definición que podríamos llamar fuerte, considera que los movimientos sociales son formas de acción colectiva que están vinculados a procesos de identificación colectiva, que comprometen la construcción común de valores e intereses y la definición de los conflictos.[19] La pertenencia a un movimiento social así entendido, más allá de mostrarse en las acciones colectivas que convoca, se muestra en acciones y actitudes individuales. Esta es la concepción de los movimientos sociales que, defendemos, *no puede aplicarse* al caso de las actuaciones de la solidaridad internacional. De hecho, Ángel Calle ya sintetizó su análisis sobre este punto de la siguiente manera:

---

17. Agradezco a Pablo Iglesias Turrión los comentarios y sugerencias a esta parte.
18. Ángel Calle lo define de la siguiente manera: «Un movimiento social que consideraremos integrado por aquellos individuos y organizaciones que hacen del internacionalismo, el solidarismo y la reflexión sobre el desarrollo el eje de sus mensajes y de su actuación, y entre los que figurarán las ONGD, colectivos de concienciación y presión social como la Plataforma 0,7 y la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa, así como otras organizaciones de carácter ecologista y de apoyo a los derechos humanos». Cf. Calle, Ángel (2000): *Ciudadanía y solidaridad. Las ONG de solidaridad internacional como movimiento social*. Madrid: IEPALA Editorial.
19. Véase, por ejemplo, Melucci, Alberto (1994): «Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos sociales», *Zona Abierta*, 69: 153-180.

> A lo largo de este trabajo, hemos venido afirmando la débil implantación del movimiento de desarrollo y solidaridad internacional en España. Si bien las ONGD y algunas plataformas de solidaridad internacional tienen una significativa presencia mediática, hemos constatado la escasa capacidad de estos agentes sociales para transformar las pautas políticas y económicas que se catalogan como injustas. Otro tanto puede decirse de su labor de sensibilización: la idea de la problemática Norte-Sur que tienen los ciudadanos es, por lo general, bastante simplista y ligada a impactos emotivos como los desastres humanitarios en zonas empobrecidas (Centroáfrica, Centroamérica, Mozambique, etc.). No existe reflexión en la sociedad sobre la realidad y las causas estructurales de la exclusión política y económica del Sur; solidaridad internacional es un concepto que en el imaginario social es identificado fundamentalmente con ayuda humanitaria y de emergencia. Ello provoca situaciones paradójicas como es el hecho de que los españoles estén mayoritariamente a favor de llegar al 0'7% del PNB como AOD, y sin embargo se opongan a que se incremente la cantidad destinada a cooperación al desarrollo cuando son preguntados país por país. Este dato resume bastante bien la realidad del nivel de concienciación ciudadana: se está a favor de un símbolo mediático, el 0'7, pero no de una revisión de políticas y actitudes del Norte para con las comunidades empobrecidas, se está a favor de «considerarse solidarios», pero no de actuar como tales. Este «desajuste» entre los planteamientos preconizados por los integrantes del movimiento de desarrollo y solidaridad internacional y la sociedad española no parece que supondrá, sin embargo, una caída en desgracia de sus colectivos. En particular, las ONGD parece que tendrán asegurada su continuidad financiera, eso sí, cada vez más supeditada a las apuestas de otros agentes sociales como el Estado, las administraciones locales y las empresas privadas a la búsqueda de un «marketing social». Ello obligará a las ONGD, muy probablemente, a asumir un papel de «gestores de políticas humanitarias», desligándose de objetivos y actividades que apunten a una transformación de estructuras sociales y de pautas culturales.[20]

Sin embargo, viendo lo que sí existe y los recursos que se movilizan y las acciones que se llevan a cabo, proponemos utilizar la que llamaremos una definición «débil» del movimiento social, entendiéndola como una estructura de preferencias de cambio social.[21] Desde aquí, el movimiento social sería la apelación a la solidaridad internacional como estructura de preferencias que constituye la base para la acción. En torno a esta idea de movimiento social

20. Ángel Calle, *op. cit.,* págs. 153-154.
21. McCarthy, Zald (1977): *op. cit.*

de solidaridad internacional, se constituirían las ONGD como las organizaciones que reivindican la noción de solidaridad internacional desde su acción y su intervención y que reflejan, con sus diversos tipos de actuación, diversas formas de comprender esa solidaridad internacional (en clara referencia a la clasificación de las generaciones de ONGD de Korten que ya hemos presentado).

¿Por qué hemos introducido entonces la idea de «Sector de solidaridad internacional»? Porque queremos recoger con esa expresión todas las acciones, organizaciones y campañas que, más allá de las ONGD, e incluyendo a algunas de ellas, movilizan recursos, gestionan esfuerzos, participan en campañas y, en conjunto, pueden estar contribuyendo a la difusión de los valores de la solidaridad internacional.

Según esto, ¿qué entenderíamos por *sector de solidaridad internacional*? Proponemos entenderlo como todas las actuaciones que denuncian la supremacía ideológica de los postulados económicos en la construcción del orden internacional, la explotación y la guerra como modos de relación Norte-Sur y los modelos de desarrollo que se imponen (económicos, políticos, culturales, sociales), y que, con sus acciones, intentan la transformación en esos ámbitos desde la perspectiva de la solidaridad internacional, ya sea con intervenciones directas, campañas informativas, movilizaciones de denuncia o presionando en los centros de toma de decisiones nacionales, internacionales y globales.

Ese sector se configura como una red de actores que reúne y conecta a ONGD (principalmente las que hemos clasificado, siguiendo a Korten, como de cuarta generación), movimientos sociales (ecologista, feminista, de mujeres, pacifista, campesino, indígena,...), sindicatos (más y menos institucionalizados), y plataformas más y menos formales, como actores principales. Así analizado, la solidaridad internacional no es una identidad colectiva (en ese sentido no es un movimiento social en el sentido fuerte), sino que conecta diversos procesos de identificación colectiva bajo un paraguas que más bien podríamos considerar ideológico que identitario.

Es desde esta idea de sector de solidaridad internacional que se pueden mirar conjuntamente en el caso español las experiencias de la Plataforma del 0`7,[22] de la Red Ciudadana para la Abolición de la Deuda Externa (RCADE),[23] de

22. http://www.plataforma07.com.
23. http://www.rcade.org.

los grupos anti-globalización[24] y de la campaña del No a la Guerra[25] (contra la guerra de Irak), entendiéndolas como parte de la movilización de un mismo sector político, y estableciendo el vínculo histórico entre ellas, más allá de las diferencias que puedan existir al interior de cada una de ellas entre los grupos y actores que allí se reúnen y de las diferencias que entre esas convocatorias podamos hallar.

De hecho, si nos detenemos brevemente en cada una de esas experiencias, podremos contrastar la existencia de ese vínculo. La Plataforma 0'7 es la más antigua de estas experiencias y su formación coincidió en el tiempo con el conocimiento en la opinión pública de las ONGD y con la expansión del fenómeno del voluntariado. Si nos acercamos hoy a su página web podemos seguir el hilo de su existencia desde 1993 con el inicio de la huelga de hambre de 7 miembros reclamando el 0'7% del PNB dedicado a la cooperación al desarrollo y 1994 con la acampada en la Castellana, en torno a la huelga de hambre y reclamando a los partidos políticos la firma del pacto de solidaridad que asentara ese 0'7%, continuando con su participación en 1999 en la Campaña «Deuda externa ¿deuda eterna?», y posteriormente, su participación en la campaña por la Consulta Social, hasta su afianzamiento en la movilización en torno al objetivo de la búsqueda de un desarrollo para todos, separando sus funciones de la RCADE. En la actualidad, la Plataforma está dedicada a este objetivo y a la vigilancia y denuncia de los posibles incumplimientos que desde el gobierno se realicen en la política de cooperación internacional y se ha movilizado activamente contra la guerra de IRAK.

Respecto de la movilización por la deuda externa, en 1998, Manos Unidas, Caritas, CONFER y Justicia y Paz pusieron en marcha la campaña «Deuda externa ¿deuda eterna? Año 2000: libertad para mil millones de personas» que coincidió con la internacionalmente conocida como Jubileo 2000.[26] La campaña en España entregó en el Parlamento 900.000 firmas solicitando la anulación de la deuda externa de los 50 países más pobres y su conversión en

24. Se pueden consultar las páginas de los grupos más activos en España, por ejemplo, en el Movimiento de Resistencia Global: http://www.nodo50.org/mrgsevilla; http://www.nodo50.org/mrgcantabria; http://www.nodo50.org/mrgmadrid También la de Acción Global de los Pueblos, http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/es/ .

25. No a la guerra http://www.noalaguerra.com, Plataforma de Cultura contra la Guerra http://www.culturacontralaguerra.org/, Paremos la guerra http://www.nodo50.org/paremoslaguerra/.

26. Esta campaña internacional culminó con la entrega de más de 17 millones de firmas por la condonación de la deuda, recogidas en 53 países a los integrantes del G-7 en Colonia durante su reunión de junio de 1999.

inversiones que promuevan el desarrollo humano.[27] Al mismo tiempo, desde el entorno de la Plataforma del 0'7 se propuso la realización de una consulta social sobre la abolición de la deuda externa. Esta campaña tuvo el respaldo inicial de la Coordinadora de la Campaña «Deuda externa ¿deuda eterna?», aunque, finalmente, no hubo apoyo oficial a la celebración del referéndum por la abolición de la deuda externa el mismo día de las elecciones generales del 2000.[28] Los colectivos que participaron en la consulta social se agruparon en la RCADE (Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa). La RCADE ha estado presente también en las movilizaciones contra la guerra y, en la actualidad, se moviliza en torno a la organización de una iniciativa legislativa popular para la anulación de la deuda externa, la organización de un observatorio de la deuda externa en la globalización y en la celebración de la Consulta Social Europea sobre la participación ciudadana y la ampliación de los espacios democráticos que se está organizando para el 13 de junio de 2004, coincidiendo con las elecciones al Parlamento Europeo.

En el caso de los grupos anti-globalización y sus acciones, nos encontramos ante una experiencia muy escurridiza desde el punto de vista del análisis. Aquí como en el caso de las movilizaciones contra la guerra, nos encontramos con la confluencia de actores y grupos en campañas específicas. Las acciones anti-globalización internacionalmente se han presentado con dos formatos: uno que podríamos llamar repertorio de acción «contra-cumbre» y otro que sería la acción en torno a la constitución de espacios de diálogo, debate y producción política.

En el primer caso, entre 1999 y 2002 encontramos las que han sido las principales movilizaciones contra cumbres de organizaciones y grupos internacionales: Seattle, noviembre de 1999, Organización Mundial del Comercio (OMC); Davos, enero 2000 y enero 2001, Foro Económico Mundial; Washington, abril 2000, Banco Mundial; Praga, septiembre 2000, OMC; Niza, diciembre 2000, Conferencia Inter-Gubernamental; Goteborg, junio 2001, cumbre UE; Barcelona, junio 2001, Banco Mundial (suspendida); Génova, julio 2001, G-8; Bruselas, diciembre 2001, cumbre UE; Nueva York, febrero 2002, Foro Económico Mundial. Lo que planteamos es que el reconocimiento de los grupos españoles pasa por su incorporación y movilización en torno, fundamentalmente, a este tipo de movilización. En este sentido, quizás sea significativo que las páginas web de estos grupos son las que menos

27. Zabalo, Patxi (2001): «El año en breve. Movimientos de solidaridad internacional», en Ibarra, Pedro y Grau, Elena (coord..): *Anuario de movimientos sociales. Participando en la red*. Barcelona: Betiko Fundazioa - Icaria Editorial.
28. Zabalo, *ibid*.

actualizadas están de todas las que aquí hemos manejado (están actualizadas, normalmente, hasta el 2002).

En el segundo caso, partimos de la experiencia de celebración y organización del Foro Social Mundial desde su primera experiencia en 2001, en Porto Alegre.[29] Lamentablemente, no tenemos el espacio, ni era el objetivo entrar a analizar estas experiencias o lo que supone la existencia de estos dos repertorios distintos de acción. De todas formas, planteamos un nivel de acción y un ámbito de actuación para estos movimientos anti-globalización, de izquierda alternativa o de «alter-mundialización» (de acuerdo con la fórmula que se elija) que integra en su interior las acciones de este sector de solidaridad internacional, formulando como problema no sólo el orden internacional y las relaciones hegemónicas en este orden, sino el de qué mundo y qué sociedad queremos y hacemos posibles.

En el caso del «No a la guerra», las movilizaciones contra la entonces posible guerra en Irak del 2003, nos situamos, de la misma forma, en unas convocatorias internacionales de movilizaciones, pero que, de forma distinta que en el caso de las anti-globalización, tienen su reflejo en términos nacionales, porque es en el ámbito local donde se convocan específicamente las movilizaciones y porque tiene un peso específico el papel que cada gobierno haya estado jugando y la posición que haya adoptado respecto de la guerra en Irak. Las movilizaciones se concentraron en tres fechas clave: 15 de febrero, 15 de marzo y entre el 20 y el 23 de marzo, cuando ya se declaró el inicio de la guerra. Las movilizaciones internacionales que se estaban proponiendo para el 15 de febrero contaron con el apoyo del Foro Social Mundial de Porto Alegre de 2003. Estas movilizaciones de marcado carácter internacional se organizaron a partir de las plataformas y grupos locales en Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Santiago, etc. Y el resultado fue el siguiente: «Más de cinco millones de ciudadanos y ciudadanas salieron a las calles en el conjunto del Estado, acompañando a las decenas de millones que se manifestaron en todo el planeta, en un día triunfal para el movimiento contra la guerra y la globalización. En Madrid, cerca de un millón. En Barcelona, más de un millón. En Zaragoza, cientos de miles... así, por toda la geografía peninsular. Sindicatos, partidos políticos, ONG, movimientos críticos, asociaciones juveniles, se articularon en quizá la plataforma de acción más amplia de la historia reciente de nuestra democracia».[30]

29, Se recomienda el artículo de Francisco Whitaker, «Orígenes y objetivos del Foro Social Mundial» que se puede encontrar en http://www.forumsocialmundial.org.br/home.asp , en la sección «histórico».

30. García, Concepción y Fernández, Lidia (2004): «Y luego diréis que somos cinco o seis». *El Viejo Topo*, 191. página 13.

Desde este análisis que proponemos para el caso español, la Plataforma del 0'7, la RCADE, los grupos anti-globalización y las movilizaciones del No a la guerra, se constituyen no como actores, sino como campañas coyunturales en las que confluyen diversos actores y capacidades y que forman parte de ese sector de solidaridad internacional que hemos definido. Configuran así, un proceso acumulativo de esfuerzos y movilizaciones que, en la medida en que se constituyen como campañas de acción y denuncia en coyunturas concretas, pasan, pero que a la vez permanecen y se constituyen en sustrato para otras movilizaciones, en tanto que consiguen establecerse en la opinión pública.

Sobre esta cuestión, avanzamos el análisis de que se puede estar configurando un repertorio de acción colectiva en el que las «campañas», los espacios y los propios repertorios cobran más visibilidad pública que los actores. Un buen ejemplo de ello, lo constituye el Foro Social Mundial (y los regionales y los temáticos), donde se engarzan estos actores de ese sector de solidaridad internacional, los movimientos sociales, las ONGD, los grupos informales, con otros muchos actores en un proceso de construcción ideológica alternativa: altermundial.

Bibliografía

Calle, Ángel (2000), *Ciudadanía y solidaridad. Las ONG de solidaridad internacional como movimiento social*, Madrid, IEPALA Editorial.

Grasa, Rafael (1999), «Una visión de conjunto». *Directorio de ONGD –1998*. Coordinadora de ONG para el Desarrollo–España, pp. 17-38.

Ibarra, Pedro y Martí, Salvador (2003), «Los movimientos antiglobalización. La Consulta Social para la Abolición de la Deuda Externa», en Funes, María Jesús y Adell, Ramón (eds.), *Movimientos sociales: Cambio social y participación*, Madrid, UNED Ediciones, pp. 285-318.

— y Tejerina, Benjamín (1998), «Introducción. Hacia unas nuevas formas de acción colectiva», en Ibarra, P. y Tejerina, B. (eds.), *Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural*, Madrid, Ed. Trotta pp. 9-22.

Larrú, José María (2001), «Análisis de los proyectos e ingresos de las ONGD de la CONGDE en 1999», *Directorio de ONGD-2000,* Coordinadora de ONG de Desarrollo-España (CONGDE).

McCarthy, John D.; Zald, Mayer N. (1977), «Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory», *American Journal of Sociology*, 82 (6), pp. 1212-1241.

Melucci, Alberto (1994), «Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos sociales», *Zona Abierta*, 69, pp. 153-180.

MORA, Sebastián (2002), *Presencia pública del voluntariado. Hacia una reconstrucción de escenarios participativos*, Colección «A fuego lento», nº 7. Plataforma de Promoción del Voluntariado en España, http://www.ppve.org/html/publica.htm.

PASTOR, Jaime (1998), «La evolución de los nuevos movimientos sociales en el Estado Español», en Ibarra, P. y Tejerina, B. (eds.), *Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural,* Madrid, Ed. Trotta, pp. 69-87.

REVILLA, Marisa (2003), «Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD)», en Ariño, A. (ed.), *Diccionario de la Solidaridad (I)*, Valencia, Tirant Lo Blanch, pp. 381-392.

— (2002), «Zona peatonal. Las ONG como formas de participación política», en Revilla, M. (editora), *Las ONG y la política. Detalles de una relación,* Madrid, Istmo Ediciones, pp. 15-65.

ROMA, Pepa (2001), *Jaque a la globalización. Cómo crean su red los nuevos movimientos sociales y alternativos*, Barcelona, Grijalbo.

SERRANO, Maite (2002), «Las ONGD en la encrucijada: del Estado de Bienestar a la franquicia del Estado», en Revilla, M. (ed.), *Las ONG y la política. Detalles de una relación,* Madrid, Ediciones Istmo, pp. 66-94.

SOGGE, David, ed. (1998), *Compasión y cálculo. Un análisis crítico de la cooperación no gubernamental al desarrollo*, Barcelona, Icaria.

ZABALO, Patxi (2001), «El año en breve. Movimientos de solidaridad internacional», en Ibarra, Pedro y Grau, Elena (coord.), *Anuario de movimientos sociales. Participando en la red.* Barcelona, Betiko Fundazioa-Icaria Editorial.

CITA

[...] La tarea se puede ver de varios modos, según el lugar desde el cual se la emprenda: consiste, por ejemplo, en conseguir que los movimientos ecologistas, que se encuentran entre los portadores de la ciencia autocrítica de este fin de siglo, se doten de capacidad política revolucionaria; consiste también, por otro ejemplo, en que los movimientos feministas, llegando a la principal consecuencia de la dimensión específicamente, universalmente humana de su contenido, decidan fundir su potencia emancipadora con la de las demás fuerzas de libertad; o consiste en que las organizaciones revolucionarias clásicas comprendan que su capacidad de trabajar por una humanidad justa y libre tiene que depurarse y confirmarse a través de la autocrítica del viejo conocimiento social que informó su nacimiento [...]

Carta de la redacción, *mientras tanto*, nº 1
(noviembre-diciembre 1979)

mientrastanto.e

Mientras tanto está publicando un boletín electrónico de periodicidad mensual, quienes deseen subscribirse gratuitamente a *mientrastanto.e* pueden solicitarlo a la dirección siguiente:

suscripciones@mientrastanto.org

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Nombre .....

Dirección ..... C.P. .....

Población ..... Provincia .....

NIF ..... Teléfono .....

Profesión ..... Ocupación .....

SUSCRIPCIÓN POR 4 NÚMEROS
DESDE EL PRÓXIMO NÚMERO

☐ primera suscripción
☐ renovación

Tarifa:

☐ España ..... 20 euros

☐ Europa ..... 30 euros

☐ Resto del mundo ..... 37 euros

NÚMEROS ATRASADOS QUE SE DESEA RECIBIR

.....

.....

Cada número atrasado en existencia ..... 3 euros

REDACCIÓN
Apartado de Correos 30059, Barcelona

SUSCRIPCIONES
Apartado de Correos 857 F. D., Barcelona
e-mail: icaria@icariaeditorial.com
Tel.: (34) 93 301 17 23/26 (Lunes a viernes de 9 a 17 h.)
Fax: (34) 93 317 82 42

Forma de pago:

☐ Talón adjunto a nombre de Icaria editorial

☐ Transferencia a la c/c de Icaria editorial n.º 2013 0717 61 0200380950, de la Caja de Ahorros de Cataluña - Girona, 15 - 08010 Barcelona.

☐ Domiciliación bancaria:

lbta. o cc.
n.º _
entidad oficina control n.º lbta. o c.c.

☐ Visa N.º tarjeta ..... Fecha de caducidad .....

(Para facilitar la gestión bancaria, le rogamos que rellene cuidadosamente cada casilla con el dígito corrrespondiente. Consulte con su entidad bancaria sin tiene alguna duda.)

dirección .....
agencia .....
entidad .....

☐ Giro postal a la cuenta corriente postal n.º 1302 9251 12 0017777887. (Al usar esta forma de pago, el suscriptor debe enviar por carta a la secretaría de *mientras tanto* el resguardo de giro junto con su nombre. No podemos cobrar los giros que se envíen al Apartado de Correos, por lo que todos deben dirigirse a la cuenta corriente postal antes citada.)

ORDEN DE PAGO

Sr. director del Banco o Caja .....
Dirección .....

Sírvase atender hasta nuevo aviso, y con cargo a mi cuenta, los recibos que le sean presentados por la revista *mientras tanto*.

Titular de la cuenta .....
Dirección .....
Número de la cuenta
Atentamente,

(firma)